

# Estudios AHILA

19 | 2026



## REVISITANDO EL CICLO DICTATORIAL LATINOAMERICANO MEDIO SIGLO DESPUÉS

**Alessandro Guida**  
**Francisco Javier Morales Aguilera**  
(coords.)

**ahila**  
ediciones

## **Estudios AHILA**

19 | 2026

Edita: Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos – AHILA  
www.ahila.eu

### **CONSEJO EDITORIAL**

Erica Sarmiento da Silva, Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Editora General de AHILA

Raffaele Nocera, Università di Napoli L’Orientale – Presidente de AHILA

Benedetta Calandra, Università di Bergamo

Patricia Graciela Flier, Universidad Nacional de La Plata

Alfredo Riquelme Segovia, Pontificia Universidad Católica de Chile

### **CONSEJO CIENTÍFICO**

Eugenia Allier Montaño, Universidad Nacional Autónoma de México

Rossana Barragán, Universidad Mayor de San Andrés

Laura Brondino, Universidad Paris-Sorbonne

Pilar Cagiao Vila, Universidad de Santiago de Compostela

Caroline Cunill, Ecole des hautes Etudes en Sciences Sociales

Marina Franco, Universidad Nacional de San Martín

Luigi Guarnieri Calò Carducci, Università Roma Tre

Anthony Kapcia, University of Nottingham

Joao Paulo Pimenta, Universidade de São Paulo

Stefan Rinke, Freie Universität Berlin

Claudio Rolle Cruz, Pontificia Universidad Católica de Chile

Ronny Viales Hurtado, Universidad de Costa Rica

ISSN: 3135-0828

© 2026 Los autores

La licencia CC BY-NC-ND 4.0 internacional permite compartir, copiar y redistribuir el material en cualquier formato o medio, siempre que se atribuya la autoría, no se comercialice y no se modifique la obra.

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>



*Estudios AHILA de Historia Latinoamericana* nació en 2005 como publicación seriada en sustitución de *Cuadernos de Historia Latinoamericana* (iniciada en 1993). Desde entonces y hasta 2025 se han publicado 18 números que han abordado temáticas diversas con una amplia temporalidad, reflejo de la evolución historiográfica tanto de AHILA como de la disciplina.

*Estudios AHILA 19* trae consigo diversos cambios importantes. Primero, deja de estar publicado en asociación con editoras externas y lo hace como AHILA Ediciones, nuevo sello editorial para la publicación de los resultados científicos de la Asociación en abierto y la puesta en valor del trabajo de su membresía. Segundo, apuesta por una cabecera sintética y de fácil identificación, tanto para la publicación como para AHILA. Por último, renueva su formato y pasa a ser una revista científica en plataforma abierta (OJS). Como número puente, mantiene el formato de volumen colectivo bajo temática única, que cambiará definitivamente desde el número 20, con la inclusión de una sección de miscelánea.

El modelo anterior, sin duda de interés por muchos años y con magníficos resultados, comenzaba a dar muestras de agotamiento dados los actuales criterios de valoración científica imperantes, y los esfuerzos que deben hacer, muy especialmente, las personas investigadoras jóvenes para consolidar sus carreras. La continua renovación de AHILA en consonancia con los tiempos y la disciplina, ha motivado este salto cualitativo. Confiamos que esta andadura que comienza con *Estudios AHILA 19* nos lleve, con la colaboración de toda la Asociación, a la construcción de un nuevo espacio de debate y reflexión historiográfica que alimente la disciplina y el rol de nuestra comunidad en ella.

**CD AHILA 2024-2027**

# CONTENIDO

## 5

Revisitando el ciclo dictatorial latinoamericano medio siglo después

ALESSANDRO GUIDA y  
FRANCISCO JAVIER MORALES AGUILERA

## 16

Vivienda y planeamiento urbano en la dictadura militar en Brasil. Entre el modelo empresarial estatal y las consultorías privadas

EULALIA P. NEGRELOS

## 40

Propiocepción partidaria y prensa comunista ante el autoritarismo civil-militar en Brasil y Chile: PCB y PCCH

STEFANO MARTINELLI

## 63

Orden, Paz, Trabajo: la dictadura de Banzer en Bolivia, del golpe al autogolpe (1971-1974)

JUAN LUIS HERNÁNDEZ

## 85

Reconfiguración municipal, autoritarismo y dictadura. Búsqueda de consensos y recepciones en Uruguay (1973-1984)

JAVIER CORREA MORALES

## 107

La alianza entre Israel y el Uruguay autoritario (1972-1980)

GERARDO LEIBNER

## 135

La prensa chilena y el terrorismo italiano durante el régimen cívico-militar (1973-1981)

VALERIO GIANNATTASIO

## 158

La revista *Estrategia* y una sensibilidad tercermundista entre los militares argentinos en las décadas del sesenta y setenta

GERMÁN ALBURQUERQUE

## 181

Diplomacia, propaganda y recepción de periodistas extranjeros. La faz productiva de la última dictadura argentina (1976-1983)

LAURA SCHENQUER

## 199

La intervención como táctica política: dirigentes sindicales y FF.AA. durante la dictadura militar argentina (1976-1983)

MARIANA STOLER

Presentación:

## Revisitando el ciclo dictatorial latinoamericano medio siglo después

ALESSANDRO GUIDA 

Università di Napoli "L'Orientale"

FRANCISCO JAVIER MORALES AGUILERA 

Universidade de Santiago de Compostela

GUIDA, Alessandro y MORALES AGUILERA, Francisco Javier, "Revisitando el ciclo dictatorial latinoamericano medio siglo después", *Estudios AHILA* 19, 2026, pp. 5-15. <https://doi.org/10.66740/ahilaest.n19.01>

Las dictaduras que se instauraron en América Latina con los golpes de Estado de los años sesenta y setenta del siglo XX tuvieron un impacto sin precedentes a nivel subcontinental y más allá. El uso sistemático de la violencia por parte de estos regímenes despertó protestas y la atención de parte de la opinión pública mundial, así como de diversos tipos de movimientos y organizaciones políticas. Ello contribuyó a mantener en la mira de la comunidad internacional lo que estaba ocurriendo al interior de aquellos países. Con todo, también hubo gobiernos, aparatos, grupos y organizaciones que colaboraron activamente con estas dictaduras, tratando también de condicionarlas internamente en sus principales supuestos ideológicos y prácticos. Al mismo tiempo, se produjeron formas de resistencia y colaboración a nivel transnacional que afectaron en diversos planos a estos regímenes.

Sesenta años después del golpe de Estado en Brasil, que inició este giro autoritario en el subcontinente, poco más de cincuenta años después de los golpes de Estado en Chile y Uruguay, y en vísperas del medio siglo del golpe en Argentina, nos asiste la convicción de que la investigación histórica aún tiene mucho que aportar sobre estas experiencias. El objetivo de esta propuesta es albergar reflexiones e investigaciones que puedan ayudar a profundizar en las características, tensiones y fracturas internas que se produjeron, como así también en la dimensión externa y la proyección global de estos regímenes, en sus distintas facetas y multiplicidad de actores e ideas que intervinieron.

Como sabemos, el interés científico en estos temas nunca ha decaído, y con el tiempo la investigación ha ampliado significativamente nuestro conocimiento de ese período de la historia latinoamericana en general y de esas experiencias en particular.

Hoy sabemos mucho más sobre la dinámica que llevó a los militares a llegar al poder en algunos países de la región, además de la naturaleza intrínseca de los regímenes que posteriormente se establecieron. También sabemos más sobre las características que asumieron, la forma en que operaron y colaboraron entre sí —en particular desde el punto de vista represivo— y en el apoyo con el que podían contar, entre otros aspectos.

No obstante estos avances, estamos convencidos de que el tema se encuentra muy lejos de estar agotado, y más todavía de haber perdido interés.

Los estudios sobre estas temáticas y la producción científica relacionada, como sabemos, han tenido que enfrentar numerosos problemas. Entre ellos, la escasez de fuentes oficiales, muchas de las cuales fueron destruidas por los militares antes del retorno a la democracia, o la cautelosa y lenta desclasificación de documentación relativa a esos años, tanto de los gobiernos democráticos de estos países como de las administraciones estadounidenses y de otros países del mundo occidental. En este sentido, el conocimiento sobre el tema ha ido creciendo con el tiempo, dependiendo en buena medida de las posibilidades de acceso a las fuentes. Las perspectivas de análisis también han sido diversas y cambiantes.

Uno de los primeros enfoques de las ciencias sociales en general fue entender los golpes militares como quiebres de la democracia, es decir como rupturas político-institucionales, utilizando principalmente categorías de análisis de la ciencia política y la sociología<sup>1</sup>. De forma casi paralela, algunas investigaciones se centraron en determinados aspectos, entre ellos el tema de la violencia. Este último, estuvo articulado sobre todo en relación a la perspectiva de los protagonistas de esas experiencias quienes, habiendo sufrido la derrota social y política de los proyectos de transformación que habían abrazado, comenzaron a publicar sus testimonios sobre el significado personal y colectivo de esos hechos<sup>2</sup>. El motivo de esta atención es fácilmente comprensible en virtud de los altísimos costos en términos de vidas humanas que trajeron consigo los golpes militares.

En efecto, las dictaduras que se establecieron en Brasil, Uruguay, Chile y Argentina se caracterizaron por cruentas violaciones de los derechos humanos, que incluyeron detenciones arbitrarias, asesinatos, “desapariciones forzadas” y el uso

---

1 Algunas de las primeras aportaciones en esta dirección fueron los trabajos de David Collier, *The New Authoritarianism in Latin America* (Princeton: Princeton University Press, 1978); Joseph Comblin, *El Poder Militar en América Latina* (Salamanca: Ediciones Sígueme, 1978); Guillermo A. O'Donnell, *Modernization and Bureaucratic-Authoritarianism. Studies in South American Politics* (Berkeley: University of California Press, 1973); Brian Loveman, *For la Patria: Politics and the Armed Forces in Latin America* (Wilmington: Scholarly Resources, 1999); Brian Loveman, Thomas M. Davies, *The Politics of Antipolitics: The Military in Latin America* (Lanham: SR Books, 1997); Frederick M. Nunn, *The Time of the Generals: Latin American Professional Militarism in World Perspective* (Nebraska: University of Nebraska Press, 1992); Alfred Stepan y Juan José Linz, *The Breakdown of Democratic Regimes* (Baltimore: John Hopkins University Press, 1978).

2 Un texto clásico al respecto fue la obra de Hernán Valdés, *Tejas Verdes. Diario de un campo de concentración en Chile* (Barcelona: Ariel, 1974). También cabría inscribir aquí los textos de Carlos Altamirano Orrego, *Dialéctica de una derrota* (México: Siglo XXI, 1977) y Luis Corvalán Lepe, *Algo de mi vida (Memorias clandestinas del secretario general del Partido Comunista de Chile)* (Barcelona: Grijalbo, 1978).

de la tortura de forma planificada y sistemática, afectando a decenas de miles de personas. Una violencia sin precedentes en la historia latinoamericana, que contribuyó a definir la naturaleza de estos regímenes y que, no por casualidad, tras el retorno a la democracia, y a medida que se avanzaba en el tema de la recuperación de la verdad procesal e histórica, monopolizó también la investigación científica<sup>3</sup>.

En los últimos años se han sumado nuevas perspectivas en relación a estos tópicos. Varios estudios, por ejemplo, han investigado la proyección transnacional de estas dictaduras, que trascendió las fronteras regionales y que se dirigió más allá de la conocida relación con Estados Unidos<sup>4</sup>. Además, se ha comenzado a reconstruir y analizar cada vez más la dimensión cultural, los aspectos relacionados con la ideología, la propaganda, el discurso público o la educación, devolviéndonos, entre otras cosas, el carácter complejo de estos regímenes y estas experiencias en general<sup>5</sup>.

3 Sobre el tema de la violencia en general relacionada con las acciones de estos regímenes, la bibliografía se ha vuelto muy amplia con el tiempo, diferenciándose según los distintos casos nacionales. A modo de ejemplo, podemos remitirnos a trabajos como: Gabriela Águila, Santiago Garaño, Pablo Scatizza (coords.), *La represión como política de Estado. Estudios sobre la violencia estatal en el siglo XX* (Buenos Aires: Imago Mundi, 2020); Pilar Calveiro, *Poder y desaparición: los campos de concentración en Argentina* (Buenos Aires: Colihue, 2014); Carlos Fico, *Como eles agiam. Os subterrâneos da ditadura militar: espionagem e polícia política* (Rio de Janeiro: Record, 2001); Marina Franco, Claudia Feld, ESMA. *Represión y poder en el centro clandestino de detención más emblemático de la última dictadura argentina* (Buenos Aires: Fondo De Cultura Económica, 2022); Mariana Joffily, *No centro da engrenagem: os interrogatórios na Operação Bandeirante e no DOI de São Paulo (1969-1975)* (São Paulo: Edusp, 2013); Mariana Joffily, Maud Chirio, *Torturadores. Perfis e trajetórias de agentes da repressão na ditadura militar brasileira* (São Paulo: Alameda, 2025); Virginia Martínez, *Tiempos de dictadura. 1973-1985. Hechos, voces, documentos. La represión y la resistencia día a día* (Montevideo: Banda Oriental, 2023); Carolina Pizarro Cortés, José Santos-Herceg, *Revisitar la catástrofe. Prisión política en el Chile dictatorial* (Santiago de Chile: Pehuén, 2016); Javier Rebolledo, *La danza de los cuervos* (Santiago de Chile: Ceibo Ediciones, 2012), y *El despertar de los cuervos. Tejas Verdes, el origen del exterminio en Chile* (Santiago de Chile: Ceibo Ediciones, 2013); Eduardo Rey Tristán (dir.), *Memorias de la violencia en Uruguay y Argentina, golpes, dictaduras, exilios (1973-2006)* (Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 2007); Gabriel Salazar, *Villa Grimaldi (cuartel Terranova). Historia, testimonio, reflexión* (Santiago de Chile: LOM, 2013), y *Voces profundas. Las compañeras y compañeros «de» Villa Grimaldi. Volumen II* (Santiago de Chile: LOM, 2017); Marco Aurélio Vannucchi Leme de Mattos, Walter Cruz Swensson Junior, *Contra os inimigos da ordem: a repressão política da ditadura militar (1964-1985)* (Rio de Janeiro: DP&A, 2003).

4 Véase, entre otros: John Dinges, *Los años del Cóndor. Operaciones internacionales de asesinato en el Cono Sur* (Santiago de Chile: Debate, 2004); Francesca Lessa, *The Condor Trials. Transnational Repression and Human Rights in South America* (New Haven: Yale University Press, 2022); Patrice Mc Sherry, *Los estados depredadores: la Operación Cóndor y la guerra encubierta en América Latina* (Santiago de Chile: Lom, 2009); Gabriela Águila y Alonso Luciano, *Procesos represivos y actitudes sociales. Entre la España franquista y las dictaduras del Cono Sur* (Buenos Aires: Prometeo, 2013); Vito Ruggiero, *Il sogno anticomunista. Neofascisti italiani in America Latina (1977-1982)*, (Roma: Roma Tre Press, 2023); Roberto Simón, *El Brasil de Pinochet. La dictadura brasileña, el golpe en Chile y la guerra fría en América del Sur* (Santiago de Chile: Lom, 2024).

5 Véanse, a modo de ejemplo: Magdalena Broquetas, *Ganar la guerra. Cultura, Sociedad y política en el Uruguay autoritario (1967-1973)* (Montevideo: Banda Oriental, 2024); Sebastián Carassai, *Los años setenta de la gente común, la naturalización de la violencia* (Buenos Aires: Siglo XXI, 2013); Marcelo Casals, *Contrarrevolución, colaboracionismo y protesta. La clase media chilena y la dictadura militar* (Santiago de Chile: Fondo de Cultura Económica, 2023). Karina Dappiano et al. (eds), *Sombras, suspiros y memorias: Prácticas culturales y dictaduras en el cono sur* (Buenos Aires: Universidad Nacional de Lanús, 2021); Sergio Durán, *Ríe cuando todos estén tristes: el entretenimiento televisivo bajo la dictadura de Pinochet* (Santiago de Chile: Lom, 2012); Jorge Elias, *Maten al cartero. Posdata del asedio a la prensa durante las dictaduras militares del Cono Sur* (Buenos Aires: Cadal, 2005); Carlos Fico, *Reinventando*

Sin embargo, aún se puede añadir mucho a nuestro conocimiento y comprensión. Desde nuestra perspectiva, creemos que sigue siendo importante abordar estas temáticas porque todavía son cuestiones abiertas, por ejemplo con respecto al tema de las responsabilidades. Responsabilidad por una violencia sin precedentes en el contexto latinoamericano, por supuesto, pero también por todas aquellas otras fracturas que estas dictaduras produjeron dentro de sus respectivas sociedades y que han permanecido visibles durante mucho tiempo, en algunos casos hasta el día de hoy. El término de estos regímenes a partir de los años ochenta, fue gestionado en casi todos los casos por las Fuerzas Armadas, que devolvieron el poder solo después de haber obtenido amplias garantías. Y las leyes de amnistía o indulto que se dieron los uniformados antes de salir al campo de la democracia, o que exigieron a los gobiernos democráticos en un momento posterior, habrían dificultado y retrasado todo el proceso de búsqueda de verdad y justicia respecto de los crímenes cometidos por los militares. Pero no es solo esto. El plan de responsabilidad civil representa un frente aun completamente abierto, sobre el que queda mucho por investigar y añadir<sup>6</sup>. Especialmente en un momento histórico en el que algunas fuerzas y líderes políticos promueven narrativas que parecen cuestionar incluso aquellas verdades que, tras años de arduo trabajo de investigación, reconstrucción y recuperación, parecían ya “establecidas”, tratando al mismo tiempo de borrar la importancia de la memoria sobre este pasado.

Y este aspecto nos remite a la última razón por la que nos parece importante proponer este trabajo, a saber: la cuestión de los diferentes legados que han dejado estas experiencias y la forma en cómo las sociedades actuales

---

*o otimismo: ditadura, propaganda e imaginário social no Brasil*, (Rio de Janeiro: FGV, 1997); Marina Franco, “La ‘campana antiargentina’: la prensa, el discurso militar y la construcción de consenso” en Judith Casali de Babot, María Victoria Grillo (eds.), *Derecha, fascismo y antifascismo en Europa y Argentina* (Buenos Aires: Universidad de Tucumán, 2002); Alessandro Guida, *A la conquista de mentes y corazones Propaganda, guerra psicológica y política cultural en Chile (1973-1975)*, (Santiago de Chile: Ariadna, 2025); Carolina Kauffman (dir.), *Dictadura y Educación. Universidad y Grupos Académicos Argentinos (1976-1983)*, (Salamanca: FarenHouse, 2017); Aldo Marchesi, *El Uruguay inventado. La política audiovisual de la dictadura. Reflexiones sobre su imaginario* (Montevideo: Ediciones Trilce, 2001); Marcos Rey, “La campaña antiuruguaya y la Operación Faro: el frente externo de la dictadura de Uruguay y su conexión con otros regímenes del Cono Sur en la década de 1970” (*Revista Sudamérica* 21, diciembre 2024); Julia Risler, *La acción psicológica: dictadura, inteligencia y gobierno de las emociones (1955-1981)* (Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Tinta Limón, 2018); Laura Schenquer (comp.), *Terror y consenso. Políticas culturales y comunicacionales de la última dictadura* (Buenos Aires: Editorial de la Universidad Nacional de La Plata, 2022); Verónica Valdivia Ortiz de Zárate, *La alcaldización de la política. Los municipios en la dictadura pinochetista* (Santiago de Chile: LOM, 2012).

6 Aunque ya han surgido algunas importantes contribuciones como las obras de Marina Franco, *Un enemigo para la nación. Orden interno, violencia y “subversión”, 1973-1976* (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2012); Carlos Demasi, et al., *La Dictadura cívico-militar. Uruguay, 1973-1985* (Montevideo: EBO, 2013); José del Pozo Artigas, *Diccionario histórico de la dictadura cívico-militar en Chile* (Santiago de Chile: Lom, 2018). Una discusión orientativa del concepto “cívico-militar” en Ana Soledad Montero, “Dictadura cívico-militar: ¿qué hay en el nombre? El debate sobre la participación civil en la última Dictadura argentina y sus ecos en el presente”, *Estudios Sociales* 62, 1, 2022.

se relacionan con ellas, por ejemplo a través del tema de la memoria u otros aspectos<sup>7</sup>.

Ciertamente, las sociedades que recuerdan los 50 o 60 años de los golpes de Estado y el inicio de sus dictaduras militares son muy diferentes a aquellas que los sufrieron. Vivimos tiempos donde las movilizaciones y debates que animaron los años sesenta y setenta están siendo sometidos a una profunda crítica. Los múltiples “ismos” surgidos hace medio siglo son hoy objeto de debate y de ataque por sectores que pretenden una reconstrucción ideológica y cultural que desmonte en buena medida aquellos tópicos o que, como mínimo, los transforme hasta hacerlos irreconocibles. En una dirección similar se ubican aquellos intentos que buscan erosionar las coordenadas políticas y culturales que le dieron sentido a la movilización social del periodo.

Desde ese punto de vista, las respuestas de la historiografía actual ante cualquier tema tampoco pueden ser las mismas que se ofrecieron en contextos históricos previos. Las preguntas han cambiado, por cuanto estas se hacen, por una parte, en función de la sociedad que las formula, y por otra, en función de los sujetos que las elaboran. Igual que cambian las sociedades, cambian los sujetos que reflexionan sobre su pasado; cambian sus inquietudes, sus demandas, sus perspectivas y sus intereses, que es con lo que construyen sus relatos. La sociedad que hoy piensa sobre los golpes y las dictaduras de hace medio siglo no es la de aquellos que sobrevivieron a ellas, sino la de sus hijos y nietos. Y las inquietudes de estos últimos, resultado de experiencias vitales y de época diversas, no son las mismas que las de quienes los precedieron.

Los sesenta fueron años de movilización y contramovilización en toda la región. Aquellos procesos derivaron a partir de entonces, y sobre todo durante los setenta, en diferentes formas de conflictividad socio-política: *grosso modo*, podemos decir que algunos países la solucionaron a través de dictaduras militares; otros a través de guerras civiles. Pero todas ellas fueron resultados de años de profunda conflictividad ideológica, política y social, en los que las ideas que sostuvieron a los dos grandes contendientes (y a los actores externos implicados), se movieron en una horquilla relativamente delimitada. Esto significa, entre otras cosas, que las grandes nociones globales de la lucha ideológica del siglo XX estuvieron

---

7 Sobre la cuestión de la memoria existe una amplia producción, con importantes aportaciones de diversos campos de las ciencias sociales. En este caso, nos limitaremos a citar, a modo de ejemplo, solo algunos de los títulos más relevantes, entre los que se encuentran, además de la colección Memorias de la represión, publicada en 12 volúmenes por Siglo XXI España-Argentina y coordinado por Elizabeth Jelin, los trabajos de: Rebecca J. Atencio, *Memory's Turn: Reckoning with Dictatorship in Brazil (Critical Human Rights)* (Madison: Wisconsin University Press, 2014); Emilio Crenzel, *Los desaparecidos en la Argentina. Memorias, representaciones e ideas (1983-2008)* (Buenos Aires: Biblos, 2010); Elizabeth Jelin, *La lucha por el pasado: cómo construimos la memoria social* (Buenos Aires: Siglo XXI, 2017); Francesca Lessa, Vincente Druliolle, *The memory of state terrorism in Southern Cone. Argentina, Chile, And Uruguay (New York: Palgrave MacMillan, 2011)*; Elizabeth Lira, Brian Loveman, *Políticas de reparación. Chile 1990-2004* (Santiago de Chile: LOM, 2005); Peter Winn, Steve Stern, Federico Lorenz, Aldo Marchesi, *No hay mañana sin ayer. Batallas por la memoria histórica en el Cono Sur* (Buenos Aires: Biblos, 2015).

presentes, a veces de forma muy nítida, en los conflictos observados en suelo latinoamericano por aquellos años, fuesen estos locales o regionales.

En los ochenta y noventa asistimos a evoluciones paralelas y pautas comunes, que además nos ayudan a comprender las transiciones y la construcción de las democracias posteriores, en donde parte de los ejes de disputa y confrontación estuvieron relacionados con la resolución de los traumas del pasado inmediato. La forma en la que se resolvieron las crisis políticas de la región tuvo ciertas particularidades. Allí donde alguno o varios de sus actores tuvieron la fortaleza para marcar el camino a transitar (fuese la salida de una dictadura o de una guerra civil), se pudo imponer en mayor o menor medida su agenda, tanto en relación con los alcances y ritmos del proceso de transición como en relación con la revisión del pasado traumático. Donde alguno o algunos de los actores carecieron de esa fuerza, las formas de salida de sus crisis políticas fueron diversas. En todas ellas los temas clave son los ya citados: investigación histórica, memoria y responsabilidad.

Los ensayos contenidos en esta propuesta están relacionados con muchas de las cuestiones que hemos planteado y, sobre todo, representan aportaciones innovadoras que, estamos seguros, añadirán nuevos elementos a nuestro conocimiento de esas experiencias. El dossier se inicia con el texto de Eulalia P. Negrellos, que se ocupa de reconstruir la política de vivienda y, más en general, la reconfiguración del espacio urbano durante la dictadura cívico-militar brasileña. El ensayo, desde una perspectiva de largo plazo, y deteniéndose especialmente en las relaciones entre el sector privado y el Estado, intenta poner de relieve las características de la actuación del régimen en este ámbito. Entre estas, destaca su respuesta a la necesidad de control sobre el territorio y la dimensión de clase que esto conllevaba, situación que implicó, entre otras cosas, altos índices de segregación socio-espacial, la construcción de complejos residenciales en los suburbios pobres y el fomento del crecimiento de los asentamientos informales.

El texto de Steffano Martinelli, en tanto, aborda las reacciones de los partidos comunistas de Brasil y Chile a los golpes militares de 1964 y 1973 respectivamente. El estudio introduce un elemento de análisis relevante a partir del concepto propiocepción, que permite entender la forma en cómo estos dos actores miraron la ruptura institucional de sus países y, sobre todo, cómo reconstruyeron su orgánica partidaria y su propia subjetividad comunista. El amplio uso de fuentes hemerográficas pertenecientes a estas colectividades permite seguir de cerca el proceso de reconstrucción de esa identidad —fuertemente erosionada por los golpes militares—, constituyendo, en la práctica, un ejercicio que también implicaba el desarrollo de una caracterización específica sobre el otro.

El dossier continúa con el texto de Juan Luis Hernández sobre los primeros años de la dictadura militar boliviana encabezada por Hugo Banzer Suárez. De los casi siete años de duración de este régimen, el estudio se centra en la etapa 1971-1974 que corresponde a la institucionalización del gobierno. Dicho proceso se caracterizó por la conformación de alianzas entre distintos grupos políticos y

la adopción de medidas económicas y sociales que buscaban crear las condiciones para asentar un respaldo más sólido al nuevo gobierno. Visto desde un ángulo regional, este último elemento constituyó una práctica bastante generalizada y transversal en el resto de las dictaduras militares que buscaron alcanzar mayores cuotas de legitimidad ante la sociedad civil. A partir de estas coordenadas, el texto de Juan Luis Hernández plantea una cuestión relevante para el caso boliviano, a saber: que los primeros años de la dictadura de Banzer, y con ello la reconfiguración social, económica y sobre todo política que allí tuvo lugar, fue un primer esbozo de lo que en la década del ochenta sería el proceso de Democracia pactada que permitió consolidar el modelo neoliberal.

La contribución de Javier Correa Morales se centra en la dictadura que se instauró en Uruguay con el golpe de Estado de 1973, poniendo en el centro del análisis un tema poco estudiado: el de las estrategias oficiales, impuestas en los gobiernos departamentales desde 1973 y hasta 1984, con el fin de generar consensos para legitimar el régimen y, por lo tanto, ejercer un control sobre la ciudadanía. Desde esta perspectiva, el ensayo permite arrojar luz sobre la compleja naturaleza de este régimen, destacando, sobre todo, el papel de aquellos sectores civiles que la apoyaron, fueron complacientes o que sencillamente adhirieron sin cuestionamientos a la dictadura.

También dedicado a Uruguay es el artículo de Gerardo Leibner, que se ocupa de analizar el régimen desde una perspectiva diferente; la de sus relaciones internacionales. El trabajo, en efecto, reconstruye el vínculo entre el Estado de Israel y Uruguay entre 1972 y 1980, centrándose, en particular, en el apoyo prestado por el Estado hebreo a esta dictadura, así como también en las contradicciones que lo acompañaron. Entre estas últimas destaca la ambigüedad entre la voluntad de mantener dicha relación y el deber de proteger a los judíos de izquierda afectados por la represión. Leibner pone de relieve, entre otras cosas, cómo la alianza con la dictadura prevaleció sobre cualquier otra consideración, y fue de especial importancia para el régimen uruguayo, sobre todo en el ámbito de la manipulación de la opinión pública y en tapar el antisemitismo de sus aparatos represivos.

El ensayo de Valerio Giannattasio reconstruye la forma en que la prensa chilena percibió y representó, desde 1973 hasta principios de los años ochenta, los acontecimientos que se produjeron en Italia durante ese mismo período, prestando especial atención a la cuestión del “terrorismo rojo”. El trabajo nos muestra cómo los periódicos chilenos utilizaron los acontecimientos italianos durante los llamados “años de plomo” para trazar verdaderos paralelismos entre ambos países, respaldando así el carácter salvífico de la intervención de las Fuerzas Armadas en Chile. En este sentido, la prensa destacaría que la cruzada anticomunista del régimen liderado por Pinochet, se enmarcaba dentro de la débil capacidad de reacción de las democracias liberales para confrontar y atajar el terrorismo.

El ensayo de Germán Alburquerque analiza la evolución del pensamiento militar dentro de las Fuerzas Armadas argentinas entre finales de la década de

los sesenta y 1976, año del golpe de Estado. En particular, el autor examina la revista argentina *Estrategia*, que, aunque no era un órgano oficial de las Fuerzas Armadas, estaba dirigida por militares retirados o en servicio activo. El artículo reconstruye, entre otras cosas, la evolución del pensamiento de este grupo de militares, entre tendencias “peruanistas” y sensibilidades tercermundistas, que fueron tópicos bastante en boga por aquellos años.

El estudio de Laura Schenquer aborda una dimensión que en general no había sido tratada con sistematicidad en los estudios referidos a las dictaduras militares. Esta se refiere a las campañas de propaganda y operaciones de prensa que el régimen militar argentino (1976-1983) desarrolló en el marco del programa de recepción de periodistas extranjeros que visitaban el territorio. El eje diplomático en este caso es clave porque da cuenta del proceder de las instituciones de este país, sobre todo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, a objeto de contrarrestar la denominada “campaña antiargentina”, expresión que refería, desde la óptica militar, a una operación encaminada a desacreditar en el mundo a las autoridades castrenses a través de las denuncias por violaciones a los derechos humanos. El brazo ejecutor de los planes de propaganda que ayudaran a contrarrestar dicha campaña fue la Dirección General de Prensa y Difusión (DGPYD), cuya estructura y vínculos con distintos entes estatales son reconstruidos en detalle por la autora. Adicionalmente, el texto aporta un caso concreto de este tipo de operaciones al detallar y analizar la invitación que se hizo al periodista belga Jacques Schoonjans para que visitara Argentina en 1977. Las conclusiones de Schenquer van a mostrar los alcances de las estrategias seguidas por la DGPYD a objeto de mejorar la imagen de la dictadura militar en el exterior.

El dossier finaliza con el trabajo de Mariana Stoler, centrado también en la dictadura militar argentina. En este caso, la autora indaga en la relación entre el gobierno militar y el movimiento sindical a partir del estudio de la seccional La Matanza perteneciente a la Unión Obrero Metalúrgica (UOM), uno de los sindicatos más importantes del sector industrial argentino. Como se sabe, tras el golpe de 1976, las fuerzas armadas intervinieron la mayor parte de las organizaciones sindicales a objeto de tener bajo control al mundo del trabajo, al tiempo que desataban una cruenta represión en el seno de la sociedad civil argentina. En este contexto, Mariana Stoler hace notar la existencia de un marco interpretativo más o menos común a la hora de estudiar este periodo y que entendía el proceso interventor de los militares como una práctica dirigida únicamente a desarticular el movimiento obrero. Tomando distancia de este tipo de enfoques, la autora desarrolla un análisis que muestra las complejidades del proceso interventor en un contexto donde la vida política, si bien fuertemente afectada por la represión militar, continuó existiendo. La pregunta de fondo que plantea este estudio es si el accionar de los militares en contra de los sindicatos tuvo como único propósito avanzar hacia su desarticulación y destrucción como entes claves de la organización de los trabajadores argentinos.

Para finalizar, deseamos agradecer a la Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos la oportunidad de publicar este dossier en *Estudios AHILA*. Creemos que la posibilidad de dar cabida y mostrar este tipo de trabajos, que implica una labor mancomunada tanto de los autores como de los editores responsables, resulta hoy en día más necesaria que nunca. Cuando parece estar en marcha un giro de características globales hacia nuevas formas y prácticas autoritarias, el conocimiento del pasado reciente puede contribuir a mejorar nuestra comprensión de un periodo que parecía haber quedado atrás y que no guardaba, en apariencia, mayor relación con la actualidad. Sin embargo, la realidad ha puesto otra vez en la mesa de los historiadores una serie de problemas y no pocos desafíos que nos conectan indefectiblemente a esos años y sobre los cuales es necesario volver en búsqueda de posibles respuestas.

## BIBLIOGRAFÍA

- ÁGUILA, Gabriela; ALONSO, Luciano, *Procesos represivos y actitudes sociales. Entre la España franquista y las dictaduras del Cono Sur* (Buenos Aires: Prometeo, 2013).
- ÁGUILA, Gabriela; GARAÑO, Santiago; SCATIZZA, Pablo (coords.), *La represión como política de Estado. Estudios sobre la violencia estatal en el siglo XX* (Buenos Aires: Imago Mundi, 2020).
- ALTAMIRANO ORREGO, Carlos, *Dialéctica de una derrota* (México: Siglo XXI, 1977).
- ATENCIO, Rebecca J., *Memory's Turn: Reckoning with Dictatorship in Brazil* (Critical Human Rights) (Madison: Wisconsin University Press, 2014). <https://doi.org/10.2307/jj.36032546>
- BROQUETAS, Magdalena, *Ganar la guerra. Cultura, Sociedad y política en el Uruguay autoritario (1967-1973)* (Montevideo: Banda Oriental, 2024).
- CALVEIRO, Pilar, *Poder y desaparición: los campos de concentración en Argentina* (Buenos Aires: Colihue, 2014).
- CARASSAI, Sebastián, *Los años setenta de la gente común, la naturalización de la violencia* (Buenos Aires: Siglo XXI, 2013).
- CASALS, Marcelo, *Contrarrevolución, colaboracionismo y protesta. La clase media chilena y la dictadura militar* (Santiago de Chile: Fondo de Cultura Económica, 2023).
- COLLIER, David, *The New Authoritarianism in Latin America* (Princeton: Princeton University Press, 1978).
- COMBLIN, Joseph, *El Poder Militar en América Latina* (Salamanca: Ediciones Sígueme, 1978).
- CORVALÁN LEPEZ, Luis, *Algo de mi vida. Memorias clandestinas del secretario general del Partido Comunista de Chile* (Barcelona: Grijalbo, 1978).
- CRENZEL, Emilio, *Los desaparecidos en la Argentina. Memorias, representaciones e ideas (1983-2008)* (Buenos Aires: Biblos, 2010).
- DAPPIANO, Karina et al. (eds.), *Sombras, suspiros y memorias: Prácticas culturales y dictaduras en el cono sur* (Buenos Aires: Universidad Nacional de Lanús, 2021).
- DEL POZO ARTIGAS, José, *Diccionario histórico de la dictadura cívico-militar en Chile* (Santiago de Chile: Lom, 2018).
- DEMASI, Carlos et al., *La Dictadura cívico-militar. Uruguay, 1973-1985* (Montevideo: EBO, 2013).

- DINGES, John, *Los años del Cóndor. Operaciones internacionales de asesinato en el Cono Sur* (Santiago de Chile: Debate, 2004).
- DURÁN, Sergio, *Ríe cuando todos estén tristes: el entretenimiento televisivo bajo la dictadura de Pinochet* (Santiago de Chile: Lom, 2012).
- ELIAS, Jorge, *Maten al cartero. Posdata del asedio a la prensa durante las dictaduras militares del Cono Sur* (Buenos Aires: Cadal, 2005).
- FICO, Carlos, *Reinventando o otimismo: ditadura, propaganda e imaginário social no Brasil*, (Rio de Janeiro: FGV, 1997).
- FICO, Carlos, *Como eles agiam. Os subterrâneos da ditadura militar: espionagem e polícia política* (Rio de Janeiro: Record, 2001).
- FRANCO, Marina, "La 'campana antiargentina': la prensa, el discurso militar y la construcción de consenso" en CASALI DE BABOT, Judith; GRILLO, María Victoria (eds.), *Derecha, fascismo y antifascismo en Europa y Argentina* (Universidad de Tucumán: Buenos Aires, 2002).
- FRANCO, Marina, *Un enemigo para la nación. Orden interno, violencia y "subversión", 1973-1976* (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2012).
- FRANCO, Marina; FELD, Claudia, *ESMA. Represión y poder en el centro clandestino de detención más emblemático de la última dictadura argentina* (Buenos Aires: Fondo De Cultura Económica, 2022).
- GUIDA, Alessandro, *A la conquista de mentes y corazones Propaganda, guerra psicológica y política cultural en Chile (1973-1975)* (Santiago de Chile: Ariadna, 2025).  
<https://doi.org/10.26448/ae9789566276647.144>
- JELIN, Elizabeth, *La lucha por el pasado: cómo construimos la memoria social* (Buenos Aires: Siglo XXI, 2017).
- JOFFILY, Mariana, *No centro da engrenagem: os interrogatórios na Operação Bandeirante e no DOI de São Paulo (1969-1975)* (São Paulo: Edusp, 2013).
- JOFFILY, Mariana; CHIRIO, Maud, *Torturadores. Perfis e trajetórias de agentes da repressão na ditadura militar brasileira* (São Paulo: Alameda, 2025).
- KAUFFMAN, Carolina (dir.), *Dictadura y Educación. Universidad y Grupos Académicos Argentinos (1976-1983)* (Salamanca: FarenHouse, 2017).
- LEME DE MATTOS, Marco Aurélio Vannucchi; JUNIOR, Walter Cruz Swensson, *Contra os inimigos da ordem: a repressão política da ditadura militar (1964-1985)* (Rio de Janeiro: DP&A, 2003).
- LESSA, Francesca, DRULIOLLE, Vicente, *The memory of state terrorism in Southern Cone. Argentina, Chile, And Uruguay* (New York: Palgrave MacMillan, 2011).
- LESSA, Francesca, *The Condor Trials. Transnational Repression and Human Rights in South America* (New Haven: Yale University Press, 2022).
- LIRA, Elizabeth, LOVEMAN, Brian, *Políticas de reparación. Chile 1990-2004* (Santiago de Chile: LOM, 2005).
- LOVEMAN, Brian; DAVIES, Thomas M., *The Politics of Antipolitics: The Military in Latin America* (Lanham: SR Books, 1997).
- LOVEMAN, Brian, *For la Patria: Politics and the Armed Forces in Latin America* (Wilmington: Scholarly Resources, 1999).

- MARCHESI, Aldo, *El Uruguay inventado. La política audiovisual de la dictadura. Reflexiones sobre su imaginario* (Montevideo: Ediciones Trilce, 2001).
- MARTÍNEZ, Virginia, *Tiempos de dictadura. 1973-1985. Hechos, voces, documentos. La represión y la resistencia día a día* (Montevideo: Banda Oriental, 2023).
- MC SHERRY, Patrice, *Los estados depredadores: la Operación Cóndor y la guerra encubierta en América Latina* (Santiago de Chile: Lom, 2009).
- MONTERO, Ana Soledad, "Dictadura cívico-militar: ¿qué hay en el nombre? El debate sobre la participación civil en la última Dictadura argentina y sus ecos en el presente". *Estudios Sociales* 62 (1), 2022, pp. 1-19. <https://doi.org/10.14409/es.2022.1.e0015>
- NUNN, Frederick M., *The Time of the Generals: Latin American Professional Militarism in World Perspective* (Nebraska: University of Nebraska Press, 1992).
- O'DONNELL, Guillermo A., *Modernization and Bureaucratic-Authoritarianism. Studies in South American Politics* (Berkeley: University of California Press, 1973).
- PIZARRO, Carolina; SANTOS-HERCEG, José, *Revisitar la catástrofe. Prisión política en el Chile dictatorial* (Santiago de Chile: Pehuén, 2016).
- REBOLLEDO, Javier, *La danza de los cuervos* (Santiago de Chile: Ceibo Ediciones, 2012).
- REBOLLEDO, Javier, *El despertar de los cuervos. Tejas Verdes, el origen del exterminio en Chile* (Santiago de Chile: Ceibo Ediciones, 2013).
- REY, Marcos, "La campaña antiuruguaya y la Operación Faro: el frente externo de la dictadura de Uruguay y su conexión con otros regímenes del Cono Sur en la década de 1970". *Revista Sudamérica* 21, diciembre 2024, pp. 170-201.
- REY TRISTÁN, Eduardo (dir.), *Memorias de la violencia en Uruguay y Argentina, golpes, dictaduras, exilios (1973-2006)* (Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 2007).
- RISLER, Julia, *La acción psicológica: dictadura, inteligencia y gobierno de las emociones (1955-1981)* (Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Tinta Limón, 2018).
- RUGGIERO, Vito, *Il sogno anticomunista. Neofascisti italiani in America Latina (1977-1982)* (Roma: Roma Tre Press, 2023).
- SALAZAR, Gabriel, *Villa Grimaldi (cuartel Terranova). Historia, testimonio, reflexión* (Santiago de Chile: LOM, 2013).
- SALAZAR, Gabriel, *Voces profundas. Las compañeras y compañeros «de» Villa Grimaldi*, vol. II (Santiago de Chile: LOM, 2017).
- SCHENQUER, Laura (comp.), *Terror y consenso. Políticas culturales y comunicacionales de la última dictadura* (Buenos Aires: Editorial de la Universidad Nacional de La Plata, 2022).
- SIMÓN, Roberto, *El Brasil de Pinochet. La dictadura brasileña, el golpe en Chile y la guerra fría en América del Sur* (Santiago de Chile: Lom, 2024).
- STEPAN, Alfred; LINZ, Juan José, *The Breakdown of Democratic Regimes* (Baltimore: John Hopkins University Press, 1978).
- VALDÉS, Hernán, *Tejas Verdes. Diario de un campo de concentración en Chile* (Barcelona: Ariel, 1974).
- VALDIVIA, Verónica, *La alcaldización de la política. Los municipios en la dictadura pinochetista* (Santiago de Chile: LOM, 2012).
- WINN, Peter; STERN, Steve; LORENZ, Federico; MARCHESI, Aldo, *No hay mañana sin ayer. Batallas por la memoria histórica en el Cono Sur* (Buenos Aires: Biblos, 2015).

# Vivienda y planeamiento urbano en la dictadura militar en Brasil. Entre el modelo empresarial estatal y las consultorías privadas

EULALIA P. NEGRELOS 

Universidade de São Paulo

## Resumen

La dictadura militar (1964-1985), ampliamente apoyada por segmentos sociales y empresariales, amplió la posición de Brasil en el cuadro de la acumulación internacional e, internamente, dio riendas a las corporaciones, destacadas la cadena de la construcción civil y las consultorías privadas. Se propone contribuir para la comprensión de las relaciones entre el sector privado y el Estado en ese periodo, con la presencia militar en la burocracia, ejerciendo el desarrollismo autoritario, prácticas predatorias de ocupación territorial, altas tasas de crecimiento y elevación de los índices de pobreza en las grandes ciudades. La política urbana-habitacional tiene características singulares, bajo el modelo centralizado de promoción de vivienda por empresas estatales autárquicas en el sistema de acceso público a la vivienda popular, con operadores privados para las clases medias. La producción habitacional es masiva frente al déficit acumulado, promoviendo elevados índices de segregación socioespacial, implantando conjuntos de vivienda en periferias pobres y promoviendo el crecimiento de los asentamientos informales. En la planeación urbana, se centralizan las decisiones de financiación del planeamiento urbano, privilegiadamente por empresas privadas de consultoría, principalmente en polos urbanos industriales, indicando las contradicciones del régimen al desconectar la promoción de vivienda como mercancía de la elaboración de planes urbanos municipales como control normativo del territorio.

## Palabras clave:

Dictadura militar; Brasil; Vivienda; Planeación; Desarrollismo.

## Abstract

The military dictatorship (1964-1985), widely supported by social and business segments, broadened Brazil's position in the framework of international accumulation and, internally, gave reins to corporations, especially the civil construction chain and private consultancies. It is proposed to contribute to the understanding of the relations between the private sector and the State in this period, with the military presence in the bureaucracy, exercising authoritarian developmentalism, predatory practices of territorial occupation, high growth rates and increased poverty rates in large cities. The urban-housing policy has unique characteristics, under the centralized model of housing promotion by autarkic state-owned enterprises in the system of public access to popular housing, with private operators for the middle classes. Housing production is massive in the face of the accumulated deficit, promoting high rates of socio-spatial segregation, implanting housing complexes in poor peripheries and promoting the growth of informal settlements. In the planning sector, urban planning financing decisions are centralized, preferably by private consulting companies, mainly in urban industrial centers, indicating the contradictions of the regime by disconnecting the promotion of housing as a commodity from the elaboration of municipal urban plans as regulatory control of the territory.

## Key words:

Military dictatorship; Brazil; Housing; Urban planning; Developmentalism.

## INTRODUCCIÓN

En 2024 se cumplieron 60 años del golpe de Estado en Brasil, inaugurando una dictadura militar que, en 21 años, amplió la posición del país en el cuadro de la acumulación internacional e, internamente, dio riendas a las corporaciones, con destaque para la cadena de la construcción civil. En un cuadro ideológico del desarrollismo, que empezó con la dictadura de Vargas en 1930, la dictadura militar lo ejerce con autoritarismo, persecuciones políticas y una práctica ambientalmente predatoria de ocupación territorial.

En este trabajo el objeto central es el rol del Estado en ese periodo, con singularidades como la presencia militar en la burocracia<sup>1</sup>, promoviendo altas tasas de crecimiento con elevación de los índices de pobreza en las grandes ciudades brasileñas; en el sector urbano-habitacional, la singularidad se presenta con la reorganización de la política urbana y habitacional en el modelo centralizado de promoción de vivienda popular con un complejo Sistema Financeiro da Habitação (SFH), estructurado por el Banco Nacional de Habitação (BNH), promovido por empresas estatales autárquicas (COHAB — Companhias de Habitação) operando el sistema de acceso público a la vivienda popular, además de otros operadores privados actuando en la vivienda para las clases medias. Esa política habitacional es inédita en relación a lo que se practicó antes y después y se propone masiva frente al déficit acumulado durante las décadas anteriores, promoviendo elevados índices de segregación socioespacial, sea al implantar los conjuntos de vivienda en localizaciones periféricas pobres sea por el crecimiento de los asentamientos informales en un cuadro de crecimiento económico con altos niveles de pobreza en todo el país.

En lo que atañe al campo de la planeación urbana, por primera vez organizado como un sector normativo nacional, el Serviço Federal de Habitação e Urbanismo (SERFHAU), en el marco del BNH, centraliza las decisiones de financiación del desarrollo urbano, a través de la elaboración del planeamiento urbano por empresas privadas de consultoría, principalmente en polos urbanos industriales.

El problema aquí planteado como argumentación central consiste en verificar y analizar las contradicciones del régimen dictatorial al profundizar el divorcio entre la promoción de vivienda, claramente tratada como mercancía, y la elaboración de planes urbanos municipales, claramente imponiendo el control normativo del espacio urbano con fines de expandir la política de desarrollo territorial. Los instrumentos urbanísticos se centran en el concepto de “planeamiento integrado”, buscando articular sectores y problemáticas en el desarrollo urbano municipal, con prioridad para el “plan director” y la zonificación.

---

1 Celso Furtado, “Da República Oligárquica ao Estado Militar”, en Celso Furtado (org.), *Brasil: tempos modernos* (Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977), pp. 1-23.

El trabajo presenta resultados de investigaciones realizadas entre 2010 y 2025, con base en documentación primaria, cuyo análisis ha permitido conformar un cuadro de actuación estatal en municipios del estado de São Paulo (el estado más industrializado en el período), con desconexiones entre los instrumentos de planeamiento integrado (los planos directores municipales) y los proyectos habitacionales y su ubicación urbana<sup>2</sup>.

En esa problematización consideramos las instituciones, las políticas y los planos nacionales en el cuadro del desarrollismo, que nos indica que el planeamiento del periodo ocurrió en descompaso con la producción de vivienda, demostrando un alejamiento entre discurso y práctica<sup>3</sup>, sobre todo entre el discurso de integración e inclusión social y la práctica excluyente, autoritaria y segregadora en los planos y en la producción habitacional.

En ese sentido buscamos contribuir al conjunto de nuevas investigaciones empíricas e interpretaciones historiográficas sobre el proceso de institucionalización de la política urbana y habitacional en el período de la dictadura militar (1964-1985), buscando comprender las relaciones entre Estado y Planeamiento y las transformaciones político-institucionales implementadas en relación al período anterior (1930 a 1964, básicamente con políticas aplicadas por Getúlio Vargas)<sup>4</sup>.

Se comprende que, en Brasil, la vivienda es una mercancía para el Estado capitalista ya a partir de la revolución varguista de 1930, cuando el Estado asume la vivienda como su competencia, aplicando dispositivos económico-financieros e ideológicos fundados en la vivienda masiva —solidariamente a una de las premisas del movimiento moderno— con propiedad privada. Vargas inaugura un largo periodo desarrollista, que se extiende en la dictadura hasta 1980, en dos ciclos ideológicos: el primero, de 1930 a 1964, con los subperíodos de origen (1930-1945), auge (1946-1960) y decadencia (1961-1964); el segundo, de 1964 a 1980, del desarrollismo autoritario, durante la dictadura militar<sup>5</sup>.

---

2 Analizamos directamente 5 municipios-polos regionales (São Paulo, Santos, Campinas, Ribeirão Preto y Bauru), con material colectado en 5 COHAB con sede en esas ciudades toda la producción de 1964 a 1986; ubicación de los conjuntos habitacionales; sus planes urbanos en el periodo. Esa investigación dio base para nuestra tesis de Libre Docencia: Eulalia P. Negrelos, *Estado, planejamento e habitação no Brasil entre as décadas de 1960 e 1980: a forma urbana conjunto habitacional no quadro da crítica ao Movimento Moderno* (São Carlos: IAU-USP, 2021). Luego, como parte de la investigación, dirigimos el doctorado de Janaina A. Cuccato, *Planejamento Integrado e Indústria: o SERFHAU/BNH no estado de São Paulo de 1964 a 1980* (São Carlos: IAU-USP (São Carlos: IAU-USP, 2023), en el cual hemos podido ampliar el análisis de la producción de conjuntos y los planes urbanos integrados. Además de los 5 municipios iniciales, analizamos los documentos de otros 15 municipios: Guarulhos, Osasco, Mauá, Cubatão, São José dos Campos, Taubaté, Sorocaba, Piracicaba, Franca, Araraquara, São Carlos, Votuporanga, Araçatuba, Presidente Prudente y Marília.

3 Flávio Villaça, "Uma contribuição para a história do planejamento urbano no Brasil", en Csaba Deák y Sueli Ramos Schiffer (orgs.), *O processo de urbanização no Brasil* (São Paulo: EDUSP, 1999), pp. 169-243.

4 Eulalia P. Negrelos, *op. cit.*, 2021.

5 Ricardo Bielschowsky, *Pensamento econômico brasileiro: o ciclo ideológico do desenvolvimentismo* (Rio de Janeiro: Contraponto, 2000). Ricardo Bielschowsky; Carlos Mussi, "El pensamiento desarrollista en Brasil: 1930-1964 y anotaciones sobre 1964-2005", en Rose Cave (coord.), *Brasil y Chile, una mirada hacia América Latina y sus perspectivas* (Santiago de Chile: RIL editores, 2006), pp. 15-62.

Es posible comprender que la producción de vivienda como competencia estatal —a partir de 1930— está totalmente vinculada a la relación Estado/Economía, en la lógica de la ampliación de la posición de Brasil en el cuadro internacional de la acumulación capitalista<sup>6</sup>.

En un primer apartado, hacemos una breve exposición sobre el período 1930-1964, ya que, del punto de vista metodológico, es un tiempo de establecimiento de las bases de la formulación y de la aplicación de políticas de intervención estatal en la lógica del desarrollismo, con relieve para un proyecto nacional vinculado al ideal moderno en arquitectura y urbanismo, llegando a un nuevo ciclo del modelo desarrollista a partir del golpe militar, ahora autoritario, hasta su total agotamiento en el inicio de la década de los 1980, núcleo principal de este trabajo.

Al enfrentar, en el segundo y tercero apartados, la actuación estatal en la producción de vivienda social y en la promoción de las consultorías privadas en el planeamiento urbano integrado, se espera contribuir con el análisis sobre la política urbana y habitacional de la dictadura militar (1964-1985), comprendiendo las singularidades del régimen en las prácticas urbanísticas y su dinámica de acercamiento y alejamiento en la producción efectiva del espacio por los conjuntos habitacionales.

La dictadura militar ha sido un período duro de la historia brasileña, contemporánea de regímenes similares en varios otros países latinoamericanos. Abrir nuevas miradas analíticas para esa producción habitacional contribuye para establecer nuevas perspectivas de comprensión de las especificidades de los modelos implantados en la dictadura y de su filiación político-económica a las determinaciones de la ciudad capitalista latinoamericana en la lógica del desarrollo desigual y combinado<sup>7</sup>.

## LA ACTUACIÓN ESTATAL EN VIVIENDA Y EN PLANEAMIENTO (1930 A 1964)

Ya hay un importante conjunto de trabajos<sup>8</sup> sobre el proceso de producción de vivienda en la “Era Vargas” (1930-1945) y hasta 1964 sobre los conjuntos de vivienda promovidos a través de una política de base estatal y autárquica. La producción se daba en una estructura que articulaba la seguridad social (con organismos corporativos según las categorías profesionales) y la producción estatal directa

---

6 Octavio Ianni, *Estado e Planejamento Econômico no Brasil (1930-1970)* (Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1977).

7 Francisco de Oliveira, *Crítica à razão dualista. O ornitorrinco* (São Paulo: Boitempo, 2003).

8 Véanse los trabajos de: Nabil Bonduki, *Origens da Habitação Social no Brasil. Arquitetura Moderna, Lei do Inquilinato e Difusão da Casa Própria* (São Paulo: Estação Liberdade/FAPESP, 1998). Nabil Bonduki; Ana Paula Koury, *Os pioneiros da habitação social no Brasil: Inventário da Produção Pública no Brasil entre 1930 e 1964* (São Paulo: UNESP: SESC, 2014). Nilce Aravecchia-Botas, *Estado, arquitetura e desenvolvimento: a ação habitacional do IAPI* (São Paulo: Editora da UNIFESP, 2016). Flávia B Nascimento, *Bloco de memórias: habitação social, arquitetura moderna e patrimônio cultural* (São Paulo: EDUSP, 2016). Camila Ferrari, *Projetos de habitação popular como projeto de cidade: os conjuntos habitacionais dos IAP na Grande São Paulo de 1930 a 1964* (São Carlos: IAU-USP, 2013), Tesis de maestría.

(con la Fundación de la Casa Popular — FCP), además de organismos estatales a partir de 1946. Para el planeamiento, desde los años 1930 ocurre la implantación de instrumentos de intervención en la construcción del espacio urbano dirigida por el Estado. Para Villaça<sup>9</sup>, “[...] aquello que en las últimas décadas se ha llamado planeamiento urbano (y que en las décadas de 30 y 40 se llamaba urbanismo) es la acción del Estado sobre la organización del espacio intra-urbano”. En municipios pequeños las administraciones municipales actuaban en el control del espacio urbano en un periodo de autoritarismo político de Vargas, comprendiéndose la función de planear la ciudad como atribución del Estado.

Durante los años 1950, se crean instituciones de urbanismo fuera de las administraciones y se constituyen equipos multidisciplinarios. Ocurre una sistematización del planeamiento físico-territorial que ya apuntaba, desde años anteriores, a algunas formas legales de organización de las ciudades a través de instrumentos previstos por la Constitución Federal de 1946, en el sentido de una estructuración regional, proponiendo la formación de comisiones para dirigir el proceso. Feldman<sup>10</sup> indica que los años 1950 marcaron cualitativamente la inserción de los urbanistas en el campo de la asistencia técnica, que se manifiesta en las instituciones creadas delimitando un campo de actuación específico. El Instituto de Arquitectos do Brasil (IAB), por ejemplo, se articula alrededor de la institucionalización de un sistema jerarquizado de planeamiento, aliando la formación de cuadros técnicos a una actuación política<sup>11</sup>.

La doble inserción del profesional de planeamiento urbano, en instituciones de enseñanza y en organismos públicos, permitió vínculos que se extienden hasta la dictadura militar (y que todavía se pueden identificar en la actualidad). Durante el primer gobierno de Vargas, el urbanista asume un papel importante al reafirmar sus vínculos con la administración pública. Las “comisiones de planos”, creadas a lo largo de la década de 1940 en las principales capitales brasileñas, constituyen el espacio de ampliación de la concepción de la disciplina urbanística, contribuyendo para la inserción de diferentes sectores de la sociedad en los debates sobre el planeamiento urbano, aunque dentro de los límites jurídico-institucionales impuestos por el régimen varguista. Posteriormente, tales comisiones darán origen a los departamentos de urbanismo o similares, institucionalizando un espacio de actuación exclusiva del urbanista, con la extinción de los “departamentos de municipalidades”<sup>12</sup>.

---

9 Flávio Villaça, *op. cit.*, 1999, p. 173. [Traducción de la autora].

10 Sarah Feldman, “O Arranjo SERFHAU: assistência técnica aos municípios/órgãos de planejamento/empresas de engenharia consultiva”, en *Actas del XI Encontro Nacional da ANPUR Salvador* v. 01, (2005b), pp. 1-16.

11 Sarah Feldman, *Planejamento e Zoneamento. São Paulo: 1947-1972* (São Paulo: EDUSP: Fapesp, 2005a).

12 *Ibidem*.

Luego, de 1930 a 1964, se puede entender la conformación de un cuadro en el cual el Estado desarrollista interviene en la reestructuración administrativa y política nacional donde la vivienda pasa a ser atribución estatal y el planeamiento, en el marco de la conformación del Urbanismo como disciplina y campo de actuación profesional en Brasil desde la década de 1910, se va instalando como función de Estado y espacio de actuación de profesionales involucrados con el espacio y el territorio.

A pesar de la centralidad del tema de la vivienda en las proposiciones urbanísticas de instituciones públicas y profesionales —en congresos nacionales e internacionales y en publicaciones importantes a lo largo de la primera mitad del siglo XX, con destaque para el período 1930-1964—, en las prácticas concretas de los agentes públicos y sociales capitaneados por el Estado la vinculación entre vivienda y ciudad no siempre se verifica con efectividad en la producción del espacio.

La distancia del pensamiento urbanístico en relación con la cuestión de la vivienda, o la desarticulación entre urbanística y vivienda, se puede observar, en Brasil, por la práctica de la producción habitacional individual y por la constatación del desfase entre la instalación de la infraestructura urbana, de los equipamientos colectivos y por la calidad final de la implantación de los barrios populares de promoción estatal, que tardan décadas en finalizarse. La unidad de vivienda individual —incluidos los tipos de bloques— ha sido históricamente, y hasta hoy, priorizada en las acciones estatales (de promoción directa o a través de agentes privados) sobre la política urbana integral, que consistiría en producir vivienda como componente de una política para todo el territorio municipal, en núcleos urbanos equipados y accesibles de forma ecuánime.

Para América Latina, en diferentes periodos entre las décadas de 1930 y 1960, ha ocurrido similar producción estatal de vivienda para los sectores de más bajos ingresos, con base, principalmente, en el grande conjunto habitacional, generando extensos y densos territorios populares. Principalmente entre 1945 y 1975, para la región, la concepción de vivienda en grande escala se ha visto vinculada a las ideas de desarrollo, propuestas con calidad arquitectónica y de inserción urbana<sup>13</sup>.

En este trabajo se considera la política de vivienda del período militar como la profundización de ese cuadro, con la nueva estructura administrativa de una política urbana y habitacional en un complejo sistema financiero e institucional para la producción de vivienda. Con diferentes matizaciones, ha tenido vigencia una serie de dispositivos de planeamiento orientada por la idea de desarrollo nacional a partir de la intervención del Estado, principalmente en el vínculo con la industrialización y con la infraestructura de grande porte<sup>14</sup>.

---

13 Pedro Morais, *Cidades verticais: habitação vertical de grande escala na América Latina, 1929-1979* (Belo Horizonte: UFMG, 2016), Tesis de doctorado.

14 Camila Ferrari; Eulalia P. Negrelos, "Vivienda en la planificación urbana: Arquitectura y Estado en Brasil entre 1930 y 1986", en Enrique X. Anda Alanís; Diana P. Pérez Palacios (orgs.), *Ensayos sobre la historia de la arquitectura del siglo XX. México, América Latina y España* (Ciudad de México: UNAM, 2017).

O sistema de planejamento implantado no Brasil durante o regime militar beneficiou-se de diversas experiências anteriores, nas quais o Estado brasileiro, ainda que sem um projeto estruturado de intervenção, adotou medidas importantes para promover a industrialização da economia brasileira como resposta às crises que expunham sua forte dependência do exterior. Sob essa perspectiva, é possível afirmar que as medidas adotadas pelo governo revolucionário, liderado por Getúlio Vargas, na década de 1930, constituem um marco no processo de intervenção do Estado na economia com a finalidade de promover seu desenvolvimento...<sup>15</sup>.

A história do planejamento econômico no Brasil ganha novos contornos com a tomada do poder pelos militares em 1964... as linhas gerais da política de industrialização adotada nas décadas anteriores não foram substancialmente alteradas e a capacidade técnica acumulada durante esse período contribuiu para o aprofundamento do planejamento governamental que ganhou nova força com a hegemonia absoluta que o Poder Executivo adquiriu a partir de meados dos anos 1960 e, em especial, durante a década de 1970<sup>16</sup>.

Comprendiendo el papel de la producción habitacional y del planeamiento urbano para el proyecto nacional de desarrollo, con fuertes determinaciones de las cuestiones económicas en el modo de producción capitalista, analizamos la producción de vivienda popular por el Estado capitalista durante el periodo militar, buscando explorar las contradicciones internas entre la vivienda —en el modelo empresarial estatal— y el planeamiento —con las consultorías privadas—, siguiendo diferentes e inéditos rumbos en los discursos de planes y proyectos del período.

### **LA PRODUCCIÓN DE LA VIVIENDA DE LAS COHAB/BNH: EL MODELO EMPRESARIAL ESTATAL**

Ya en abril de 1964, en el inicio del nuevo régimen, ocurre la reorganización institucional, programática y financiera conformando una nueva política urbana y habitacional, vigente apenas en la dictadura militar, en la cual la producción de vivienda se sobrepone a la política urbana. La estructura de la política se aprueba en la ley 4.380, de 25/08/1964 y se basa en el SFH, con recursos alocados en el BNH, operados por empresas estatales, las COHAB, a partir de un Plano Nacional de Habitação (PNH).

Las COHAB, como agentes promotores y operadores estatales de carácter autárquico, actuaron regionalmente, en los ámbitos local (municipal) y regional (metropolitano y estadual), con recursos del BNH, institución financiera de inter-

---

15 Fernando Rezende, *Planejamento no Brasil: auge, declínio e caminhos para a reconstrução* (Brasília, DF: CEPAL/IPEA, 2010), p. 7.

16 *Ibidem*, p. 10.

mediación monetaria<sup>17</sup>, con carácter normativo tanto para vivienda cuanto para planeamiento, operado por el SERFHAU (creado en la misma ley), conformando el complejo SFH/BNH/COHAB, en una estructura que denominamos “modelo empresarial estatal”, obedeciendo a reglamentos económico-financieros atinentes a la racionalidad de las corporaciones vinculadas a la producción de los conjuntos habitacionales, los bancos, las constructoras y los incorporadores inmobiliarios.

Aunque en la política se indique la articulación entre la producción habitacional y urbana —respectivamente, implantando conjuntos de vivienda y elaborando planes urbanos municipales— la producción de vivienda se instala como eje de la política urbana, movilizándose recursos para financiar cerca de 4,3 millones de unidades habitacionales en el país, para las rentas bajas y medias, estas con recursos operados por agentes promotores privados.

El arreglo productivo de construcción de vivienda y elaboración de planes nos ofrece una contradicción interna del punto de vista empresarial, comprensible en el proyecto de producción y control del espacio por el régimen militar, en alianza con las corporaciones privadas nacionales. Ambos campos de producción —vivienda y plan— aunque vinculados programáticamente bajo las normas y directrices del SERFHAU, no caminaron juntos, con formulaciones de vivienda y planeamiento despegados entre sí<sup>18</sup>. Tal constatación para el estado de São Paulo ha sido posible verificarse a partir del trabajo de Eurico Andrade de Azevedo<sup>19</sup>, de 1976, en una primera muestra de 210 municipios y la muestra final de 106, en un total de 572 municipios paulistas. De estos municipios, hemos podido profundizar en 19 municipios analizando los planes de desarrollo municipal<sup>20</sup> y, finalmente, para 5 de ellos cruzando la producción de vivienda con lo indicado en los planes<sup>21</sup>.

Para la producción habitacional, el arreglo viabilizó, con operación de las COHAB, la implantación de conjuntos de vivienda en varias escalas, a través de procesos licitatorios globales —de proyecto y obra— en glebas públicas de variadas dimensiones, combinando las tipologías unifamiliar horizontal y multifamiliar vertical, con la generación de formas urbanas en su mayor parte periféricas, con proyectos poco diversificados, viabilizadas por la articulación de fragmentos de parcelaciones de suelo, con infraestructura y equipamientos insuficientes o inexistentes, además de la operación financiera de los contratos, sin subsidios sociales.

---

17 Fernando Rezende, *op. cit.*, 2010.

18 En la ley de regulamentación del SERFHAU en 1966 ya se comprende que, a pesar de la orientación inicial de articular vivienda y planeamiento, la actuación para el planeamiento y asistencia técnica a municipios son prioritarias (Brasil, Decreto 59.517/1966).

19 Eurico Andrade de Azevedo, *Avaliação do Planejamento Municipal no Estado de São Paulo: Relatório de pesquisa* (FAPESP. São Carlos: EESC/USP, 1976).

20 Janaina Andrea Cucato, *op. cit.*, 2023.

21 Eulalia P. Negrelos, *op. cit.*, 2021.

La ejecución de la política para la producción de viviendas presenta las siguientes características, vigentes apenas durante la dictadura militar: (a) realizada por constructoras privadas en tierra pública, en glebas adquiridas por las COHAB; (b) utilización de recursos públicos del presupuesto general de la Unión —esfera federal— y administrados por el BNH; a partir de 1967, con recursos del FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), fuente permanente de recursos de los trabajadores descontados mensualmente del salario por las empresas; (c) producción en larga escala, con el argumento de atender al enorme déficit acumulado; (d) aplicación de las tipologías unifamiliar horizontal (casas) y multifamiliar vertical (bloques); (e) demanda anónima inscrita junto a las diversas COHAB, sin subsidio social, sea a la familia o a la unidad; (f) patrón extensivo de asentamiento produciendo la ciudad con las características de la urbanización periférica (producción en saltos, en mancha de aceite, efectivando parcelaciones distantes dejando “vacíos” para la valorización con la extensión de redes de infraestructura por el Estado.

Al mismo tiempo que impone un régimen autoritario, el Estado reorganiza totalmente el sistema de producción de vivienda popular, ahora integralmente considerada como vivienda “económica”, aplicando la racionalidad en varios aspectos: (i) en el espacio de morada del trabajador; (ii) en los procesos y sistemas constructivos; (iii) en los bajos costes para las constructoras; (iv) en la profundización del modo de producción capitalista en el país. A partir de ese momento el Estado ya no necesita buscar la legitimación social, pero aplica el elemento discursivo de la “inclusión” de los trabajadores de forma masiva en el sistema habitacional, que, sin subsidio, enseña francamente su faz de producto mercantil sin la función social conferida en el período anterior.

Un nuevo ciclo ideológico del desarrollismo<sup>22</sup>, ahora con carácter eminentemente conservador y autoritario<sup>23</sup>, inicia su recorrido hasta 1980, cuando los indicadores industriales descienden de forma espectacular, con la decadencia de la burguesía industrial del estado de São Paulo, centro de la producción industrial hasta la fecha, iniciando una década de recesión económica<sup>24</sup>. De tal forma que, en ese período, entendemos que los conjuntos habitacionales “reducen” su calidad vinculada al ideario moderno (de 1930 a 1964) y, ahora, se constituyen primordialmente como vectores de crecimiento urbano en tierras baratas, compradas por las COHAB<sup>25</sup>.

---

22 Ricardo Bielschowsky, Carlos Mussi, *op. cit.*, 2005.

23 Luiz C. D. Prado, “O Desenvolvimentismo autoritário de 1968 a 1980”, en Ricardo Bielschowsky (org.), *O desenvolvimento econômico brasileiro e a Caixa: palestras* (Rio de Janeiro: Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento: Caixa Econômica, Federal, 2011), pp. 23-34.

24 Márcio Pochmann, “Alternativas para a crise econômica.” Debate en la Facultad de Arquitectura/ Universidad Federal de Bahia, 16/11/2015. [Enlace].

25 Eulalia P. Negrelos, *op. cit.*, 2021.

Tal “reducción” de calidad de la política habitacional del régimen militar se observa en el plan material con el empobrecimiento tipológico, respondiendo a la racionalidad constructiva de las constructoras, abandonando el vínculo teórico con la idea de “frucción” de la vivienda como estructurante de una ciudad moderna. Esa comprensión se observa en varios elementos, desde la conformación legal de regiones metropolitanas en 1973 (como se verá adelante), para cuya escala la extensión de los conjuntos se amplía considerablemente, hasta el aumento del atendimiento de la demanda con gran cantidad de recursos económicos para la implantación de los conjuntos habitacionales.

La reducción de la calidad arquitectónica y urbanística de los conjuntos es notable, sometiendo ideológicamente una idea de vivienda moderna a la lógica y a la racionalidad de la industria de la construcción civil, con el patrocinio del Estado en alianza con el mercado. En el encuentro entre el material y el ideológico, el campo técnico presente junto a las acciones del Estado —la “tecnestructura estatal”<sup>26</sup>— formado en los cursos de arquitectura, en grande parte, a partir de la idea moderna del conjunto integral como constituyente de una ciudad moderna, encuentra obstáculos económicos en la concepción pública de los conjuntos, en claro conflicto entre la vivienda/bien de consumo en contra la vivienda/mercancía.

Os conjuntos habitacionais financiados pelo BNH caracterizam-se, em geral, pela monotonia de sua arquitetura; pela ausência de relação com o entorno; por sua localização periférica, estendendo horizontalmente as cidades; pela despreocupação com a qualidade dos projetos e com o meio físico, resultando na depredação ambiental; pela negação dos processos de participação comunitária, preferindo uma gestão centralizada e a contratação de empreiteiras, entregando moradias próprias prontas<sup>27</sup>.

Es posible entender la centralidad de la economía en el período 1930-1985, desde Vargas hasta el final de la dictadura militar. En el primer desarrollismo (1930-1964) eso ocurre en la clave de la creación de un campo ideológico para el desarrollo, que generó apoyo alrededor de un proyecto de nación, atrayendo, incluso, parte importante del campo profesional ligado a la vivienda y a la ciudad. Por otra parte, en el régimen militar, a pesar del mantenimiento de la centralidad de la economía y de los procesos de planeamiento, en los moldes de una modernización autoritaria, se genera una crisis política y social, con choques dramáticos entre las fuerzas del Estado Militar<sup>28</sup> y las fuerzas populares democráticas que lucharon por el fin de la dictadura en su momento, ya que el proyecto económico del régimen estaba desgarrado de apoyo popular. En el campo democrático, la oposición a la

---

26 Octavio Ianni, *op. cit.*, 1977.

27 Nabil Bonduki, *Habitar São Paulo: reflexões sobre a gestão urbana* (São Paulo: Estação Liberdade, 2000), p. 21.

28 Celso Furtado, *op. cit.*, 1977.

ideología dominante, en los cinco gobiernos militares de 1964 a 1985, fomentaba la reacción cultural democrática que aspiraba a la construcción de un proyecto económico y cultural nuevo, incluso con la naciente lucha ambiental que apenas se estructuraba en el país; esa oposición se reflejaba en la crítica a la política urbana-habitacional, que buscaba construir alternativas de producción<sup>29</sup>.

El proyecto económico del período militar fue marcado por las inversiones estatales de “enormes sumas para dar condiciones de realización para la empresa oligopolista, colocándose de manera cabal a servicio de la reproducción ampliada del capital”<sup>30</sup>. En esa lógica, la secuencia de esa acción, de profundización del compromiso del Estado con la acumulación del capital, fue el planteamiento de una política urbana y habitacional basada en (i) la extensión del área urbanizada, multiplicando el campo de intervención del capital inmobiliario, en todas las escalas de municipios; (ii) en la multiplicación de las casitas o de los bloques de vivienda en largas repeticiones, despreciando la diversidad arquitectónica alcanzada por el sistema anterior, tratando la vivienda y el BNH como instrumentos de aceleración económica y de acumulación<sup>31</sup>. De tal forma que, “[...] la expansión económica del Brasil reciente se puede caracterizar como un proceso dilapidador [...] que tiene depredado parte de la mano de obra que lleva adelante los procesos productivos. [...]”<sup>32</sup>.

En la misma línea, se comprende el abordaje de Bolaffi<sup>33</sup> sobre los componentes de la política de vivienda del régimen militar, considerando sus formulaciones como ideológicas, sobre todo aquellas formulaciones de partida, construidas como “falsos problemas”, principalmente el de la carencia habitacional, siempre considerada como déficit de nuevas moradas, y el de la insuficiencia de recursos públicos para enfrentar el tema.

El modelo empresarial estatal para la producción de los conjuntos habitacionales para las camadas populares de la población, vía “compañías de vivienda”, fue funcional para la cadena de la industria de la construcción civil al permitirle ampliar de forma considerable su espectro de actuación y de obtención de intereses en larga escala.

En esos organismos públicos —COHAB— se instaló importante parcela de técnicos de varios sectores de la administración pública, con destaque para los profesionales ingenieros y arquitectos, que mantuvieron la dinámica de la

29 Eulalia P. Negrelos, *op. cit.*, 2021; Eulalia P. Negrelos, *Remodelação de Bairros Populares em São Paulo e Madrid 1976-1992. Projeto e Participação Popular* (São Paulo: FAU-USP, 1998). Tesis de maestría.

30 Lúcio Kowarick, *A espoliação urbana* (Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1993), p. 69. [Traducción de la autora].

31 *Ibidem*, p. 70.

32 *Ibidem*, p. 28. [Traducción de la autora]. El trabajo de Kowarick es de 1979.

33 Gabriel Bolaffi, “Habitação e Urbanismo. O problema e o falso problema”, en Ermínia Maricato (org.), *A produção capitalista da casa (e da cidade) no Brasil industrial* (São Paulo: Alfa Omega, 1979), pp. 37-70.

proposición de directivas para los proyectos habitacionales en las llamadas de licitación pública, incluyendo proyectos y obras, viabilizando la contratación de constructoras para la ejecución de los conjuntos habitacionales, muchas veces buscando la diversificación arquitectónica y urbanística, como observamos en varios procesos administrativos de la COHAB en São Paulo (COHAB-SP)<sup>34</sup>.

Las COHAB, multiplicadas en todo Brasil, dada su atribución de promover vivienda en los ámbitos municipal y regional, presentan, para el estado de São Paulo, una incidencia inédita, con la creación de 7 empresas entre 1965 y 1979 en importantes polos regionales<sup>35</sup>, que producían conjuntos en su sede y en los municipios de su área de influencia prevista en sus estatutos societarios. Dada la potencia económica de base industrial que se encuentra en el complejo productivo del estado, esa cantidad de empresas se justifica ya que en ese periodo también ocurre un intenso proceso de ampliación del parque industrial en el interior paulista, hacia oeste. Es posible observar<sup>36</sup> que esas empresas actuaron en su momento como agentes de parcelación del suelo con objetivo de producción de vivienda, incluso compitiendo entre sí y ampliando sus actuaciones, en algunos casos, para regiones no previstas en sus estatutos de fundación.

Para mejor elucidar los impactos de la política es importante registrar sus componentes estructurales durante la vigencia del BNH<sup>37</sup>: (i) demanda dispersa inscrita en las listas de espera de las COHAB; (ii) tierra pública adquirida por las empresas constituyendo “bancos de tierras”; (iii) recursos públicos gerenciados por el BNH; (iv) proyectos de autoría y propiedad de las COHABs (en general, con excepciones); (v) vivienda masiva y de producción extensiva, sobre todo en los polos metropolitanos, conjugando bloques y casas, con tipos que se podían reproducir en varios proyectos de varios conjuntos; (vi) urbanización periférica, como vector de expansión urbana, según la disponibilidad de tierras en cada municipio.

En ese sentido, Santos<sup>38</sup>, particularmente para la ciudad de São Paulo, polo de la más grande región metropolitana del país, observa la configuración de una

---

34 Eulalia P. Negrelos, *op. cit.*, 2021. Los procesos administrativos de proyectos y obras consultados en la COHAB-SP se refieren a los conjuntos habitacionales Itaquera II-III, en la zona este del municipio de São Paulo, y presidente Castelo Branco, en el municipio de Carapicuíba, en la región metropolitana de São Paulo.

35 Se trata de las siguientes compañías instaladas en municipios sede, actuantes en su región: São Paulo (COHAB-SP); Santos (COHAB-ST); Campinas (COHAB-CP y COHAB-Bandeirante); Ribeirão Preto (COHAB-RP); Bauru (COHAB-Bauru); Araçatuba (CRHIS — Companhia Regional de Habitação de Interesse Social).

36 Eulalia P. Negrelos, *op. cit.*, 2021. Una nueva investigación está en curso desde 2020, realizando el inventario de la producción de las siete empresas paulistas.

37 *Ibidem*. Estos fueron elementos de la evaluación de la investigación en municipios paulistas de São Paulo, Santos, Campinas, Ribeirão Preto y Bauru), en donde actuaron cinco de las siete COHABs del estado de São Paulo.

38 Milton Santos, “São Paulo: metrópole corporativa”, *Revista de Administração Pública* 23 (1), 1989, pp. 103-111.

“metrópolis corporativa”, donde el BNH actúa para la producción masiva y extensiva de conjuntos de vivienda, a través de la COHAB-SP, creada en 1965 y que hasta la extinción del BNH, en 1986, produjo cerca de 60 conjuntos en esa ciudad.

## **EL PLANEAMIENTO URBANO DEL SERFHAU/BNH: EL MODELO DE LAS CONSULTORÍAS PRIVADAS**

Para analizar las singularidades del proceso de planeamiento urbano durante la dictadura militar, es importante resaltar que, del punto de vista programático, la producción habitacional estuvo vinculada al planeamiento integrado municipal, bajo las normas y directrices del SERFHAU, en el contexto autoritario de centralización de recursos. Se puede considerar que, al proceso de interiorización de la producción habitacional indicada en el modelo estatal, se añade un proceso de interiorización del proceso de planeamiento urbano, pero con el manejo entregado a las empresas de consultorías, en su gran mayoría privadas, aunque hubiese institutos públicos actuando en el sector.

La actuación del SERFHAU se inicia con su estructuración y reglamentación en 1966 —Decreto 59.917—; entre sus funciones estaban la de promover investigaciones relativas al déficit habitacional y auxiliar los municipios en la elaboración de sus planes directores. Además, tenía la competencia de centralizar las decisiones de financiación del desarrollo urbano, a través de la elaboración del planeamiento urbano integrado a la administración municipal, principalmente en polos urbanos industriales.

La creación del SERFHAU, evento que se debe comprender en un recorrido histórico de implementación del urbanismo en Brasil desde 1930, contribuyó para que, en los años 1970, se estructurase una línea de pensamiento urbanístico en el país, basada en la elaboración del planeamiento municipal en el concepto del “planeamiento integrado”, cuyos instrumentos se denominaron de varias formas: “planes directores de planeamiento integrado — PDDI”, “planes locales de desarrollo integrado — PDLI” o, aún, “planes de desarrollo integrado — PDI”. Según Feldman<sup>39</sup>, “[...] el SERFHAU centraliza esa actividad involucrando empresas privadas de consultoría. Con la creación del SERFHAU, el énfasis en la formación de cuadros técnicos internos a las administraciones municipales, que prevalecía desde los años de 1930, se desvanece”.

La presencia de un sector como el SERFHAU en el interior del BNH significó la creación de matrices institucionales estructurales y en ellas se organizaron las acciones gubernamentales en todos los niveles administrativos —federal, estados y municipios— vinculados a la producción de la vivienda popular, al saneamiento, al planeamiento urbano y a los proyectos de desarrollo urbano.

---

39 Sarah Feldman, *op. cit.*, 2005a, p. 223. [Traducción de la autora].

Para el proceso de planeamiento urbano, normatizado y controlado por el SERFHAU/BNH, el arreglo empresarial se ha dado, por primera vez en décadas de consolidación del urbanismo en el país, en las empresas privadas de ingeniería consultiva, reuniendo profesionales nacionales y extranjeros, muchas veces mezclados en equipos interdisciplinarios, como el PUB (Plano Urbanístico Básico de São Paulo, de 1968)<sup>40</sup>.

Para la normalización y el control territorial, el arreglo se asentó sobre el cuadro técnico-científico del planeamiento urbano y regional ampliamente fomentado en las culturas técnicas del país, con base en las universidades y en las empresas de ingeniería consultiva. “El proceso que conlleva a la constitución del SERFHAU [...] es [...] ejemplar. Su creación constituye un momento particular en la organización del sector de urbanismo en Brasil en el ciclo de institucionalización que se gesta en la década de 1930 y se completa en los años 1970”<sup>41</sup>, análisis que conlleva a la comprensión de la singularidad del período militar para el planeamiento urbano en el país.

Desde 1930, se desarrollan 2 tipos de espacios institucionales que fueron fundamentales para la consolidación del campo del urbanismo como disciplina, como actuación profesional y como conformación de las prácticas estatales —en municipios y regiones— de planeamiento de base técnica buscando su alejamiento del campo de la política, como un camino construido sin el cual no se puede comprender la constitución del SERFHAU: (i) los organismos de asistencia técnica a los municipios y (ii) los propios sectores internos a las municipalidades volcados hacia el planeamiento y coordinación de la acción municipal<sup>42</sup>.

El planeamiento vinculado a la elaboración de PDDI a través del SERFHAU está demostrado por varios trabajos<sup>43</sup> que analizan municipios con planos de ese periodo, basados en la centralización de poder en el Ejecutivo y en la inexistencia de la participación de la sociedad. Es un planeamiento urbano de bases preponderantemente técnicas, estructurado por un diagnóstico excesivamente detallado, indicando la elaboración de una legislación elitista —como la zonificación— empoderando la burocracia estatal, en el análisis y control urbano, con dificultades de diferenciar la ciudad real de aquella impresa en los mapas.

La política urbana y habitacional de la dictadura llega a sus diez años de implementación en medio a la crisis energética internacional, con dos Planos

---

40 Ver análisis de los planos integrados de São Paulo, Santos, Campinas, Ribeirão Preto y Bauru en Eulalia P. Negrelos, *op. cit.*, 2021.

41 Sarah Feldman, *op. cit.*, 2005a, p. 1. [Traducción de la autora].

42 *Ibidem*.

43 Véanse: Simone. H. T. Vizioli, *Planejamento urbano no Brasil: A experiência do SERFHAU enquanto órgão federal de planejamento integral ao desenvolvimento municipal* (São Paulo: FAU-USP, 1998), Maestría; Mauro Ferreira, “Por trás do planejamento integrado: O GPI em Franca”, *Actas del XII Encontro Nacional da ANPUR Belém/PA* (2007). Maria Cecília Lucchese, *Em defesa do planejamento urbano: ressonâncias britânicas e a trajetória de Harry James Cole* (São Paulo: Alameda, 2014).

Nacionais de Desenvolvimento (PND), el PLANHAP (Plano Nacional de Habitação Popular) de 1973, al mismo tiempo que se asiste a la extinción del SERFHAU en 1974 y su liquidación en 1975, quedando toda la normativa del planeamiento urbano integrado en manos del BNH.

Aún en 1971, con la Ley 5.727, el gobierno aprueba el I PND, para el período 1972-1974. En ese primer plan de desarrollo, la estrategia de urbanización se presenta como estrategia regional, indicando la priorización de la consolidación de las grandes regiones Centro y Sul del país. Sus grandes prioridades se concentraron en la expansión económica interna con ampliación de las relaciones económicas internacionales, además de inversiones orientadas a la integración social.

Para las inversiones en el área urbana, en 1972 el BNH formula el Proyecto CURA (Comunidade Urbana de Recuperação Acelerada)<sup>44</sup>, buscando actuar sobre la estructura urbana para “a) eliminar la capacidad ociosa de las inversiones urbanas; b) racionalizar inversiones en infraestructura; c) promover la densificación de la población urbana; d) integrar la ejecución de obras urbanas”<sup>45</sup>.

Luego de la institución del PLANASA (Plano Nacional de Saneamento), de 1970), en 1973 se elabora el PLANHAP. Para su implementación se crea el SIFHAP (Sistema Financeiro de Habitação Popular), que nos permite comprender claramente la visión economicista y financiera de la actuación gubernamental del período, o sea, todas las acciones de planeamiento tienen el soporte de un aparato técnico-financiero creado con vínculos nacionales. Una acción volcada hacia la relación con los gobiernos estaduais estaba prevista, con la creación de los FUNDHAP (Fundos Estaduais de Habitação Popular)<sup>46</sup>.

El PLANHAP presentaba textualmente su mirada a la cuestión de la “elevada migración del campo a las ciudades, estimada en cerca de 1.300.000 personas al año”, con previsión de llegar, en la década de los 1970, a “2,7 millones de personas al año, el más elevado del mundo occidental”; además de buscar la relación con el desarrollo urbano, la infraestructura y obras complementares. Los objetivos del Plan estaban concentrados en ciudades con más de 50.000 habitantes o que estuviesen pasando por intenso proceso de crecimiento y en las regiones metropolitanas en proceso de creación.

Luego en seguida, aún en 1973, se establecen, por la Ley Complementar 14, las regiones metropolitanas de São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, Curitiba, Belém y Fortaleza y, en 1974, con la Ley Complementar 20, la región metropolitana de Rio de Janeiro.

---

44 Véase Maria Cecília Lucchese, *Curam-se Cidades - uma proposta urbanística da década de 70* (São Paulo: FAU-USP, 2004), Tesis de maestría.

45 Sérgio de Azevedo; Luiz A. G. de Andrade, *Habitação e Poder. Da Fundação da Casa Popular ao Banco Nacional da Habitação* (Rio de Janeiro: Zahar, 1982), p. 83 [Traducción de la autora].

46 Resolución del Consejo de Administración nº 1 del BNH de 30/01/1973: Aprueba las directrices básicas del PLANHAP, instituye el SIFHAP y autoriza la creación de los FUNDHAP.

La priorización del desarrollo en regiones metropolitanas, en su momento todas vinculadas a la faja del litoral, de fundación en su historia colonial, indica la necesidad de revisión en un abordaje inter escalár, a la luz de las consecuencias de la concentración demográfica y territorial fomentada durante siglos, en detrimento de un planeamiento en escala nacional articulado y vinculado a las necesidades regionales. En ese momento el interés del Estado se volcó hacia las ciudades polo de las regiones centro-sur del país, de más importante concentración de recursos económicos, profundizando las desigualdades regionales.

Los municipios, ámbitos administrativos que aún no gozaban de autonomía federativa (que solo se alcanzó en la Constitución Federal de 1988), fueron orientados por la normalización centralizada en el SERFHAU/BNH, a responder a la política nacional y sus despliegues estatales con planes directores de desarrollo integrado (PDDI), cuyos financiamientos impactaron la red urbana y regional.

A partir de la crisis del petróleo que estalla en 1973 en nivel mundial, se elabora el II PND, en 1974, para el período 1975-1979, con notable énfasis sobre la cuestión internacional vinculada a la crisis energética. En el Capítulo V del II PND se encuentran las cuestiones ligadas a la ocupación del “universo brasileño”; la “estrategia nacional y política para la población”; la “estrategia de integración nacional”; “nordeste: crecimiento acelerado y transformación”; “ocupación productiva de la Amazonia y del Centro-Oeste”. Ya en el Capítulo VI, sobre la “estrategia de desarrollo social”, es notable la orientación de “mantener acelerado el crecimiento y realizar políticas redistributivas ‘mientras crece el pastel’”), con “política de integración social”, y uno de sus objetivos buscar, por lo menos de forma discursiva,

pela reorientação da política habitacional, na direção de programas para as populações de mais baixos níveis de renda, e pela melhoria dos serviços urbanos básicos para todas as camadas da população, com vistas à elevação da qualidade da vida nas cidades; a política habitacional será conduzida de forma a reduzir gradualmente o ônus financeiro incidente sobre as operações de aquisição de casa própria pelas camadas de baixa renda familiar<sup>47</sup>.

Existe un vínculo más explícito en el II PND con un conjunto de orientaciones para la *Política Nacional de Desenvolvimento Urbano* (PN DU), expuesto aún en 1973, con la participación de técnicos reconocidos nacionalmente. Sin embargo, se desvela la contradicción entre las orientaciones de planeamiento urbano y regional del II PND con las efectivas acciones operadas para extinguir y liquidar el SERFHAU luego en 1974/75, con la creación en 1974 de una nueva institución, la *Comissão Nacional de Desenvolvimento Urbano* (CN DU), que actúa hasta

47 II PND, Lei 6151/74, negrito en el original; en itálico se refiere a la Reserva n.º 1 del PND, al final de la ley.

1986<sup>48</sup>. Con eso, el gobierno pasa todo el patrimonio del sector para el BNH que, aún, incorpora atribuciones de aprobación de financiamiento del FIPLAN (Fundo de Financiamento de Planos de Desenvolvimento Local Integrado) y de organización de información del CIDUL (Centro de Informações para o Desenvolvimento Urbano e Local).

El BNH, así, pasa por un aumento de competencias y de poder, en un momento de nuevo vigor de la política habitacional, que recibe gran cantidad de acciones en el II PND. En ese momento ocurre una inflexión política que se refleja en las decisiones administrativas en el campo de la vivienda<sup>49</sup>, que acaban por dar más potencia a las COHAB a partir de 1975<sup>50</sup>, justamente cuando se extingue el SERFHAU.

En lo que atañe a la acción sobre los pequeños y medianos municipios, cuyas directivas se reunían en el *Programa para Cidades de Porte Médio* (PCPM) de 1976 y el *Programa Nacional de Capitais e Cidades de Porte Médio* (PNCCPM) de 1979, es posible observar un proyecto nacional de desarrollo que no se ha efectivado por el equilibrio regional, ya que se diseminó el planeamiento integrado en los ejes de industrialización, principalmente de los estados industriales como São Paulo, entendiendo la forma como el capital actuó en las diferentes escalas urbanas y regionales expandiendo su esfera de acumulación a través de las autarquías públicas de producción de vivienda. Es importante registrar que en el estado de São Paulo ha sido creado, en 1968, el CEPAM (Centro de Estudos e Pesquisas de Administração Municipal), orientado a implementar procesos de planeamiento en pequeños municipios. Sin embargo, ya en 1972, la potencia de la regionalización del estado, así como el proceso que llevó a la creación de las regiones metropolitanas en el país en 1973, conlleva a la preparación de técnicos y planes en municipios de regiones más desarrolladas en el estado (Brasil, MINTER, 1972).

Es posible entender el pasaje de una política llevada a cabo por las normativas del SERFHAU, considerada insuficiente para enfrentar los enormes problemas del desarrollo urbano en el país, a una política en la cual el BNH ejerce la continuidad de la actuación en planeamiento urbano actualizando las atribuciones del SERFHAU ya extinto. A partir de 1974 el BNH busca “ejecutar los Planos Directores de Planeamiento Local Integrado (PDI) [...] y coordinar los ámbitos estatales y municipales enfrentando los componentes económicos, sociales, físicos y administrativos del desarrollo urbano”<sup>51</sup>.

---

48 Orlando V. R. Nunes; Rodrigo de Faria. O “Primeiro Programa” de cidades médias do Brasil (1976): definições conceituais, institucionalizações e profissionais”. *Risco* 22 (1) (2022).

49 Marcus A. Melo, “Estado e Mercado: a construção social da agenda do Estado na esfera da habitação. 1930-1990”, en *Actas del IV Encontro Nacional da ANPUR* Salvador (1991).

50 Sérgio de Azevedo; Luiz A. G. de Andrade, *op. cit.*, 1982.

51 Orlando V. R. Nunes, *O Programa Cidades de Porte Médio: Planejamento e Política Urbano-Regional no Brasil (1976-1986)* (Brasília: Universidade de Brasília, 2020), Tesis de doctorado, pp. 187-188. [Traducción de la autora].

Como un elemento importante en el argumento del divorcio entre la producción de vivienda y la producción del planeamiento, es importante registrar que los municipios han tenido que recurrir a la elaboración de planes para poder acceder a financiamientos de saneamiento y otros beneficios.

De todas formas, aunque se buscara transformar el modelo de modernización administrativa, los análisis historiográficos nos permiten corroborar que las prácticas del SERFHAU se mantuvieron en la nueva estructura: “El CNDU ha repetido, de cierta manera, la experiencia del antiguo SERFHAU, de fortalecer en primer lugar la capacidad de planeamiento de los municipios para, teóricamente, ayudarlo a gastar con más criterio los recursos disponibles”<sup>52</sup>.

Cucato<sup>53</sup> demuestra que, para el estado de São Paulo, muchos planes fueron iniciados y abandonados en el mismo periodo de vigencia del SERFHAU, y otros se terminaron ya bastante tiempo después de la extinción del sector. En todos los planes analizados por la autora, en 19 municipios seleccionados a partir de su situación en el territorio, vinculada a los ejes de circulación estructural (carreteras y ferrocarriles), al desarrollo industrial y a la configuración de polos de desarrollo, no se han encontrado indicios de que los programas de actuación habitacional estuviesen vinculados o integrados efectivamente al planeamiento urbano y municipal.

Al buscar vínculos o desintegración entre la promoción de vivienda por las COHAB y los planes de desarrollo integrado, es interesante observar, para el estado de São Paulo, la “locomotora industrial nacional” en el periodo, el cuadro de “Distribución de los Recursos del Programa Nacional entre 1976 e 1979”<sup>54</sup>, sobre los municipios de porte mediano. La inmensa mayoría de los recursos de lo que se consideraba “dinamización” o “promoción” se destinaron para el incremento o mantenimiento del sistema viario y para los sistemas de saneamiento, con ningún recurso para vivienda<sup>55</sup>.

## CONCLUSIONES

En este trabajo buscamos un acercamiento histórico e historiográfico a la dictadura militar en Brasil, a partir de sus singularidades en lo que atañe a la política urbana y habitacional centralizada en el BNH, en todo el período del régimen.

---

52 FAU-USP, *Avaliação do Programa Nacional de Cidades de Porte Médio e revisão de critérios de seleção das referidas cidades: revisão de critérios de seleção de cidades e subsídio para uma nova política de desenvolvimento urbano nacional* (São Paulo: MINTERCNDU, 1984), p. 148. [Traducción de la autora].

53 Janaina A. Cucato, *op. cit.*, 2023.

54 Orlando V. R. Nunes, *op. cit.*, 2020, p. 248.

55 El análisis se refiere a los municipios Araçatuba, Araraquara, Bauru, Franca, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto y São Carlos. Véase Janaina A. Cucato, *op. cit.*, 2023, donde estos municipios no presentan, en sus planos de desarrollo integrado, indicaciones para la producción habitacional, sin vínculo consistente entre la directiva en el plan y la efectiva ubicación o atendimento a la demanda por vivienda.

Una de las singularidades recae, justamente, en la vigencia institucional exactamente en la duración de la dictadura, con su total extinción en el inicio de la redemocratización en 1986, cuando, a pesar de las alternativas para la reconfiguración del BNH, el banco se extingue, dando lugar a un vacío programático para el sector urbano-habitacional.

A partir de resultados de investigaciones empíricas, en fuentes y documentos de las COHAB en todo el estado de São Paulo, exploramos algunas de las conexiones y desconexiones entre los instrumentos del planeamiento integrado —principalmente los planos directores municipales— y la ubicación de los conjuntos habitacionales producidos por las COHAB, en una actuación empresarial regionalizada, que expandía su rayo de acción para otras regiones en sobreposición con otras compañías.

El análisis buscó comprender un proceso histórico más amplio, desde 1930, en la conformación de instituciones, políticas y planos, en el cuadro general del desarrollismo, que, instalado desde aquella fecha, se expande para el período militar en un segundo ciclo, consolidando la aplicación del conjunto habitacional como forma urbana destinada al alojamiento de las camadas populares.

Para la década de 1970, es posible constatar la culminación de la función “mercancía” de la vivienda, que se ha ido adensando desde 1930, con el producto vivienda liderando el proceso de producción del espacio urbano en bases capitalistas, en detrimento de su consistencia con la visión ampliada del planeamiento territorial en ámbito municipal. La desvinculación de la producción habitacional con los planos directores se puede observar a partir del análisis de planos de desarrollo integrado en municipios atendidos por las COHAB, que hemos venido haciendo y orientando en nuestro grupo de investigación<sup>56</sup>.

Los resultados de investigaciones, con la construcción de un conjunto cartográfico analítico, apuntan para el entendimiento de los nexos empresariales en el interior de las COHAB, a partir de la constitución de enlaces espaciales entre dos dinámicas articuladas: (i) regionalización y desarrollo económico; (ii) vivienda y planeamiento urbano. Ese abordaje, corroborado en la interpretación de fuentes y documentos vinculados a los planes y conjuntos habitacionales estudiados, nos ha permitido formular el argumento sobre el divorcio entre la efectiva inversión habitacional y el discurso de atendimento de la demanda presente en los planes directores.

Hemos podido identificar desequilibrios entre discurso y práctica incluso en lo que atañe a la difundida asociación del planeamiento económico al planeamiento urbano y regional en los textos de planes y proyectos, encontrando contradicciones en las diferentes políticas:

---

56 URBIS — Grupo de Investigación en Historia del Urbanismo, de la Ciudad y de la Vivienda, en el IAU-USP, en el campus del municipio de São Carlos.

1. Del punto de vista institucional, el estado de São Paulo, potencia industrial entre finales de los años 1940 hasta 1980, ha sido el en que más empresas estatales municipales o regionales —COHAB— han sido creadas, en contraste con otros estados que, incluso, tuvieron COHAB estatales.
2. Del punto de vista del debate técnico sobre la producción habitacional y de planos de desarrollo integrado, hemos podido verificar una desarticulación que se plasma, por un lado, en la redacción de los planos por las empresas de consultoría o por equipos técnicos municipales y, por otro, en la actuación autónoma de las COHAB con relación a los planes, buscando atender sus demandas sociales y políticas.
3. Del punto de vista de la investigación sobre la producción del territorio a través de las redes de infraestructura, hay una gran laguna y potencialidad para profundizar estudios que involucren la comprensión sobre la actuación de las constructoras y otros agentes de la cadena de la industria de la construcción civil, sector económico altamente privilegiado durante la dictadura militar.
4. Del punto de vista del proceso de producción del espacio a través del conjunto habitacional y de la unidad de vivienda como mercancía, se verifica la vigencia del procedimiento en las políticas y programas actuales, capturados por las constructoras e incorporadores, en inequívoca distancia con el proceso de planeamiento urbano, instrumentalizado por las normativas urbanísticas que permiten la amplia realización del capital.

Otros elementos se pueden identificar en la alianza del Estado Militar con los agentes corporativos de la producción del espacio, como las inversiones en infraestructura de carreteras, la ampliación del parque industrial, sobre todo paulista, y las inversiones en polos regionales.

En lo que concierne a la calidad arquitectónica y urbanística, se puede considerar que se reduce en el período militar, agudizando cuestiones ideológicas como: (i) el acceso a la vivienda con propiedad privada; (b) el carácter masivo de producción se transforma en extensivo; (iii) la inversión en diversidad arquitectónica del período anterior se neutraliza, dadas las relativamente “nuevas” condiciones del sistema glebas más grandes, parcelaciones fragmentadas, tipologías idénticas que se reproducen por todo el país; (iv) prácticamente total anonimato de los equipos técnicos en las COHAB, que detienen la propiedad de los proyectos.

Un elemento se podría tratar como similar entre la producción de vivienda por las empresas estatales y la producción del planeamiento urbano por las empresas consultivas: se genera, en ambos los terrenos un campo de poder que también es intelectual, es técnico, indicando lo que Bourdieu<sup>57</sup> construye como

---

57 Pierre Bourdieu, *Intelectuales, política y poder* (Buenos Aires: Eudeba, 2009).

“habitus de clase”, formas de acción de las corporaciones técnicas. Se ha generado y expandido una clase técnica, o intelectual, que conformó sus culturas técnicas, sus formas de comprender y actuar sobre los problemas de la vivienda y del planeamiento, a partir de una historia de consolidación de su actuación en el ámbito estatal, sea como técnico del Estado sea como técnico a servicio del Estado.

Sobre la ideología de las prácticas urbanísticas, Lefebvre<sup>58</sup> la relaciona con el interés del Estado, en la producción de los vacíos, los espacios abiertos, las grandes avenidas y plazas gigantes, muy encontradas en los grandes conjuntos habitacionales del período militar en Brasil. Igualmente, se puede reconocer el campo disciplinar del urbanismo como “mezcla ambigua de ideología y conocimiento”<sup>59</sup>, en la cual la técnica es “autorización para hacer”<sup>60</sup>. Lefebvre entiende la forma urbana como racionalidad dialéctica mental y social que le es inherente e, de ahí, el conjunto habitacional, como orden aparente, producida por la separación y la segregación (que destruye la complejidad, que es una “calidad del urbano”<sup>61</sup>, haciéndola simultaneidad) se comprende como oposición al derecho a la ciudad/derecho a la centralidad.

La crítica estructural de Lefebvre, que ha sostenido gran parte de las críticas a los conjuntos habitacionales y a los planes urbanos producidos en la dictadura militar, también se orienta a la práctica arquitectónica y urbanística por entenderla como impuesta justamente por sus profesionales (con destaque para los arquitectos y urbanistas) reduciendo la vida cotidiana a la abstracción de sus proyectos y a sus planes.

Observamos la enorme distancia entre el planeamiento urbano y la producción habitacional en Brasil, con el proyecto de ciudad desgarrado del proyecto de vivienda en prácticamente todo el siglo XX, generando, incluso, un cuerpo crítico contundente en el período de la redemocratización<sup>62</sup>. Tal crítica, a pesar de reconocer valores en la formulación de la política nacional de la dictadura, avanza ofreciendo otros caminos de actuación, como la ayuda mutua y conjuntos más pequeños diseñados con la participación de los futuros moradores y procesos de planeamiento más transparentes y participativos.

---

58 Henri Lefebvre, *La Revolución Urbana* (Madrid: Alianza Editorial, 1983).

59 *Ibidem*, p. 119,

60 Milton Santos (entrevista), *Território e Sociedade* (São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2000), p. 36.

61 Henri Lefebvre, *op. cit.*, 1983, p. 139.

62 Eulalia P. Negrelos, *op. cit.* 1998.

## BIBLIOGRAFÍA

- ARAVECCHIA-BOTAS, Nilce, *Estado, arquitetura e desenvolvimento: a ação habitacional do IAPI* (São Paulo: Editora da UNIFESP, 2016).
- AZEVEDO, Sérgio de; ANDRADE, Luiz A. G. de., *Habitação e Poder. Da Fundação da Casa Popular ao Banco Nacional da Habitação* (Rio de Janeiro: Zahar, 1982).
- BIELSCHOWSKY, Ricardo, *Pensamento econômico brasileiro: o ciclo ideológico do desenvolvimentismo* (Rio de Janeiro: Contraponto, 2000).
- BIELSCHOWSKY, Ricardo; MUSSI, Carlos, “El pensamiento desarrollista en Brasil: 1930-1964 y anotaciones sobre 1964-2005”, en CAVE, Rose (coord.). *Brasil y Chile, una mirada hacia América Latina y sus perspectivas* (Santiago de Chile: RIL editores, 2006).
- BOLAFFI, Gabriel, “Habitação e Urbanismo. O problema e o falso problema”, en MARICATO, Ermínia (Org.), *A produção capitalista da casa (e da cidade) no Brasil industrial* (São Paulo: Alfa Omega, 1979), pp. 37-70.
- BONDUKI, Nabil, *Habitar São Paulo: reflexões sobre a gestão urbana* (São Paulo: Estação Liberdade, 2000).
- BONDUKI, Nabil, *Origens da Habitação Social no Brasil. Arquitetura Moderna, Lei do Inquilinato e Difusão da Casa Própria* (São Paulo: Estação Liberdade/FAPESP, 1998).
- BONDUKI, Nabil; KOURY, Ana Paula, *Os pioneiros da habitação social no Brasil: Inventário da Produção Pública no Brasil entre 1930 e 1964* (São Paulo: UNESP, SESC, 2014), v. 2.
- BOURDIEU, Pierre, *Intelectuales, política y poder* (Buenos Aires, Eudeba, 2009).
- CUCATO, Janaina Andréa, *Planejamento integrado e indústria: o SERFHAU/BNH no Estado de São Paulo de 1964 a 1980* (São Carlos: IAU-USP, 2023), Tesis de doctorado.  
<https://doi.org/10.11606/T.102.2023.tde-07112023-174432>
- FELDMAN, Sarah, *Planejamento e Zoneamento. São Paulo: 1947-1972* (São Paulo: EDUSP, Fapesp, 2005a).
- FELDMAN, Sarah, “O Arranjo SERFHAU: assistência técnica aos municípios/órgãos de planejamento/empresas de engenharia consultiva”. *Actas del XI Encontro Nacional da ANPUR — Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional* (Salvador/BA: 2005b), v. 1, pp. 01-16.
- FERRARI, Camila, *Projetos de habitação popular como projeto de cidade: os conjuntos habitacionais dos IAP na Grande São Paulo de 1930 a 1964* (São Carlos: IAU-USP, 2013), Tesis de maestría. <https://doi.org/10.11606/D.102.2013.tde-06062013-145853>
- FERRARI, Camila; Negrelos, Eulalia P., “Vivienda en la planificación urbana: Arquitectura y Pérez Palacios, Estado en Brasil entre 1930 y 1986” en ALANÍS, Enrique X.; ANDA, Diana P. (orgs.), *Ensayos sobre la historia de la arquitectura del siglo XX. México, América Latina y España* (Ciudad de México: UNAM, Instituto de Investigaciones Estéticas, 2017).
- FERREIRA, Mauro, “Por trás do planejamento integrado: O GPI em Franca”, *Actas del XII Encontro Nacional da ANPUR - Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional* (Belém/PA: 2007).
- FURTADO, Celso, “Da República Oligárquica ao Estado Militar”, en FURTADO, Celso (org.). *Brasil: tempos modernos* (Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977), pp. 1-23.
- IANNI, Octavio, *Estado e Planejamento Econômico no Brasil (1930-1970)* (Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1977).

- KOWARICK, Lúcio [1979], *A espoliação urbana* (Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1993).
- LEFEBVRE, Henri [1970], *La Revolución Urbana* (Madrid: Alianza Editorial, 1983).
- LUCCHESI, Maria Cecília, *Curam-se Cidades. Uma proposta urbanística da década de 70* (São Paulo: FAU-USP, 2004), Tesis de maestría.  
<https://doi.org/10.11606/D.16.2004.tde-05112013-110903>
- LUCCHESI, Maria Cecília, *Em defesa do planejamento urbano: ressonâncias britânicas e a trajetória de Harry James Cole* (São Paulo: Alameda, 2014).
- MELO, Marcus A., “Estado e Mercado: a construção social da agenda do Estado na esfera da habitação. 1930-1990”, *Actas del IV Encontro Nacional da ANPUR — Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional* (Salvador/BA: maio, 1991).
- MORAIS, Pedro, *Cidades verticais: habitação vertical de grande escala na América Latina, 1929-1979* (Belo Horizonte: UFMG, 2016), Tesis de doctorado.
- NASCIMENTO, Flávia B., *Bloco de memórias: habitação social, arquitetura moderna e patrimônio cultural* (São Paulo: EDUSP, 2016).
- NEGRELOS, Eulalia P., *Remodelação de Bairros Populares em São Paulo e Madrid 1976-1992. Projeto e Participação Popular* (São Paulo: FAU-USP, 1998), Tesis de maestría.  
<https://doi.org/10.11606/D.16.1998.tde-27032025-091011>
- NEGRELOS, Eulalia P., *Estado, planejamento e habitação no Brasil entre as décadas de 1960 e 1980: a forma urbana conjunto habitacional no quadro da crítica ao Movimento Moderno* (São Carlos: IAU-USP, 2021), Tesis/Libre Docencia, 2 v.  
<https://doi.org/10.11606/D.16.1998.tde-27032025-091011>
- NUNES, Orlando V. R., *O Programa Cidades de Porte Médio: Planejamento e Política Urbano-Regional no Brasil (1976-1986)* (Brasília: Universidade de Brasília, 2020), Tesis de doctorado.
- NUNES, Orlando V. R.; FARIA, Rodrigo de, “O “Primeiro Programa” de cidades médias do Brasil (1976): definições conceituais, institucionalizações e profissionais”. *Risco. Revista de Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo* (online), 22 (1).  
<https://doi.org/10.11606/1984-4506.risco.2024.220430>
- OLIVEIRA, Franciso de, *Crítica à razão dualista. O ornitorrinco* (São Paulo: Boitempo, 2003).
- POCHMANN, Márcio, “Alternativas para a crise econômica”, *Debate en la Facultad de Arquitectura/Universidad Federal de Bahia*, 16/11/2015.
- PRADO, Luiz C. D., “O Desenvolvimentismo autoritário de 1968 a 1980”, en BIELSCHOWSKY, Ricardo (org.), *O desenvolvimento econômico brasileiro e a Caixa: palestras* (Rio de Janeiro: Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento, Caixa Econômica Federal, 2011), pp. 23-34.
- REZENDE, Fernando, *Planejamento no Brasil: auge, declínio e caminhos para a reconstrução* (Brasília: CEPAL, Escritório no Brasil/IPEA, 2010).
- SANTOS, Milton (entrevista), *Território e Sociedade* (São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2000).
- SANTOS, Milton, “São Paulo: metrópole corporativa”, *Revista de Administração Pública* 23 (1), 1.º trim. Jan/1989, pp. 103-111.
- VILLAÇA, Flávio, “Uma contribuição para a história do planejamento urbano no Brasil”, en DEÁK, Csaba y SCHIFFER, Sueli Ramos (orgs.), *O processo de urbanização no Brasil* (São Paulo: EDUSP, 1999), pp. 169-243.

VIZIOLI, Simone. H. T., *Planejamento urbano no Brasil: A experiência do SERFHAU enquanto órgão federal de planejamento integral ao desenvolvimento municipal* (São Paulo: FAU-USP, 1998), Tesis de maestría. <https://doi.org/10.11606/D.16.1998.tde-16032011-101000>

### Fuentes primarias

BNH. *Resolução do Conselho de Administração nº 1 de 30/01/1973* / BNH-Banco Nacional da Habitação: *Aprova as diretrizes básicas do Plano Nacional da Habitação Popular (PLANHAP), institui o Sistema Financeiro da Habitação Popular (SIFHAP) e autoriza a criação de Fundos Estaduais de Habitação Popular (FUNDHAP).*

BRASIL. *I PLANO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO*. Lei ordinária 5727, de 04 de novembro de 1971, publicação no Diário Oficial da União em 08/11/71.

BRASIL, *II PLANO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO*. Lei 6.151, de 4 de dezembro de 1974, publicada no Diário Oficial da União em 6 de dezembro de 1974.

BRASIL. Lei 4.380, de 21 de agosto de 1964. *Institui a correção monetária nos contratos imobiliários de interesse social, o sistema financeiro para aquisição da casa própria, cria o Banco Nacional da Habitação (BNH), e Sociedades de Crédito Imobiliário, as Letras Imobiliárias, o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo e dá outras providências.*

BRASIL. Decreto 59.917, 30/12/1966. *Regulamenta o SERFHAU — Serviço Federal de Habitação e Urbanismo, estabelece suas finalidades e modo de operação, cria o FIPLAN — Fundo de Financiamento de Planos de Desenvolvimento Local Integrado e dá outras providências.*

BRASIL. Decreto nº 76.149, de 22 de agosto de 1975. *Dispõe sobre a liquidação do Serviço Federal de Habitação e Urbanismo SERFHAU, autarquia vinculada ao Ministério do Interior, e dá outras providências.*

BRASIL. Lei 2.291, de 21 de novembro de 1986. *Extingue o Banco Nacional da Habitação BNH, e dá outras providências.*

BRASIL. MINTER (Ministério do Interior). *Informativo SERFHAU*. Brasília: SERFHAU/MINTER, n.51, v.6, jun.1972.

CODERP (Companhia de Desenvolvimento Econômico de Ribeirão Preto). *Plano de Ação Imediata de Trânsito e Transporte (PAITT)*, 1976.

CPEU-FAUUSP (Centro de Pesquisas e Estudos Urbanísticos). *Plano Diretor de Bauru*, 1967.

FAU-USP, *Avaliação do Programa Nacional de Cidades de Porte Médio e revisão de critérios de seleção das referidas cidades: revisão de critérios de seleção de cidades e subsídio para uma nova política de desenvolvimento urbano nacional*. São Paulo: MINTER/CNDU, 1984.

PMC — Prefeitura Municipal de Campinas. *PPDI CAMPINAS*. 1970.

PRODESAN — Progresso e Desenvolvimento de Santos. *PLANO DIRETOR FÍSICO DE SANTOS*, 1968.

PRODESAN - Progresso e Desenvolvimento de Santos. *Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de Santos*, 1976.

SÃO PAULO - PUB — *PLANO URBANÍSTICO BÁSICO DE SÃO PAULO*. Relatório Sintético, 1969.

SÃO PAULO - PUB — *PLANO URBANÍSTICO BÁSICO DE SÃO PAULO*. Relatório Técnico, 1969.

# Propiocepción partidaria y prensa comunista ante el autoritarismo civil-militar en Brasil y Chile: PCB y PCCH

STEFANO MARTINELLI 

Universidad de Padua y Universidad Ca' Foscari

## Resumen

El artículo analiza cómo el Partido Comunista Brasileño (PCB) y el Partido Comunista de Chile (PCCH) reinterpretaron su lugar político y redefinieron su acción tras los golpes cívico-militares de 1964 y 1973. A través de un estudio comparado de los periódicos *Unidad Antifascista*, *Noticias de Chile* y *El Siglo*, se examina la prensa comunista como espacio de “propiocepción partidaria” en una fase de recomposición pos-golpe. Con esta categoría, se entiende el proceso mediante el cual el PCB y el PCCH leyeron sus propias transformaciones, reconstruyeron su equilibrio organizativo y elaboraron discursivamente una subjetividad comunista en los primeros años de los regímenes autoritarios de Brasil y Chile. Desde una perspectiva del análisis del discurso y de la teoría de los movimientos sociales, se observa cómo la prensa acompañó la reorganización geográfica, política y moral emprendida por el PCB y el PCCH.

## Palabras clave:

Prensa comunista; Subjetividad militante; Dictaduras cívico-militares; PCB; PCCH.

## Summary

The article analyses how the Brazilian Communist Party (PCB) and the Communist Party of Chile (PCCH) reinterpreted their political position and redefined their actions following the civil-military coups of 1964 and 1973. Through a comparative study of the newspapers *Voz Operária*, *Unidad Antifascista*, *Noticias de Chile*, and *El Siglo*, the communist press is examined as a space for “party proprioception” during the years of post-coup re-composition. This category refers to process through which the parties comprehended their own transformations, rebuilt their organisational balance and discursively elaborated the communist identity under Brazil’s and Chile’s authoritarian regimes. From the perspective of discourse analysis and the theory of social movement, the press will be observed to comprehend how it accompanied geographical, political, and moral reorganisation undertaken by the PCB and the PCCH.

## Keywords:

Communist press; Militant subjectivity; Civil-military dictatorships; PCB; PCCH.

## INTRODUCCIÓN

En el contexto de la Guerra Fría en América Latina, los golpes de estado en Brasil (1964) y Chile (1973) simbolizaban para sus perpetradores la solución de una emergencia política y el cumplimiento de un deber militar<sup>1</sup>. Orientadas por el marco ideológico y geopolítico de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN), las élites civil-militares de los dos países visaban a prevenir, o directamente extinguir, proyectos políticos que les parecían encaminados hacia la implantación de “nuevas Cuba” en el subcontinente<sup>2</sup>. El *Ato Institucional n°1* en Brasil celebraba la apodada *Revolução* de 1964 por rescatar Brasil de “un gobierno que, deliberadamente, se estaba disponiendo a bolchevizar el país”<sup>3</sup>. El Decreto Ley n°1, sancionado por Augusto Pinochet y los otros tres miembros de la junta de gobierno, reprobaba la Unidad Popular (1970-1973) por su “destrucción sistemática y universal (...), inspirada en los principios extranjeros del marxismo-leninismo”<sup>4</sup>. Como es reconocido, la imposición de regímenes burocrático-autoritarios sentaba sus raíces en la necesidad de “curar” el cuerpo de la nación del cáncer marxista<sup>5</sup>.

Entre las organizaciones que padecieron las locales campañas anticomunistas respaldadas por Washington, encontramos el Partido Comunista Brasileño (PCB) y el Partido Comunista de Chile (PCCH). Aunque en formas distintas, en los años precedentes al golpe, el PCB y el PCCH habían sido los protagonistas de procesos políticos que habían contribuido a socializar la democracia y democratizar el socialismo<sup>6</sup>. En el Brasil de comienzos de los años sesenta, el PCB —ilegal desde 1948 pero con fuerte arraigo en los movimientos sindicales, estudiantiles y campesinos— estaba orientado a la articulación de frentes populares para impulsar un proyecto político reformista<sup>7</sup>. En Chile, por el contrario, el PCCH actuaba en plena legalidad y ocupaba un papel central en la coalición de gobierno de la Unidad Popular (1970-1973), liderada por el presidente Salvador Allende. Fiel a la concepción de la “vía chilena al socialismo”,

---

1 Maud Chirio, *Politics in Uniform: Military officers and Dictatorship in Brazil* (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2018), pp. 6-8.

2 Anthony W. Pereira, *Dictadura e Repressão. O autoritarismo e o estado de direito no Brasil, no Chile e na Argentina* (São Paulo: Paz e Terra, 2010).

3 Presidência da República, *Ato Institucional n°1*, Rio de Janeiro, 9 abril 1964.

4 Junta de Gobierno de la República, Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Guerra, *Acta de Constitución de la Junta de Gobierno*, Santiago de Chile, 18 septiembre 1973.

5 Tanya Harmer, “Brazil’s Cold War in the Southern Cone, 1970-1975”, *Cold War History* 12 (4) (2012), pp. 659-681; Roberto Simon, *El Brasil de Pinochet. La dictadura brasileña, el golpe en Chile y la Guerra fría en América del Sur* (Santiago de Chile: Lom Ediciones, 2023).

6 Greg Grandin, *The last colonial massacre. Latin America in the Cold War* (Chicago: Chicago University Press, 2011), pp. 6-7.

7 Anita Prestes, *Luiz Carlos Prestes. Um comunista brasileiro* (São Paulo: Boitempo, 2015); Milton Pinheiro, *O PCB e a ruptura da tradição: dos impasses das formulações do exílio ao exílio da política no Brasil (1971-1991)* (São Paulo: Pontificia Universidade de São Paulo, 2014), Tesis de doctorado, pp. 31-32.

el partido defendía la profundización democrática y el respeto irrestricto a la institucionalidad republicana<sup>8</sup>.

Este texto analiza un corpus de publicaciones periódicas difundidas por el PCB y el PCCH en los años que van, respectivamente, de 1964 a 1967 y de 1973 a 1977. De acuerdo con la historiografía especializada, en los años inmediatamente sucesivos a los golpes civil-militares, las organizaciones se vieron involucradas en un proceso de recomposición<sup>9</sup>. Con este concepto, autores como Dulce Pandolfi y Rolando Álvarez remontan a un esfuerzo de adaptación a las nuevas condiciones políticas, que se concretó mediante la reconsideración de la estructura de funcionamiento partidaria y la reformulación de las estrategias políticas. Este manuscrito observa la prensa comunista como espacio donde el partido enunció a sí mismo, reinterpretó su lugar político y produjo sentido. Para este trabajo, se ha analizado un corpus de fuentes que comprende aproximadamente: 20 números de *Voz Operária*, órgano oficial del PCB, publicados entre 1965 y 1967; 25 de *Noticias de Chile*, periódico del PCCH en Londres (1974-1977); 12 impresiones de *Unidad Antifascista*, publicación clandestina del PCCH en los años que van de 1974 a 1976; 6 de *El Siglo-Internacional* (1974-1975), editado en Francia y en Italia; y, finalmente, 15 del *Boletín del Exterior* (1974-1977).

Como afirma Wilson Milani, la prensa —patrimonio material de un partido— permite iluminar múltiples dimensiones de la historia social y política de un país: el funcionamiento y el desempeño de un determinado régimen, los debates y las luchas sociales que se gestaron en su seno, o el nivel de libertad de expresión tolerado<sup>10</sup>. Asimismo, los periódicos del PCB y del PCCH serán investigados para observar las dinámicas de sobrevivencia del partido. Ya fuese editada en la clandestinidad o en el exilio, la prensa se configuró como un espacio donde reanudar el vínculo entre partido y su militancia, un instrumento para reelaborar la derrota política y, finalmente, pensar el futuro. Desde un enfoque de análisis del discurso influido por la teoría bakhtiniana<sup>11</sup>, concebimos los periódicos desde el principio inherentemente dialógico del lenguaje que los alimenta. Más precisamente, este constituye el fruto de una constante interacción —implícita o explícita— tanto con el contexto circunstante y con las voces que lo componen, como con la temporalidad en el cual se sitúa. A estos factores se suman, in-

---

8 Jorge Magasich Airola, *Historia de la Unidad Popular: La primavera de la Unidad Popular* (Santiago de Chile: LOM ediciones, 2023).

9 Dulce Pandolfi, *Camaradas e Companheiros* (Relume Dumará: Rio de Janeiro, 1995); Rolando Álvarez, *Desde las sombras. Una historia de la clandestinidad comunista (1973-1980)* (Santiago de Chile: LOM ediciones, 2003).

10 Wilson Milani, *A imprensa contra o Estado* (São Paulo: Mauad, 2023), pp. 46-47.

11 Beth Braith (org.), *Bakhtin. Dialogismo e construção do sentido* (Campinas: Editora Unicamp, 2020); Guilherme Adorno de Oliveira, Lucia Nogueira, *Encontros na Análise do Discurso* (Campinas: Editora Unicamp, 2019); Beth Brait (org.), *Bakhtin. Outros conceitos chave* (São Paulo: Contexto, 2006), pp. 9-33.

dudablemente, los posicionamientos ideológicos de quienes producen el discurso, sus perspectivas e intenciones y, finalmente los valores y los significados que atribuyen a su prosa.

Esta convergencia hace de las publicaciones bajo investigación unos “cronotopos”, esto es, configuraciones discursivas inseparables del espacio-tiempo que les da origen. Tanto en Brasil como en Chile, dicho espacio-tiempo estuvo marcado por lo que autores como Tanya Harmer, William Booth o Greg Grandin delinearon como un conflicto articulado en múltiples escalas, donde los “procesos regionales y trans-regionales de la Guerra Fría interactuaron perennemente con trayectorias nacionales y subnacionales particulares”<sup>12</sup>. Esto se tradujo en lo que Marcelo Casals definió como “lenguaje bipolar”: una reapropiación —por parte de los actores latinoamericanos— del léxico y de las tensiones de la Guerra Fría y su consecuente resignificación, teñida por las complejidades y las particularidades propias de los conflictos sociopolíticos que se gestaron en ambas sociedades durante décadas<sup>13</sup>.

Considerando este cuadro interpretativo, se utilizará el eje analítico de “propiocepción partidaria” a fin de comprender la autopercepción de los partidos ante las dictaduras. Este término clínico señala la capacidad de un organismo de percibir su posición, su movimiento y su fuerza para estabilizarse frente a las perturbaciones externas. Este proceso supuso tomar consciencia de los nuevos momentos políticos, comprender cómo estos afectaron la agencia de los partidos y, finalmente, redefinir tales formas de acción. Con este propósito, el ensayo indaga la propiocepción partidaria como plataforma desde la cual el PCB y el PCCH comenzaron a elaborar sus trayectorias político-discursivas. En este caso, recuperar la percepción de sí fue un proceso que constó de cuatro estadios fundamentales, cada uno de los cuales será examinado en los siguientes párrafos: la reactivación de los canales de acción y comunicación; la definición de un campo de disputa política, a partir de la derrota como momento histórico disruptivo; la caracterización del otro; y, finalmente, la definición y el fortalecimiento de sí, bien en contraposición al otro, bien a través de la construcción de la subjetividad en el lenguaje<sup>14</sup>. En diálogo con la teoría de los movimientos sociales formulada por Sidney Tarrow y Doug McAdam<sup>15</sup>, se empleará el concepto de framing para examinar cómo los periódicos delimitaron su nuevo contexto de acción con el fin de consolidar una conciencia colectiva. Este

---

12 William Booth, “Rethinking Latin America’s Cold War”, *The Historical Journal* 64 (4), 2021, pp. 1128-1150.

13 Marcelo Casals, “Otros espacios, otras temporalidades. La Guerra Fría y la historiografía política latinoamericana”, en Vanni Pettinà (ed.), *Estudios 16, AHILA, 2023*, pp. 59-92.

14 María Graciela Zoppi Fontana, “O outro da personagem: Enunciação, Exterioridade e Discurso”, en Bakhtin, *dialogismo e construção do sentido* (Campinas: Editora UniCamp, 2020), pp. 108-118.

15 Sidney Tarrow, Charles McAdam y Charles Tilly, *Dynamics of Contention* (Nueva York y Londres: Cambridge University Press, 2011); Sidney Tarrow, *Power in movement. Social movements in contentious politics* (Nueva York: Cambridge University Press, 1998).

recorrido guiará, en conclusión, a apreciar el bastimento discursivo del “ser comunista” en cuanto actor nacional y transnacional.

Lejos de aspirar a una comparación exhaustiva, el análisis propone un marco común desde el cual entablar el estudio de la evolución de las trayectorias discursivas del PCB y del PCCH a lo largo de las dictaduras de corte cívico-militar que se vivieron en Brasil desde 1964 hasta 1985 y en Chile, entre 1973 y 1990.

### **LOS GOLPES Y EL IMPACTO SOBRE EL PCB Y EL PCCH: UNA MIRADA DESDE LA TRAYECTORIA DEL PERIODISMO PARTIDARIO**

En la semana entre el 24 de marzo y el 2 de abril 1964, el semanal *Novos Rumos*, periódico oficial del PCB, abrió la edición con una firme advertencia: “la experiencia ya demostró que, en Brasil, se pueden dar bruscos giros políticos”<sup>16</sup>. Percibiendo una atmósfera política tensa, el Comité Central del *Partidão* advertía a sus militantes de una posible reconsideración de su hoja de ruta. Casi una década después, en la noche del 10 de septiembre de 1973, *El Siglo* —diario histórico de los comunistas chilenos— se preparaba a circular reportando el siguiente título: “El Partido Comunista llama al pueblo ¡Cada uno en su puesto de combate!”<sup>17</sup>. Reflexionando sobre las tensiones políticas más recientes<sup>18</sup>, alimentadas por una ola de creciente anticomunismo, tanto el PCB como el PCCH parecían presagiar que los días de la democracia se estaban encaminando hacia su conclusión.

En Brasil, el presidente João “Jango” Goulart —delfín de Getulio Vargas— había alcanzado el punto más alto de sus aspiraciones reformistas con el famoso discurso pronunciado el 13 de marzo 1964 ante la *Central Única dos Trabalhadores*, donde anunció su intención a proceder con la nacionalización del cobre y la reforma agraria. El impacto político y mediático de este discurso fue enorme. El 31 de marzo 1964, una coalición de militares y gobernadores civiles inició una sedición en Minas Gerais, que se expandió rápidamente por el país, culminando con la renuncia del presidente *trabalhista*.

En Chile, la Unidad Popular liderada por Salvador Allende —cuyo proyecto de transformación social, política y económica había adquirido resonancia global como “vía chilena al socialismo”— atravesaba crecientes dificultades

16 “A experiência já demonstrou que, no Brasil, podem se dar bruscas reviravoltas na situação políticas”, *Novos Rumos*, marzo-abril 1964.

17 *El Siglo*, 11 de septiembre 1973.

18 Ruth Leacock, *Requiem for Revolution. The United States and Brazil, 1961-1969* (Kent, Ohio and London, England: the Kent State University Press, 1990).

tras mil, intensos días de gobierno<sup>19</sup>. El 11 de septiembre 1973, el levantamiento militar iniciado en Valparaíso terminó con el bombardeo del Palacio de la Moneda en Santiago, el suicidio del presidente Allende y la instalación de una junta militar integrada por Augusto Pinochet, Gustavo Leigh, José Toribio y Cesar Mendoza.

Aunque abrumadoras, estas rupturas institucionales, representaban las concretizaciones más recientes de un anticomunismo profundamente arraigado en Brasil y Chile. En ambos países, dicho sentimiento —promovido por sectores civiles, religiosos empresariales y militares—, trascendía las fronteras ideológicas de la Guerra Fría. Este había sido cultivado desde, por lo menos, la década de 1920, reformulándose constantemente hasta adquirir nuevos lenguajes en el post II Guerra Mundial<sup>20</sup>.

Los golpes impusieron una recalibración del aparato de funcionamiento bien del PCB, bien del PCCH. El silencio al que los comunistas brasileños y chilenos fueron condenados, fue su directa consecuencia. En Brasil, a pesar de que la censura se impuso oficialmente a partir de 1966 —con la promulgación de la *Lei da Imprensa*—, la cesación de los derechos políticos de los dirigentes del PCB, la violencia a la cual sus militantes fueron sometidos —en el ámbito, por ejemplo, de la llamada *Operação Limpeza*<sup>21</sup>— y el espionaje indujeron el partido a autocensurarse y retirarse del espacio público<sup>22</sup>. Como admitiría, retrospectivamente, el periodista y militante Marco Antonio Tavares Coelho, en la *Revista de Civilização Brasileira*, al estallar “el movimiento que derrocó al gobierno, el pueblo estaba políticamente desarmado para enfrentar a los militares”<sup>23</sup>. Este, de hecho, no permitió que el PCB volviera a instalar inmediatamente unas gráficas subterráneas. Después

19 Alfredo Sepúlveda, *La Unidad Popular. Los mil días de Salvador Allende y la vía chilena al socialismo* (Santiago de Chile: Penguin Random House Grupo Editorial, 2020).

20 Rodrigo Patto Sá Motta, *Em guarda contra o perigo vermelho: o anticomunismo no Brasil (1917-1964)* (Rio de Janeiro: EDUFF, 2020); *Passados Presentes: o golpe de 1964 e a ditadura militar* (Rio de Janeiro: Zahar, 2021); Inés Nercesian, *La política en armas y las armas de la política: Brasil, Chile y Uruguay. 1950-1970* (Buenos Aires: CLACSO, 2013); Verónica Valdivia y Julio Pinto, *Su Revolución contra Nuestra Revolución. Izquierdas y Derechas en el Chile de Pinochet, 1973-1981* (Santiago de Chile: LOM ediciones, 2006); Marcelo Casals, *Contrarrevolución, colaboracionismo y protesta. La clase media chilena y la dictadura militar* (Santiago de Chile: Fondo Cultura Económica, 2022).

21 Thomas Skidmore, *The politics of military rule in Brazil 1964-1985* (New York, Oxford: Oxford University Press, 1988).

22 Nueve días después del golpe, las fuerzas armadas allanaron el apartamento del secretario general Luiz Carlos Prestes, en São Paulo, confiscando su archivo personal. El descubrimiento de las llamadas *Cadernetas de Prestes* permitió a los militares acceder al registro de actividades y a la lista de nombres del partido, lo que abrió el camino para una investigación policial patrocinada por el Servicio Nacional de Información (SNI).

23 “No instante em que eclodiu o movimento militar pela derrubada do governo, o povo encontrou-se desarmado politicamente para enfrentar os golpistas”: Assis Tavares, “Causas da Derrocada do 1º de abril 1964”, *Revista de civilização Brasileira* I (8), junio 1966.

del *Manifesto aos comunistas* de abril 1964<sup>24</sup>, el partido encabezado por Luiz Carlos Prestes se preservó en un silencio mediático que duró, por lo menos, ocho meses. Giocondo Días recuerda que en el ambiente pos-golpe, retomar la impresión de un periódico “no fue tarea simple, sobre todo por la dificultad de encontrar militantes dispuestos (...) y por la crisis de confianza que afectaba los comunistas”<sup>25</sup>.

La reactivación llegaría cuando Orlando Bonfim Junior, integrante de la comisión ejecutiva del PCB, delegaría al gráfico Raimundo Alves de Sousa “Raimundão” la creación de un equipo encargado de volver a imprimir un periódico histórico para el PCB: *Voz Operária*<sup>26</sup>. A partir de enero de 1965<sup>27</sup>, dicha publicación reaparecería impresa, inicialmente, con esténcil y mimeógrafo<sup>28</sup>. Sucesivamente, a partir de octubre de ese mismo año, fue posible abandonar los mimeógrafos en favor de unos *off-set* importados de Checoslovaquia<sup>29</sup>. En el número 10, de octubre 1965, el PCB comentaba así el reinicio de la impresión tipográfica de su diario oficial: “VOZ OPERÁRIA sale, por fin, impresa. Esto constituye un éxito y estamos seguros de que es motivo de satisfacción para los comunistas, así como para los trabajadores”<sup>30</sup>. Asumiéndose la responsabilidad por la ausencia, el Comité Central del partido reconocía su impotencia frente a las dificultades generadas por el gobierno *de facto*. Sin embargo, tras la retirada, la esperanza era de reforzar la tarea comunicativa para que este periódico fuese “un buen instrumento de combate a la dictadura”<sup>31</sup>.

En Chile, la limpieza ideológica desatada por los golpistas —con certeza más grave y sistemática con respecto al Brasil de 1964— resultó en brutales campañas exterminadoras en contra de militantes del PCCH y otros grupos izquierdistas<sup>32</sup>. El secretario general del PCCH Luís Corvalán, en una entrevista publicada posteriormente en *El Siglo*, admitiría que el partido no supo contener la fuerza aplastante de ese evento: “teníamos la sensación de lo que estaba aconteciendo.

24 Luiz Carlos Prestes, *Manifesto aos comunistas*, abril 1964, CEDEM/Roberto Morena.

25 “Não foi uma tarefa simples, sobretudo pela dificuldade de serem encontrados militantes dispostos a assumi-la e pela crise de confiança que afetava os comunistas e seus dirigentes”, Joao Falcão, *Giocondo Días: a vida de um revolucionário* (Rio de Janeiro: Agir, 1993), p. 246.

26 Nelson Rolim de Moura, *Alberto Aleixo. O Jornal do PCB* (Florianópolis: Editora Insular, 2022), pp. 197-200.

27 Anita Prestes, *op. cit.*, 2015, p. 312.

28 Hasta el día de hoy, no ha sido posible encontrar las primeras nueve ediciones mensuales del periódico. Cfr. Nelson Roulim de Moura, *op. cit.*, 2022; Anita Prestes, *op. cit.*, 2015.

29 Marco Antonio Tavares Coelho, *Heranças de um sonho. As memórias de um comunista* (Rio de Janeiro: Record, 2000), p. 291.

30 “VOZ OPERÁRIA sai, afinal, impressa. Isto constitui um êxito e estamos certos de que é motivo di satisfação para os comunistas, bem como para os trabalhadores em geral. Mas, reconhecemos também nosso atraso na realização de tão importante tarefa”, en *Voz Operária*, n° 10, octubre 1965.

31 “Seja um bom instrumento de combate à ditadura”, *Ibidem*.

32 Alfredo Riquelme, *Rojo Atardecer. El comunismo chileno entre dictadura y democracia* (Santiago de Chile: Centro de investigaciones Diego Barros Arana, 2009), p. 112.

(...) Los comunistas estábamos preparados políticamente, pero no militarmente<sup>33</sup>. Estas lagunas estratégicas, juntamente con la disolución de los partidos políticos, el terrorismo de estado y la imposición del Decreto Ley n°5, que establecía la censura sobre los medios de comunicación<sup>34</sup>, indujeron el PCCH a limitar temporáneamente su presencia en el espacio político público. Según el testimonio de Américo Zorrilla, “nosotros teníamos cierta infraestructura para hacer funcionar la propaganda en clandestinidad”<sup>35</sup>, pero la brutalidad y la masividad de la represión hicieron que “cuando quisimos usarla, nos encontramos con que todo eso no servía”<sup>36</sup>. El allanamiento de las gráficas de *El Siglo*, periódico oficial del partido, produjo la interrupción del sistema comunicativo partidario. Este sería retomado a partir de la primera mitad de 1974, “como producto del esfuerzo de muchos compañeros y el heroísmo de no pocos de ellos”<sup>37</sup>.

Fue gracias al compromiso de militantes anónimos que el bisemanal *Unidad Antifascista* aparecería en Santiago de Chile a partir de enero de aquel año, en la forma de un escueto —aunque muy denso de contenidos— folleto de ocho páginas mimeografiadas. Ya en 1974, según Zorrilla, el periódico llegó a ser impreso en 20 lugares diferentes de Santiago de Chile, siendo sucesivamente difundido a los Comités Regionales. A distancia de un año y medio, en septiembre 1975, la edición italiana de *El Siglo* rendía homenaje al esfuerzo de aquellos militantes que, “desde las sombras”<sup>38</sup>, se habían encargado de llevar adelante la tarea comunicativo-propagandística del partido, llenando así el vacío dejado por el desmantelamiento de *El Siglo*, “suprimido por la dictadura fascista, usurpadora del poder legítimo en el país”<sup>39</sup>:

En la peligrosa actividad clandestina (...), nuestros compañeros publican periódicos y boletines que sustituyen al órgano oficial *El Siglo* en su función de orientación, organización y movilización (...)<sup>40</sup>.

33 “Avevamo sentore di ciò che stava per accadere. Avevamo, più precisamente, coscienza della possibilità che succedesse ciò che è accaduto”: Luis Corvalán. AMO LA VITA, MA NON TEMO LA MORTE”, *El Siglo*, enero 1975, p. 8.

34 Alessandro Guida, *Il nuovo Cile dei militari: dottrina della sicurezza nazionale, guerra psicologica e propaganda. 1973-1975* (Verona: Ombre Corte, 2021), pp. 305-306.

35 José Miguel Varas, *Don Américo. Um chileno comunista* (Savona: Coop Tipografia, 1981), p. 52.

36 *Ibidem*.

37 *Ibidem*.

38 Rolando Álvarez, *op. cit.*, 2003.

39 “Soppresso dalla dittatura fascista, usurpatrice del potere legittimo nel paese”. “*El Siglo*, dentro e fuori del Cile”, *El Siglo*, enero 1975.

40 “Nella pericolosa attività clandestina, che comporta il fascismo, i nostri compagni pubblicano giornali e bollettini che rimpiazzano l’organo ufficiale *El Siglo* nel suo ruolo di orientamento, organizzazione e mobilitazione, proprio della stampa comunista in ogni condizione e circostanza”. *Ibidem*.

Recorriendo brevemente la trayectoria periodística de ambos partidos sucesiva a 1964 y 1973, emerge que los golpes de estado no fueron meros momentos de interrupción democrática. Por el contrario, fueron procesos de desarticulación que obligaron los partidos a redefinir sus propias prácticas político-comunicativas y su posición en el espacio público. El repliegue estratégico —condición para la supervivencia de ambos partidos— constituyó un primer movimiento hacia la recuperación de la propiocepción partidaria. La retirada, concretamente, no implicó la completa desaparición del PCB y del PCCH, sino comportó un proceso de búsqueda y puesta en marcha de gráficas subterráneas, la creación de una red de “casas de seguridad” para encuentros y reuniones y, por último, una renovada compartimentación de las tareas individuales encargadas a cada militante, para evitar “caídas”. Gracias a ello, los partidos lograron disponer de una red de comunicación operativa a pocos meses de la usurpación del poder, restaurando el vínculo que los unía a sus afiliados.

Si bien el PCB y el PCCH compartieron experiencias disgregadoras —en el sentido de que los golpes afectaron su operatividad—, las transformaciones que los invistieron diferían en magnitud y alcance geográfico. Aquí, factores específicos de cada contexto se reflejaron en distintas geografías de las militancias y, como veremos, en diferentes espacialidades comunicativas.

## **LAS LONGITUDES DE LA MOVILIZACIÓN**

Como se ha visto, la represión y la ilegalidad quebraron los circuitos convencionales de comunicación, alterando a la vez las condiciones de producción del discurso. La exploración de nuevos espacios para proseguir el trabajo político obligó los partidos a reconfigurar los marcos que les permitían interpretar su situación y orientar su acción. En este sentido, el diálogo entre los periódicos partidarios y unas dimensiones espaciales renovadas muestra cómo el PCB y el PCCH tomaron conciencia del alcance geográfico y mediático de su actuación. En este proceso, la clandestinidad para el PCB y la bipolaridad organizativa del PCCH —dividido entre un frente clandestino y uno del exilio— funcionaron como lentes geográficas y conceptuales desde las cuales repensar las tareas del partido. La propiocepción se desplaza, así, del cuerpo partidario hacia su entorno, entendido como el espacio desde el cual es posible enunciar, escuchar y ser escuchados.

Cabe aquí una reflexión sobre algunos aspectos que estructuran este estudio comparativo, desarrollado deliberadamente sobre un plano asíncrono. Las dinámicas de recomposición espacial, política y discursiva en las que se vieron involucrados el PCB y el PCCH estuvieron condicionadas por temporalidades y contextos particulares, lo que influyó en las modalidades de esta reorganización partidaria y en sus formas de enunciación. Existe, en este sentido, una diferencia significativa

entre el Brasil de 1964-1968 y el Chile de 1973-1977, derivada tanto de las manifestaciones locales del autoritarismo civil-militar, como de la proyección global de estos procesos. Aunque acomunado al chileno por el precepto de la Doctrina de Seguridad Nacional y su anticomunismo intrínseco, el régimen brasileño desplegó una represión más encubierta con respecto a la guerra frontal al enemigo interno desatada por el primero desde sus comienzos. A la vez, la reacción internacional ante el golpe brasileño fue más limitada, por dos razones principales: primero, no implicó la destrucción de un proyecto político dotado de visibilidad global, como la vía chilena al socialismo; segundo, ocurrió en el contexto transnacional anterior a 1968, caracterizado por redes de denuncia menos desarrolladas y una sensibilidad internacional aún reducida frente a las violaciones de los derechos políticos y humanos.

En Brasil, la retirada estratégica del PCB no requirió en la primera etapa del régimen una dislocación entre un polo local y uno extranjero. A pesar de esto, la maquinaria de los comunistas brasileños no estaba acostumbrada a la vigilancia estricta, el espionaje y la amenaza de reclusión de sus miembros, no obstante, el estatus de ilegalidad en que el partido vivía desde hace 16 años. Coelho, en su biografía *Herança de um sonho*, cuenta de las complicaciones en organizar una resistencia sobre escala nacional, ya que “*O rolo compressor da maioria nos massacrou*”<sup>41</sup>. Símilmente, Giocondo Dias, miembro del CC recuerda que, mientras en las calles de Rio de Janeiro había grupos de personas marchando al grito de: “un, dos, tres, comunistas en jaque”<sup>42</sup>, hasta para los dirigentes del partido fue complicado encontrar un lugar donde *abrigar-se* en caso de emergencia. Dada la complejidad de la situación, *Voz Operária* se estableció como instrumento para educar a los integrantes del partido a una conducta conforme a una vida política que necesariamente tenía que ser “subterránea”, para evitar detenciones o delaciones innecesarias. En el número 18 de *Voz Operária*, se instaura una relación comunicativa con la audiencia, emblemática en este sentido:

Una gran parte de los activistas y cuadros del Partido operaron, hasta 1964, en un estado de semilegitimidad y han tenido dificultades, debido a la falta de experiencia, para adaptarse a las nuevas condiciones creadas por el golpe<sup>43</sup>.

En esta edición, el PCB invitaba a sus militantes al “más riguroso respeto de las normas de clandestinidad”<sup>44</sup>, para evitar la exposición de los integrantes a los

---

41 Marco Antonio Tavares Coelho, *op. cit.*, 2000, p. 269.

42 João Falcão, *op. cit.*, 1993, pp. 239-241.

43 “Uma grande parte dos ativistas e dos quadros do Partido atuou, até 1964, numa situação de quase legalidade e tem tido dificuldades, por falta de experiência, em adaptar-se as novas condições criadas com o golpe”: “Vida Clandestina”, en *Voz Operária*, n°18, junio 1966.

44 “Ao mais riguroso respeito das normas da clandestinidade”: *Ibidem*.

órganos de inteligencia. De ser así, la seguridad y la protección frente a la penetración de los militares en el partido se imponían como bastión para la sobrevivencia del PCB, por encima de la misma confianza personal que cada miembro podía sentir hacia sus compañeros. Inspirados por el principio “onde está um comunista, ali está o Partido” (“donde hay un comunista, allí está el Partido”), el periódico sirvió de canal para educar a los miembros sobre las medidas que hubieran permitido reforzar los vínculos internos de la organización. Solo la adhesión a una serie de directrices básicas hubiera permitido conseguir este propósito. Por ejemplo, “Las reuniones clandestinas deben ser lo más breves posible. Muchas personas saliendo de una casa a altas horas de la noche llaman la atención”<sup>45</sup>. También se prohibió a los militantes tomar notas o registrar nombres y direcciones de los lugares de reunión, y se les animó a adoptar uno o más nombres de guerra, uno para cada una de las conexiones con compañeros o colaboradores externos. La adopción de “medidas capaces de garantizar el funcionamiento clandestino del Partido”<sup>46</sup> era, según el periodista de V.O. Moisés Vinha, quien escribía bajo el seudónimo de M.W. Meireles, la premisa crucial para la “persistencia, recuperación y acción junto al pueblo”<sup>47</sup> del PCB.

En el mundo de los setenta, el PCCH enfrentó una situación cualitativamente diferente. La violencia en contra de los militantes comunistas en Chile a partir de 1973 significó el comienzo de una “catástrofe humana inconmensurable”<sup>48</sup>, que alcanzaría su punto álgido entre 1975 y 1976, cuando las operaciones del Comando Conjunto se dirigieron específicamente contra el partido<sup>49</sup>. La derrota de septiembre y el consiguiente estado policial se tradujeron en una ola de detenciones extrajudiciales, torturas y desapariciones que amenazaron la propia supervivencia del partido. A pesar de la imposición de un rígido control social, las campañas mediáticas contra el enemigo interno —el comunista, el terrorista— y el terrorismo de Estado, el PCCH demostró ser lo suficientemente plástico como para reorganizar la estructura del partido. El artículo “*El Siglo, dentro e fuori dal Cile*”, da cuenta de la autopercepción del partido en cuanto entidad transnacionalizada, lo cual contrastaba fuertemente con la condición del PCB posterior al golpe: “Sabemos que nuestro periódico está saliendo en otros países”<sup>50</sup>. Esto sugería que la tarea informativa de los comunistas chilenos también se había relocalizado afuera de las

45 “As reuniões clandestinas devem ser o mais rápidas possível. Sair muita gente, tarde na noite, de uma casa, é coisa que chama a atenção”. *Ibidem*.

46 “Medidas capazes de garantir o funcionamento clandestino do Partido”: “Construção do Partido, Tarefa de Honra”, en *Voz Operária*, n°23, diciembre 1966.

47 *Ibidem*.

48 Alfredo Riquelme, *op. cit.*, 2009, p. 111.

49 Mark Ensalaco, *Chile under Pinochet. Recovering the truth* (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1999), p. 58.

50 “Sappiamo che il nostro giornale sta uscendo in altri paesi attualmente”. *Ibidem*.

fronteras nacionales. De hecho, en 1975, en el solo continente europeo, se encontraban cuatro publicaciones del PCCH: las ediciones italiana y francesa de *El Siglo*, *Noticias de Chile*, impresa en Londres, y el *Boletín del Exterior*, publicado en Moscú. La intensidad de la represión distorsionó de manera profunda las configuraciones espaciales del PCCH. En un análisis realizado por Carmelo Furci, se arroja luz sobre como este se fragmentó en múltiples centros de operación, bajo la dirección del Coordinador del Interior y el Coordinador del Exterior<sup>51</sup>. Esto se debe a la contracción del espacio político a nivel local<sup>52</sup>, y a una consecuente “nueva internacionalización”<sup>53</sup>, que vio en ciudades europeas como Londres, París, Berlín Este, Milán y Roma algunos de sus centros neurálgicos.

Una observación de conjunto de los periódicos del PCCH dentro y fuera de Chile revela una dimensión de la propiocepción que da cuenta de una renovada conciencia geográfica. A diferencia de *Voz Operaria*, donde la comunicación se desarrolló prioritariamente en una escala nacional y clandestina, la prensa del PCCH narra de una acción desplegada simultáneamente sobre un nivel local e internacional. En Santiago, *Unidad Antifascista* reiteraba a los lectores clandestinos que sus acciones estaban respaldadas por actos de solidaridad en Europa y América<sup>54</sup>. El coordinador británico del PCCH llamaba a los exiliados comunistas en el Reino Unido a unirse a una “protesta mundial contra la ola de represión desatada por la Junta Militar Fascista”<sup>55</sup>, mostrando conocimiento de la existencia de un movimiento de solidaridad internacional en el cual se tenía que participar y jugar un papel. Coherentemente con las circunstancias en que se encontraba el partido, las publicaciones periódicas del PCCH situaban su praxis en un marco geográfico y mediático mundial, aprovechando la ola internacional de solidaridad desatada por las dramáticas vicisitudes que siguieron el 11 de septiembre. Esto se tradujo en la urgencia de pensar las actividades partidarias y el movimiento de oposición al régimen chileno como un proceso donde la movilización en el ámbito local y en el global se reforzaban mutuamente.

Por el contrario, el PCB, a través de su mensual, reconocía que la consolidación de las redes locales sumergidas constituía la principal tarea a realizarse. Aunque no renegando el internacionalismo, el periodismo partidario concebía la geografía física y mediática de la resistencia como un proceso restringido al panorama nacional. De esta manera, se comprendía que la extensión de la mo-

---

51 Carmelo Furci, *El Partido Comunista de Chile y la Vía al Socialismo* (Santiago de Chile: Ariadna Ediciones, 2008), p. 87.

52 Lucía Rayas, “Clandestinity and militant culture in Latin America, 1960s to the early 1980s: epistemological and historical reflections and an agenda for research”, *Radical Americas* 8 (1), 2023, p. 10.

53 Olga Ulianova, “El exilio comunista chileno 1973-1990”, *Estudios Ibero-Americanos* 39 (2), 2009, p. 230.

54 “El XXV Congreso del Partido de Lenin”, *Unidad Antifascista*, n°45, febrero 1976.

55 “Urgente movilización para salvar la vida de los desaparecidos”, *Noticias de Chile*, n°24, junio 1976.

vilización no era de carácter global, debido también a la inicial ausencia de un movimiento transnacional de solidaridad con el país pos-1964. Así, como revela este pasaje, *Voz Operária* reconocía que su responsabilidad principal estaba en armar un frente de presión política tejiendo relaciones entre los varios sectores sociales y geográficos de su territorio.

La cuestión fundamental (...) que deben comprender los comunistas es el papel de los campesinos como aliados fundamentales del proletariado y la importancia de la alianza entre trabajadores y campesinos. La principal tarea de los comunistas en el campo es trabajar con los campesinos<sup>56</sup>.

En la opinión de los comunistas brasileños, había que abrir un frente de lucha en las zonas rurales del país. Explorando el “interior”, el proletariado habría encontrado un aliado importante: el *movimento camponês*. Por lo tanto, la resistencia contra la dictadura militar debía surgir de una fuerte coordinación entre los centros rurales y urbanos nacionales.

En definitiva, la identificación de nuevos espacios para la acción no fue únicamente una operación de reorganización territorial, sino un ejercicio de comprensión de las posibilidades de recepción, circulación y eficacia de la movilización partidaria. Como se evidenció, mientras el PCB concentró sus esfuerzos en fortalecer las redes locales y sumergidas de trabajo y comunicación, el PCCH se vio obligado a proyectar su acción sobre una escala transnacional. En estas circunstancias, ambos partidos aprendieron a percibir su cuerpo político desde el desplazamiento, reconfigurando sus estrategias comunicativas de acuerdo con las condiciones de los regímenes autoritarios.

## **HISTORIAS INTERRUMPIDAS: NUEVAS PERSPECTIVAS, NUEVOS DESAFÍOS**

Con el propósito de sentar las bases para una estrategia política orientada a superar la derrota y proyectar el retorno a la democracia, la prensa de ambos partidos elaboró, durante la recomposición, una arquitectura narrativa que remitía de forma recurrente a la democracia perdida. Como señala Steve Stern, la memoria opera simultáneamente como recurso para la construcción y la disputa de la legitimidad política y cultural<sup>57</sup>. En este marco, tanto el PCB como el PCCH recurrieron al pasado más reciente para denunciar el autoritarismo y, al mismo tiempo, como

---

56 “O problema fundamental (...) é que os comunistas compreenderam o papel do camponês como aliado fundamental do proletariado e a importância da aliança operário-camponesa. A tarefa principal dos comunistas, no interior, é trabalhar com os camponeses”: “Desenvolver o trabalho entre os camponeses”, *Voz Operária*, n°18, junio 1966.

57 Steve J. Stern, *Remembering Pinochet's Chile on the eve of London 1998* (Durham and London: Duke University Press, 2004), p. 23.

expediente para reubicar el partido en una nueva etapa de su trayectoria histórica, ahora definida por la lucha en contra del autoritarismo. En esta coyuntura, la recuperación de la propiocepción partidaria quedó subordinada a un acto de *framing* del contexto de acción<sup>58</sup>. Dicho encuadramiento se configuró como una operación de diagnóstico orientado a la identificación de problemas, al análisis de sus causas y a la caracterización de los responsables. Mediante la delimitación de un campo de disputa y de esquemas interpretativos coherentes con los objetivos de los partidos, la narración de los periódicos contribuyó a establecer un horizonte de confrontación con los regímenes.

A distancia de un año del derrocamiento de Goulart y Allende, las narraciones de *Voz Operária*, y de las publicaciones del PCCH, remitían a una realidad sustancialmente distinta de la anterior. De una primera observación de los argumentos abordados, aparecen con claridad el cambio de régimen político, los actores en su conducción y la transformación en la perspectiva de observación y acción de los comunistas de ambos contextos. En Brasil, *Voz Operária* alude a una “dictadura militar reaccionaria al servicio del imperialismo”<sup>59</sup>, proliferaban entre las páginas eslóganes como “Abaixo a ditadura entreguista e de fome!”<sup>60</sup> o “Abaixo os gorilas! Abaixo os atos institucionais!”<sup>61</sup>, se encuentran editoriales titulados “Cresce a resistência e oposição à ditadura”<sup>62</sup>. Las publicaciones del PCCH, a su vez, delinean una situación que, por muy semejante que suene, presentaba matices propios. Se caracteriza el régimen instaurado desde el golpe de septiembre 1973 como “fascista-usurpador del gobierno” que recibe “el apoyo de los monopolios multinacionales y los elementos más reaccionarios de los EE. UU.”<sup>63</sup>, se dedica constantemente espacio a secciones intituladas “Lucha de Masas” y “Terror Fascista” o, finalmente, se invita la ciudadanía a “Unir y no Dividir” para “reconquistar la libertad de nuestra patria y establecer un gobierno democrático, popular, anti-fascista y anti-imperialista”<sup>64</sup>. A través de una operación de “*framing* emotivo”, construido mediante consignas y eslóganes que apelaban a emociones como la rabia y la repulsión, ambos partidos consolidaron la concepción de los golpes de estado como momentos bisagra, donde se había puesto fin a la democracia como sistema fundado en la participación popular y la soberanía nacional.

58 Sidney Tarrow, *Power in Movement. Social Movements and Contentious Politics* (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), pp. 31-33.

59 “Combater o novo ato institucional. Derrotar a ditadura”, *Voz Operária*, n°11, noviembre 1965.

60 *Voz Operária*, n°12, diciembre 1965, p. 2.

61 *Voz Operária*, n° 15, marzo 1966, p. 4.

62 *Voz Operária*, n°16, abril 1966.

63 “A un año del golpe militar fascista”, *Boletín del Exterior*, n°6, septiembre 1974, p. 6.

64 “Unir y no Dividir es la tarea del momento”, *Noticias de Chile*, n°7, febrero 1974.

La transición a regímenes políticos autoritarios requería una nueva disposición por parte de los partidos y sus militantes: como notamos en las referencias a conceptos tales “resistencia”, “oposición” o “lucha”, se delineaban un presente y un futuro político votados a la disputa política. De esta manera, se colocaba el partido dentro de una dinámica conflictual, que jugó un papel central en la percepción de sí. Este cambio palpable en el lugar de observación y actuación de los partidos toma más consistencia cuando, al adoptar una mirada retrospectiva, los periódicos razonan sobre las condiciones políticas que precedieron la noche de la democracia. Aquí, la evocación de la democracia frustrada constituye un rasgo peculiar de la arquitectura retórica de los comunistas brasileños y chilenos. Por un lado, el PCB remitía a un pasado democrático, el de la tambaleante presidencia de João Goulart (1961-1964), durante el cual el partido —aunque electoralmente ilegal— se había transformado en un actor relevante en el crecimiento y desarrollo de las fuerzas populares y progresistas de Brasil<sup>65</sup>. De ser así, el partido había pasado a enfrentarse con un régimen el cual había erosionado el edificio constitucional que lenta y frágilmente se había erigido después del Estado Novo:

Na realidade, já não existe Constituição, já não Federação, já não existe República. 80 milhões de brasileiros estão submetidos ao poder discricionário de meia dúzia de gorilas e da embaixada ianque. O princípio democrático-nacional de que todo o poder emana do povo e em seu nome será exercido (...) foi oficialmente anulado<sup>66</sup>.

Según *Voz Operária* se había interrumpido la vigencia del estado de derecho, destruido la República y la Carta Constitucional, sentando a la vez las bases para la implementación de un plan político-económico que preveía “la anulación de numerosos logros sociales conseguidos por importantes contingentes de asalariados brasileños”<sup>67</sup> y privado a los trabajadores brasileños de su legítimo liderazgo.

Adoptando, símilmente, una mirada retrospectiva el PCCH, en la versión francesa de *El Siglo*, de septiembre 1974, recorría el ciclo vital de la Unidad Popular en cinco párrafos —*le Chili sera un exemple; La vie démocratique; Les réalisations de l'unité populaire; Quand vient le fascisme...; Le trahison finale; Ce n'est que une parenthèse*— subrayando la fuerte discrepancia entre un gobierno dispuesto a preservar y respetar las instituciones democráticas y el estado de derecho, y otro traidor y feroz, producto de un complot orquestado en Washington<sup>68</sup>. Aparece aquí la representación de un pueblo que, después de alcanzar la expresión más

65 José Antônio Segatto, *Breve história do PCB* (Rio de Janeiro: oficina de Livros, 1981), pp. 95-98.

66 “Combater o novo ato institucional. Derrotar a ditadura”, *Voz Operária*, n° 11, noviembre 1965.

67 *Ibidem*.

68 “Chile será un ejemplo, La vida democrática; Los logros de la unidad popular; Cuando llega el fascismo...; La traición final; No es más que un paréntesis”. “L’instauration du fascisme au chili”, *El Siglo*, septiembre 1974, pp. 6-7.

madura de la democracia, estaba viviendo un significativo declive bajo el pinochetismo:

El período revolucionario que se desarrolló en Chile entre 1970 y 1973 fue seguido por un período de profunda contrarrevolución (...). Un intento de imponer un proceso de regresión sin precedentes históricos en todos los frentes<sup>69</sup>.

Ambos extractos articulan una yuxtaposición entre un pasado reciente, caracterizado por avances políticos y conquistas sociales, y un presente marcado por el retroceso. Al hacerlo, la narrativa de estas publicaciones converge en la descripción de una transición de un *statu quo ante* a un *statu quo nunc*, donde la contraposición pasado-positivo/presente-negativo fortalecía la sensación de la clara involución histórica vivida en ambos países. A pesar de las distintas manifestaciones de la represión militar, la cesura histórica comúnmente percibida —y efectivamente vivida— por los partidos constituye un punto de partida más para un análisis de su autopercepción como actores políticos.

Para el PCB y el PCCH la clausura violenta de la democracia no solo implicó una reorganización física, sino una profunda experiencia de derrota política y simbólica que impactó en sus modos de acción y de discurso. Desde nuevas ubicaciones y desde un momento de hiato histórico, se hacía necesario impostar un movimiento hacia el futuro que culminara con el derrocamiento de las dictaduras. En este sentido, se requería la adopción de una actitud proactiva. En el número 15 de *Voz Operária*, el PCB reconocía que no era posible esperar hasta la creación de las condiciones efectivas para emprender la lucha pro-democracia. Lo que sí, en cambio, era fundamental para impedir un proceso de sucesión presidencial dirigido por los militares, era la “intervención activa de las masas”<sup>70</sup>. En este contexto, los comunistas brasileños reconocían su responsabilidad en promover una “orientación clara y la unión militante de las fuerzas contrarias a la dictadura”<sup>71</sup>. Para el PCCH, la “renovación” de la democracia chilena pasaba por el mismo proceso de unión en contra de la represión y el obscurantismo, con vistas a la recuperación de las “libertades públicas y (...) abrir paso a un futuro mejor que decida la mayoría de los chilenos”<sup>72</sup>. A partir de este encuadramiento diagnóstico, la narrativa partidaria avanzó hacia una dimensión pronóstica —aquí solamente esbozada—, orientada a la proposición de estrategias de cambio

69 “Chile: lucha de masas contra el fascismo”, *Noticias de Chile*, n°20, febrero 1976, pp. 5-11.

70 “Entretanto, não basta que constatar que haja condições favoráveis para a luta contra a ditadura (...). É necessário que essa luta se trave efetivamente e para isso é indispensável uma orientação acertada e a união militante das forças contrárias a ditadura”. “União das forças democráticas para isolar e derrotar a ditadura”, *Voz Operária*, n°15, marzo 1966.

71 *Ibidem*.

72 “1° de Mayo”, *Unidad Antifascista*, n°28, 2° quincena abril 1975, pp. 1-2.

político. La restauración de la democracia no sería el resultado del agotamiento de los regímenes civil-militares. Al contrario, sería el producto de la construcción de alianzas y la unión de fuerzas.

## LA GESTACIÓN DEL SER COMUNISTA

En último lugar, un elemento crucial para la recuperación de la propiocepción partidaria fue la reafirmación de la identidad comunista. Como notan Tarrow y McAdam, las restricciones a las organizaciones políticas generan nuevos incentivos para la acción colectiva<sup>73</sup>. En este marco, la movilización se articula a partir del fortalecimiento de una identidad colectiva y de la definición de objetivos comunes. La delimitación de un marco de acción se integra, así, con el reconocimiento del “yo” político, moral e histórico. Como observa Todorov, este proceso se concretiza también a través de “la caracterización del grupo social concreto al que *no* pertenecemos”<sup>74</sup>. Para el PCB y el PCCH, el otro, como demuestran los siguientes extractos, se configura discursivamente como una entidad deshumanizada:

La dictadura se presenta ante millones de brasileños como su mayor enemigo. Reduce el nivel de vida de las masas, niega y viola las libertades públicas y pisotea la dignidad nacional<sup>75</sup>.

Los fascistas están matando de hambre al pueblo como nunca antes, imponiendo nuevos impuestos, aumentando día a día los precios de los alimentos y otros bienes de uso común. Les privan de sus empleos (...), eliminan el derecho a la huelga y las prestaciones sociales<sup>76</sup>.

Remarcando la idea de penuria y sufrimiento, los periódicos describen los regímenes como el enemigo que hambrea la población y reduce su nivel de vida, maltrata a los brasileños y a los chilenos, renegando sus libertades civiles y políticas. En contraposición a los militares, los partidos se posicionan al lado del pueblo que sufre, protagonista de una batalla para sobrevivir. El declive hacia el autoritarismo se esboza —además por su carácter involutivo— mediante un léxico de conflicto. La derrota provocada por el enemigo contrasta con la lucha, la resistencia en contra de él y su barbarie hasta, finalmente, abrir a la perspectiva de una victoria.

73 Doug McAdam, Sidney Tarrow, Charles Tilly, *Dynamics of Contention* (New York and London: Cambridge University Press, 2011), 120.

74 Tzvetan Todorov, *La scoperta dell'America. Il problema dell'altro* (Torino: Einaudi Tascabili, 1992), p. 5.

75 “A ditadura surge aos olhos de milhões de brasileiros como o seu grande inimigo. Ela reduz o nível de vida das massas, nega e viola as liberdades publicas, vilipendia a dignidade nacional”: “O dever dos comunistas”, *Voz Operária*, n°14, febrero 1966.

76 “A elevar la lucha por el pan, el trabajo y la libertad”, *Noticias de Chile*, junio-julio 1977.

En la invectiva del PCB “*O povo brasileiro quer pão e liberdade, quer eleições livres e diretas, quer democracia*”, o en el llamado del PCCH a “*A Elevar la lucha por el pan, el trabajo y la libertad*”, el lector es interpelado a comprender la restauración de la democracia no solo como un objetivo político, sino un deber de carácter moral.

Esta operación de polarización moral adoptó tonos y registros diferenciados según la naturaleza de la represión experimentada en cada país. En enero 1967, *Voz Operária* denunciaba al régimen brasileño como “liberticida y antinacional”<sup>77</sup>, acusándolo de “adoptar medidas que institucionalizan un régimen fascista”<sup>78</sup>. Esto contrasta con las acusaciones formuladas por *Unidad Antifascista* contra Augusto Pinochet, “desequilibrado imbuido de delirios de grandeza”<sup>79</sup>, que “ha endurecido el estado policial a todos los niveles” mediante “redadas masivas, intimidación, detenciones arbitrarias, secuestros, torturas y asesinatos”<sup>80</sup>. Los tonos adquieren un carácter trágico. En una portada de la edición francesa de *El Siglo*, el titular “¡Fascismo en Chile!” seguido de cifras aterradoras —40.000 muertos, 10.000 comunistas asesinados, 45.000 huérfanos, 500.000 desempleados, 1.200 % de inflación— convertía la denuncia en testimonio de una catástrofe nacional. La omnipresencia de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), designada como la “Gestapo chilena”, se transformó en un símbolo condensador de la violencia del régimen<sup>81</sup>. Notamos, finalmente, que *Voz Operária* describía una dictadura de carácter “defensivo” o “preventivo” que, antes de la promulgación del AI-5, combinaba represión selectiva con la creación de un orden institucional centralizado y autoritario<sup>82</sup>. En cambio, *Unidad Antifascista*, *Noticias de Chile* y *El Siglo* retrataban un escenario dramático: el de un país que en el arco temporal 1973-1977 estuvo paralizado por el estado de sitio y la violación de los derechos humanos, expresiones de una dictadura “ofensiva”<sup>83</sup>. Más allá de la denuncia, estos procesos de *framing* convertían la derrota en principio movilizador, legitimando la lucha para la recuperación de la democracia.

Estas arquitecturas retóricas movilizaban la indignación, forjando a la vez una identidad militante. Como anticipado, la construcción del “yo comunista” se definía en oposición al “otro” —fascista o aspirante tal—, un enemigo retratado como traidor de la nación, agente del hambre, de la violencia y de la

77 “Acelerar a derrota da ditadura”, *Voz Operária*, n°24, enero 1967

78 “Adotam medidas de institucionalização de um regime fascistizante”: “Nota da Comissão Executiva sobre a situação política”, *Voz Operária*, n°22, enero 1966.

79 *Unidad Antifascista*, n°33, agosto 1975.

80 *Unidad Antifascista*, n°31, junio 1975.

81 “Bilain terrifiem apres 11 mois. Fascisme au Chili!”, *El Siglo*, septiembre 1974.

82 Marcos Napolitano, *História do Regime Militar Brasileiro* (São Paulo: Contexto, 2014), pp. 68-69.

83 Alison Bruey, *Bread, Justice, and Liberty. Grassroots Activism and Human Rights in Pinochet’s Chile 1965-1990* (Santiago de Chile: Lom Ediciones, 2018).

dependencia nacional. Aquí, la atmósfera conflictiva vigente a escala local se enriquece de complejidad. La resistencia, una estrategia para la democracia y el socialismo como meta suprema de la transformación política promovida por el PCB y el PCCH salen de los marcos nacionales y se integran a un conflicto global. El enemigo encarna, también, la extensión local de un actor global. Se compone, así, un lenguaje bipolar:

La dictadura está al servicio del imperialismo estadounidense no solo contra nuestro pueblo, sino también contra otros pueblos. (...) En defensa de los intereses nacionales y en la lucha contra el enemigo común —el imperialismo estadounidense— es indispensable denunciar y combatir la política de la dictadura<sup>84</sup>.

La Junta Militar fascista, que hoy ocupa transitoriamente el poder en Chile, es el peón del imperialismo norteamericano y por ello es un peligro latente para los gobiernos progresistas de América Latina<sup>85</sup>.

A las reivindicaciones políticas se suman las acusaciones de servilismo del ejército hacia los Estados Unidos y el antiimperialismo. La contienda política se proyecta así a una dimensión internacional que trasciende la extensión geográfica. Este desplazamiento inscribe la lucha partidaria en el marco más amplio de la Guerra Fría, entendida no solo como una confrontación entre bloques, sino como un campo de traducciones locales de antagonismos globales.

La prensa se imponía, así, como espacio performativo de construcción del “ser comunista”, una subjetividad política criada a través del discurso: un arquetipo del militante, portador de valores morales, ideológicos y políticos. Este se presenta como actor que defiende la dignidad de la nación y encarna valores como la libertad, el pluralismo y la democracia. Representa, finalmente, el resultado del proceso de concientización emprendido por el PCB y el PCCH, que recuperan y vuelven a confirmar la noción que tienen de sí mismos como agentes políticos con tareas históricas:

Los comunistas deben saber cumplir su papel de defensores firmes y desinteresados de las libertades democráticas, de los derechos de los trabajadores y del pueblo, situándose al frente de las masas y organizando su lucha contra todos los actos de violencia y arbitrariedad cometidos por la dictadura<sup>86</sup>.

84 “A ditadura está a serviço do imperialismo norte-americano não apenas contra nosso povo, as também contra outros povos. (...). Na defesa dos interesses nacionais e na luta contra o inimigo comum —o imperialismo norteamericano— é indispensável denunciar e combater a política da ditadura”: “Nota da Comissão Executiva sobre a situação política”, *Voz Operária*, n°22, noviembre 1966. [Traducción del autor].

85 “La economía de la junta em 1975: Miseria y estancamiento”, *Unidad Antifascista*, n°41, octubre 1975.

86 “Os comunistas devem saber cumprir seu papel de defensores firmes e abnegados das libertades democráticas, dos direitos dos trabalhadores e do povo, colocando-se à frente das massas e organizando

Todos aquellos que defienden los valores democráticos deben unirse para poner fin al oscurantismo, recuperar las libertades públicas, renovar nuestra democracia y allanar el camino hacia un futuro mejor decidido por la mayoría de los chilenos<sup>87</sup>.

Este proceso de consolidación identitaria estuvo profundamente imbricado en los imaginarios de la Guerra Fría. Como observa Harmer, “las ideas en el corazón de la Guerra Fría global se cruzaban con las preocupaciones, los acontecimientos y las circunstancias locales”<sup>88</sup>: así, el ser comunista habitaba un conflicto permanente y actuaba en la encrucijada de los antagonismos locales y las dinámicas globales. Las publicaciones comunistas reproducían esta doble inscripción al describir las dictaduras como “imperialistas”, “entreguistas” o “vendepatria”, categorías que trasladaban al terreno nacional la retórica de la confrontación Este-Oeste. Así, la lucha contra la dictadura se fundía con la lucha contra el imperialismo estadounidense, mientras la defensa de los trabajadores y de la soberanía nacional se erigía como principio universal de los comunistas.

El “ser comunista” emerge, en conclusión, como una identidad simultáneamente nacional y transnacional. Es el obrero brasileño que resistía a la “política de matar de hambre al pueblo” y el militante chileno que denunciaba la “locura asesina” de Pinochet. Es quien concebía la restitución de la democracia no solo como recuperación de derechos, sino como liberación nacional frente a la injerencia de EE. UU. Retomando un concepto de Bakhtin, esta figura constituye de por sí un “cronotopo” de la Guerra Fría en América Latina: el producto de espacios geográficos específicos y de una temporalidad marcada por la dictadura, la resistencia y la reconfiguración del conflicto global. En un contexto de interrupción histórica, el discurso comunista permitió sostener una continuidad identitaria y proyectar una lucha local cuya resonancia —en la percepción de los propios partidos—, trascendía las fronteras nacionales.

## CONCLUSIONES

Este ensayo ha explorado las primeras respuestas del PCB y el PCCH a los golpes militares de 1964 y 1973, centrándose en el papel del periodismo partidista como herramienta discursiva de supervivencia política. Tomando como referencia temporal la etapa de la recomposición (1964-1967; 1973-1977), el análisis ha abordado el proceso de recuperación de la propiocepción partidaria vivido por

---

sua luta contra todas violências e arbitrariedades praticadas pela ditadura”. “Ditadura deixa cair máscara constitucional”, *Voz Operária*, n°30, agosto 1967.

87 “¡Todos debemos unirnos para poner término a la situación presente!”, *Unidad Antifascista*, n°28, abril 1975.

88 Tanya Harmer, *Beatriz Allende. A Revolutionary Life in Cold War Latin America* (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2020), p. 4.

ambos partidos. Lejos de actuar como canales pasivos de propaganda, *Voz Operária*, *Unidad Antifascista*, *Noticias de Chile*, *Boletín del Exterior* y *El Siglo* sirvieron para observar cómo las organizaciones intentaron recalibrar su presencia en el escenario político, resignificar la militancia política y mantener activo el vínculo con las comunidades comunistas brasileña y chilena. La ruptura histórica, la reorientación espacial, el encuadramiento del contexto de contienda y la reafirmación identitaria han sido los prismas analíticos de este estudio, necesariamente parcial, del corpus seleccionado.

La ruptura histórica provocada por los golpes de estado abrió paso a un presente austero que debía ser revertido. En tales circunstancias, las dificultades enfrentadas por el PCB y el PCCH para reanudar sus publicaciones periódicas iluminan las reorientaciones geográficas que emprendieron para garantizar su persistencia. Las respuestas no siempre fueron simétricas, sino dependientes de las condiciones contextuales. En Brasil, el periodismo comunista reflejó el compromiso del PCB a fortalecer las normas operativas clandestinas y reforzar las alianzas nacionales entre el campo y la ciudad. En Chile, la prensa acompañó la expansión de la geografía política del PCCH, transformando la militancia en un proyecto transnacional.

Como se ha observado, la reubicación representó solo una de las dimensiones de la recomposición del PCB y el PCCH. A ella se sumó el reposicionamiento conceptual del yo dentro de los Estados militarizados. Las publicaciones periódicas sirvieron como dispositivos de encuadramiento de la acción política: con una narrativa crisis y confrontación, la oposición al autoritarismo se constituía como una batalla ética. En esta arquitectura discursiva se reactivó el ser comunista. Este no representaba un mero emblema de resistencia, sino un modelo de comportamiento y una forma de persistencia política. Forjado en respuesta a la dictadura, este arquetipo proyectó la convergencia entre los marcos ideológicos de la Guerra Fría y las trayectorias locales del activismo comunista.

Este trabajo sienta las bases para profundizar el estudio sobre el periodismo partidario como un espacio de re-imaginación política bajo el autoritarismo. En un trabajo comparativo deliberadamente asincrónico, la investigación de la propiocepción partidaria y el consiguiente aislamiento del "ser comunista" como producto discursivo ofrece una perspectiva útil para comprender la metamorfosis de estas subjetividades en función las estrategias políticas optadas por los partidos. En esta fase de aclimatación a los regímenes cívico-militares nacientes, el ser comunista brasileño y el chileno ya se veían expuestos a factores diferenciados. Desde las diferentes formas de represión hasta las fases de la Guerra Fría, pasando por las influencias y hermandades internacionales, estos elementos forjaron, a su manera, los modos de percibirse y organizarse políticamente.

## BIBLIOGRAFIA

- ADORNO DE OLIVEIRA, Guilherme; NOGUEIRA, Lucia, *Encontros na Análise do Discurso* (Campinas: Editora Unicamp, 2019).
- ÁLVAREZ, Rolando, *Arriba los pobres del mundo. Cultura e identidad política del Partido Comunista de Chile entre democracia y dictadura. 1965-1990* (Santiago de Chile: LOM Ediciones, 2011).
- ÁLVAREZ, Rolando, *Desde las sombras. Una historia de la clandestinidad comunista* (Santiago de Chile: LOM Ediciones, 2003).
- BAKHTIN, Mikhail, *The Dialogic Imagination* (Austin: University of Texas, 2008).
- BRAITH, Beth (org.), *Bakhtin. Outros conceitos chave* (São Paulo: Contexto, 2006).
- BRAITH, Beth (org.), *Bakhtin. Dialogismo e construção do sentido* (Campinas: Editora Unicamp, 2020).
- BRUEY, Alison, *Bread, Justice, and Liberty. Grassroots Activism and Human Rights in Pinochet's Chile* (Madison: The University of Wisconsin Press, 2018).  
<https://doi.org/10.2307/jj.36075945>
- CARMAGNANI, Marcello, "Dallo stato populista allo stato autoritario", en CARMAGNANI, Marcello y VANGELISTA, Chiara, *I nodi storici delle aree latino-americane, secoli XVI-XX* (Torino: Otto editore, 2001), pp. 437-447.
- CHIRIO, Maud, *Politics in uniform. Military officer and dictatorship in Brazil, 1960-1980*, (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2018).
- ENSALACO, Mark, *Chile Under Pinochet. Recovering the Truth* (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1999).
- FALCÃO, João, *Giocondo Dias. A Vida de um Revolucionário* (Rio de Janeiro: Agir, 1993).
- FURCI, Carmelo, *El Partido Comunista de Chile y la Vía al Socialismo* (Santiago de Chile: Ariadna Ediciones, 2008).
- GRANDIN, Greg, *The Last Colonial Massacre. Latin America in the Cold War* (Chicago: Chicago University Press, 2011).
- GRANDIN, Gregory; JOSEPH, Gilbert, *A Century of Revolution: Insurgent and Counterinsurgent Violence during Latin America's Long Cold War* (Durham: Duke University Press, 2010).  
<https://doi.org/10.1215/9780822392859>
- GUIDA, Alessandro, "Dalla demolizione del passato marxista al nuovo Chile. Propaganda e "guerra psicologica" nel primo anno di governo della dittatura di Augusto Pinochet", *SÉMATA, Ciências Sociais e Humanidades*, 32, 2020, pp. 301-325.  
<https://doi.org/10.15304/s.32.7006>
- GUIDA, Alessandro, *Il nuovo Cile dei militari. Dottrina della sicurezza nazionale, guerra psicologica e propaganda, 1973-1975* (Verona: Ombre Corte, 2021).
- HARMER, Tanya, "Brazil's Cold War in the Southern Cone, 1970-1975", *Cold War History* 12 (4), 2012, pp. 659-681. <https://doi.org/10.1080/14682745.2011.641953>
- HARMER, Tanya, *Beatriz Allende. A Revolutionary Life in Cold War Latin America* (Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2020).
- HARMER, Tanya, "Thinking through biography", *Radical Americas* 8 (1), 2023, p. 9.  
<https://doi.org/10.14324/111.444.ra.2023.v8.1.009>
- HUNEEUS, Carlos, *The Pinochet Regime* (London: Lynne Rienner Publishers, 2007).

- JOSEPH, Gilbert, "Border crossing and the remaking of Latin American Cold War Studies" *Cold War History* 19 (1), 2019. <https://doi.org/10.1080/14682745.2019.1557824>
- MCADAM, Doug; TARROW, Sidney; TILLY, Charles, *Dynamics of Contention* (New York and London: Cambridge University Press, 2001).
- MOURA, Nelson Roulim de, *Alberto Aleixo. O Jornal do PCB* (Florianópolis: Editora Insular, 2022).
- NAPOLITANO, Marcos, *1964: História do Regime Militar Brasileiro* (São Paulo: Contexto, 2014).
- PANDOLFI, Dulce, *Camaradas e Companheiros. Memória e História do PCB* (Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1995).
- PEREIRA, Anthony, *Ditadura e Repressão. Autoritarismo e Estado de Direito no Brasil, no Chile e na Argentina* (São Paulo: Paz e Terra, 2010).
- RAYAS, Lucía, "Clandestinity and militant culture in Latin America, 1960s to the early 1980s: epistemological and historical reflections and an agenda for research", *Radical Americas* 8 (1), 2023, 1-19. <https://doi.org/10.14324/111.444.ra.2023.v8.1.008>
- RIDENTI, Marcelo; AARÃO, Daniel, *História do Marxismo no Brasil. Partidos e Movimentos após os anos 1960* (Campinas: UniCamp, 2007).
- RIQUELME, Alfredo, *Rojo atardecer. El Comunismo chileno entre dictadura y democracia* (Santiago de Chile: Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 2009).
- SKIDMORE, Thomas, *The Politics of the Military Rule in Brazil. 1964-1985* (Oxford: Oxford University Press, 1988).
- TARROW, Sidney, *Power in Movement. Social Movements and Contentious Politics* (Cambridge: Cambridge University Press, 2011).
- TAVARES COELHO, Marco Antônio, *Herança de um sonho: as memórias de um comunista* (Rio de Janeiro: Editora Record, 2000).
- TODOROV, Tzvetan, *La scoperta dell'America. Il problema dell'altro* (Torino: Einaudi Tascabili, 1992).
- ULIANOVA, Olga, "El exilio comunista chileno 1973-1990." *Estudios Ibero-Americanos* 39 (2), 2013, pp. 212-236. <https://doi.org/10.15448/1980-864X.2013.2.12265>
- VARAS, José Miguel, *Don Américo. Un chileno comunista* (Savona: Coop Tipograf, 1981).

# Orden, Paz, Trabajo: la dictadura de Banzer en Bolivia, del golpe al autogolpe (1971-1974)

JUAN LUIS HERNÁNDEZ 

Universidad de Buenos Aires

## Resumen:

La dictadura de Hugo Banzer Suárez (1971-1978), inscripta en el ciclo de los gobiernos de terrorismo de Estado del Cono Sur, atravesó dos períodos separados entre sí por el autogolpe del 9 de noviembre de 1974. En el primero, Banzer lideró una alianza cívico-militar, el Frente Popular Nacionalista (FPN), integrado por dos partidos tradicionales de Bolivia históricamente enfrentados: el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), dirigido por Víctor Paz Estenssoro, y la Falange Socialista Boliviana (FSB), encabezada por Mario Gutiérrez. El segundo período se inició con el autogolpe de noviembre de 1974, la disolución del FPN y la reestructuración del gobierno, con un elenco exclusivamente militar. Bajo el despliegue represivo de la dictadura, se fue gestando el lento resurgir de una sociedad civil que logró, a fines de 1977, articular una protesta que forzó la salida de Banzer. En este trabajo nos concentraremos en los primeros años de la dictadura, con el propósito de reconstruir las alianzas políticas, las coordenadas ideológicas, las medidas económicas y los apoyos sociales e institucionales, que sustentaron al gobierno que creó las condiciones para la implementación del modelo neoliberal, en la segunda mitad de los años ochenta.

## Palabras claves:

Dictadura; Alianza cívico-militar; Terrorismo de Estado

## Abstract:

The dictatorship of Hugo Banzer Suárez (1971-1978), part of the cycle of state-sponsored terrorist governments in the Southern Cone, spanned two periods, separated by the self-coup of November 9, 1974. In the first period, Banzer led a civic-military alliance, called Frente Popular Nacionalista (FPN), composed of two traditional Bolivian parties that had historically clashed: Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), led by Víctor Paz Estenssoro, and Falange Socialista Boliviana (FSB), headed by Mario Gutiérrez. Second period began with the self-coup of November 1974: the FPN was dissolved and the government was restructured with an exclusively military composition. Under the dictatorship's repressive measures, the civil society slowly emerged, successfully organizing a protest in late 1977 that forced Banzer's resignation. In this article, we focus on the dictatorship's early years, reconstructing the political alliances, ideological coordinates, economic measures, and social and institutional support that underpinned the government that created the conditions for the implementation of the neoliberal model in the second half of the 1980s.

## Key words:

Dictatorship; Civic-Military Alliance; State Terrorism

## INTRODUCCIÓN

El triunfo del golpe del 21 de agosto de 1971 marcó el ascenso del general Hugo Banzer Suárez al gobierno, en el cual permaneció durante casi siete años, uno de los más extensos en la historia contemporánea de Bolivia. Implicó una dura derrota política y física para la clase obrera boliviana, en particular los mineros, y el movimiento popular.

Hugo Banzer Suárez (Santa Cruz de la Sierra, 1926-2002) ingresó al ejército muy joven, graduándose de sub-teniente con anterioridad a la Revolución de 1952. Con el grado de coronel, se desempeñó como ministro de Educación durante el gobierno de René Barrientos (1964-1965), y luego como agregado diplomático en Washington. En Estados Unidos realizó numerosos cursos de formación militar, y se relacionó con los círculos políticos y militares estadounidenses. Eran los años de la Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN), que priorizaba la guerra contra el enemigo interno (la “subversión comunista”) y de la Escuela de las Américas<sup>1</sup>, creada por los Estados Unidos en Panamá, en 1963, para formar militares latinoamericanos en las tácticas de “contrainsurgencia”, por la cual pasaron gran cantidad de militares bolivianos.

La dictadura de Banzer fue la primera instaurada en los años 70 en el Cono Sur, le siguieron en junio y setiembre de 1973 los golpes derechistas en Uruguay y Chile; en 1975 el desplazamiento de Juan Velasco Alvarado por el general Francisco Morales Bermúdez, en Perú; y en 1976, el golpe encabezado por Jorge Rafael Videla y la Junta Militar en Argentina. El ciclo de las Dictaduras de la Seguridad Nacional en el Cono Sur se abrió en 1964 —con el derrocamiento del presidente Joao Goulart, y la instauración de la dictadura militar brasileña— y perduró hasta 1990. La mayoría de los autores incluye también en este ciclo al gobierno de facto de Alfredo Stroessner, en Paraguay (1954-1989). Como sostiene Melisa Slatman, estas dictaduras, que compartían los lineamientos centrales de la DSN,

(...) tenían como objetivo principal recomponer y/o asegurar la hegemonía de las clases dominantes de cada uno de los países, para la consecución de diferentes proyectos políticos, económicos y sociales, dentro del marco de la cultura occidental y del ordenamiento capitalista de la sociedad<sup>2</sup>.

Diversos autores han publicado importantes estudios que abarcan el período 1971-1978: Herbert S. Klein (1981), James Dunkerley (1987), Jean-Pierre Lavaud (1998),

---

1 La Escuela de las Américas comenzó a funcionar en Panamá en 1963, a partir de la reorganización de establecimientos militares establecidos con anterioridad por Estados Unidos en el país centroamericano, con el fin de impartir instrucción militar.

2 Melisa Slatman, “Contrarrevolución en el Cono Sur. El ciclo de Dictaduras de Seguridad Nacional (1964-1990)”, en Gustavo Carlos Guevara (coordinador), *Sobre las Revoluciones Latinoamericanas del siglo XX* (Buenos Aires: Newen Mapu, 2023), pp. 299-318.

Magdalena Cajías (2014)<sup>3</sup>. Muchos otros analizaron aspectos particulares del gobierno de Banzer. Nos proponemos como objetivo del presente trabajo, reconstruir y presentar una reflexión sobre las alianzas políticas, las coordinadas ideológicas, las medidas económicas y los apoyos sociales e institucionales durante los primeros años de la dictadura, hasta el autogolpe del 9 de noviembre de 1974. Nuestra principal hipótesis es que la alianza entre el MNR y la FSB, plasmada en el Frente Popular Nacionalista, resultó no solo un importante apoyo a los esfuerzos golpistas y al gobierno en su etapa inicial, sino que fue también un ensayo anticipado de los pactos que, a partir de 1985, sustentarán la llamada “Democracia Pactada” y el modelo neoliberal<sup>4</sup>. Utilizaremos para dichos fines fuentes primarias —artículos de prensa, documentación oficial, censos— y fuentes secundarias.

## UN GOLPE ANUNCIADO

Los antecedentes más inmediatos de la gestación del golpe remiten a los acontecimientos del 4 de octubre de 1970. Ese día, el general Rogelio Miranda anunció la destitución del presidente Alfredo Ovando, y su propio ascenso a la presidencia. Pero la maniobra no contó con el apoyo de todos los mandos militares, abriendo una crisis política. Miranda y Ovando negociaron en El Alto, y el 6 de octubre anunciaron que ambos retiraban sus aspiraciones y entregaban el poder a una junta formada por los tres jefes de las Fuerzas Armadas. Ese día pasó a la historia de Bolivia cómo el “Día de los seis presidentes”, ya que inmediatamente apareció otra opción: el general Juan José Torres, apoyado por la Fuerza Aérea y varios contingentes del ejército, entre ellos el batallón de Colorados, al mando del mayor Rubén Sánchez. Ante la magnitud de la crisis, la Central Obrera Boliviana (COB) y los partidos de izquierda, agrupados en el Comando Político, convocaron a una huelga general para el 7 de octubre, en contra de la asunción de la Junta. La huelga terminó inclinando la situación a favor de la fracción liderada por Torres<sup>5</sup>.

El gobierno de Torres duró diez meses, durante los cuales se vivió uno de los períodos de mayor radicalización política del país, en el contexto de una aguda división de las Fuerzas Armadas. La oposición militar al gobierno estaba encabe-

---

3 Herbert S. Klein, *Historia de Bolivia* [1981] (La Paz: Juventud, 2002); James Dunkerley, *Rebelión en las venas* [1987] (La Paz: Plural, 2003); Jean-Pierre Lavaud, *El embrollo boliviano. Turbulencias sociales y desplazamientos políticos 1952-1982* (Cochabamba-La Paz: CESU-IFEA-Hisbol, 1998) y Magdalena Cajías, “La implantación del poder militar y el retorno de la democracia (1964-1982)”, en *Bolivia, su Historia, Tomo VI. Constitución, desarrollo y crisis del Estado del 1952* (La Paz: Coordinadora de Historia, 2014).

4 Con posterioridad a su actuación al frente del gobierno, Hugo Banzer fundó el partido Acción Democrática Nacionalista (ADN), con el cual participó en el ciclo institucional abierto en 1982. A partir de 1985, el ADN concertó diversos pactos parlamentarios con otras organizaciones políticas —entre ellas el MNR— para sostener el modelo neoliberal. En 1997, Banzer fue electo presidente del país.

5 James Dunkerley, *op. cit.*, 2003, pp. 220-222; Magdalena Cajías, *op. cit.*, 2014, pp. 118-127; y Jorge Gallardo Lozada, *De Torres a Banzer. Diez meses de emergencia en Bolivia* (Buenos Aires: Periferia, 1972), pp. 125-150.

zada por dos coroneles integrantes del grupo de Miranda: Hugo Banzer y Edmundo Valencia, quienes se sublevaron el 10 enero de 1971, ocupando el Estado Mayor del Ejército. La mayoría de los oficiales no adhirieron al pronunciamiento, la Fuerza Aérea y los Colorados se mantuvieron leales al gobierno, la COB declaró la huelga general y miles de mineros armados confluyeron sobre el centro de La Paz. Sin posibilidades de obtener respaldo, la rebelión fue derrotada en forma categórica. No obstante, el principal apoyo de Torres provenía de los sectores populares, que reclamaban armas y exigían al gobierno medidas drásticas contra los golpistas<sup>6</sup>.

Fracasado el golpe, los principales conspiradores debieron exiliarse en los países vecinos, instalándose muchos en la ciudad de Buenos Aires. Para fines de enero se encontraban en esa ciudad Miranda, Banzer, el coronel Juan Ayoroa, el mayor Humberto Cayoja, y otros integrantes de la fracción derechista del ejército. A Buenos Aires también arribaron emisarios de Mario Gutiérrez, jefe de la Falange Socialista Boliviana (FSB), y del ex-presidente Víctor Paz Estenssoro, jefe del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR)<sup>7</sup>.

La Falange, un partido fundado en la posguerra del Chaco, con un profundo sesgo católico ultraconservador, era un histórico enemigo del MNR, al que ahora se iba a unir ante el avance de la izquierda. Buenos Aires, junto con Lima (donde residía Paz Estenssoro) y Río de Janeiro (donde Gutiérrez tenía muchos contactos) constituían un triángulo dentro de cuyas coordenadas operaba el golpismo, con la colaboración de militares norteamericanos y brasileños<sup>8</sup>.

En Bolivia, mientras tanto, los acontecimientos de enero de 1971 impulsaron un nuevo auge de la movilización de masas y de radicalización de la situación política. El 1º de mayo, ante una enorme multitud, la COB y los partidos de izquierda nucleados en el Comando Político anunciaron la constitución de “un órgano de los trabajadores y del poder popular”, independiente del gobierno<sup>9</sup>. Así nació la Asamblea Popular, organismo que se autodefinió como un frente Antimperialista dirigido por el movimiento obrero, que comenzó a funcionar el 22 de junio en la ciudad de La Paz.

La Asamblea inició sus labores aprobando las Bases Constitutivas (documento programático) y el Reglamento de Debates. Luego se adoptaron diversas resoluciones: 1) Resolución contra el golpe de Estado. Frente a su estallido, se planteaba la declaración de la huelga general, la ocupación de los lugares de trabajo, y la formación del Comité de Milicias y Tribunales Populares, encargado de

---

6 “Brochita, el más machote”, *Primera Plana*, n° 416, Buenos Aires, 19 de enero de 1971.

7 Jorge Gallardo Lozada, *op. cit.*, 1972, p. 401.

8 “¿Es usted el asesino?”, *Primera Plana*, n° 428, Buenos Aires, 13 de marzo de 1971.

9 El clima que se vivía en La Paz en esas semanas está reflejado en la siguiente descripción del desfile del 1º de mayo y la inauguración de la Asamblea Popular: “El socialismo ha empapelado Bolivia, nadie habla de otra cosa, es el tema habitual (...)”. “Un remedo de cambalache”, *Primera Plana*, n° 431, Buenos Aires, 19 de enero de 1971.

organizar la resistencia al golpismo. 2) Pronunciamiento sobre la Coparticipación obrera mayoritaria en la Corporación Minera Boliviana (COMIBOL), con la elección de los gerentes por los trabajadores. 3) Pronunciamiento sobre la Universidad Única bajo control del movimiento obrero<sup>10</sup>.

Mucho se ha discutido sobre el desencadenamiento del golpe del 21 de agosto. Algunos autores atribuyen importancia a un documento político firmado por los suboficiales de las Fuerzas Armadas, que llamaba a disolver la estructura jerárquica del ejército para ponerlo al servicio de las clases populares, documento que habría unificado a las jerarquías militares bajo la conducción de la derecha<sup>11</sup>. Para otros, resulta significativo el receso adoptado por la Asamblea Popular el 2 de julio, habiéndose previsto volver a sesionar en dos meses, mientras los representantes recababan mandato de sus bases. Se suponía que, en el ínterin, el Comando Político y los Comités de Milicias y Tribunales Populares quedaban a cargo de la conducción de la lucha contra el golpismo<sup>12</sup>, pero lo cierto es que la coyuntura fue aprovechada por las fuerzas de la derecha, cívicas y militares, para solidificar su alianza y asaltar con éxito el poder.

## LA CREACIÓN DEL FRENTE POPULAR NACIONALISTA

El acuerdo político alcanzado entre el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y la Falange Socialista Boliviana (FSB), conformando el Frente Popular Nacionalista (FPN), y aceptando el liderazgo de Hugo Banzer, constituyó un paso decisivo en la preparación y ejecución del golpe de Estado. Las gestiones para la constitución del FPN se aceleraron a partir de abril de 1971. En la correspondencia de Víctor Paz Estenssoro con varios colaboradores puede reconstruirse su gestación. Guillermo Bedregal, uno de los más allegados a Víctor Paz, elaboró el primer proyecto, aprobado por Mario Gutiérrez. El 9 de junio de 1971 Gutiérrez le comunicó a Paz Estenssoro su “(...) plena y total conformidad con el pacto acordado en Bolivia (...)”. Desde su exilio en Lima, Paz Estenssoro respondió a Gutiérrez con una extensa carta, en la que describe los “caracteres angustiantes” de la situación boliviana, agregando:

El panorama que ofrece el país es más inquietante aún por que, fuera del MNR y la FSB, que han definido su posición claramente, se observa una atonía general, como si no se apreciaran en su real dimensión e inminencia los peligros que

---

10 Juan Luis Hernández. “La Asamblea Popular Boliviana”, en Gustavo Carlos Guevara (coordinador), *Sobre las Revoluciones Latinoamericanas del siglo XX* (Buenos Aires: Newen Mapu, 2023) pp. 261-277 y Juan Luis Hernández y Ariel Salcito (comp.), *La Revolución Boliviana. Documentos fundamentales* (Buenos Aires: Newen Mapu, 2007), pp. 187-194 y 220-230.

11 Mario Lozada, *Nacionalismo, socialismo y clase obrera en Bolivia* (Buenos Aires: CEAL, 1974).

12 Steven Sándor John, *El trotskismo boliviano. Revolución Permanente en el altiplano* (La Paz: Plural, 2016).

acechan a la patria (...) El acuerdo del MNR, FSB y los militares interesados en salvaguardar la suerte de Bolivia, es el elemento catalizador que constituirá la base de una acción conjunta de extraordinaria amplitud. La presencia de las Fuerzas Armadas tiene especial significado, por ser un factor real de poder y por constituir, análogamente a nuestros partidos, un importante elemento de cohesión nacional<sup>13</sup>.

En la misma misiva, le advierte a Gutiérrez que “Por mucho que en Bolivia se sospecha algo del entendimiento, pienso que no debe hacerse público hasta el momento mismo de la acción para no poner en alerta al gobierno (...)”, agregando a continuación que prontamente un enviado suyo le informará “(...) ciertas tácticas que deben ponerse en práctica en la labor preparatoria y otras ya en el curso de la acción”<sup>14</sup>. Banzer, por su parte, envió el 6 de agosto una misiva a la FSB y al MNR, expresando “(...) mi sincero agradecimiento por el honor con que me han distinguido al ungirme como el líder del Movimiento Revolucionario que encauzamos (...)”<sup>15</sup>.



Imagen 1. Celebración en La Paz del triunfo del golpe del 21 de agosto de 1971. De izquierda a derecha: Mario Gutiérrez, Hugo Banzer y Víctor Paz Estenssoro<sup>16</sup>.

El 23 de agosto de 1971, en una histórica foto publicada por la prensa paceña, Banzer, Paz Estenssoro y Gutiérrez aparecen en un acto público en un balcón del Palacio Quemado, celebrando el triunfo obtenido días antes (Imagen 1). No obstante, siguiendo la línea de acción previamente acordada, el primer documento público conjunto de las Fuerzas Armadas, el MNR y la FSB se firmó el 23 de octubre de 1971, en tanto el Estatuto Orgánico del FPN fue firmado el 30 de marzo

13 Ramiro Antelo León (comp.) *Pensamiento político de Víctor Paz Estenssoro* (La Paz: Plural, 2003), pp. 215-216.

14 Ramiro Antelo León, *op. cit.*, 2003, p. 216.

15 Miguel Pinto Parabá, “El retorno de Víctor Paz y el golpe del 71”, *La Razón*, 4 de noviembre de 2020

16 *La Razón*, La Paz, 23 de agosto de 1971.

de 1972, en un acto solemne realizado en el Palacio de Gobierno, por el presidente Banzer, el general Joaquín Zenteno Anaya como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, junto con Paz Estenssoro y el canciller Mario Gutiérrez, como jefes nacionales del MNR y la Falange<sup>17</sup>.

Como se dijo anteriormente, el MNR y la FSB compartían una larga historia de enfrentamientos antes, durante y después de la Revolución de 1952. La alianza concretada en 1971 remite más a cuestiones tácticas inmediatas que a convergencias programáticas profundas. Fundamentalmente, ambas organizaciones estaban preocupadas por el avance de la izquierda en Bolivia, convencidas de la necesidad de aunar fuerzas civiles y militares para detenerla. Sin embargo, debe señalarse que el nacionalismo anticomunista fue la amalgama de esta alianza impensada que, pactos y alianzas mediante, encontrará continuidad en la década siguiente, al iniciarse en Bolivia un nuevo ciclo institucional.

## EL 21 DE AGOSTO: MEMORIAS DE RESISTENCIA Y REPRESIÓN

Son ampliamente conocidos los sucesos que precedieron el golpe del 21 de agosto. La detención de Banzer en Santa Cruz, el 18 de ese mes, precipitó los acontecimientos. Al día siguiente, militantes del MNR y de la Falange organizaron una manifestación que concluyó con la toma de la Prefectura de esa ciudad. A continuación, el coronel Andrés Selich, al frente de un Regimiento de Rangers, ocupó la ciudad, derrotando tras cruenta lucha la resistencia de obreros y estudiantes. Selich y otros militares, Mario Gutiérrez y Ciro Humboldt, dirigente del MNR, se pusieron a la cabeza de la asonada<sup>18</sup>.

Las guarniciones de Beni y Pando se plegaron a los golpistas, que también se impusieron en Potosí y Tarija, con la colaboración de militantes falangistas y del MNR. El 21 se libraron los combates decisivos en La Paz, en torno al Cuartel de Miraflores, el cerro Laikaqota, el Ministerio de Defensa y el edificio de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). Poco a poco la mayoría de las guarniciones y contingentes del ejército se sumaron al golpe, a excepción del Regimiento Colorados, al mando del mayor Rubén Sánchez, que luchó hasta el final junto con obreros, estudiantes y militantes de izquierda. La adhesión de la guarnición de Viacha, en el altiplano, y de la Fuerza Aérea, cuyos aviones ametrallaron las posiciones leales al gobierno, terminó de inclinar la lucha a favor de los golpistas.

---

17 Marcelo Quiroga Santa Cruz, *Bolivia recupera la palabra: juicio a la dictadura* (La Paz: MEP, 1982), p. 36.

18 Una ajustada descripción de los acontecimientos en Santa Cruz, que culminaron con los fusilamientos sumarios ordenados por Selich en la Universidad, puede encontrarse en Fernando Marcelo López Serrano. "¡Hay que acabar con los comunistas! Santa Cruz, días previos al golpe de 1971", *Revista Científica*, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, 5, año 4, 2024, pp. 1-10. También puede verse James Dunkerley, *op. cit.*, 2003, pp. 244-246.

Como dijera un corresponsal, el sábado 21 por la tarde Torres, “militarmente hablando estaba solo, apenas tenía a su pueblo en torno de él”<sup>19</sup>.

Interesa señalar tres cuestiones: 1) Los efectivos militares que respaldaron el golpe tenían amplia superioridad numérica y de poder de fuego sobre quienes permanecieron leales a Torres 2) La participación de los civiles golpistas fue de gran importancia, especialmente en los primeros enfrentamientos en Santa Cruz, Potosí, Tarija y otras ciudades y 3) Los partidos de izquierda, el movimiento obrero y los estudiantes combatieron heroicamente, pero la respuesta de la COB, el Comando Político y el propio gobierno frente a la arremetida golpista fue débil y tardía. En líneas generales, las apreciaciones de Paz Estenssoro en su correspondencia sobre las fuerzas en pugna y las tácticas a seguir, demostraron ser bastante realistas.

Los líderes del golpe, tanto civiles como militares, tenían plena conciencia de lo que estaba en juego. Llevaron a cabo un golpe contrarrevolucionario preventivo, destinado a cortar de cuajo un proceso de radicalización política, que aspiraba a retomar y profundizar las transformaciones sociales iniciadas con las jornadas de abril de 1952. Es cierto que el movimiento campesino, con algunas excepciones, permanecía en su gran mayoría desmovilizado y sujeto a un liderazgo que mantenía estrechos vínculos con los mandos militares, pero la agitación política era intensa en las minas, las fábricas y las ciudades, donde primaban las posiciones antimperialistas y de izquierda.

Una certera apreciación de las relaciones de fuerza y de la oportunidad política que se presentaba a las clases dominantes de obtener un triunfo significativo sobre las masas populares, quebrando los imaginarios insurreccionales surgidos con la Revolución de 1952, explican la ferocidad de los combates y la represión posterior desplegada por la dictadura de Banzer. Magdalena Cajías cita informes de la Cruz Roja, dando cuenta de 98 muertos y 500 heridos en los combates registrados en La Paz, mientras en Santa Cruz, a los militantes populares caídos en los enfrentamientos, debe sumarse el fusilamiento sumario, ordenado por Selich, de 24 personas detenidas en la Universidad<sup>20</sup>. Pero esto fue solo el comienzo.

## LOS GOLPISTAS EN EL GOBIERNO

Triunfante el golpe, Banzer formó gobierno con el MNR y la Falange, respetando los acuerdos concertados en el marco del Frente Popular Nacionalista (FPN). Mario Gutiérrez, el líder de la FSB, fue nombrado canciller, en tanto los connotados dirigentes falangistas Augusto Mendizabal Moya, Ambrosio García y Carlos Valverde Barbery fueron designados ministros. Por parte del MNR, asumieron Ciro

---

19 Roberto García, “¿Que has hecho tú en La Paz, Bolivia?”, *Primera Plana*, n° 447, Buenos Aires, 24 de agosto de 1971.

20 Magdalena Cajías, *op. cit.*, 2014, pp. 128-130.

Humboldt y Raúl Lema Peláez, dirigentes cercanos a Paz Estenssoro, en áreas sensibles como Trabajo y Asuntos Sindicales y Finanzas. Los militares se reservaron los demás lugares, entre ellos los ministerios de Interior y Asuntos Campesinos, a cargo de los coroneles Andrés Selich y Alberto Natusch Busch, respectivamente<sup>21</sup>. El expresidente Paz Estenssoro, entrevistado por *Primera Plana* en La Paz días después del 21 de agosto, expresó:

Nunca dije que no quería comicios. Creo, eso sí, que la situación es sumamente difícil en todos los órdenes, pero con una conjunción de las Fuerzas Armadas y los partidos nacionalistas —MNR y FSB— en un empeño desinteresado, guiados exclusivamente por servir a Bolivia y mejorar las condiciones de las grandes mayorías, se podría salir adelante<sup>22</sup>.

La dictadura de Banzer contó desde el principio con el apoyo de Estados Unidos y Brasil, cuyos gobiernos alentaron y ayudaron los preparativos golpistas, a punto tal que el cónsul brasileño en Santa Cruz, Mario Amorin, resultó herido en los enfrentamientos<sup>23</sup>. Resumidos sus principios fundantes en la consigna “Orden, Paz, Trabajo”, no sorprendió que su primera tarea fuera continuar la feroz represión contra la oposición, el movimiento obrero, los estudiantes y la izquierda. El gobierno implantó el toque de queda, dio por concluido el año escolar en todo el país, suspendió las clases en las universidades, implantó la censura de prensa, prohibió la actividad política (excepto a los partidarios del FPN), clausuró emisoras de radio opositoras. Los líderes de la COB y de la Asamblea Popular fueron puestos fuera de la ley y perseguidos, los que no lograron huir al extranjero fueron encarcelados. En los meses y años siguientes miles de dirigentes y activistas sindicales fueron despedidos, encarcelados, torturados, obligados a salir del país<sup>24</sup>.

El principal organismo represivo del régimen fue la Dirección de Orden Político (DOP)<sup>25</sup>, creada en 1971, que funcionaba bajo la órbita del Ministerio del Interior. El coronel Rafael Loayza estuvo al frente de la DOP durante la mayor parte de la dictadura. El personal se componía de oficiales del ejército, policías y civiles, mayoritariamente de la Falange, estando bajo su control cárceles, centros de interrogatorios y campos de concentración en distintas regiones del país,

21 Magdalena Cajías, *op. cit.*, 2014, p. 131.

22 “La historia de nunca acabar”, *Primera Plana*, n° 448, Buenos Aires, 31 de agosto de 1971.

23 James Dunkerley, *op. cit.*, 2003, p. 246.

24 Según la información recopilada por los organismos de derechos humanos, entre octubre de 1971 y diciembre de 1977, se produjeron no menos de 200 muertos; unas 14.750 personas pasaron por las cárceles, la mayoría sin juicio previo y por lo general habiendo sufrido torturas; y otras 19.140 debieron exiliarse y/o irse del país. Asamblea Permanente de los Derechos Humanos en Bolivia, *La huelga de hambre* (La Paz: 1978).

25 En relación al funcionamiento de la DOP, es muy recomendable la lectura del trabajo de Javier Sebastián Rojas, “La política represiva en Siglo XX durante la segunda etapa de la dictadura de Banzer (1974-1977)”, *Ni Calco Ni Copia, Revista del Taller Inter-Universitario de Problemas de América Latina*, 11, 2025, pp. 63-84.

como Madidi, Chonchocoro, Viacha, la isla Coatí en el lago Titicaca. Después del asesinato de Selich, los coroneles Mario Adett Zamora y Juan Pereda Asbún prosiguieron con la ominosa tarea de represión y persecución desde el ministerio de Interior<sup>26</sup>.

Interesa señalar que el 21 de setiembre de 1971, Banzer, siguiendo la política inaugurada años antes por Barrientos, ratificó el Pacto Militar-Campesino<sup>27</sup>, acción respaldada por los dirigentes nacionales del movimiento campesino. Los sectores de izquierda en el campo, como la Unión de Campesinos Pobres (UCAPO), vinculada al comunismo maoísta, fueron fuertemente reprimidos, mientras las organizaciones lideradas por Jenaro Flores (La Paz) y Macabeo Santos Chila (Oruro), continuaron resistiendo en la clandestinidad<sup>28</sup>.

La política universitaria fue otro objetivo de la dictadura. Tras el golpe del 21 de agosto las universidades bolivianas fueron cerradas por catorce meses, reabriéndolas en octubre de 1972. El 17 de junio de ese año el gobierno dictó la Ley de Universidades, creando una instancia de coordinación a nivel nacional de las mismas. La Confederación Universitaria Boliviana (CUB) fue proscrita, y numerosos docentes y catedráticos identificados con la oposición fueron expulsados o se les impidió acceder a sus cátedras. La política represiva de la dictadura no logró impedir la reorganización del movimiento estudiantil, que ya a partir de 1973 logró reconstruir la CUB y reiniciar la lucha contra la Ley de Universidades, la restauración del cogobierno docente-estudiantil y la autonomía universitaria y otras reivindicaciones<sup>29</sup>.

## LA POLÍTICA ECONÓMICA DE LA DICTADURA

En materia económica, el gobierno dictó, el 12 de diciembre de 1971, la Ley de Inversiones, destinada a crear óptimas condiciones para la radicación de capitales extranjeros, eliminando las restricciones para la repatriación de las utilidades. En esta línea, se abonaron elevadas indemnizaciones a la Gulf Oil y a otras empresas por las nacionalizaciones producidas en los años 1969 a 1971<sup>30</sup>. El 28 de marzo de 1972 el gobierno dictó la Ley General de Hidrocarburos (Decreto 10.170). Esta norma legal incorporó por primera vez disposiciones sobre el gas, y

---

26 James Dunkerley, *op. cit.*, 2003, p. 258.

27 Se denomina Pacto Militar Campesino al acuerdo entre las dirigencias sindicales campesinas de los valles de Cochabamba con las cúpulas militares. Su inspirador fue el general René Barrientos, siendo ratificado por los presidentes Alfredo Ovando y Hugo Banzer, manteniendo vigencia desde 1964 hasta 1974.

28 Silvia Rivera Cusicanqui, "Luchas campesinas contemporáneas en Bolivia: el movimiento 'katarista' 1970-1980", en René Zavaleta Mercado, *Bolivia, hoy* (México: Siglo XXI, 1987), pp. 138-142.

29 Magdalena Cajías, *op. cit.*, 2014, pp. 150-151.

30 James Dunkerley, *op. cit.*, 2003, p. 258.

creó el sistema de contratos de operación. Con este sistema se habilitó a compañías privadas a firmar contratos de exploración y explotación con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en las áreas asignadas, quedándose con el 50 % de la producción bruta, que en la práctica ascendía al 70 % porque YPFB absorbía impuestos y regalías. Bajo este sistema, 12 empresas extranjeras firmaron contratos de operación entre 1973 y 1978<sup>31</sup>.

En octubre de 1972 se dispuso una devaluación del peso boliviano del 67 %, que se trasladó a los alimentos y productos de primera necesidad. El gobierno concedió ajustes salariales del 10 al 20 % que no compensaron la pérdida de poder adquisitivo. Se produjeron huelgas y manifestaciones en La Paz, Cochabamba y otras ciudades, duramente reprimidos<sup>32</sup>. La situación se agravó al año siguiente, al disponerse el quite de subsidios a productos básicos de la canasta familiar, produciéndose nuevas protestas que desembocaron en los acontecimientos que se narran en los próximos acápite.

La primera mitad de la década del setenta fueron años de crecimiento para la economía boliviana. Los precios del estaño y otros minerales aumentaron significativamente en comparación con la década anterior. En el Cuadro 1, donde se detalla la cantidad y el precio de las toneladas de estaño exportadas durante el período 1971-1978, puede apreciarse que, a partir del año 1974, el precio de la tonelada métrica del mineral se duplicó, primero, y luego se triplicó (1977/1978), con respecto al promedio de la década anterior, que se mantuvo oscilando en torno a los u\$/ton. 302,00.

Años	Toneladas Métricas	U\$S / Tonelada
1971	30.277	384,90
1972	30.684	412,80
1973	28.410	476,10
1974	28.954	836,60
1975	24.915	623,10
1976	28.608	785,70
1977	30.855	1.187,50
1978	29.695	1.358,50

Cuadro 1. Exportaciones de estaño años 1971-1978<sup>33</sup>.

31 Carlos Royuela Comboni, *Cien años de hidrocarburos en Bolivia* (La Paz-Cochabamba: Los amigos del libro, 1996), p. 149.

32 Magdalena Cajías, *op. cit.*, 2014, p. 136.

33 Luis Peñaloza Cordero, *Nueva Historia Económica de Bolivia. El Estaño* (La Paz-Cochabamba: Los amigos del libro, 1985), pp. 195-196.

La dictadura no avanzó en la privatización de la minería, que siguió siendo la principal fuente de ingresos del país. La Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), empresa estatal, entregaba las divisas obtenidas con las exportaciones de sus productos al Banco Central, las cuales eran canalizadas, mediante préstamos y subsidios, hacia diversos rubros de la agroindustria (azúcar, algodón) y la ganadería de Santa Cruz. Estos subsidios, no siempre amortizados por sus beneficiarios, se financiaron vía descapitalización de COMIBOL, o incrementando el endeudamiento externo del país<sup>34</sup>.

Es bajo la dictadura de Banzer que Santa Cruz comenzó a convertirse en el motor del capitalismo en Bolivia<sup>35</sup>. En los años cincuenta se había empezado a romper el tradicional aislamiento del oriente boliviano: en 1954 se concluyó la construcción de la carretera Cochabamba-Santa Cruz, y en 1955 y 1957 los empalmes ferroviarios que conectan el territorio cruceño con Brasil y la Argentina. A ello debe añadirse un hecho altamente significativo: a principios de los 70 se terminaron de cuantificar las reservas de gas existentes en el subsuelo de Tarija, iniciándose la explotación, y a partir de 1972, la exportación del recurso, hacia Argentina primero, y luego hacia Brasil. La producción de hidrocarburos se vio favorecida por la crisis del petróleo de 1973-74: al elevarse sustancialmente el precio del barril en el mercado mundial, los yacimientos bolivianos aumentaron su rentabilidad<sup>36</sup>.

Los cambios demográficos acompañaron las tendencias mencionadas. El análisis de los tres censos de población realizados en Bolivia en la segunda mitad del siglo pasado —1950, 1976 y 1992— indican un crecimiento mayor de la población en el Departamento de Santa Cruz —y en toda la región oriental— que en el occidente del país (La Paz, Potosí y Oruro) y en los valles cochabambinos. En el Cuadro 2 se puede apreciar esta tendencia, que se fue profundizando en las décadas posteriores.

Ciudad	1950	1976	1992
La Paz	321.073	654.713	715.900
Cochabamba	80.795	184.156	414.307
Santa Cruz	42.761	254.682	609.584

Cuadro 2. Población de las ciudades-capitales departamentales La Paz, Cochabamba y Santa Cruz<sup>37</sup>.

34 James Dunkerley, *op. cit.*, 2003, pp. 270-274.

35 Herbert S. Klein, *op. cit.*, 2002, pp. 259-261.

36 Carlos Royuela Comboni, *op. cit.*, 1996, pp. 147-151.

37 Instituto Nacional de Estadísticas, *Censo de Población y Vivienda de Bolivia*, años 1950, 1976 y 1992. Corresponde aclarar que, en la población de La Paz del censo de 1992, no está incluido El Alto, declarado ciudad en 1985, y que según el recuento ascendía en esa fecha a unos 405.492 habitantes.

## LA CRISIS MILITAR DE 1973 Y LA DESCOMPOSICIÓN DEL FPN

El autoritarismo de Banzer fue experimentado también al interior de las propias filas militares. Esto quedó evidenciado desde el principio de su gobierno, con el alejamiento del teniente coronel Humberto Cayoja o del general Luis Reque Terán, quien traicionó a Torres y apoyó a los golpistas. Pero su expresión mayor fue el brutal asesinato del coronel Andrés Selich, en mayo de 1973, que murió por los golpes y torturas recibidas en un interrogatorio.

Su muerte abrió una grave crisis política y militar en Bolivia. Figura fundamental en el triunfo del golpe del 21 de agosto, Selich fue el primer ministro de Interior de Banzer, destacándose por la brutalidad de sus métodos para deshacerse de los opositores. Estructuró el aparato represivo de la dictadura, acumulando poder en su cargo, por lo cual despertó recelos en Banzer, quien decidió, a principios de 1972, relevarlo como ministro y enviado como embajador a Paraguay. Retirado del cargo, intentó volver a Bolivia, ingresando por Tarija, pero en camino a Potosí fue arrestado, siendo trasladado luego a una “casa de seguridad” del ministerio del Interior, donde fue asesinado. En el operativo participó en forma personal el ministro de Interior, Alfredo Arce Carpio<sup>38</sup>.

El asesinato provocó un fuerte repudio en amplios círculos militares y políticos. En el ejército generó profundo descontento, especialmente en la oficialidad joven. Se reclamaba su esclarecimiento, al tiempo que se cuestionaba la composición cívico-militar del gobierno. El comandante en jefe del ejército, general Joaquín Zenteno Anaya, sostuvo que los partidos integrantes del FPN “no cumplen los compromisos que contrajeron” y “que hay inquietud por la inoperancia que demuestran”. Banzer procedió a la destitución de Zenteno, reestructurando el alto mando con militares de su más absoluta confianza<sup>39</sup>.

La crisis abierta por el asesinato de Selich se potenció semanas después, con la ruptura de la Falange Socialista Boliviana. El 20 de junio Carlos Valverde Barbery, ministro de Salud, hasta pocos meses antes, fue expulsado de la organización, acusado de haberse convertido en un “elemento disociador del partido”. Valverde encabezaba una facción que consideraba “divisionista, incapaz y autoritario” a Mario Gutiérrez, facción a la que también se le atribuía coincidencias con Selich y sus seguidores: esgrimían posiciones de ultraderecha, estaban a favor de estrechar la alianza con Brasil, y rechazaban el acercamiento al peronismo en

---

38 Los autores materiales del brutal asesinato, los agentes de la DOP Mario Zambrana Morales, Juan Carlos Quiroga y Carlos Betancourt Pacello, dieron su versión de lo sucedido durante el interrogatorio en que Selich fue torturado y muerto, difundidas parcialmente por Arce Carpio en un vano intento de eludir responsabilidades. Las declaraciones completas de Zambrana Morales y Quiroga, y la de Betancourt Pacello en forma parcial, se encuentran reproducidas en Marcelo Quiroga Santa Cruz, *op. cit.*, 1982, pp. 54-63. Véase también: “Confesión de tres torturadores”, *La Opinión*, Buenos Aires, 19 de mayo de 1973.

39 “Las Fuerzas Armadas califican de ineficaz a la coalición de gobierno” y “La crisis boliviana no parece aún superada”, *La Opinión*, Buenos Aires, 24 de mayo de 1973 y 30 de mayo de 1973, respectivamente.

Argentina. En este contexto, algunos voceros gubernamentales declararon que el gobierno podía optar por la “constitucionalización” del poder en un futuro próximo, lo cual incrementó el malestar castrense<sup>40</sup>. Valverde, por su parte, en respuesta a su expulsión se proclamó a los pocos días “único jefe del partido”, colocando a Banzer en un dilema: apoyar al canciller Mario Gutiérrez o al exministro de Salud. Como decía *La Opinión*, “Dos jefaturas sustentadas por bandos antagónicos”, constituía un hecho sin precedentes en la historia del falangismo, colocando a Banzer en una situación delicada<sup>41</sup>.

A las disputas en la FSB se le sumaron, en el segundo semestre de 1973, cuestionamientos similares al interior del MNR. Según James Dunkerley, Paz Estenssoro habría evaluado que el cariz de los acontecimientos estaba deteriorando demasiado la imagen del MNR en sus bases de sustentación<sup>42</sup>. Es probable que en este diagnóstico hayan incidido también ciertas promesas incumplidas de convocatoria electoral. Como sea, para agosto de 1973 Paz Estenssoro tomó la decisión de retirar el MNR del gobierno, pero la misma no fue acatada por los dirigentes partidarios, remisos a perder sus cargos como funcionarios gubernamentales.

La disputa interna escaló lo suficiente para motivar la detención y deportación al Paraguay del expresidente, decidida por Banzer en los primeros días de enero de 1974, bajo la acusación oficial de “haberse desviado del proceso político iniciado en agosto de 1971”, y de atentar contra la estabilidad del gobierno y la seguridad del Estado. Ciro Humboldt, miembro del gabinete, asumió la jefatura del partido en Bolivia, criticando el personalismo de Víctor Paz y su decisión de retirar el MNR del gobierno<sup>43</sup>. Paz Estenssoro, desde Asunción, rechazó los cargos, declarando que “Nuestra posición fue legalista y de apoyo para las elecciones de 1974”, y que el retiro del gobierno era “definitivo e irreversible”, no representando los dirigentes que seguían en el gabinete al MNR<sup>44</sup>. Todos estos conflictos incrementaban el descontento en las filas castrenses, especialmente por parte de la oficialidad joven, reacia a la presencia partidaria en el gobierno.

---

40 “El gobierno de Banzer en deterioro anuncia, la constitucionalización. Expulsan al subjefe de la Falange Socialista Boliviana”, *La Opinión*, Buenos Aires, 22 de junio de 1973.

41 “Es un dilema para Banzer la división de la Falange. Se agudiza la crisis en Bolivia”, *La Opinión*, Buenos Aires, 23 de junio de 1973.

42 James Dunkerley, *op. cit.*, 2003, p. 268.

43 “Paz Estenssoro fue deportado de Bolivia”, *La Prensa*, Buenos Aires, 4 de enero de 1974.

44 “Declaración de Paz Estenssoro en Asunción”, *La Prensa*, Buenos Aires, 10 de enero de 1974.

## EL AUTOGOLPE DE NOVIEMBRE DE 1974

El proceso que desembocaría en el autogolpe de noviembre de 1974 se aceleró a fines de 1973, cuando el gobierno decidió anular los subsidios a productos de primera necesidad (azúcar, harina, arroz, fideos, café y pan), a partir del 1 de enero de 1974, produciéndose importantes aumentos en los precios de estos alimentos. Para mitigar el impacto, el gobierno emitió bonos y los distribuyó a los obreros fabriles y trabajadores urbanos, lo cual no impidió paros, manifestaciones y reclamos en las áreas mineras y en las ciudades, protagonizados por trabajadores bancarios, fabriles, de la construcción. Pero el mayor descontento se produjo en el campo, debido a que los campesinos no recibieron compensación alguna<sup>45</sup>.

Las principales movilizaciones tuvieron lugar en el valle alto de Cochabamba, entre el 24 y el 30 de enero de 1974, bloqueando las carreteras que unen la ciudad con Sucre, Santa Cruz y Oruro. Los campesinos exigían la derogación de los decretos que afectaban la canasta familiar, y la presencia del propio Banzer para llegar a un acuerdo. Tras infructuosas negociaciones con un mediador enviado por el ministro de Asuntos Campesinos, Alberto Natusch Busch, el 29 de enero se produjo la Masacre del Valle. En las localidades de Tolata y Epizana, aviones de caza, tanques y carros blindados despejaron el bloqueo, disparando contra la concentración campesina, y dejando montones de cadáveres. El gobierno sostuvo que en la represión hubo 13 muertos, 10 heridos y 21 presos, pero numerosos testimonios cuestionan estas cifras. Silvia Rivera Cusicanqui sostiene que la Comisión de Justicia y Paz “estableció al menos 80 bajas entre muertos y desaparecidos, y un número mayor de heridos y presos”<sup>46</sup>.

La Masacre del Valle de enero de 1974 fue el comienzo del fin del Pacto Militar Campesino, que como ya se dijo, había sido renovado por Banzer y los dirigentes oficialistas al asumir la dictadura. Esta acción brutal inauguró un año caracterizado por el incremento de la represión estatal, contra los movimientos sociales disidentes y los partidos opositores, a los que se sumaron los dirigentes díscolos de las organizaciones integrantes del FPN, al tiempo que se incrementaba el descontento en las filas castrenses.

A mediados de 1974 se produjo un golpe de estado frustrado, impulsado por un grupo militar conocido como “Movimiento de Oficiales Jóvenes”. Liderado por los coroneles Raúl López Leyton, Gary Prado Salmón, Rolando Saravia, entre otros, el movimiento estaba integrado fundamentalmente por coroneles y mayores de reciente graduación, unidos por lo que consideraban un alejamiento del gobierno de los principios nacionalistas enunciados al momento de la creación del régimen. El 4 de julio, el regimiento Tarapacá, cuyo jefe era López Leyton, ocupó el centro de La Paz, y exigió la renuncia de Banzer y la formación de un gobierno

---

45 Magdalena Cajías, *op. cit.*, 2014, pp. 138-139.

46 Silvia Rivera Cusicanqui, *op. cit.*, 1987, p. 146.

exclusivamente militar que convocase a elecciones inmediatas. La petición no fue aceptada por el alto mando militar, y los rebeldes, cercados por fuerzas leales al gobierno, debieron rendirse. Una cantidad importante de oficiales fueron pasados a retiro, pero al poco tiempo la mayoría de ellos fueron reincorporados a las filas<sup>47</sup>.

Era evidente el aumento del descontento en el ejército y el agotamiento político del Frente Popular Nacionalista, ante lo cual Banzer y su círculo más cercano decidieron retomar la iniciativa. El 9 de noviembre de 1974 el gobierno dictó el Decreto N° 11.947, que junto con los Decretos 11.948 y 11.949, constituyeron el nuevo ordenamiento jurídico establecido por la dictadura. En los considerandos del Decreto Ley Nro. 11.947, se fundamenta el nuevo ordenamiento político, atribuyendo el atraso “en todos los aspectos de la vida nacional”, al accionar faccioso de los partidos políticos, responsables de generar inestabilidad política, impidiendo la planificación y ejecución de planes a largo plazo:

Que las constantes luchas intestinas por el predominio político de diversas instituciones partidistas, así como la experimentación de doctrinas y planes ajenos a nuestra naturaleza, modo de vida, costumbres y cultura, han provocado un atraso aún mayor, disminuyendo la capacidad económica de la nación y profundizando la brecha que distancia a nuestro país respecto a otros de mayor desarrollo<sup>48</sup>.

En suma, los partidos políticos, las luchas facciosas y los intentos de aplicar doctrinas foráneas y ajenas al país, eran los responsables de que Bolivia no pudiera salir de una situación de estancamiento económico y social. Se requería orden y estabilidad política para planificar y ejecutar planes para el progreso de la nación. Las direcciones de las organizaciones políticas, estaban sumidas en una etapa de desorientación y división, que habría derivado en una multiplicación de facciones sin respaldo ciudadano. Se habrían dedicado exclusivamente a la disputa por los cargos en la administración pública, causando malestar en la ciudadanía y alterando la paz social.

Que el deseo de constitucionalizar los Poderes públicos mediante elecciones para los partidos políticos solo significaba un fin en sí mismo, destinado a la satisfacción de sus necesidades y no un medio por el cual se debe servir a la patria con planes y programas desinados al progreso del país<sup>49</sup>.

En función de ello, el artículo primero del Decreto establece que las Fuerzas Armadas “asumen la plena responsabilidad político-administrativo y el control

---

47 James Dunkerley, *op. cit.*, 2003, p. 268.

48 Marcelo Quiroga Santa Cruz, *op. cit.*, 1982, p. 28.

49 *Ibidem*, p. 30.

total del gobierno hasta el año 1980”, imponiendo de esta manera el control excluyente del gobierno por las Fuerzas Armadas. El artículo noveno establecía que “El Poder Ejecutivo se ejercerá por el presidente de la república como Capitán General de las Fuerzas Armadas”, y el décimo suspendía “toda actividad política y proselitista en el territorio de la república, así como la realización de reuniones, asambleas, manifestaciones y otros eventos políticos partidistas”, en tanto el décimo disponía “la cesación del mandato” de los dirigentes de todas las entidades empresariales, sindicales, profesionales, gremiales, estudiantiles, universitarias, así como la prohibición de paros, *lockouts*, huelgas, y toda forma de suspensión y/o paralización de actividades laborales o productivas<sup>50</sup>.

El artículo 6 del Decreto Ley Nro. 11.947 instituyó el Servicio Civil Obligatorio, reglamentado por el Decreto 11.948. El artículo 1º de este último disponía: “Se instituye el Servicio civil Obligatorio para todos los bolivianos de nacimiento o naturalizados, para hombres y mujeres desde la edad de veintiún años”. Se establecían sanciones para quienes no cumplieran las tareas encomendadas por las autoridades, consistentes en reclusión por dos años o expulsión del país, sin que el afectado tuviera derecho a reclamo o recurso alguno contra la respectiva resolución. Por último, el Decreto 11.952, dispuso que el ministerio de Trabajo tenía facultad para designar coordinadores laborales, con facultades para vincular a los trabajadores de las distintas ramas de la producción con los empresarios. Los responsables de huelgas, paros, actos de sabotaje o trabajo a desgano en la administración pública o en empresas estatales serían inmediatamente despedidos; en la actividad privada se aplicarían similares sanciones en caso de no acatar una conminatoria previa de retorno al trabajo en un plano no mayor de veinticuatro horas<sup>51</sup>.

En definitiva, para construir la “Nueva Bolivia” proclamada por Banzer, se imponía el receso obligatorio de todos los partidos políticos, quedando la administración del Estado en manos de los militares hasta 1980, fecha en que se institucionalizaría el país. Se estableció el “servicio civil obligatorio” y se reforzó la represión contra el movimiento sindical, disponiendo la caducidad del mandato de todos los dirigentes sindicales, la prohibición de todas las formas de paralización de las tareas laborales, y la facultad de los funcionarios del Ministerio de Trabajo para intervenir directamente en todas las instancias y actividades de las organizaciones sindicales. Las Fuerzas Armadas disolvieron el Frente Popular Nacionalista, prescindiendo de la colaboración del MNR y la FSB. El “golpe dentro del golpe” o el “autogolpe”, dio lugar a un nuevo gabinete, integrado exclusivamente por militares leales a Banzer. El recrudecimiento de la represión y el autoritarismo, correspondió a la integración plena de Bolivia en el ciclo del terrorismo de Estado que se venía imponiendo en el Cono Sur.

---

50 *Ibidem*, p. 34.

51 *Ibidem*, p. 35.

## EL LENTO RESURGIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL

Pretendemos en este acápite hacer una breve mención de un aspecto poco estudiado de este trágico período de la historia boliviana contemporánea: el lento y doloroso resurgimiento de la sociedad civil. En efecto, por debajo de la rígida coraza impuesta por la disciplina, la censura y la represión desplegadas desde el poder estatal, fue lentamente resurgiendo una profusa y vigorosa sociedad civil, que no se limitó a los sindicatos y organizaciones de los trabajadores urbanos, mineros y campesinos, habituales actores del escenario político-social boliviano.

Una de las instituciones con las cuales la dictadura tuvo frecuentes choques fue la Iglesia Católica boliviana. Sacerdotes como Luis Alegre, Luis Espinal, y otros fueron perseguidos y detenidos. En febrero de 1972 la jerarquía católica pidió que se pusiera fin a las detenciones indiscriminadas. En enero de 1973 se publicó en el diario *Presencia* “Evangelio y violencia”, un pronunciamiento firmado por noventa y nueve sacerdotes y hermanas religiosas, donde denuncian los métodos represivos del gobierno y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos<sup>52</sup>. A principios de ese año comenzó a funcionar la Comisión de Justicia y Paz, avalada por el Episcopado, en defensa de los derechos humanos<sup>53</sup>. El 16 de junio, los religiosos firmantes del documento “Evangelio y violencia”, volvieron a pronunciarse públicamente. Denunciaron que persistían “los sistemáticos apresamientos por meras sospechas, la retardación de justicia, el total desconocimiento por parte de la mayoría de los detenidos de las causas de su detención”, así como torturas, muertes en los lugares de detención y desapariciones. El texto concluye solicitando a las autoridades la amnistía irrestricta para los presos políticos. Esta demanda fue también formulada por la Comisión de Justicia y Paz, “como primer paso hacia la pacificación”, en un comunicado dirigido al presidente<sup>54</sup>.

Un acontecimiento de enorme proyección en el futuro fue la aparición, a principios de los años setenta, de agrupaciones y movimientos culturales y políticos aymaras, algunos de base urbana, que lentamente confluyeron con una nueva camada de dirigentes campesinos sobre la base de una plataforma de reivindicaciones, económicas y sociales comunes, y fundamentalmente, de un reclamo de reconocimiento cultural de la diferencia étnica. En 1973 se publicó el *Manifiesto de Tiahuanaco*<sup>55</sup>, primer documento público del katarismo, que de ahí en más se proyectará como un amplio movimiento ideológico con múltiples manifestaciones institucionales, políticas, culturales y territoriales. En el centro del discurso katarista está la reivindicación de la cultura y el pasado indígena. Los kataristas,

---

52 Jean-Pierre Lavaud, *La dictadura minada* (La Paz: IFEA-Plural, 2003).

53 Magdalena Cajías, *op. cit.*, 2014, pp. 132-135.

54 “Piden por presos políticos bolivianos”, *La Opinión*, Buenos Aires, 16 de junio de 1973.

55 El *Manifiesto de Tiahuanaco* se encuentra reproducido en Juan Luis Hernández y Ariel Salcito (compiladores), *op. cit.*, 2007, pp. 237-244.

que construyeron su propio panteón de héroes, encabezados por Tupac Katari, (de quien derivan su nombre) y su compañera Bartolina Sisa, planteaban el agotamiento del ideario reformista de los años 50, que les había dado la tierra, la escuela y el voto, pero no les reconocía la identidad, la cultura, la cosmovisión, los valores de los pueblos originarios, y repudiaron las dirigencias que habían concertado el reaccionario Pacto Militar Campesino<sup>56</sup>.

El movimiento obrero también desarrolló acciones de resistencia a las políticas de la dictadura, durante estos años duros. Estas se expresaron por primera vez en ocasión de la ya mencionada devaluación de octubre de 1972. Se sucedieron asambleas en los principales establecimientos fabriles de La Paz, concentraciones y manifestaciones populares, con gran participación de los trabajadores fabriles y en menor medida, de los trabajadores de los servicios. La lenta recuperación del movimiento sindical tuvo continuidad en los actos y marchas del 1º de mayo de 1973, y en algunas huelgas y paros de los mineros en Huanuni, Colquiri, Matilde y otros yacimientos, por demandas sindicales y políticas<sup>57</sup>.

En el segundo período de la dictadura, iniciado con el autogolpe de noviembre de 1974, este proceso fue escalando a medida que se acentuaba el desgaste gubernamental y cambiaba el contexto internacional. Nuevas huelgas y congresos mineros, la fundación en 1976 de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos en Bolivia (APDHB), la reorganización de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB) y las federaciones universitarias locales (FUL), el crecimiento del movimiento de mujeres, con los Comités de Amas de Casa mineras y la Unión de Mujeres de Bolivia (UMBO), dan cuenta de este rico proceso. Su culminación fue la Huelga de Hambre iniciada por cuatro mujeres mineras a fines de 1977, que terminó alcanzando los objetivos propuestos, y que pocos meses después, obligaría a la salida de la dictadura<sup>58</sup>.

En el plano político, la oposición formó en el exilio el Frente Revolucionario Antiimperialista (FRA) que estuvo presidido por el general Torres, y contó con la participación del Partido Obrero Revolucionario (POR), el Partido Comunista Boliviano (PCB), el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) y otros grupos menores. El FRA desarrolló algunas acciones propagandísticas en contra de la dictadura, pero terminó disolviéndose. En lo que respecta al MNR, los acontecimientos de 1971 provocaron la ruptura definitiva entre Paz Estenssoro y Hernán Siles Zuazo, que desde el derrocamiento del primero en 1964 mantenían

---

56 El antecedente inmediato del katarismo es la obra de Fausto Reinaga, *La revolución india*, cuya primera edición se publicó en 1970. Está considerada la primera expresión discursiva de la emergencia de un sujeto político y social étnico. Sobre los orígenes y evolución del movimiento katarista, se destaca el clásico estudio de Javier Hurtado. *El Katarismo* [1986] (La Paz: CIS-Biblioteca del Centenario de Bolivia, 2016).

57 Magdalena Cajías, *op. cit.*, 2014, pp. 136-137.

58 Asamblea Permanente de los Derechos Humanos en Bolivia, *op. cit.*, 1978.

un vínculo complejo, con acercamientos y desacuerdos. Se produjo entonces un vuelco importante: Paz Estenssoro, que en los años cincuenta representó el ala izquierda del movimientismo, formó el FPN con la FSB bajo la conducción de Banzer; en tanto Siles Zuazo pasó a liderar el Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda (MNRI) que, cercano a Torres, después del 21 de agosto se sumó a la oposición a la dictadura, con su jefe exiliado en Chile, primero, y luego en Venezuela<sup>59</sup>.

## CONCLUSIONES

La dictadura de Banzer fue un gobierno contrarrevolucionario, surgido de un golpe de Estado preventivo, que llevó adelante una política de dura represión contra la clase obrera, con el propósito de operar cambios cualitativos y sustanciales en la economía y la sociedad. En este sentido, puede afirmarse que en la década del 70 se prefiguraron las tendencias fundamentales que tendría la Bolivia post 1985: la derrota física y política de los trabajadores que debilitó al movimiento obrero minero; la ruptura del Pacto Militar Campesino; el surgimiento del Katarismo y la formación de la organización nacional campesina; el despliegue de la sociedad civil con el empoderamiento de diversos movimientos sociales; y el ascenso de Santa Cruz como motor del capitalismo en Bolivia.

Durante los primeros años de la dictadura, hasta el autogolpe del 9 de noviembre de 1974, funcionó un gobierno de coalición cívico-militar apoyado en el Frente Popular Nacionalista, que nucleó al MNR dirigido por Víctor Paz Estenssoro y la FSB, liderada por Mario Gutiérrez. Ambos partidos fueron sacudidos por duras disputas internas y rupturas, pero conformaron un verdadero laboratorio político, en el cual se amalgamaron los partidos que en la década del ochenta iban a dar vida a la “democracia pactada” y al paradigma neoliberal en Bolivia: el MNR de Paz Estenssoro y la Alianza Democrática Nacional (ADN) de Banzer, conformado este último por el dictador, con lo que quedaba de la antigua Falange. En este laboratorio político, el nacionalismo se amalgamó con el anticomunismo, una doctrina que los militares bolivianos compartieron con los militantes del MNR y la Falange.

En el plano económico, Banzer no modificó sustancialmente la estructura económica del país, pero sí preparó el camino a futuras reformas más profundas. Arregló cuentas con el capital extranjero nacionalizado, dictó leyes para facilitar el movimiento de capitales y el desembarco privado en la explotación de hidrocarburos, derivó recursos de la minería estatal hacia la agroindustria cruceña. En los primeros años de gobierno se benefició con la suba del precio del estaño,

---

59 Rafael Archondo Quiroga e Isabel Siles Ormachea, *Sobre un barril de pólvora. Biografía de Hernán Siles Zuazo* (La Paz: Plural, 2022), pp. 363-365.

y como consecuencia de la crisis del petróleo de 1973, se benefició nuevamente con el alza del precio de los hidrocarburos.

Contradictoriamente, durante los años de plomo del terrorismo de Estado, se incubó un lento desarrollo de la sociedad civil, con el surgimiento de nuevos actores políticos y sociales. Se ha mencionado al katarismo, cuya importancia en el surgimiento de un nuevo movimiento campesino y el despertar del indianismo y la recuperación de las identidades originarias es difícil exagerar. Pero no solo actores ya conocidos como los campesinos y los estudiantes irrumpen en esos años, también hubo un desarrollo muy importante del movimiento de mujeres, de organizaciones y colectivos militantes vinculados a la Iglesia Católica, del activismo en torno a los derechos humanos y las libertades democráticas.

En este artículo nos propusimos reconstruir y reflexionar sobre algunos aspectos de los primeros años de la dictadura, especialmente las alianzas políticas, las coordinadas ideológicas y las medidas económicas. Su profundización, a partir del autogolpe de noviembre de 1974, quedó a mitad de camino, consecuencia de la resistencia del movimiento obrero y demás movimientos sociales emergentes, y los cambios en el contexto internacional. Cuando finalmente los años oscuros llegaron a su fin, la sociedad boliviana que ingresaba en un nuevo ciclo institucional, era muy distinta de aquella que un día vio como civiles y militares se encolumnaron para aplastar un proceso inédito de radicalización política.

## BIBLIOGRAFÍA

- ANTELO LEÓN, Ramiro (comp.), *Pensamiento político de Víctor Paz Estenssoro* (La Paz: Plural, 2003).
- ARCHONDO QUIROGA, Rafael; SILES ORMACHEA, Isabel, *Sobre un barril de pólvora. Biografía de Hernán Siles Zuazo* (La Paz: Plural, 2022).
- ASAMBLEA PERMANENTE DE LOS DERECHOS HUMANOS EN BOLIVIA (APDHB), *La huelga de hambre* (La Paz: 1978).
- CAJÍAS, Lupe, *Juan Lechín. Historia de una leyenda* (La Paz-Cochabamba: Los amigos del libro, 1994).
- CAJÍAS, Magdalena, “La implantación del poder militar y el retorno de la democracia (1964-1982)”, en *Bolivia, su Historia, Tomo VI. Constitución, desarrollo y crisis del Estado del 1952* (La Paz: Coordinadora de Historia, 2014).
- DUNKERLEY, James, *Rebelión en las venas* (La Paz: Plural, 2003 [1987]).
- GALLARDO LOZADA, Jorge, *De Torres a Banzer. Diez meses de emergencia en Bolivia* (Buenos Aires: Periferia, 1972).
- HERNÁNDEZ, Juan Luis. “La Asamblea Popular Boliviana”, en GUEVARA, Gustavo Carlos (coord.), *Sobre las Revoluciones Latinoamericanas del siglo XX* (Buenos Aires: Newen Mapu, 2023).
- HERNÁNDEZ, Juan Luis; SALCITO, Ariel (comps.), *La Revolución Boliviana. Documentos fundamentales* (Buenos Aires: Newen Mapu, 2007).

- HURTADO, Javier, *El Katarismo* (La Paz: CIS-Biblioteca del Centenario de Bolivia, 2016. [1986]).
- JOHN, Steven Sándor, *El trotskismo boliviano. Revolución Permanente en el altiplano* (La Paz: Plural, 2016).
- KLEIN, Herbert S., *Historia de Bolivia* (La Paz: Juventud, 2002).
- LAVAUD, Jean-Pierre, *El embrollo boliviano. Turbulencias sociales y desplazamientos políticos 1952-1982* (Cochabamba-La Paz: CESU-IFEA-Hisbol, 1998).
- LAVAUD, Jean-Pierre, *La dictadura minada* (La Paz: IFEA-Plural, 2003).
- LÓPEZ SERRANO, Fernando Marcelo, “¿Hay que acabar con los comunistas! Santa Cruz, días previos al golpe de 1971”, *Revista Científica. Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales* 5, año 4, 2024, pp. 1-10. <https://doi.org/10.56469/dcps.v4i5.1257>
- LORA, Guillermo, *Bolivia: de la Asamblea Popular al golpe fascista* (Buenos Aires: El Yunque, 1972).
- LOZADA, Mario, *Nacionalismo, socialismo y clase obrera en Bolivia* (Buenos Aires: CEAL, 1974).
- PEÑALOZA CORDERO, Luis, *Nueva Historia Económica de Bolivia. El Estaño* (La Paz-Cochabamba: Los amigos del libro, 1985).
- PINTO PARABÁ, Miguel, “El retorno de Víctor Paz y el golpe del 71”, *La Razón*, 4 de noviembre de 2020.
- QUIROGA SANTA CRUZ, Marcelo, *Bolivia recupera la palabra: juicio a la dictadura* (La Paz: MEP, 1982).
- REINAGA, Fausto, *La Revolución India* (La Paz: WA-GUI, 2007 [1970]).
- RIVERA CUSICANQUI, Silvia, “Luchas campesinas contemporáneas en Bolivia: el movimiento ‘katarista’ 1970-1980”, en ZAVALETA MERCADO, René, *Bolivia, hoy* (México: Siglo XXI, 1987), pp. 129-168.
- ROJAS, Javier Sebastián, “La política represiva en Siglo XX durante la segunda etapa de la dictadura de Banzer (1974-1977), *Ni Calco Ni Copia. Revista del Taller Inter-Universitario de Problemas de América Latina*, 11, 2025, pp. 63-84.
- ROYUELA COMBONI, Carlos, *Cien años de hidrocarburos en Bolivia* (La Paz-Cochabamba: Los amigos del libro, 1996).
- SLATMAN, Melisa, “Contrarrevolución en el Cono Sur. El ciclo de Dictaduras de Seguridad Nacional (1964-1990)”, en GUEVARA, Gustavo Carlos (coord.), *Sobre las Revoluciones Latinoamericanas del siglo XX* (Buenos Aires: Newen Mapu, 2023), pp. 299-318.
- ZAVALETA MERCADO, René, “El Poder Dual en América Latina” [1973], en *Obra Completa. Tomo I: Ensayos 1957-1974* (La Paz: Plural, 2011), pp. 367-526.

### Fuentes Primarias

- Cuadernos de Marcha*, Nro. 51, Montevideo, 1971.
- Instituto Nacional de Estadísticas. *Censo de Población y Vivienda de Bolivia: años 1950, 1976 y 1992*
- La Razón*, La Paz, año 1971.
- La Opinión*, Buenos Aires, año 1973.
- La Prensa*, Buenos Aires, año 1974.
- Primera Plana*, Buenos Aires, año 1971.

# Reconfiguración municipal, autoritarismo y dictadura. Búsqueda de consensos y recepciones en Uruguay (1973-1984)

JAVIER CORREA MORALES   
Universidad de la República

## Resumen

La última dictadura en Uruguay duró, a diferencia de las anteriores, doce años. El 27 de junio de 1973 el presidente —electo en noviembre de 1971 por el Partido Colorado— Juan María Bordaberry encabezó el golpe de Estado que clausuró las cámaras legislativas nacionales y departamentales; y profundizó la aguda represión que se sucedía desde años atrás; a partir de allí, sin controles parlamentarios y sociales. El régimen gobernó de forma autoritaria y puso en práctica, desde sus inicios, proyectos que reconfiguraron reclamos e iniciativas de décadas anteriores. A la vez, recogió iniciativas de otros gobiernos dictatoriales. Pese al rechazo de una parte significativa de la sociedad, los respaldos logrados permitieron gobernar, a nivel nacional y departamental. El artículo pretende dar cuenta y analizar una serie de estrategias oficiales, impuestas en los gobiernos departamentales desde 1973 y hasta 1984. Tales iniciativas, que buscaban generar consensos para legitimar el régimen, lograron actitudes favorables y oscilantes. El análisis propuesto, centrado en organismos estatales y figuras políticas que no suelen ser considerados por la historiografía uruguaya, busca dialogar con ella y aportar herramientas para poder comprender cómo se gobernó el país durante los doce años de dictadura.

## Palabras clave:

Dictadura; Participación política; Institucionalidad municipal.

## Abstract

Unlike previous ones, the last dictatorship in Uruguay lasted twelve years. On June 27, 1973, President Juan María Bordaberry—elected in November 1971 by the Colorado Party—led the coup d'état that dissolved the national and departmental legislative chambers and deepened the severe repression that had been unfolding for years. From that point on, without parliamentary or social oversight, the regime governed in an authoritarian manner and, from its very beginnings, implemented projects that reconfigured demands and initiatives from previous decades. At the same time, it adopted initiatives from other dictatorial governments. Despite the rejection of a significant portion of society, the support it obtained allowed it to govern at both national and departmental levels. This article aims to describe and analyze a series of official strategies imposed in departmental governments from 1973 to 1984. These initiatives, which sought to generate consensus to legitimize the regime, produced favorable and fluctuating attitudes. The proposed analysis, focused on state agencies and political figures not usually considered by Uruguayan historiography, seeks to engage in dialogue with it and to provide tools for understanding how the country was governed during the twelve years of dictatorship.

## Keywords:

Dictatorship; Political participation; Municipal institutionalidad.

## INTRODUCCIÓN

Durante las décadas de 1960 y 1970 se sucedieron y consolidaron dictaduras en buena parte de los países de América, en particular en los del Cono Sur. Uruguay, que se diferenciaba de sus vecinos —salvo Chile— por la sucesión de gobiernos surgidos mediante elecciones, no fue la excepción. El 27 de junio de 1973 el presidente Juan María Bordaberry (en el cargo desde marzo de 1972 tras el triunfo del Partido Colorado en las elecciones de fines de noviembre del año anterior) encabezó, junto a las cúpulas de las Fuerzas Armadas, un golpe de Estado. No era la primera vez que un presidente en funciones lo hacía: durante el siglo XX, los colorados Gabriel Terra (en 1933) y Alfredo Baldomir (en 1942) decidieron quebrantar la Constitución vigente, clausurar los órganos parlamentarios y gobernar de manera excepcional. En los tres casos hubo significativos apoyos partidarios, institucionales y de grupos económicos y sociales. También oposiciones.

Sin embargo, la dictadura encabezada por Bordaberry —a diferencia de las anteriores— inauguró un régimen que, pese a los cambios de autoridades y los proyectos divergentes, se mantuvo por doce años. En ese lapso el Estado reforzó las políticas represivas que abarcaron a buena parte de la sociedad. De todos modos, los operativos, coordinaciones regionales y planes militares se concentraron con mayor énfasis en los sectores de izquierdas. No obstante la centralidad de la represión, hubo otras estrategias de dominación y búsquedas de “apoyo”. Entre ellas, las que se enfocaron en crear una nueva institucionalidad, sea a nivel nacional, o departamental (nivel de gobierno que, en esos años, también se denominaba municipal)<sup>1</sup>.

Este artículo, dividido en seis apartados, se concentra, precisamente, en una serie de estrategias puestas en práctica desde el 27 de junio de 1973 hasta 1984, principalmente, en los 19 departamentos del país. En ellos —salvo en uno, Rocha— decidieron permanecer en sus cargos, tras el golpe de Estado, 18 intendentes, pese a que, constitucionalmente, debían gobernar junto a los órganos legislativos. Los jerarcas que aceptaron la propuesta de Bordaberry y las cúpulas militares gobernaron sin controles parlamentarios desde entonces y hasta mediados de agosto de 1973, cuando se instalaron juntas de vecinos. Esos órganos, no previstos constitucionalmente, sustituyeron, por decreto, a las juntas departamentales e inauguraron una nueva forma de participación política (vigente hasta enero de 1985): con legis-

---

1 Los municipios, como tercer nivel de gobierno, se crearon en octubre de 2009 (leyes 18.567 y 19.272). Pese a ello, la normativa que regula la institucionalidad departamental (vigente desde 1935) se llama Ley Orgánica Municipal. Por otra parte, los gobiernos departamentales (por lo general denominados intendencias) se componen de un órgano ejecutivo, encabezado por un intendente; y un órgano legislativo llamado Junta Departamental, integrado por 31 ediles. Tienen, constitucionalmente, autonomía política y no dependen del Poder Ejecutivo nacional. Los cargos de los ediles eran (y son aún) honorarios. En el período abordado, intendentes y ediles eran electos el mismo día que los restantes cargos (ejecutivos y legislativos) nacionales. Véase: Daniel Hugo Martins, *El gobierno y la administración de los departamentos* (Montevideo: Laganusi, 1999).

ladores propuestos por intendentes y jefes de Policía y designados por el titular del Poder Ejecutivo nacional<sup>2</sup>.

El respaldo inmediato de 18 intendentes (trece del Partido Nacional, PN, y cinco del Partido Colorado, PC) le permitió al régimen mostrarse apoyado<sup>3</sup>. Al mismo tiempo, pudo estructurar una política institucional relevante, tanto por sus intenciones legitimantes y fundacionales, como por su despliegue territorial: las “intervenciones municipales”. Puestas en práctica desde el 14 de setiembre de 1973 —con el apartamiento, ilegal, del cargo del intendente de Colonia y su sustitución por un coronel del Ejército nacional— se decretaron a lo largo del país hasta el final de la dictadura<sup>4</sup>. Este abordaje permitirá, además, reconsiderar algunas interpretaciones, que se tornaron “clásicas”, como la periodización en tres etapas (comisarial, fundacional y transicional) de la última dictadura<sup>5</sup>.

Poder comprender las características de un régimen dictatorial requiere conocer sus estrategias —entre las que las represivas, en diversas intensidades, fueron permanentes, más no únicas—, preguntarse por las recepciones y considerar los elencos gubernamentales, y sus motivaciones. Max Weber, entre otros, advirtió que todo gobierno pretende tener legitimidad y asegurar su “dominación” sobre la ciudadanía; y Antonio Gramsci analizó (para otras experiencias) las relaciones entre hegemonía, coacción, coerción y consenso<sup>6</sup>. En ese sentido, Phillippe Burrin afirmó que, al igual que otras dictaduras, la ocupación nazi en Francia no se sostuvo “con la simple coerción”<sup>7</sup>. Por eso su obra se centró en analizar elementos básicos de la adaptación, ya que abarca “el sentimiento de su necesidad, el interés material, la complacencia personal, la convicción o la connivencia ideológica”<sup>8</sup>. En nociones como estas se centran los análisis de esta investigación<sup>9</sup>.

2 Javier Correa Morales, “Centralización e intentos de restauración: las juntas de vecinos durante la dictadura”, en Magdalena Broquetas y Gerardo Caetano (coords.), *Historia de los conservadores y las derechas en Uruguay. Guerra fría, reacción y dictadura* (Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental, 2022), pp. 270-283.

3 Véase: “Resultados de las elecciones nacionales y departamentales de 1971”, en: *Corte Electoral. Estadísticas* [Enlace].

4 En Uruguay, a diferencia de otros países, la Constitución no habilita al Poder Ejecutivo nacional a intervenir los gobiernos departamentales. Javier Correa Morales, “Legitimidad, apoyos y política militar en los gobiernos departamentales”, en Magdalena Broquetas y Gerardo Caetano (coords.), *La dictadura civil militar en Uruguay. Nuevas perspectivas* (Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental, 2025a), pp. 37-73.

5 La periodización corresponde a Luis Eduardo González, “Transición y restauración democrática. Documento de trabajo 105” (Montevideo: CIESU, 1985). Fue retomada por Gerardo Caetano y José Rilla, *Breve historia de la dictadura* (Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental, 2005 [1987]).

6 Max Weber, *Economía y sociedad. Esbozo de sociología comprensiva* (Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 2002 [1922]). Antonio Gramsci, *Antología* (Buenos Aires: Siglo veintiuno editores, 2004 [1970]).

7 Phillippe Burrin, *Francia bajo la ocupación nazi, 1940-1944* (Barcelona: Paidós, 2004), p. 486.

8 *Ibidem*, pp. 15-16.

9 La opción por privilegiar este enfoque lleva a descartar otros, que podrían ser considerados para futuras investigaciones, como los de “autoritarismo subnacional”.

Precisamente, la participación en regímenes autoritarios ha dado lugar a intensos debates, algunos aún no resueltos, pese a la abundante literatura sobre el tema<sup>10</sup>. En cierta medida, la dificultad mayor a la hora de abordar la temática es dar cuenta de la recepción de las estrategias, incluso en aquellas que, en apariencia, resultan claras, como la disposición a aceptar cargos en el gobierno. La historiografía uruguaya ha desarrollado análisis que han permitido conocer, desde diversos ángulos y enfoques, la particular coyuntura que hizo posible el autogolpe de Estado<sup>11</sup>. En esos abordajes, el rol cada vez más protagónico de las Fuerzas Armadas en la conducción estatal y las desavenencias dentro del sistema partidario suelen ser centrales para explicar la disolución del Parlamento en la madrugada del 27 de junio.

Sin embargo, las investigaciones sobre el período, por lo general, no han prestado atención a estrategias oficiales complementarias, como la clausura de los otros órganos legislativos —las juntas departamentales— que, por mandato constitucional, tenían como una de sus tareas el contralor de sus respectivos órganos ejecutivos y que, por su propia integración, representaban distintos sectores partidarios y sociales. En ese sentido, la decisión ampliamente mayoritaria de los intendentes debe interpretarse como una política en búsqueda de legitimidad y consensos exitosas. Tras las elecciones de 1971, ellos representaban a la ciudadanía y a sus partidos a nivel departamental. Por ende, le permitieron gobernar sin mayores contratiempos. Por otra parte, como se verá en el último apartado, durante la dictadura hubo otras personas, integrantes del PC y PN, que aceptaron integrar los ejecutivos departamentales, incluso en coyunturas en las que los rechazos se generalizaron.

Todo eso hace que el análisis propuesto permita conocer las actitudes de un grupo de políticos que decidió —en distintos momentos— formar parte del régimen, sin que ello haya significado un apoyo explícito a todos los procedimientos oficiales (sobre todo los criminales y económicos), o que sus compartimientos no experimentaran cambios y contradicciones con el correr de los años. Como sugiere Burrin, es preciso distinguir, aún entre las personas que se “adaptaron”, a quienes lo hicieron para optar por el “mal menor, pagado frecuentemente con el compromiso”, de otras, como las consideradas en este artículo, cuya adaptación fue elegida, voluntaria y caracterizada por la “complacencia”<sup>12</sup>. Por último, es preciso

---

10 Por motivos de espacio no se desarrollarán aquí análisis profundos sobre los abordajes y discusiones teóricas referidas a los consensos y las actitudes sociales bajo regímenes autoritarios. De todos modos, pueden consultarse, entre otras obras: Claudio Hernández Burgos, *Franquismo a ras del suelo. Zonas grises, apoyos sociales y actitudes durante la dictadura (1936-1976)* (Granada: Universidad de Granada, 2013), pp. 17-35; Daniel Lvovich, “Actitudes sociales y dictaduras: las historiografías española y argentina en perspectiva comparada”, en Gabriela Águila y Luciano Alonso (coords.), *Procesos represivos y actitudes sociales. Entre la España franquista y las dictaduras del Cono Sur* (Buenos Aires: Prometeo, 2013), pp. 123-146; y, con énfasis en el caso uruguayo: Javier Correa Morales, *Lo hicimos ayer, hoy y lo seguiremos haciendo. Autoritarismo civil militar en dictadura. Durazno, 1973-1980* (Montevideo: Editorial Fin de Siglo, 2018), pp. 24-27.

11 Para profundizar, véase: Vania Markarian, “Balance y novedades de la historiografía uruguaya a cincuenta años del golpe de Estado de 1973”, *Nuevo Mundo Mundos Nuevos* (2024).

12 Phillippe Burrin, *op. cit.*, 2004, pp. 13-15.

considerar que quienes ocuparon estos y otros cargos similares se diferencian, analíticamente, principalmente de aquellos que no formaron parte del régimen, pero que, con distintas intensidades y motivaciones, lo apoyaron<sup>13</sup>.

### **GOLPE DE ESTADO E INTENDENTES ELECTOS (1973)**

Tras la confirmación del golpe de Estado comenzaron a emitirse comunicados oficiales. No estaba claro si lo que se pretendía, al clausurar los parlamentos, era convocar a nuevas elecciones con personas y partidos proscriptos. Las descripciones y análisis de aquellos momentos suelen concentrarse en las restricciones a la prensa oficializadas en el correr del día 27, los discursos opositores en el Parlamento de la noche previa, las renunciaciones posteriores de miembros del gabinete y la huelga general de quince días realizada por los sindicatos de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT). En contrapartida, sobre los diversos apoyos al golpe de Estado la literatura académica ha tenido un desarrollo menor.

Dentro de las actitudes favorables, la de los 18 intendentes que aceptaron permanecer en sus cargos se destaca por varios motivos. Uno de los principales es la pertenencia partidaria ya que ocupaban sus cargos en representación del PC o PN, al igual que los ediles. Otro de los motivos es que solo renunció el de Rocha: se supo el 29 de junio<sup>14</sup>. Lo hizo oficial un comunicado del Ministerio del Interior que reconocía que la decisión fue tomada tras la disolución de las juntas departamentales<sup>15</sup>. La prensa de circulación nacional que había evitado la censura no informó sobre el caso<sup>16</sup>.

En paralelo, Bordaberry tuvo la primera reunión con Oscar Rachetti, intendente de Montevideo (de su partido y sector), quien cumplía funciones de coordinador del Congreso Nacional de Intendentes. Dos días después, volvieron a reunirse para hablar de la “normalidad vigente” en la “Intendencia de Montevideo”. También abordaron el tema de las juntas de vecinos: “todavía debían instrumentarse las normas de su funcionamiento y constitución”<sup>17</sup>.

13 Véase, entre otros: Daniel Lvovich, “Los que apoyaron. Reflexiones y nuevas evidencias sobre el apoyo difuso a la dictadura militar en su primera etapa (1976-1978)”, *Anuario IEHS* 35 (2), 2020, pp. 125-142.

14 Amaral integraba las listas n° 5 y 897. Para que el cargo quedara vacante, renunciaron también sus suplentes: Orlando Mesías, Ángel Rocca López, Irma S. de Otamendi y Bernardo Ventura. En consecuencia, el Poder Ejecutivo nacional nombró “intendente interino” (ese cargo no existía en la Constitución), al jefe de Policía, coronel Alfonso Feola.

15 “Siguen en sus cargos quince Intendentes. Comunicado del Ministerio del Interior”, *El Heraldo*, 29 de junio de 1973, p. 1.

16 Sí lo hizo un periódico de circulación departamental: “Se alejó el intendente” y “Dr. Mario Anza Vigliola”, *El Este*, 2 de julio de 1973, p. 1.

17 “Rachetti: Absoluta normalidad en la intendencia capitalina”, *La Mañana*, 3 de julio de 1973, p. 4.

Es preciso señalar las diferencias entre las coberturas de la renuncia de Amaral —que intentó ocultarse— con las de la reunión que, durante la primera semana de julio, hubo entre Bordaberry, los intendentes y otras autoridades nacionales. Allí se acordaron cuestiones relevantes, pero sobre todo se trató de una estrategia para reafirmar la legitimidad buscada por el régimen. Las noticias daban cuenta de ello e incluso se publicaron fotografías que mostraban al titular del Poder Ejecutivo en una mesa de trabajo rodeado de los jefes municipales<sup>18</sup>.

*La Mañana*, uno de los medios que solía actuar como vocero oficial, afirmó que en pocos días “quedará constituida la Junta de Vecinos de Montevideo y sucesivamente se habrá de integrar también las 18 juntas del interior de la República”<sup>19</sup>. La idea era mostrar, al menos, dos asuntos: que el nuevo funcionamiento institucional estaba en marcha —dos días después de finalizada la huelga general—, y que la “República” seguía gobernada por un presidente, los ministros designados y los intendentes<sup>20</sup>. Tras la reunión del 11 de julio dijo que Bordaberry aseguró mantener los recursos, la asistencia financiera, y “la disposición de un importante auxilio a fin de contemplar las necesidades de maquinaria y repuestos para las intendencias”<sup>21</sup>.

Otra noticia que trascendió tras la reunión fue que el intendente de San José (Milton Pianzola) se encargaría de hablar con Amaral para que retirara su renuncia<sup>22</sup>. Días después, el órgano de prensa oficial del Movimiento Nacional de Rocha (PN), que estaba clausurado desde el golpe de Estado, publicó una extensa carta del exintendente en la que confirmaba la reunión con Pianzola, relataba presiones y negociaciones, con Rachetti y otras autoridades nacionales, y reafirmaba su decisión ya que, entendía: “la política exige conductas, exige principios, exige sacrificios [...] mantengo mi conducta y mis principios que son los que dieron origen al Movimiento Nacional de Rocha”<sup>23</sup>.

Estos dos tipos de actitudes —las de Amaral y los miembros de su agrupación, por un lado, y la de los 18 intendentes, por otro— permiten visualizar, al menos, tres asuntos. El primero, dar cuenta del rol destacado que comenzó a tener Rachetti, ya que en tres días mantuvo dos reuniones con Bordaberry y, tras finalizarlas, se concretaron los decretos que pondrían en marcha una nueva estrategia de legiti-

18 Por ejemplo: “Inminente nombramientos de las Juntas de Vecinos”, *Ahora*, 12 de julio de 1973, p. 4; “Bordaberry recibió a los intendentes”, *Aquí Está*, 13 de julio de 1973, p. 1.

19 “Este mes quedará constituida la Junta de Vecinos de Montevideo”, *La Mañana*, 12 de julio de 1973, p. 4.

20 El Gabinete quedó completo en los días previos, cuando asumieron cuatro ministros. “Tomaron posesión de sus cargos los nuevos ministros”, *Claridad*, 12 de julio de 1973, p. 2. La huelga general decretada por la Convención Nacional de Trabajadores (CNT) el día del golpe de Estado se mantuvo hasta el 11 de julio. Véase: Álvaro Rico (coord.), *15 días que estremecieron al Uruguay. Golpe de Estado y huelga general. 27 de junio-11 de julio de 1973* (Montevideo: Editorial Fin de Siglo, 2005).

21 “Este mes quedará constituida la Junta de Vecinos de Montevideo”, *La Mañana*, 12 de julio de 1973, p. 4.

22 “Gestionan retiro de la renuncia del Intendente de Rocha”, *El Heraldo*, 14 de julio de 1973, p. 3.

23 “Respuesta al Congreso de Intendentes”, *El Civismo*, 25 de julio de 1973, pp. 1 y 4.

mación a través de una institucionalidad dictatorial, presentada como republicana. El segundo, considerar la actitud de los intendentes: aceptaron no solo esas imposiciones, también comenzaron a actuar como representantes del Poder Ejecutivo al decidir colaborar —luego de una reunión a la que los convocó Bordaberry el 11 de julio— activamente con el armado de las listas de vecinos candidatos a integrar las nuevas Juntas<sup>24</sup>. El tercer punto, mostrar cómo el gobierno nacional utilizó la actitud favorable de los 18 jefes para “aparentar normalidad” (noción clave para la búsqueda de consensos) y, de ese modo, legitimar sus actos contravencionales<sup>25</sup>.

### ENSAYOS DE GESTIÓN “CIVIL” Y MILITAR EN LOS DEPARTAMENTOS (1973)

Con la instalación definitiva de las juntas de vecinos (en Montevideo, primero, el 14 de agosto, y en los restantes departamentos en los días siguientes) comenzó una nueva etapa en la particular institucionalidad golpista: los intendentes electos gobernaron junto a legisladores designados por el titular de Poder Ejecutivo nacional. Otro hito importante del “nuevo gobierno” en marcha se dio hacia fin de mes: junto a su flamante gabinete ministerial y las jerarquías de las Fuerzas Armadas, Bordaberry participó del primer cónclave gubernamental —en el departamento de Rocha— que generó, entre otras cuestiones, trascendidos sobre el gobierno departamental de Colonia y su posible “intervención”<sup>26</sup>.

En dicha reunión se reforzó lo anunciado la semana anterior con la aprobación oficial del “Plan Extraordinario de Obras Públicas”. Según la prensa, destinaba una suma muy significativa de dinero a los departamentos<sup>27</sup>. Lo paradójico, en este caso, es que el “presidente” que anunciaba un “plan extraordinario” para mejorar la situación de los departamentos, era el mismo que antes del golpe de Estado y que, a su vez, ganó las elecciones de 1971 presentándose como el continuador de la gestión encabezada, desde marzo de 1967, por el presidente Óscar Gestido, primero, y por el vicepresidente Jorge Pacheco Areco después.

En tanto, el régimen, volvió a decidir sobre cuestiones trascendentes —y fuera de la Constitución— con relación a los gobiernos departamentales. El 14 de setiembre apartó del cargo al intendente de Colonia, y decretó su intervención y la de Rocha<sup>28</sup>. Dos semanas después lo hizo en Maldonado, cuyo jefe, Gilberto

24 Para conocer otras renuncias de miembros del PN en ese contexto, y las puestas en funcionamiento de las juntas de vecinos, véase: Javier Correa Morales, *op. cit.*, 2025a.

25 Cándida Calvo Vicente, “El concepto de consenso y su aplicación al estudio del régimen franquista”, *Spagna Contemporánea* 7, 1995, pp. 143-160.

26 “Intervención Municipal: rumores circulantes y las opiniones de dos jefes”, *La Colonia*, 28 de agosto de 1973, p. 1.

27 “Se acordaron de Durazno”, *La Publicidad*, 7 de setiembre de 1973, p. 5.

28 “Intervienen con militares las comunas de Rocha y Colonia”, *El Diario*, 15 de setiembre de 1973, p. 4.

Acosta Arteta, era una destacada figura del PC<sup>29</sup>. Si bien los intendentes apartados tenían en su contra denuncias que la prensa solía publicar, sobre todo antes del golpe de Estado, la decisión debería llamar la atención pues recién se habían instalado las juntas de vecinos y porque ambos pertenecían a sectores partidarios que, salvo excepciones, apoyaban a Bordaberry, como hicieron ellos mismos desde el 27 de junio<sup>30</sup>. En cuanto a lo institucional, las disposiciones decretadas inauguraron una nueva etapa caracterizada, en este caso, por la intromisión directa del Poder Ejecutivo Nacional y el Ejército en los gobiernos departamentales. A partir de entonces, hubo “intendencias” intervenidas y administradas por un coronel y con legisladores designados por fuera de lo previsto constitucionalmente.

En los meses siguientes el régimen pareció consolidarse: organizó el segundo cónclave y dispuso nuevas intervenciones, entre las que se destacó la de la Universidad de la República, a fines octubre, y la disolución de varios partidos de izquierda, a fines del mes siguiente<sup>31</sup>. El 7 de diciembre convocó, sorpresivamente, a los 19 intendentes para un nuevo cónclave en el que se les transmitieron medidas trascendentes. Fue en Paso de los Toros, departamento de Tacuarembó. Allí se fijaron criterios generales y uniformes para todos los gobiernos departamentales en lo relativo al presupuesto, impuestos, financiamiento del déficit y equipamiento. El objetivo planteado fue el de “coordinar y racionalizar” su labor para que se “ajustara” a la política de desarrollo del gobierno central. Bordaberry dijo, antes de comenzar la reunión, que el “sistema municipal” carecía de organización y eso lo dejaba fuera del “esfuerzo de renovación” que impulsaba el Poder Ejecutivo. Además, hizo hincapié en “defectos importantes [...] consecuencia de la falta de evolución institucional del país<sup>32</sup>.”

29 Andrés Noguez Reyes, *San Carlos bajo la dictadura (1973-1985)* (Montevideo: Ediciones Trilce, 2013), pp. 69-73.

30 En el PC, el sector mayoritario, Unión Nacional Reelectionista, conducido por Pacheco y Bordaberry, respaldó, salvo excepciones personales, el golpe de Estado. Hubo otros sectores, como la Lista 15 que se pronunciaron en contra y promovieron la renuncia de sus ministros, pero no la de sus intendentes. Dentro del PN, la corriente “wilsonista”, mayoritaria y liderada por Wilson Ferreira Aldunate y Carlos Julio Pereyra (del Movimiento Nacional de Rocha), también se opuso enfáticamente al golpe de Estado, aunque solo uno de los siete intendentes electos en su representación renunció. Los grupos hereristas, el otro gran bloque del PN, estaban divididos respecto a los apoyos a Bordaberry y las cúpulas militares. Salvo excepciones, sus dirigentes nacionales se expresaron a favor. Los siete intendentes electos (entre ellos el de Colonia) aceptaron continuar en sus cargos. Véase, además de las obras ya señaladas: Silvia Dutrénit Bielous, “Del centro al centro político”, en Silvia Dutrénit Bielous (coord.), *Diversidad partidaria y dictaduras: Argentina, Brasil y Uruguay* (ciudad de México: Instituto Mora, 1996), pp. 235-317; Carlos Demasi, “La evolución del campo político en la dictadura”, en Carlos Demasi *et al*, *La dictadura Cívico-Militar. Uruguay 1973-1985* (Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental, 2009), pp. 15-116; Marcos Rey, *Pacheco y el pachequismo. Anticomunismo y democracia restrictiva en el Uruguay del autoritarismo y la dictadura (1972-1985)*. (Montevideo: Universidad de la República, 2023) Javier Correa Morales, *Dictadura, reconfiguración institucional y actitudes sociales en Colonia y Durazno, Uruguay (1973-1985)* (Montevideo: Universidad de la República, 2025b), Tesis de doctorado.

31 “Asociaciones Ilícitas. Partidos Políticos. Diarios. Disolución. Clausura”, en: *Diario Oficial*, 10 de diciembre de 1973, pp. 441B-443A. [Enlace].

32 “Reformas constitucionales y legales para coordinación de los Municipios”, *El Diario*, 8 de diciembre de 1973, p. 4.

Más adelante afirmó que el constante “auxilio” que daba el gobierno central a “las intendencias” limitaba indirectamente su autonomía. Entonces, debían, con la legislación adecuada, lograr autofinanciamiento y contribuir a impulsar firmemente el desarrollo nacional<sup>33</sup>. Con esas pautas sesionó el cónclave. Según la prensa, “prácticamente todos los intendentes” apoyaron la “gestión del gobierno y el concepto de que comparten la coordinación planteada”<sup>34</sup>. En concreto, el gobierno central le impuso a los departamentales distintas reglas para que lograran autofinanciarse; el “objetivo final” era la “institucionalización de todo”. A eso se llegaría con “reformas legales e incluso Constitucionales”<sup>35</sup>.

La “propuesta” recibió un apoyo inmediato, pese a que la gran mayoría de los intendentes reclamaban, desde antes del golpe de Estado, más recursos para afrontar deudas y proyectos. Las pautas indicadas en Paso de los Toros supusieron la “extinción de los subsidios por parte del gobierno central”, pero eso —para Bordaberry, los intendentes y los órganos de prensa afines— significaba “consolidar aún más la autonomía de las Intendencias, al eliminar la dependencia del auxilio permanente”<sup>36</sup>. La retórica oficial era intencionalmente confusa, no obstante, “autofinanciarse” implicaba reducir gastos y aumentar ingresos. Los jefes municipales dieron un paso, desde la complacencia a la adhesión, al asumir los costos políticos, una nueva intromisión del gobierno nacional, y hacer pública una declaración trascendente, firmada por los 19, resumida en cuatro puntos. Rachedetti la leyó en público:

1. Determinación de una política coordinada de los gobiernos departamentales, con el gobierno central, abarcando las principales funciones, económicas, administrativas, financieras, sociales y culturales de su competencia, con la finalidad de lograr mediante una acción eficiente, las obras y servicios programados, en directo beneficio de los Municipales.
2. Que de esa coordinación resulta también consolidado el principio de autonomía que rige las actividades departamentales dentro del ámbito mayor del Estado, donde actúa asimismo el gobierno central.
3. Los Intendentes Municipales, comprometieron su apoyo a la instrumentación jurídica, mediante la sanción de las normas Constitucionales y legales que reafirmen el sistema permanente, coherente y eficaz perseguido por los esfuerzos mancomunados del gobierno central y los gobiernos departamentales.

---

33 *Ibidem*.

34 “Reforma constitucional y legal acordaron en Paso de los Toros para coordinación de comunas”, *La Mañana*, 8 de diciembre de 1973, p. 1.

35 “Los intendentes municipales apoyaron los propósitos de obtener autofinanciamiento de sus presupuestos”, *La Mañana*, 8 de diciembre de 1973, p. 4.

36 *Ibidem*.

4. El apoyo decidido del gobierno central, para permitir el desarrollo de los departamentos dentro de los principios mencionados, así como la solución de problemas de equipamiento, inversiones y finalmente que reclama el concurso de las autoridades nacionales<sup>37</sup>.

El documento transmitía la idea de autonomías fortalecidas, y trabajo en conjunto entre intendentes, Poder Ejecutivo y Junta de Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas. Adolfo Aguirre González, sostuvo desde las páginas de *Marcha*, que, aunque que se negara, lo resuelto era una “abolición lisa y llana de las autonomías departamentales y locales”: en lo presupuestal, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) “órgano ajeno a los gobiernos departamentales”, ejecutaría el control. Lo mismo harían la Oficina Nacional del Servicio Civil y el Tribunal de Cuentas; las inversiones, en tanto, serían coordinadas por el Ministerio de Obras Públicas; los impuestos estarían condicionados a “valores, tasas, topes y prohibiciones que establezca el gobierno nacional”<sup>38</sup>.

Lo decretado y aceptado por los intendentes en Paso de los Toros, en suma, abrió una nueva etapa en la institucionalidad del régimen. Para implementarla se celebró una extensa reunión entre altas autoridades políticas y Rachetti<sup>39</sup>. Una semana después —el 19 de diciembre— otro organismo institucional (e ilegal) que se había anunciado desde el 27 de junio, el Consejo de Estado, entró en funciones<sup>40</sup>. El presidente designado, Martín Echegoyen, era una figura destacada de los sectores herreristas del PN. Según Carlos Demasi, esa disposición (y no las “departamentales” anteriormente señaladas) fue un “gesto inaugural”, que no parecía marcar una ruptura decisiva porque lo presidía uno de los senadores cesados y en las barras había también exsenadores<sup>41</sup>.

Justamente, Bordaberry terminaba el año con una institucionalidad que reflejaba sus concepciones políticas, apoyándose para ello en proyectos antiguos que no se habían consolidado o puesto en práctica<sup>42</sup>. La publicidad oficial pregonaba la existencia de un gobierno demócrata acompañado de “civiles”, no ya políticos. El mandatario, en declaraciones realizadas a principios de julio sostuvo que era necesaria una reforma de la Constitución que atenuara el parlamentarismo y que

---

37 “Rachetti leyó declaración del Congreso de Intendentes”, *La Mañana*, 8 de diciembre de 1973, p. 4.

38 “Los municipios maniatados”, *Marcha*, 14 de diciembre de 1973, pp. 6 y 22.

39 “El acuerdo con Intendentes fue tratado hoy en Suárez. Comenzaron a instrumentar medidas para su aplicación”, *El Diario*, 10 de diciembre de 1973, p. 6.

40 Pese a la relevancia del organismo, vigente, con modificaciones, hasta los días finales de la dictadura, no hay investigaciones académicas que se centren en él, ni las decenas de integrantes que permitieron su funcionamiento.

41 Carlos Demasi, *op. cit.*, 2009, p. 41.

42 Véase Magdalena Broquetas, *Ganar la guerra. Cultura, sociedad y política en el Uruguay autoritario, 1967-1973* (Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental, 2024).

modificara la organización municipal<sup>43</sup>. Tras cinco meses de gestión dictatorial había logrado sentar las bases necesarias y poner en práctica aquellas ideas, junto a intendentes, exintendentes y exparlamentarios que lo acompañaron en el gobierno y en las “tribunas”. Su retórica, que insistía con las diferentes crisis (económica, social, de fe) que vivía desde hacía años Uruguay, lograba, al parecer, su cometido. La estrategia discursiva omitía las responsabilidades de autoridades como él —un político que ocupó cargos partidarios representativos y ejecutivos en los últimos gobiernos— al trasladarlas a quienes “procuraron detener su actividad, con una finalidad disolvente, destruyendo y minando esa confianza”<sup>44</sup>.

### FIN DE LA AUTONOMÍA Y FRACASOS POLÍTICOS (1974-1976)

En 1974 comenzaron las reuniones y los anuncios oficiales con el fin de que los gobiernos departamentales adecuaran su funcionamiento a los mandatos aprobados. El Poder Ejecutivo fijó el 8 de marzo como plazo para que estudiaran y formularan sugerencias al anteproyecto de una nueva Ley Orgánica Municipal (la vigente se había aprobado en 1935). El documento no era público, pero según *La Publicidad* tenía “155 artículos, esencialmente técnicos, adecuados para funcionar con la Constitución vigente”. No incluía “los problemas de carácter esencialmente políticos y/o institucionales”<sup>45</sup>.

Semanas después el Congreso de Intendentes resolvió crear una Comisión para que redactara la propuesta. Se designó a cuatro integrantes, todos políticos y pertenecientes al PN: Bernachín, Burgos, Gutiérrez y Pianzola<sup>46</sup>. El proceso continuaría ya que, una vez terminado su trabajo, debían presentar la propuesta ante la Comisión Técnica, que se encargaría de redactar el proyecto definitivo, para enviarlo al Poder Ejecutivo que, a su vez, lo elevaría al Consejo de Estado. Como puede verse, a pesar de los plazos perentorios impuestos, restaba aún bastante tiempo para lograr una nueva ley (que, por otra parte, nunca se aprobó).

Al mismo tiempo, los jerarcas municipales se mostraron molestos por la insuficiencia de los recursos destinados: solicitaron mantener los subsidios “para hacer frente a la carga que soportan”<sup>47</sup>. Estos disgustos públicos dejan entrever al menos cuatro aspectos importantes. El primero, la precaria situación económica que, a pesar de los discursos, imperaba en el país. El segundo,

---

43 “No podemos negar que tenemos cierta actitud de simpatía con el régimen brasileño”, *Ahora*, 3 de julio de 1973, p. 4.

44 “Reformas constitucionales y legales para coordinación de los Municipios”, *El Diario*, 8 de diciembre de 1973, p. 4.

45 “Ley Orgánica Municipal”, *La Publicidad*, 8 de marzo de 1974, p. 7.

46 “Ley Orgánica Municipal”, *La Publicidad*, 22 de marzo de 1974, p. 7.

47 “Subsidios municipales”, *La Publicidad*, 22 de marzo de 1974, p. 10.

la fragilidad presupuestal de las comunas, vigente al menos desde que asumieron sus cargos democráticos los intendentes y Bordaberry. El tercero, que los graves problemas financieros poco tenían que ver con el funcionamiento de los legislativos —departamentales o nacionales— a los que las autoridades solían culpabilizar por la crisis. Cuarto, que los intendentes, pese a su apoyo, o tal vez por ello, podían manifestar ciertas críticas.

Precisamente, la sustitución de las juntas departamentales y las pautas “legales” aprobadas en Paso de los Toros no generaron los avances pregonados. Por el contrario, se profundizaron los enfrentamientos, por asuntos financieros, entre las autoridades económicas nacionales y algunos intendentes que, como todos, gobernaban con juntas de vecinos instaladas en agosto del año anterior.

Por ejemplo, fueron intervenidos los gobiernos departamentales de Río Negro, Treinta y Tres y Florida. El primero, por las denuncias contra el intendente que culminaron en su procesamiento. Los restantes, tras las renunciaciones de sus titulares por desavenencias administrativas con el gobierno nacional. Artigas y Soriano, en tanto, fueron intervenidos luego del fallecimiento de sus titulares. En todos los casos, el régimen implementó una medida que la Constitución no contemplaba, como sí lo hacía en otros países<sup>48</sup>.

Más allá de la situación de los departamentos, la gestión que encabezaba Bordaberry tuvo otros problemas y desencuentros políticos. El 12 de junio de 1976 las cúpulas militares anunciaron que le habían quitado el apoyo, y que su lugar lo ocuparía Alberto Demicheli, un abogado colorado que había sido designado, en 1974, presidente del Consejo de Estado y vicepresidente del país, tras el fallecimiento de Martín Echegoyen<sup>49</sup>. Como presidente en ejercicio, Demicheli firmó los dos primeros actos institucionales (argumentos “jurídicos” con pretensiones legales) de la dictadura: buscaron inaugurar una “nueva” institucionalidad, inspirada en el régimen brasileño, que desde abril de 1964 los utilizó como herramienta legal.

En cuanto a sus contenidos, el N°1 suspendió las elecciones que preveía la Constitución, basándose en el decreto del 27 de junio de 1973 que “consagraba” la “incompatibilidad de la paz social con el libre juego de los Partidos Políticos”. No estableció una fecha para realizarlas<sup>50</sup>. El N°2 consideraba, entre otras cuestiones, que el nuevo orden creado tras la disolución “constitucional” de las cámaras legislativas había sido “admitido pacíficamente en el plano nacional e internacional”, sostenía que la “agresión marxista” perturbaba aún, que estaba en riesgo la “paz social” y que eso imposibilitaba el “juego regular de los

---

48 Javier Correa Morales, *op. cit.*, 2025b

49 “Acontecimientos políticos”, *La Publicidad*, 18 de junio de 1976, p. 7.

50 “Decreto Constitucional N°1/976. Acto Institucional N°1 — suspensión de elecciones nacionales”, en: *Diario Oficial*. [Enlace].

Partidos Políticos”<sup>51</sup>. En consecuencia, dispuso la creación del Consejo de la Nación, otro organismo no previsto constitucionalmente: lo compondrían los miembros del Consejo de Estado y los de la Junta de Oficiales Generales. Su principal cometido era, en esa coyuntura, designar al nuevo presidente, a los futuros miembros del Consejo de Estado, y a otras autoridades<sup>52</sup>. Estos aspectos tampoco supusieron una novedad ya que eran manejados por altas autoridades desde el golpe de Estado.

Adicionalmente, mientras se ajustaban los procedimientos que culminarían con la designación de Aparicio Méndez para el cargo de presidente (el 14 de julio), el Ejército comenzó a proyectar un cambio trascendente en una de sus cuatro divisiones, la 2, comandada por el general Eduardo Zubía, quien cumplió un rol determinante en la designación de los interventores de Colonia, Florida y Soriano. En la segunda semana de agosto fueron convocados a su sede, en San José, los intendentes blancos de Durazno, Flores y San José. En la reunión acordaron que los jerarcas pondrían sus cargos a disposición. Fueron los únicos tres intendentes, en un total de once, que lo hicieron. Con esa decisión, la División 2 del Ejército quedó gobernada, en su totalidad y a diferencia de las otras tres, solo por coroneles interventores<sup>53</sup>.

### **LEGALIZAR PRETENSIONES “FUNDACIONALES” (1976-1980)**

El 1° de setiembre de 1976, los 19 gobiernos departamentales fueron intervenidos por el Poder Ejecutivo. Lo paradójico —y que, tal vez por eso, ha generado confusiones en abordajes historiográficos— fue que ocho de los nuevos interventores eran intendentes políticos que ejercían como tales desde antes del golpe de Estado de tres años atrás<sup>54</sup>. Los 19 titulares de los ejecutivos municipales fueron oficialmente designados como “intendentes municipales interventores” en Montevideo. Varios de ellos, sobre todo los políticos, declararon a la prensa su satisfacción y el optimismo con el que veían el nuevo período que comenzaba<sup>55</sup>. Con la disposición, se instituyó otro cargo no previsto en la Constitución, creado en setiembre de 1973. La diferencia fue que durante los tres primeros años lo ocuparon solo coroneles.

Por otra parte, cuando Méndez asumió la titularidad del Poder Ejecutivo, se concretaron e hicieron públicos dos actos institucionales que mostraron mayor continuidad que ruptura. El N°3 anunciaba el comienzo de la revisión

---

51 “Decreto Constitucional N°2/976. Acto Institucional N°2 — creación del Consejo de la Nación”, en: *Diario Oficial*. [Enlace].

52 *Ibidem*.

53 Javier Correa Morales, *op. cit.*, 2018, pp. 76-79.

54 Fueron los de Canelones, Cerro Largo, Lavalleja, Montevideo, Paysandú, Rivera, Salto y Tacuarembó.

55 Javier Correa Morales, *op. cit.*, 2018, pp. 78-80.

del régimen municipal, la renovación de los titulares de los órganos electivos y la intervención de los municipios. Tal como habían declarado en el cónclave de Paso de los Toros de diciembre de 1973, se esperaba la promulgación de una “Ley fundamental” y confirmaba que, a pesar de las intervenciones, los municipios mantendrían “la más alta autonomía técnica”<sup>56</sup>. Como se vio, la renovación de “intendentes” fue mínima (tres en diecinueve); las intervenciones, por otra parte, suprimían —desde setiembre de 1973— las potestades tributarias y sometían a la aprobación del Poder Ejecutivo el monto de las tasas y tarifas. En suma, fueron el antónimo de la autonomía, no la garantía.

En tanto, el Acto Institucional N°4 comenzaba con una afirmación que responsabilizaba por “la situación creada” a “la subversión y la inercia de los Partidos Políticos”, que generaron “la descomposición institucional que diera origen al decreto del 27 de junio de 1973”<sup>57</sup>. Después expresaba, sustancialmente, ideas semejantes a las que Bordaberry hizo públicas desde julio de 1973: la suspensión “transitoria” de la actividad de los partidos y “poner fuera de la ley a las asociaciones marxistas, principales responsables de la situación creada”. Las coincidencias del “nuevo gobierno” con el anterior fueron varias. Entre ellas, las acusaciones a los marxistas y “políticos profesionales”, o la indefinición permanente sobre la fecha de las elecciones<sup>58</sup>.

Sí hubo un cambio en cuanto al ejercicio de derechos: fue explícita y más amplia aún, ya que prohibía por 15 años realizar “actividades políticas” a los candidatos a cargos electivos que integraron las listas para las elecciones de 1966 y 1971 de los “Partidos o Grupos Políticos marxistas y promarxistas” y a quienes estuvieron asociadas electoralmente a ellas. Para los miembros de los “Partidos Tradicionales” se estipulaba lo mismo e incluía a los candidatos a presidente y vicepresidente en las elecciones señaladas; a las personas que ocuparon cargos por las cámaras legislativas en esas instancias, “salvo” las personas con “cargos políticos” en ese momento<sup>59</sup>. Se refería, sin explicitarlo, a los intendentes y miembros de las juntas de vecinos, entre otros.

Además, la prohibición alcanzaba a quienes fueron procesados por delitos de lesa nación y contra la Administración Pública cometidos durante el ejercicio de sus cargos políticos. Finalmente, disponía una “ventaja” para los proscritos de los “Partidos Tradicionales”: una “Comisión interpretativa” podía estudiar las

---

56 “Decreto Constitucional N°3/976. Acto Institucional N°3, reestructura administrativa”, en: *Diario Oficial*. [Enlace].

57 “Decreto Constitucional N°4/976. Acto Institucional N°4, prohibición de partidos políticos y libertades públicas”, en: *Diario Oficial*. [Enlace].

58 *Ibidem*.

59 *Ibidem*.

peticiones que realizaran, en los siguientes tres meses, aquellas personas —blancas y coloradas— que quisieran volver a ejercer sus derechos suspendidos<sup>60</sup>.

Después de todo, las disposiciones no establecieron, a pesar de su retórica, cambios tan profundos, al menos en la gestión de los gobiernos departamentales. Por otra parte, la “renovación” en los cuadros estatales no fue radical; a modo de ejemplo, Aparicio Méndez era ya un hombre del régimen (consejero de Estado) y con actuación previa en los gobiernos blancos de la década anterior; también la mayoría de los ministros; los “nuevos” integrantes de las juntas de vecinos (que fueron, prácticamente los mismos en todos los departamentos); y los ocho intendentes que decidieron mantener sus cargos. Varios de ellos tenían una extensa y destacada trayectoria política en sus departamentos y partidos, pese a ello, el “nuevo” régimen los volvió a designar y, pese también a los ataques implícitos a sus partidos de los actos institucionales (que continuaron la pauta de fines de noviembre de 1973), resolvieron aceptar; otra vez.

Los diagnósticos estipulados en los actos institucionales, al igual que las proyecciones, no dieron los resultados políticos esperados por los dictadores. En los departamentos, por ejemplo, la crisis financiera se profundizó e implicó aumentos constantes en los tributos y renuncias colectivas en juntas de vecinos. En tanto, en agosto de 1977 un nuevo cónclave gubernamental, en Santa Teresa (departamento de Rocha), aprobó el “Plan Político Básico”. Establecía, a grandes rasgos, un “período transitorio” hasta 1981, año en el que se aprobaría un nuevo estatuto para partidos políticos “democráticos” —que excluía a los de izquierda— y se llamaría a elecciones con un solo candidato propuesto por los partidos, pero que debía ser aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional (COSENA). A partir de entonces comenzaría otro período, de “normalización institucional”<sup>61</sup>.

A mediados de 1980 comenzaron a difundirse los avances del proyecto constitucional que el gobierno plebiscitaría el 30 de noviembre de 1980<sup>62</sup>. Si bien la idea se manejaba desde que Bordaberry encabezó el golpe de Estado, fue en el Acto Institucional N°2 que se definieron las instituciones estatales encargadas y sus etapas. La apabullante campaña publicitaria oficial no hizo hincapié en los contenidos. Eso, posiblemente, explique por qué el proyecto final se dio a conocer recién a principios de noviembre. Por otra parte, ni sus promotores ni sus críticos solían centrar sus argumentos en lo que establecía la Constitución propuesta

---

60 *Ibidem*.

61 Para conocer una reconstrucción historiográfica actualizada y la participación de diferentes políticos, sobre todo pachequistas, en la elaboración, discusión y promoción del proyecto de reforma constitucional, así como los contactos entablados desde el régimen con opositores, véase: Marcos Rey, *op. cit.*, 2023, pp. 133-163.

62 Véase, entre otros: Carlos Demasi, *op. cit.*, 2009; Cristina Torres y François Lerin, *Historia política de la dictadura uruguaya. 1973-1980* (Montevideo: Editorial Nuevo Mundo, 1987); Daniel Corbo, *El Plebiscito Constitucional de 1980. La derrota del proyecto militar para legitimar un régimen autoritario* (Montevideo: Puerta del Sur, 2006).

sobre los gobiernos departamentales. Además, no existen investigaciones que analicen ese aspecto. Entonces, una lectura detallada y un análisis con perspectiva histórica de los contenidos centrados en las “administraciones municipales” (en la Sección XVII, desde el artículo 207 al 235) puede brindar herramientas —aún no tenidas en cuenta— para comprender, por un lado, los resultados y, por otro, qué alcances fundacionales hubo en este terreno<sup>63</sup>.

En primer lugar, el proyecto constitucional establecía que cada gobierno departamental sería ejercido por un intendente y una Junta Departamental, a la que restituía. Sin embargo, pese a que establecía “la más amplia autonomía técnica” de las administraciones, estas tenían que ser compatibles con la “unidad administrativa y gubernativa de la Nación” [art. 207]. En concreto: se mantenía la intervención —estratégicamente omitida en el texto— establecida en el Acto Institucional N°3 de setiembre de 1976, pero que comenzó a desarrollarse en el mismo mes de 1973, en Colonia, Rocha y Maldonado. En segundo lugar, preveía una futura “Ley Orgánica de las Administraciones Departamentales” que debía ser aprobada por las dos cámaras legislativas, pero no establecía cuándo, ni cómo se haría [art. 207]. Habían pasado seis años desde que, a mediados de marzo de 1974, el Congreso de Intendentes tuvo que estudiar su implementación, y cuatro desde que se dispuso eso mismo en el Acto Institucional N°3. En este caso, tampoco se trataba de un proyecto fundacional ya que Bordaberry, una semana después del golpe de Estado, sostuvo públicamente que una de las reformas “que exige la Constitución es sobre la organización municipal” y así quedó establecido en el cónclave de Paso de los Toros de diciembre de 1973<sup>64</sup>.

En cuanto a las juntas departamentales, su integración tenía un cambio significativo en el proyecto: el texto proponía que sus integrantes fueran quince en Montevideo y nueve en los restantes departamentos. Si bien marcaba que la futura Ley Orgánica podría establecer cambios en la cantidad de ediles de algunos departamentos, además de reafirmar la homogeneización clásica de “el interior”, se proponía una reducción drástica en el número de representantes, sin brindar fundamentos [art. 208]. Aunque pasado por alto, el argumento detrás de la disposición era el de la inutilidad del legislativo departamental, ya sea por sus costos o por su (supuesta) lentitud.

Este punto, central a la hora de comprender los rechazos que generó el proyecto, no era abordado en las conferencias oficiales; tampoco preguntado por periodistas; ni criticado públicamente por opositores, quienes centraban su discurso, referido a “las intendencias” en la vigencia de la intervención que

---

63 Dirección Nacional de Relaciones Públicas, *La Nueva Constitución*, en *Helvecia*, 7 de noviembre de 1980 [suplemento especial, sin número de páginas].

64 “Bordaberry: ‘No podemos negar que tenemos cierta actitud de simpatía con el régimen brasileño’”, *Ahora*, 3 de julio de 1973, p. 4.

establecía el artículo 207<sup>65</sup>. En cuanto a los aspectos formales que indicaban quiénes podían ser electos, el proyecto no presentó innovaciones “fundantes”: eran los mismos que los de la Constitución de 1967.

Por otro lado, los candidatos a intendente debían estar radicados en el departamento desde cinco años antes de la fecha de la elección [art. 211]. Esa disposición contradecía las disposiciones del régimen, pues era el ministro del Interior de turno quien designaba coroneles como jefes municipales que, en la mayoría prácticamente absoluta de los casos, vivían en otros lugares, y por lo general, no tenían relación con el departamento que debían gobernar.

Otra contradicción, entre los criterios que empleaba la dictadura y los que proponía en el texto, fue el mecanismo para ocupar el cargo de intendente en caso de quedar vacante. Tal como establecía la Constitución anterior, se debía apelar a la lista de suplentes, que eran cuatro, y si —llegado el caso— ninguno de ellos podía, le correspondía al presidente de la Junta Departamental ocuparlo [art. 212]. Aun cuando las juntas departamentales fueron clausuradas el 27 de junio de 1973, desde agosto de ese año existieron juntas de vecinos que fueron decretadas como sus sustitutas. Empero, salvo excepciones, cada vez que renunció, falleció o se expulsó a un intendente, militar o político, el Poder Ejecutivo designó a otro: no recurrió a las pautas constitucionales que en 1980 afirmaba.

Finalmente, la disposición general de que se debía presentar un solo candidato por partido habilitado, las dudas sobre el proceso de selección de quiénes podían aspirar a ser intendentes o ediles —porque se mantenía la vigencia del Acto Institucional N°4— mostraban cierta improvisación y creaban un clima de incertidumbre que no generó demasiado entusiasmo con el proyecto en sí. Tal vez por eso, la millonaria campaña publicitaria no abordaba sus contenidos, sino que insistía en no “volver al pasado” y en los peligros del comunismo y la subversión. Para los gobiernos departamentales, en suma, el proyecto de Constitución era restrictivo y contradictorio en sus disposiciones y alegatos. Como corolario, estipulaba un régimen de intervención que desde que se puso en marcha no había dado los resultados augurados y publicitados.

## **DERROTA INSTITUCIONAL Y APOYOS A UN RÉGIMEN EN CRISIS (1980-1984)**

Las decenas de actos oficiales desarrollados para promocionar la nueva Constitución, las persecuciones, la generación de noticias falsas y la arrolladora campaña por el SI, no fueron suficientes: el proyecto oficialista fue derrotado. El NO triunfó en once departamentos, alcanzó el 57, 21% de los votos, contra el

---

65 Daniel Corbo estudió detalladamente las vicisitudes y contenidos del proyecto, sin embargo, como las restantes investigaciones sobre el tema, no se detuvo en estos aspectos. Véase, por caso, su análisis del mismo artículo en: Daniel Corbo, *op. cit.*, 2006, p. 117.

42,79% del SI<sup>66</sup>. Hubo departamentos, con administraciones “cívico-militares” prolongadas —y según los medios de prensa de la época, exitosas— en los que la ciudadanía que pudo votar lo hizo, mayoritariamente, en contra del proyecto que defendían los interventores.

Los inesperados resultados del plebiscito no terminaron con el régimen. Sus gobernantes demoraron en expresarse, las autoridades partidarias que podían manifestar sus opiniones tampoco lo hicieron con sistematicidad. Al año siguiente, tras cinco meses de oficializados los resultados, la Comisión de Asuntos Políticos (COMASPO) de las Fuerzas Armadas convocó a “los partidos políticos” para retomar el diálogo sobre el futuro gobierno de transición<sup>67</sup>.

En tanto, las cúpulas castrenses eligieron, por primera vez desde que comenzó la dictadura, a un militar, retirado, del Ejército: Gregorio Álvarez<sup>68</sup>. Días después se anunció que todos los ejecutivos departamentales pasarían a ser gobernados por militares<sup>69</sup>. Hasta entonces, cinco intendentes (tres colorados y dos blancos) continuaban gobernando —como interventores— en Canelones, Montevideo, Paysandú, Rivera y Tacuarembó.

La derrota de noviembre de 1980, entonces, permitió una mayor actividad partidaria, aunque aún restringida (para blancos, colorados y cívicos) y prohibida para izquierdistas. Una de las medidas que mostraron que el régimen buscaba tejer alianzas políticas fue la designación de 18 blancos y colorados para integrar el Consejo de Estado, en agosto de 1981. Cinco de ellos, se desempeñaban como interventores departamentales (Burgos, de Cerro Largo, había renunciado a principios de año). Rachetti, aceptó seguir en el cargo que ocupaba desde 1969 en el gobierno departamental de Montevideo<sup>70</sup>. En esta última oportunidad, a diferencia de las anteriores, varios dirigentes de aquellos partidos —que habían ganado protagonismo público desde los meses previos al plebiscito de noviembre de 1980, por su campaña opositora al proyecto— manifestaron su rechazo a la decisión de sus correligionarios quienes, al tiempo que reafirmaban su pertenencia partidaria, reconocían que lo hacían a título personal. En todo caso, la innovación estuvo en su reconocimiento oficial, que reforzó, de alguna manera, el silenciamiento sobre la participación de políticos

---

66 Véase, entre otros: Jorge Marius, *Elecciones uruguayas 1980-2003* (Montevideo: Fundación Konrad Adenauer Uruguay, 2004), p. 27.

67 Una explicación detallada sobre los grupos, sectores y personas (del PC, PN y Unión Cívica) que participaron de las instancias en: “Panorama político frente al diálogo”, *El Correo de los Viernes*, 24 de julio de 1981, p. 18.

68 Para profundizar, véase: Carlos Demasi, *El Uruguay en transición (1981-1985). El sinuoso camino hacia la democracia* (Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental, 2022).

69 “Raimúndez: principal problema el económico; hay desalentados”, *La Mañana*, 3 de agosto de 1981, p. 2.

70 “Declaraciones” y “35 miembros para la unanimidad”, *El Correo de los Viernes*, 17 de julio y 21 de agosto de 1981, pp. 19 y 32, respectivamente.

desde 1973 y las contradicciones oficiales, ya que el Acto Institucional N°4, que incluía quita de derechos políticos, seguía vigente<sup>71</sup>.

Pese a la presidencia de un militar (Álvarez), y los cambios en las integraciones en el gobierno nacional y departamentales, el régimen continuó sin solucionar la crisis económica que, por el contrario, se profundizaba. En las elecciones internas para partidos habilitados de noviembre de 1982 hubo un sustantivo respaldo a los sectores que habían hecho campaña contra el régimen. Al año siguiente, las cúpulas de las Fuerzas Armadas, profundamente divididas, propiciaron un “diálogo” con representantes de los partidos habilitados. No hubo acuerdos (tampoco a las internas de los partidos), las prácticas represivas estatales se mantuvieron y, pese a ellas, las manifestaciones contrarias al gobierno aumentaron. En ese contexto y ya con las elecciones nacionales y departamentales anunciadas para noviembre de 1984, volvieron a designarse —como en setiembre de 1976— “intendentes interventores” que integraban los partidos Colorado y Nacional. Si bien se anunció que todos los departamentos serían gobernados por “cíviles” —lo que marca la importancia, en este caso electoral, de “las intendencias”— la estrategia se concretó en diez<sup>72</sup>.

Hacia finales de la dictadura, las oposiciones y los fundamentos “republicanos” se generalizaron y las adhesiones y apoyos al régimen se diluyeron y dejaron de considerarse —como había pasado desde 1981— en la campaña electoral. El triunfo correspondió al PC y, dentro de él, a la fórmula Sanguinetti-Tarigo. En el PN, su líder, Wilson Ferreira Aldunate, no pudo ser candidato, igual que Liber Seregni en el Frente Amplio<sup>73</sup>.

En cuanto a los intendentes interventores designados desde 1983, triunfaron Juan Chiruchi (PN) en San José y Walter Belvisi (PC) en Paysandú. En los restantes departamentos fueron electos políticos de sectores que reafirmaron su carácter de opositores a la dictadura durante la campaña, salvo en Rocha, donde Aduino Puñales, del sector que lideraba Pacheco, resultó ganador.

## CONCLUSIONES

Las elecciones, con candidatos y personas proscritas, presas por motivos políticos y fuera del país, abrieron, sin embargo, una nueva etapa institucional, que comenzó entre febrero y marzo de 1985. A nivel departamental las reconfiguraciones decretadas desde el 27 de junio de 1973 quedaron sin efecto jurídico: las experiencias de gestión “cívico militares” y centralizadas no dieron el resultado esperado por sus impulsores. Como se vio a lo largo del artículo, hubo al menos

---

71 Javier Correa Morales, *op. cit.*, 2025b.

72 *Ibidem*.

73 “Resultados de las elecciones nacionales y departamentales de 1984”, en: *Corte Electoral. Estadísticas* [Enlace].

siete “momentos” combinados en las administraciones departamentales: desde 27 de junio a la instalación de las juntas de vecinos, en agosto del mismo año; a partir de entonces y hasta las primeras intervenciones, un mes después; desde allí a diciembre, cuando se establecieron (y aceptaron unánimemente) las “pautas de Paso de los Toros. El siguiente período fue más largo, con intervenciones sucesivas. El quinto momento se inició en setiembre de 1976, con las 19 intervenciones (encabezadas por once coroneles y ocho “civiles”); el sexto, desde agosto de 1981, cuando salvo el de Montevideo, todos los interventores fueron coroneles. Finalmente, el séptimo (a partir de noviembre de 1983) volvió a combinar, como el quinto, interventores militares y “civiles”.

Esas estrategias para gobernar de forma autoritaria contaron con respaldos, adaptaciones, complacencias y adhesiones, que permitieron hacerlo durante doce años. De igual modo, los comportamientos fueron cambiantes y tuvieron distintas escalas, intensidades y motivaciones. Eso es lo que hace necesario analizarlos en profundidad y en relación a otros regímenes, sobre todo aquellos que fueron contemporáneos y cercanos territorialmente. Los estudios centrados en esos países permiten establecer comparaciones, inspiraciones y, al mismo tiempo, diferencias. A la vez, estimulan a pensar e investigar en las recepciones —favorables, contrarias y, en ocasiones, contradictorias— en el campo partidario, cultural, social, religioso y económico.

Por otra parte, es preciso resaltar que el régimen tuvo intenciones fundantes (y legitimantes) desde el mismo día del golpe de Estado y las puso en práctica por etapas. Los “casos inaugurales”, como se vio, implicaron a 18 intendentes cuando, en julio de 1973, reafirmaron su apoyo y dieron *governabilidad* a Bordaberry. En tanto, la culpabilización a las gestiones anteriores, que habían permitido “delirios autárquicos” en los gobiernos departamentales, permitieron justificar sus medidas contravencionales. Sin embargo, las pautas implementadas, en todo el territorio, no dieron el resultado esperado ya que, pese a los diagnósticos oficiales, la situación financiera de “las intendencias” empeoró conforme pasaba el tiempo. Eso puede ayudar a comprender, en parte, los resultados de las instancias electorales de 1980, 1982 y 1984. Futuras investigaciones deberán profundizar varias de las problemáticas planteadas en este artículo.

Por último, el análisis centrado en el proyecto constitucional plebiscitado en 1980, permitió ver que, al menos para los ámbitos departamentales, no presentó “cambios fundantes”, sino autoritarios, centralizadores y contradictorios con la propia “legalidad dictatorial” puesta en práctica. En cuanto al período posterior, se mostró —sintéticamente— que hubo políticos dispuestos a apoyar al régimen, incluso en una coyuntura que, mayoritariamente, se ha caracterizado e interpretado como de oposición generalizada.

Es necesario, entonces, releer con atención la producción historiográfica precedente. Y someter a una mirada crítica ciertos relatos que tienden a minimizar los fracasos económicos de la dictadura, o a privilegiar lecturas binarias de las recepciones hacia el régimen reducidas a la “adhesión” o la “resistencia”.

## BIBLIOGRAFÍA

- BROQUETAS, Magdalena, *Ganar la guerra. Cultura, sociedad y política en el Uruguay autoritario, 1967-1973* (Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental, 2024).
- BURRIN, Phillippe, *Francia bajo la ocupación nazi, 1940-1944* (Barcelona: Paidós, 2004).
- CAETANO, Gerardo; RILLA, José, *Breve historia de la dictadura* (Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental, 2005 [1987]).
- CALVO VICENTE, Cándida, “El concepto de consenso y su aplicación al estudio del régimen franquista”, *Spagna Contemporánea* 7, 1995, pp. 143-160.
- CORBO, Daniel, *El Plebiscito Constitucional de 1980. La derrota del proyecto militar para legitimar un régimen autoritario* (Montevideo: Puerta del Sur, 2006).
- CORREA MORALES, Javier, *Lo hicimos ayer, hoy y lo seguiremos haciendo. Autoritarismo civil militar en dictadura. Durazno, 1973-1980* (Montevideo: Editorial Fin de Siglo, 2018).
- CORREA MORALES, Javier, “Centralización e intentos de restauración: las juntas de vecinos durante la dictadura”, en BROQUETAS, Magdalena y CAETANO, Gerardo (coords.), *Historia de los conservadores y las derechas en Uruguay. Guerra fría, reacción y dictadura* (Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental, 2022), pp. 270-283.
- CORREA MORALES, Javier, “Legitimidad, apoyos y política militar en los gobiernos departamentales”, en BROQUETAS, Magdalena y CAETANO, Gerardo, (coords.), *La dictadura civil militar en Uruguay. Nuevas perspectivas* (Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental, 2025a), pp. 37-73.
- CORREA MORALES, Javier, *Dictadura, reconfiguración institucional y actitudes sociales en Colonia y Durazno, Uruguay (1973-1985)* (Montevideo: Universidad de la República, 2025b), Tesis de doctorado en Historia [inédito].
- DEMASI, Carlos, “La evolución del campo político en la dictadura”, en DEMASI, Carlos *et. al*, *La dictadura Cívico-Militar. Uruguay 1973-1985* (Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental, 2009), pp. 15-116.
- DEMASI, Carlos, *El Uruguay en transición (1981-1985). El sinuoso camino hacia la democracia* (Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental, 2022).
- DUTRÉNIT BIELOUS, Silvia, “Del centro al centro político”, en DUTRÉNIT BIELOUS, Silvia (coord.), *Diversidad partidaria y dictaduras: Argentina, Brasil y Uruguay* (Ciudad de México: Instituto Mora, 1996), pp. 235-317.
- GRAMSCI, Antonio, *Antología* (Buenos Aires: Siglo veintiuno editores, 2004 [1970]).
- GONZÁLEZ, Luis Eduardo, “Transición y restauración democrática. Documento de trabajo 105” (Montevideo: CIESU, 1985).
- HERNÁNDEZ BURGOS, Claudio, *Franquismo a ras del suelo. Zonas grises, apoyos sociales y actitudes durante la dictadura (1936-1976)* (Granada: Universidad de Granada, 2013).
- LVOVICH, Daniel, “Actitudes sociales y dictaduras: las historiografías española y argentina en perspectiva comparada”, en ÁGUILA, Gabriela y ALONSO, Luciano (coords.), *Procesos represivos y actitudes sociales. Entre la España franquista y las dictaduras del Cono Sur* (Buenos Aires: Prometeo, 2013), pp. 123-146.

- LVOVICH, Daniel, “Los que apoyaron. Reflexiones y nuevas evidencias sobre el apoyo difuso a la dictadura militar en su primera etapa (1976-1978)”, *Anuario IEHS* 35 (2), 2020, pp. 125-142. <https://doi.org/10.5380/his.v73i1.97363>
- MARIUS, Jorge, *Elecciones uruguayas 1980-2003* (Montevideo: Fundación Konrad Adenauer Uruguay, 2004).
- MARKARIAN, Vania, “Balance y novedades de la historiografía uruguaya a cincuenta años del golpe de Estado de 1973”, *Nuevo Mundo Mundos Nuevos* (2024). <https://doi.org/10.4000/12yu0>
- MARTINS, Daniel Hugo, *El gobierno y la administración de los departamentos* (Montevideo: Laganusi, 1999).
- NOGUEZ REYES, Andrés, *San Carlos bajo la dictadura (1973-1985)* (Montevideo: Ediciones Trilce, 2013).
- REY, Marcos, *Pacheco y el pachequismo. Anticomunismo y democracia restrictiva en el Uruguay del autoritarismo y la dictadura (1972-1985)*. (Montevideo: Universidad de la República, 2023), Tesis de maestría.
- RICO, Álvaro (coord.), *15 días que estremecieron al Uruguay. Golpe de Estado y huelga general. 27 de junio-11 de julio de 1973* (Montevideo: Editorial Fin de Siglo, 2005).
- TORRES, Cristina; LERIN, François, *Historia política de la dictadura uruguaya. 1973-1980* (Montevideo: Editorial Nuevo Mundo, 1987).
- WEBER, Max, *Economía y sociedad. Esbozo de sociología comprensiva* (Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 2002 [1922]).

# La alianza entre Israel y el Uruguay autoritario (1972-1980)

GERARDO LEIBNER 

Universidad de Tel Aviv

## Resumen

Entre 1972 y 1980, Israel y el Uruguay autoritario desarrollaron una alianza política basada en percepciones compartidas como bastiones que luchaban contra el terrorismo y las aproximaciones de la expansión comunista en los márgenes de Occidente. Mientras Uruguay fue el régimen sudamericano más consecuentemente opuesto a la OLP, Israel ayudó a la dictadura uruguaya a manipular la opinión pública y cubrir el antisemitismo en sus aparatos represivos. Al tratar con los efectos de la represión uruguaya sobre judíos izquierdistas, acorde con su compromiso de solidaridad judía, los diplomáticos israelíes tendían a priorizar su alianza con el régimen.

Palabras claves:

Uruguay; Israel; Dictadura; Contrainsurgencia; Antisemitismo

## Abstract

Between 1972 and 1980, Israel and authoritarian Uruguay developed a political alliance based on shared perceptions as bastions fighting terrorism and the proxies of communist expansion at the Western margins. While Uruguay remained the most consequential anti-PLO South American regime, Israel helped the Uruguayan dictatorship manipulate public opinion and cover up antisemitism within its repressive apparatus. While dealing with the effects of Uruguayan repression of leftist Jews according to their commitment to Jewish solidarity, Israeli diplomats tended to prioritize their alliance with the regime.

Keywords:

Uruguay; Israel; Dictatorship, Counterinsurgency; Antisemitism

## INTRODUCCIÓN<sup>1</sup>

En enero de 1977 el encargado de negocios de Argentina en Montevideo elevó un informe sobre los probables lineamientos de la política exterior uruguaya bajo la conducción del recién nombrado canciller Alejandro Rovira. Uruguay se iba a mantener dentro del bloque regional de dictaduras (Brasil, Argentina, Chile, Paraguay y Bolivia), intentaría mejorar su imagen en Estados Unidos, continuaría las buenas relaciones con Sudáfrica y afianzaría la actitud de “benévola simpatía con Israel”<sup>2</sup>.

¿*Benévola simpatía*? Generalmente las relaciones bilaterales son descritas como basadas en intereses comunes y/o en afinidad ideológica. Si consideramos las filiaciones ideológicas formales, entre los gobernantes de Israel y de Uruguay no había demasiada afinidad ideológica si nos orientamos por conceptos de derecha e izquierda. Una dictadura de derecha conservadora y radical en Uruguay y un sistema parlamentario en Israel, con un gobierno encabezado por el Partido Laborista, afiliado a la Internacional Socialista. En las elecciones de mayo de 1977 triunfó el partido Likud, derecha nacionalista y liberal-conservador, algo más cercano a los gobernantes uruguayos.

Tampoco existían demasiados intereses comunes. El comercio entre ambos países era limitado. Israel casi no exportaba hacia Uruguay. Las exportaciones uruguayas a Israel eran de un monto mediano<sup>3</sup>. A diferencia de otros países latinoamericanos Uruguay no era comprador de armas o pertrechos militares israelíes. Lo poco que compró luego, era ínfimo en comparación con otros clientes. Objetivamente, Uruguay no tenía importancia para Israel y las relaciones estrechas con Israel poco le servían a Uruguay. Los jefes de la dictadura uruguaya descubrieron que su amistad con Israel, particularmente el hecho de tener su embajada en Jerusalén dificultaba su relacionamiento con países árabes, potenciales abastecedores de petróleo y compradores de carne.

Eventualmente, las benévolas relaciones en los años iniciales de la dictadura uruguaya se tradujeron en intercambios y generaron intereses. La simpatía precedió al interés. Si bien no se trataba de correligionarios ideológicos, la afinidad se sustentaba en una visión geopolítica compartida en aquella etapa de la guerra fría, caracterizada por el *détente* entre las dos potencias. Ambos se consideraban como baluartes occidentales en sus respectivas regiones. Envueltos en una lucha global contra el comunismo y sus supuestas “aproximaciones” compartían una sensación de incompreensión occidental respecto a sus métodos de lucha contrainsurgente.

---

1 Este trabajo es una versión modificada de la que ha sido publicada en inglés en *Cold War History* Volume 25 (2), 2025.

2 Chalián, 5/1/1977. Archivos históricos de cancillería.

3 En 1970 el valor de las exportaciones de carne uruguaya a Israel era 2.88 millones de dólares, menos que las exportaciones a varios países europeos. *El Día*, 18 de enero de 1971.

La colaboración con la dictadura uruguaya no era la principal alianza anti-comunista de Israel en el sur global. Mucho más importantes eran la alianza con el Apartheid sudafricano, con Somoza en Nicaragua, con las dictaduras centroamericanas o con las dictaduras de Chile y Argentina<sup>4</sup>. El volumen de los mercados militares era un factor que determinaba la importancia relativa de cada alianza. Desde ese punto de vista, Uruguay tenía poco interés para Israel. Desde el punto de vista de la ideología sionista, hegemónica en Israel, el tamaño de las comunidades judías era un factor importante. La comunidad judía de Uruguay era la tercera en América Latina detrás de Argentina y Brasil.

Israel tampoco fue el principal aliado estratégico para la política exterior de la dictadura uruguaya. Las relaciones con las dictaduras militares de su región fueron de vital importancia para la política represiva de la dictadura uruguaya: por la cercanía geográfica, la similitud de los desafíos políticos, las conexiones entre sus enemigos revolucionarios, la presencia de exiliados en esos países, la colaboración que desarrollaron en el marco del Plan Condor<sup>5</sup> y por considerarse aliados en una cruzada contra el marxismo en el sur del continente americano<sup>6</sup>.

Fuera de la región, durante los primeros años de la dictadura uruguaya mucho más importantes fueron las relaciones con EEUU (muy buenas al inicio, se deterioraron tras la enmienda Koch en 1976<sup>7</sup> y con la asunción de Carter en 1977 y se recompusieron con Reagan en 1981) o con España del franquismo tardío. Por afinidad geopolítica, la dictadura uruguaya cultivó relaciones con baluartes del anticomunismo en el “sur global”, o sea en países periféricos y dependientes<sup>8</sup>: Sudáfrica, Taiwán, Corea del Sur e Israel. Pero, al intentar aproximarse a un baluarte anticomunista como Arabia Saudita, la dictadura uruguaya descubrió que sus estrechas relaciones con Israel eran inconvenientes.

---

4 Milton Jamail; Margo Gutierrez, *It's No Secret: Israel's Military Involvement in Central America*, (Belmont: MA: Association of Arab American University Graduates and Maple Leaf Press, 1986); Hugo Harvey Parada, *Las relaciones entre Chile e Israel, 1973-1990. La conexión oculta* (Santiago de Chile: USACH y RiL, 2011); Alessandro Guida, “All'ombra degli Stati Uniti: le relazioni tra Cile ed Israele fra armi e diplomazia (1973-80)”, *Processi Storici e Politiche di Pace* 27-28, 2020, pp.113-143; Hernán Dobry, *Operación Israel: El rearme argentino durante la dictadura, 1976-1983* (Buenos Aires: Lumiere, 2011); Gerardo Leibner, “La colaboración de Israel con la última dictadura militar argentina: nuevas fuentes y reinterpretación”, *Historia y Política* 2025; Sasha Polakow-Suransky, *The Unspoken Alliance: Israel's Secret Relationship with Apartheid South Africa* (New York: Pantheon Books, 2010).

5 J. Patrice McSherry, *Predatory States: Operation Condor and Covert War in Latin America* (Rowman & Littlefield Publishers, 2005); J. Patrice McSherry, “Death Squads as Parallel Forces: Uruguay, Operation Condor, and the United States”, *Journal of Third World Studies* 24 (1), 2007, pp. 13-52.

6 La diplomacia estadounidense recogió con preocupación expresiones del canciller de Uruguay, que definió la campaña antsubversiva en el Cono Sur como una “tercera guerra mundial”. Harry Shlaudeman, ARA Monthly Report “The ‘Third World War’ and South America”, 3 de agosto de 1976.

7 Sarah Snyder, “Ending Our Support for the Dictators’: Ed Koch, Uruguay, and Human Rights”, *Cold War History* 21 (1), 2020.

8 Comparto la categoría propuesta en: Escudé, Carlos, “Israel, Latin America and the United States: A Peripheral-Realist Perspective” (2009). Documentos de Trabajo, No. 413.

¿Para qué sirve analizar una relación que no fue importante en términos de poder o intercambios? Precisamente, del análisis de una relación política con pocos intereses concretos y con pocas urgencias, pueden extraerse conclusiones que atienden a las tendencias más profundas que la modelaron. Al desvelarlas pretendo contribuir al proceso historiográfico de descentrar la guerra fría, de entenderla como una batalla ideológica cargada de subjetividades, con múltiples actores que en algunos períodos actuaban con cierta autonomía respecto a las potencias hegemónicas y con agendas propias, como esos dos regímenes que se concebían como baluartes periféricos en las fronteras imaginadas de Occidente.

Siendo embajador en Israel, en marzo de 1976 Rovira criticaba los esfuerzos de Kissinger por balancear la política estadounidense en Medio Oriente cultivando relaciones con los árabes. Rovira consideraba necesario apoyar a Israel decididamente ya que en Medio Oriente “Israel es a Estados Unidos lo que Cuba es a la Unión Soviética en el hemisferio occidental”<sup>9</sup>. Por su lado, los estrategas del ministerio de Exterior de Israel consideraban a los “regímenes conservadores y autoritarios” del Cono Sur como la valla más efectiva para impedir la penetración en la región de la Organización de Liberación de Palestina (OLP), a la que denunciaban como articuladora de radicalismos e instrumento de aproximación soviético<sup>10</sup>.

## UNA LARGA TRADICIÓN DE AMISTAD

La cordial relación entre Uruguay e Israel antecedió a la fundación del Estado de Israel. Como lo demuestra Adrover, en la segunda mitad de los cuarenta se configuró un consenso pro-sionista en Uruguay<sup>11</sup>. El representante uruguayo Enrique Rodríguez Fabregat tuvo un rol importante en las discusiones que culminaron con la decisión de Naciones Unidas de finalizar el mandato británico en Palestina, creando un estado nacional judío en parte del territorio (1947). El apoyo uruguayo a la creación de Israel se convirtió en orgullo nacional para una república con escaso protagonismo internacional y pasó a ser ritualmente mencionado en todo contacto entre representantes de ambos países. Los aparatos estatales y la prensa de Israel y Uruguay se han tratado desde entonces como países desinteresadamente amigos. Uruguay demostraba su buena voluntad apoyando frecuentemente a Israel en votaciones en Naciones Unidas<sup>12</sup>.

---

9 9/3/1976, No. 276/976. AA-MRREE, Embajada en Israel, I.

10 “El estatus de la OLP en América Latina, 12/9/1979. ISA-mfa-CSAmericaCaribbean-0010zd0.

11 Fernando Adrover, “Uruguay’s stance on the Palestinian problem at the United Nations and the creation of the State of Israel”, *Latin American Perspectives*, Issue 226, 46 (3), 2019, pp. 26-41.

12 Joel Barromi; Carlos Feldman, “Latin American Voting on Israeli Issues in the U.N. General Assembly, 1947-1968”, *Jewish Social Studies* 36 (2), 1974, pp. 142-165.

Los diplomáticos israelíes en Uruguay siguieron con interés el proceso de violenta polarización política y social del Uruguay liberal (1967-1972). La actitud de Israel hacia la crisis uruguaya era cauta. Los informes diplomáticos denotaban una clara identificación con el gobierno uruguayo. El embajador Yaacov Yinon alabó un discurso del presidente Jorge Pacheco Areco “destinado a despertar el patriotismo en el público y aislar a la minoría destructiva que actúa bajo inspiración extranjera”<sup>13</sup>. El diplomático asumía como propio el lenguaje y la lógica que descalificaba no solo a la guerrilla, sino a toda la izquierda, los sindicatos y los estudiantes como “minoría destructiva [...] bajo inspiración extranjera”. Sin embargo, los representantes de Israel se cuidaban de no interferir en la política uruguaya. Israel tampoco vendía pertrechos ni ofrecía adiestramiento policial o militar. Por contrario, procuraban mantener diálogos con políticos de diversas fuerzas y solo evitaban a quienes criticaban frontalmente la ocupación israelí de territorios árabes, como el parlamentario nacionalista de izquierda Francisco Rodríguez Camusso o los representantes del Partido Comunista (PCU). Los representantes israelíes incluso dialogaban con políticos que desbordaban por izquierda al PCU. Así, por ejemplo, un informe titulado “Conversaciones con la extrema izquierda” da cuenta de una entrevista con el dirigente socialista Vivian Trías. Cuando Trías le preguntó si Israel había asistido a la policía uruguaya, el diplomático israelí respondió negativamente, recalcando luego ante sus superiores: “tenemos que evitar de ninguna manera vernos envueltos aquí en cuestiones de seguridad y policía y que hicimos bien en rechazar todas las solicitudes”<sup>14</sup>. Con el trasfondo del secuestro y asesinato del asesor policial estadounidense Dan Mitrione a manos de los tupamaros, la probable victoria de la izquierda en Chile y los intentos por articular a la izquierda uruguaya en un frente unido, los diplomáticos israelíes preferían no arriesgarse apoyando a un gobierno autoritario, ineficaz y con escasa popularidad. Poco después, se vieron en aprietos para eludir la solicitud del ministro de Defensa, Federico García Capurro, que pedía un manual militar israelí para instalar un eventual campamento de prisioneros<sup>15</sup>.

Obviamente, los diplomáticos israelíes tenían sus preferencias dentro de la política uruguaya. Diversos políticos del Partido Colorado eran referidos como “nuestros buenos amigos”. Una de las principales herramientas para construir amistades era invitar a políticos a visitar Israel. Estos paseos, costeados por Israel, tejían relaciones personales. En febrero de 1971 visitó Israel el ministro de Salud Pública Walter Ravenna, del sector autoritario del Partido Colorado, quien luego sería ministro de Defensa (de 1973 a 1981), uno de los principales dirigentes civiles de la dictadura<sup>16</sup>.

---

13 Yinon, 20/7/1969, ISA-mfa-UNInterOrg3-000qup3.

14 Tadmor, 11/8/1970, ISA-mfa-UNInterOrg3-000qup3.

15 Shaham 21/4/1971. Tadmor 26/4/1971. ISA-mfa-Political-0003aho.

16 ISA-PMO-PrimeMinisterBureau-0007igp.

## LA ALIANZA CON BORDABERRY

Las relaciones de amistad en el Partido Colorado permitieron que dos diplomáticos israelíes se reunieran el 1 de marzo de 1972 con el recién juramentado presidente Juan María Bordaberry<sup>17</sup>. Los israelíes se jactaban de haber sido los primeros extranjeros recibidos por el presidente. Ante ellos Bordaberry habría destacado “la relación entre dos pequeñas naciones que luchan por su existencia contra fuerzas subversivas”<sup>18</sup>. Del intercambio con el presidente los diplomáticos pasaron a una conversación con el ministro de relaciones exteriores Juan Carlos Blanco y funcionarios de cancillería. Ante preguntas por las acciones bélicas de Israel en el Líbano, los representantes de Israel explicaron que su ejército trataba de evitar daños al gobierno libanés y que “el aniquilamiento de los terroristas es una contribución a la paz”. Ese argumento caía en oídos receptivos<sup>19</sup>. Blanco solicitó información periódica que facilite a Uruguay apoyar a Israel en foros internacionales. También se comprometió a adherir a la fórmula que interpretaba las resoluciones de Naciones Unidas tras la guerra de los Seis Días (242 y 338) como requiriendo la retirada israelí “de territorios ocupados” y no “de los territorios ocupados”, como reclamaban los países árabes. El gobierno de Bordaberry inició su marcha coordinando con Israel sus posiciones sobre Medio Oriente y destacando afinidades contrainsurgentes.

Respecto a la sociedad uruguaya la embajada de Israel priorizaba dos cuestiones: las relaciones estrechas con las comunidades judías alineadas con el sionismo y la *hasbará* (propaganda) favorable a Israel. Las actitudes de los políticos uruguayos estaban condicionadas por la efectividad de la propaganda israelí en los medios. La embajada de Israel se jactaba: “la inmensa mayoría de la prensa y los radios, difunden lo que les hacemos llegar [...] varios diarios publican un suplemento especial por el día de la Independencia de Israel [...] en los canales de TV tenemos excelentes amigos que colaboran...”<sup>20</sup>. Llama la atención un párrafo dedicado al periódico *Azul y Blanco*: “...representa al ala derecha del país [...] su permanente apoyo a las fuerzas armadas y policiales, su furioso anticomunismo y sus veladas o abiertas notas de carácter antisemita [...] Hasta la fecha no han abierto opinión sobre el conflicto árabe-israelí [...] creemos que no nos serán contrarios”. La diplomacia israelí pronosticaba que no iba a chocar con la ultraderecha uruguaya, aunque sea antisemita.

En setiembre de 1972 el gobierno de Uruguay realizó una operación de guerra psicológica con la complicidad de los representantes de Israel. No contamos con referencias directas en los documentos disponibles. Disponemos sí de recortes

---

17 1/3/1972, ISA-mfa-IsraeliMissionUruguay-000rqlx.

18 El embajador David Shaham destacó la relación con Bordaberry. *Yedioth Ahronot*, 18 de agosto de 1972.

19 Décadas después Blanco fue condenado como corresponsable de secuestros y asesinatos en el marco de la Operación Condor y del asesinato de la maestra María Elena Quinteros.

20 ISA-mfa-mfa-000afnl.

de periódicos archivados en una carpeta sin comentarios. El 28 de setiembre, el entonces ministro de Interior Alejandro Rovira compareció ante la Asamblea General para renovar la prórroga de suspensión de garantías constitucionales. Durante el largo debate parlamentario, el ministro lanzó la noticia que “se detectó la existencia en Uruguay de una organización subversiva denominada Fuerzas Armadas Populares (FAP) con claro sentido antisemita que ya había perpetrado un ataque contra un industrial judío”<sup>21</sup>. Se refería a un asalto realizado en marzo de 1972<sup>22</sup> por quienes se presentaron como miembros de FAP, lo interrogaron acerca de donaciones a Israel, le robaron dinero y dejaron una carta dirigida al Banco Israelita que fuera asaltado nueve días antes anunciando que iban a golpear las finanzas del sionismo en Uruguay<sup>23</sup>. Rovira agregó que probablemente la organización palestina Septiembre Negro estaba actuando en Uruguay. La preocupación inmediata era que sobres con explosivos habrían sido enviados a ciudadanos uruguayos de origen judío. Las fuerzas de seguridad montaron un operativo para revisar el correo llegado al país. Esas noticias sensacionalistas ocuparon titulares en diarios uruguayos del 29 de setiembre al 1 de octubre, llegándose al fin, el 2 de octubre de 1972, a la conclusión que “no había explosivos en sobres sospechosos”<sup>24</sup>. El tema desapareció de los medios de comunicación.

¿De qué trataba esa operación psicológica? Hay dos contextos relevantes: el conflicto palestino-israelí y el conflicto interno uruguayo. Los servicios de seguridad de Israel y las organizaciones armadas palestinas estaban envueltos en una serie de atentados mutuos que trascendían las fronteras de Israel y de los territorios ocupados. En julio de 1972 el escritor Gassan Kanafani, vocero del Frente Popular de Liberación Palestino, fue asesinado en Beirut en una explosión en su coche. Poco después, el periodista Bassam Abu Sharif, su relevo como vocero del FPLP, fue herido por la explosión de un libro que le llegó por correo. A comienzos de setiembre la organización palestina Septiembre Negro secuestró en la aldea olímpica de Munich a un grupo de deportistas israelíes, once de los cuales fueron asesinados durante el intento de rescate. El 19 de setiembre una carta explosiva mató a Ami Shhori, funcionario de la embajada de Israel en Londres. Diez cartas similares fueron neutralizadas en las embajadas de Israel en Londres y Paris. En los días siguientes fueron neutralizadas una decena de cartas explosivas destinadas a diplomáticos israelíes en varias partes del mundo. Obviamente, intervino la Interpol y se activó una alarma internacional,

---

21 “Temer Atentados Contra Judíos en Nuestro País”, *El País*, 29 de setiembre de 1972; “¿Bombas postales y amenazas? Grave inquietud por Grupo Terrorista Filo-Palestino”, *El Día*, 29 de setiembre de 1972; “El Ejército Uruguayo Abrirá Dos Posibles ‘Sobres de la Muerte’”, *El Diario*, 29 de setiembre de 1972.

22 ISA-PMO-GovernmentSecretary-000k0ml.

23 El Banco Israelita era un banco cooperativo fundado por el sector pro-comunista y antisionista de la comunidad judía. En 1972 estaba intervenido al borde de quiebra. Por lo visto se trató de una “falsa bandera”.

24 *El Día*, 2 de octubre de 1972.

que llevó al análisis detenido del correo enviado a sedes diplomáticas, a jefes israelíes o a dirigentes sionistas.

La alerta fue declarada en Uruguay nueve días después del atentado en Londres y un día después que los dos últimos sobres explosivos fueron desarmados por la policía brasileña<sup>25</sup>. El anuncio del ministro ante la Asamblea General y sus ecos en la prensa uruguaya distorsionaba la alerta internacional. Rovira no precisó que la amenaza estaba dirigida a diplomáticos israelíes o a dirigentes sionistas. La presentó como una amenaza a ciudadanos de apellido judío, y la ligó, sin pruebas, a la presunta existencia de una organización palestina armada en Uruguay.

La embajada de Israel colaboró en esa deformación de la amenaza real ante la opinión pública<sup>26</sup>. Su interés era identificar la beligerancia palestina contra Israel y el sionismo con el antisemitismo. Además, al crear un pánico generalizado que identificaba a Israel y a los judíos como agredidos, contribuía a olvidar que fueron los organismos de seguridad de Israel los que iniciaron, dos meses antes, el uso de esa temeraria metodología contra Bassam Abu Sharif<sup>27</sup>.

Los jefes uruguayos que participaron en esta operación tenían sus propias motivaciones. Obviamente, la supuesta nueva amenaza contribuía a obtener los votos para prolongar el estado de excepción. La percepción de una nueva amenaza era necesaria porque el principal enemigo que justificaba las medidas autoritarias, el MLN-Tupamaros, había sido esencialmente derrotado. Raúl Sendic, el máximo dirigente tupamaro, fue herido y capturado el 1 de setiembre. Durante los meses anteriores fueron capturados casi todos los mandos del MLN-Tupamaros. El núcleo civil gobernante y los mandos policiales y militares necesitaban reavivar un estado de alarma. Por otro lado, en algunos cuarteles, oficiales nacionalistas de las Fuerzas Armadas recibían la colaboración de presos tupamaros con la intención de luchar contra la “delincuencia económica” y para configurar planes para un eventual próximo gobierno militar. Ese fenómeno, que incluyó la detención extrajudicial de empresarios y políticos en cuarteles, preocupaba al gobierno y a otros sectores del ejército. Algunos de los empresarios interrogados bajo tortura por “delitos económicos” eran de origen judío. En los sectores nacionalistas del ejército había antisemitismo.<sup>28</sup> Lo expresaba *El Rebenque* un periódico mimeografiado publicado por un grupo de oficiales<sup>29</sup>: “...existe la tan mentada “ROSCA” que actúa protegida por lo que tienen intereses mezquinos [...] No queremos sostener

---

25 “Brazil finds and disarms explosives sent to Israelis”, *New York Times*, 29 de septiembre de 1972.

26 “No tenemos miedo y conocemos los asesinos”, *El País*, 30 de septiembre de 1972.

27 “A bomb in Beirut injures new aide of guerrilla unit”, *New York Times*, 26 de julio de 1972. El método tenía una historia anterior. En 1962 el Mossad envió cartas explosivas a científicos alemanes que trabajaban en la industria militar egipcia. El diario *Al Ahram* lo mencionaba y fue citado en Uruguay. “Los paquetes que rebotaron”, *El País*, 22 de septiembre de 1972.

28 Leonardo Haberkorn, “La ‘tregua’ y su componente antisemita”, *El Observador*, 28 de mayo de 2016.

29 “La guerra no ha terminado”, *El Rebenque*, n°7, octubre de 1972. Archivos del Terror de Uruguay —Rollo 1021.

más una Constitución modificada por políticos corruptos. [...] continuemos esta lucha hasta el final, sin cejar un instante, ni ante el político apátrida, ni ante el judío antinacional, ni ante el comerciante explotador, ni ante el tupamaro que hoy preso en el Cuartel, manifiesta que somos los únicos que podemos salvar al País, lisonjeándonos y tratando de introducirnos ideas mezquinas...”.

La operación psicológica era útil tanto para justificar la suspensión de garantías ciudadanas como para enviar un mensaje a la interna militar. El ministro agitaba un nuevo “cuco” terrorista, esta vez internacional. De paso, señalaba a Israel como un aliado y a los judíos uruguayos como parte de la población a proteger por las fuerzas de seguridad.

### **LOS PRIMEROS DESAFÍOS (1973-1974)**

Israel no se pronunció ante la disolución de las cámaras legislativas el 27 de junio de 1973, reconoció al gobierno de facto y mantuvo inalteradas sus buenas relaciones. Durante la guerra de Yom Kippur, Uruguay se posicionó a favor de Israel. Los diplomáticos israelíes informaban con satisfacción que en el Partido Colorado tanto la lista 15 (liberales y opositores) como los pachequistas (autoritarios y oficialistas) condenaron la agresión árabe<sup>30</sup>.

Las agendas divergentes y las suspicacias dentro de la relación amistosa entre ambos gobiernos surgen bien retratadas en el análisis de la visita relámpago a Montevideo del ministro de Industria y Comercio de Israel, Chaim Bar Lev. Bar Lev estuvo en Montevideo menos de 48 horas. La visita fue calificada privada para evitar acompañamiento protocolar y disimular su objetivo. Bar Lev, un prestigioso militar retirado, dio en Montevideo dos conferencias ante grupos pudientes de las comunidades judías con el objetivo de vender Bonds, bonos del fondo de desarrollo de Israel. Las inversiones en Bonds violaban por la legislación uruguaya. Por eso se disimulaba el objetivo de la visita. En dos eventos, una cena con empresarios de la comunidad sefardí y un cocktail con empresarios de la comunidad ashkenazi se vendieron bonos por 1 millón y medio de dólares. Llama la atención tanto el engaño al gobierno uruguayo como la coordinación con la policía. La intimidad entre la embajada de Israel y la policía uruguaya estaba atravesada por suspicacias. Debido a la reputación antisemita del jefe de policía de Montevideo coronel Ballestrino, la embajada coordinó la seguridad del huésped con el director de Inteligencia policial inspector Castiglioni<sup>31</sup>. Patrulleros acompañaron los desplazamientos del visitante

---

30 Los colorados culpaban al comunismo: “[...] el comunismo internacional que en rotundo mentís a su propaganda pacifista y socialista, estimula a un absurdo fanatismo religioso en los países árabes, los arma y los prepara para la guerra de agresión permanente”. Shmorak, 13 y 19/10/1973. ISA-mfa-mfa-000q8p2.

31 Gvir, 6/8/1973, ISA-mfa-EconomicAffairs-0010znc.

y reforzaron la vigilancia fuera de los locales donde se realizaron las actividades. La policía ignoraba lo que sucedía adentro<sup>32</sup>.

Mientras la embajada de Israel informaba muy favorablemente respecto al régimen, funcionarios israelíes del movimiento sionista expresaban preocupación al percibir su antisemitismo. Un funcionario de la Agencia Judía envió a Jerusalén un volante antisemita diseminado en el centro de Montevideo por la organización ultraderechista MRN<sup>33</sup>. El informante recalca que era imposible llenar el centro de la ciudad con volantes durante varias horas en pleno día sin la connivencia policial. Poco después, la embajada de Israel desmintió la versión de acoso político que funcionarios sionistas dieron a un episodio de breve detención policial a dos organizadores del movimiento juvenil de izquierda-sionista *Hashomer Hatsair*<sup>34</sup>.

La solidez de la alianza quedó manifiesta durante la visita a Montevideo de Fouad Naffah, ministro de Relaciones de Exteriores de El Líbano. Naffah llegó a Montevideo tras una gira en varios países latinoamericanos representando a su país y a la Liga Árabe. Presentando la propuesta de paz de la Liga, Naffah logró modificar la posición de México, Brasil y Colombia<sup>35</sup>. En Israel se temía que la gira del canciller libanés era una gran maniobra para aislar a Israel en América Latina, de manera similar a lo sucedido en África el año anterior. En vísperas de la visita los jefes uruguayos explicaron a sus aliados israelíes que Uruguay iba a recibir amistosamente a Naffah considerando que 60 mil uruguayos eran de ascendencia libanesa. Acorde con la confianza mutua existente, propusieron un acuerdo de caballeros: Israel no utilizará su influencia en la prensa para incomodar a la visita y Uruguay iba a limitarse a expresiones de amistad bilateral con el Líbano sin pronunciamientos sobre el conflicto de Medio Oriente<sup>36</sup>. Igualmente, el ministro de Exterior de Israel Abba Eban envió un mensaje al canciller uruguayo solicitando que Uruguay no acepte ninguna declaración que exceda en una palabra las declaraciones 224 y 338 de las Naciones Unidas<sup>37</sup>. La visita culminó sin una declaración conjunta. De acuerdo al informe israelí Bordaberry habría recalcado ante Naffah que la prioridad era erradicar el terrorismo, como lo hacía Uruguay, y que El Líbano tenía que terminar el conflicto con Israel para poner

---

32 Shmorak, 16/08/1973, ISA-mfa-EconomicAffairs-0010znc.

33 Agencia Judía, Montevideo, 31 de agosto de 1973. ISA-PMO-PrimeMinisterBureau-0007igp. El volante: "Ya liquidamos: a la mafia asesina del MLN; a la burocracia comunista de la CNT; a los politiqueros corruptos. Ahora le toca a los judíos - plaga de la humanidad!!! Adelante FFAA. MRN".

34 Histadrut Tzionit, Montevideo, 30/11/1973; Embajada en Montevideo, 2/12/1973, ISA-mfa-Israeli-MissionUruguay-000rqd2.

35 1/1974, ISA-PMO-DirectorGeneralPMO-000wurz.

36 Schmorak, 24/1/1974, ISA-PMO-DirectorGeneralPMO-000wurz.

37 Eban, 31/1/1974, ISA-PMO-DirectorGeneralPMO-000wurz.

fin a la influencia soviética en la región<sup>38</sup>. El argumento reflejaba una percepción arraigada en la dictadura uruguaya de estar batallando junto a Israel en una guerra fría global.

La alianza tenía expresiones no-gubernamentales. Principalmente, en iniciativas de los sectores sionistas en las comunidades judías, agrupados por el Comité Central Israelita. El reclamo por el derecho de libre emigración para los judíos de la URSS congregaba protestas internacionales que ponía sobre el tapete la violación de un derecho humano elemental. Detrás de la campaña de decenas de organizaciones judías y no-judías en todo el mundo estaba el ministerio de Exterior de Israel que las coordinaba. Sorprendentemente en el Uruguay dictatorial funcionaba un Comité Femenino por los Derechos Humanos, presidido por Elsa Fernández de Borges, una pedagoga y política colorada. El comité no se pronunciaba por las torturas a detenidos en Uruguay, sino “a favor de la libre decisión y emigración de los judíos de la Unión Soviética”<sup>39</sup>.

### **JUNTOS ANTE UN MUNDO HOSTIL (1975-1977)**

El interés más concreto de la diplomacia israelí en Uruguay estaba relacionado a las votaciones en los foros internacionales que se pronunciaban respecto al conflicto del Medio Oriente. Israel estaba a la defensiva y había perdido aliados. En 1974 surgió un primer desafío a la predominancia en Uruguay de la posición israelí respecto al Medio Oriente. Egipto, el país árabe más importante, estaba dejando la órbita soviética y aproximándose al bloque occidental, pero seguía liderando el reclamo de la devolución de las tierras árabes conquistadas por Israel en 1967. Egipto también estaba incrementando la importación de carne uruguaya constituyéndose como un muy interesante mercado. En vísperas de votaciones en Naciones Unidas, el embajador de Egipto inició una polémica con el embajador de Israel en las páginas de *El Día*, el más liberal de los periódicos tolerados por la dictadura<sup>40</sup>. El voto uruguayo era seriamente disputado. El CCI publicó una carta al presidente Bordaberry expresando “fé en que Uruguay seguirá fiel a su tradición humanista y sus representantes en Naciones Unidas y UNESCO se opondrán a la iniciativa del bloque comunista-árabe de aprobar resoluciones anti-israelíes”<sup>41</sup>. El común denominador anticomunista era utilizado para alinear a la dictadura uruguaya con Israel. Sin embargo, Uruguay era una dictadura y la carta pública presionando al presidente incomodó al gobierno. La cancillería citó

---

38 ISA-mfa-mfa-000q8p2.

39 Comunidad Israelita del Uruguay, 25/6/1974, ISA-mfa-IsraeliMissionUruguay-000rqd2.

40 ISA-mfa-mfa-000q8p2.

41 Carta de Daniel Aljanati y Jorge Setarcsevszky, 12/11/1974. ISA-mfa-IsraeliMissionUruguay-000rqd2.

al embajador de Israel para solicitarle que contenga las actividades públicas de la colectividad judía uruguaya<sup>42</sup>. Ese año Uruguay se abstuvo en la votación más importante. La cuestión palestina acumulaba reconocimientos internacionales. Uruguay había sido uno de los gestores de la resolución en favor de la partición de Palestina en 1947 en dos estados, uno judío y otro árabe. Era difícil oponerse a mociones que se remitían a aquel principio.

La abstención uruguaya, una leve modificación de la línea pro-israelí, era una oportunidad para mejorar los intercambios de Uruguay con países árabes. El canciller Blanco viajó a Kuwait, Arabia Saudita y El Líbano. La gira preocupaba a la diplomacia israelí. El diario israelí *Maariv* informó que el canciller uruguayo había dialogado en Beirut con un representante de la OLP<sup>43</sup>. De regreso y en presencia del presidente Bordaberry Blanco explicó que el encuentro con el representante de la OLP fue forzado<sup>44</sup>. Israel no tenía razones para preocuparse por la posición uruguaya. El embajador informaba satisfecho que Bordaberry se sumó a su calificación de la OLP como “organización de asesinos”. Ante una publicación según la cual Uruguay iba a apoyar “los derechos legítimos de los palestinos”, Bordaberry publicó un desmentido recogido por la prensa internacional<sup>45</sup>.

Paralelamente, Najman Fabián, coordinador de la Organización Sionista Mundial con sede en Buenos Aires, informaba sobre una visita que realizó a Montevideo<sup>46</sup>. Entre otras cosas, Fabián se jactaba de sus éxitos propagandísticos, entre ellos el haber instalado un lenguaje de repudio a la OLP adecuado al oído de la dictadura uruguaya: “los tupamaros árabes que se están apoderando de las Naciones Unidas”. De esa manera, un actor sionista no estatal, reforzaba la afinidad ideológica y geopolítica entre Israel y la dictadura uruguaya.

Sin descuidar las relaciones con Bordaberry, en 1975 los diplomáticos de Israel empezaron a cultivar relaciones directas con altos oficiales de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, el embajador Shmorak escribía al comandante de la Fuerza Aérea brigadier general Dante Paladini sobre los esfuerzos por estrechar vínculos entre las fuerzas aéreas de ambos países “unidas por el servicio a los mismos ideales”<sup>47</sup>. No era mera fraseología. Paladini había averiguado acerca de los costos de aviones ligeros de transporte militar Aravá de fabricación israelí. Paralelamente se negociaba un aumento considerable en la exportación de carne uruguaya a Israel. Cortos de presupuesto los militares uruguayos quisieron propusieron un canje: 6 aviones Aravá a cambio de 50 mil toneladas de carne.

---

42 Schmorak, 4/12/1974. ISA-mfa-IsraeliMissionUruguay-000rqlx.

43 *Maariv*, 22/11/1974.

44 12/12/1974, ISA-mfa-mfa-000q8p2.

45 “Uruguay not for PLO — Bordaberry”, *The Sentinel*, Chicago, 19 de diciembre de 1974.

46 Fabián, 12/1974, ISA-mfa-IsraeliMissionUruguay-000rqd2.

47 18/3/1975. ISA-mfa-IsraeliMissionUruguay-000rqlx.

Los israelíes rechazaron la idea, debido a que no querían sentar un precedente en su comercio militar en América Latina, que solo se regía por divisas.

Durante la segunda mitad de 1975 ambos regímenes se encontraron ante una presión internacional sin precedentes y el peligro de convertirse en parias de la comunidad internacional. Uruguay era denunciado por torturas sistemáticas y generalizadas a su creciente población de detenidos políticos. Amnistía Internacional convirtió al caso uruguayo en el centro de su campaña global contra la tortura<sup>48</sup>. Israel afrontaba el creciente repudio en Naciones Unidas y en foros internacionales debido a su negativa a reconocer los derechos del pueblo palestino y por sus propias prácticas represivas en los territorios ocupados: detención de dirigentes políticos, torturas y demolición de viviendas<sup>49</sup>. Ambos gobiernos descontaban que serían repudiados por los países comunistas o por voceros radicales del tercermundismo. Les preocupaban las críticas provenientes de las democracias occidentales, y su eventual peso en la actitud de gobiernos, inversores, órganos financieros y socios comerciales. Al considerarse como los defensores de Occidente que cargaban con la lucha frontal ante el terrorismo internacional y la expansión comunista, ambos gobiernos calificaban las críticas liberales por sus violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional de ingratas, hipócritas, o ingenuas.

El canciller Blanco anunció que Uruguay iba a votar contra cualquier exclusión de Israel. Con satisfacción la embajada de Israel informaba: “la posición uruguaya corresponde a su voluntad de defender el derecho de todos los países —particularmente los pequeños como el mismo Uruguay— a formar parte de la comunidad internacional, existir bajo el reconocimiento de la ONU sin que se les impida su participación por razón alguna”<sup>50</sup>. Además de las mociones ya habituales, ante la asamblea general de 1975 se presentó una moción condenando al sionismo como forma de racismo. El ministro de Exterior de Israel Ygal Alon se entrevistó personalmente con colegas de tres países sudamericanos, Argentina, Perú y Uruguay, calificando la entrevista con Blanco como la más amistosa<sup>51</sup>. Las votaciones de Uruguay favorecieron a Israel: se abstuvo en la moción que invitaba a la OLP a la convención de paz de Ginebra y se opuso a la moción que calificaba al sionismo como forma de racismo.

---

48 Marisa Ruiz, *La piedra en el zapato: amnistía y la dictadura uruguaya* (Montevideo: Universidad de la República, 2006).

49 Un ejemplo: la Organización Mundial de la Salud votó una moción por el deterioro de las condiciones de vida en los campamentos de refugiados palestinos en los territorios ocupados por Israel. Uruguay fue uno de los cinco que votos opuestos. “W.H.O. Assembly votes 63-5 to condemn Israel”, *JTA*, 27 de mayo de 1975.

50 4-10/9/1975. ISA-mfa-Political-000kyfd.

51 1-8/10/1975. ISA-mfa-Political-000kyfd.

A fines de 1975 Uruguay e Israel celebraron su relación especial en una serie de actos públicos. Eran fechas muy significativas en el desarrollo represivo en Uruguay: estaba en curso una operación en la cual fueron detenidos e interrogados bajo torturas cientos de militantes del Partido Comunista y se iniciaba el Plan Condor de coordinación represiva entre los servicios de seguridad de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. En octubre se celebró el IX congreso regional de B'nai Brith, una asociación judía de elite. El embajador de Israel fue el huésped destacado. Los organizadores elogiaron al presidente Juan María Bordaberry, repudiaron la decisión de Naciones Unidas que equiparó sionismo con racismo y expresaron solidaridad con los judíos en la Unión Soviética<sup>52</sup>. En una época en que asociaciones civiles sufrían de múltiples restricciones y casi no podían celebrar asambleas, la B'nai Brith reunió a cientos de personas, incluyendo delegaciones de varios países de la región.

Durante noviembre se sucedieron otros eventos cubiertos por los medios de comunicación masivos. Un grupo de damas judías encabezadas por la Sra. Ofri, esposa del embajador de Israel, donaron muebles para un centro barrial, en un acto al que inusualmente asistieron el presidente Bordaberry, ministros, oficiales del ejército y sus esposas<sup>53</sup>. Luego, en un salón central de la intendencia de Montevideo se inauguró la exhibición de amistad Israel-Uruguay<sup>54</sup>.

Mientras tanto continuaban las negociaciones comerciales. Uruguay pasó a interesarse por adquirir lanchas de patrullaje Davor. El agregado comercial de la embajada de Israel en Buenos Aires informaba sobre la propuesta que, a cambio de la carne uruguaya, Uruguay importaría fosfatos, sistemas de control para aeropuertos, telefonía y lanchas Davor<sup>55</sup>. Finalmente se llegó a un acuerdo de pagos para la compra de carne. Israel se comprometió a adquirir 9 mil toneladas durante 18 meses y Uruguay a comprar artículos israelíes por una suma similar, obteniendo créditos equivalentes al 75% del valor de la carne<sup>56</sup>. Las relaciones bilaterales se desarrollaban en numerosos ámbitos procurando crear intereses comunes. A Uruguay llegaban numerosos visitantes israelíes. Uno de los más importantes fue Abraham Shavit, presidente de la Confederación de Industriales en Israel<sup>57</sup>. Sin embargo, la intensa actividad no se tradujo en un crecimiento significativo de los negocios.

---

52 Álvaro Rico (coord.), *Investigación histórica sobre la dictadura y el terrorismo de Estado en el Uruguay (1973-1985)* (Montevideo: Universidad de la República, 2009), Tomo 2, pp. 530-531.

53 Ofri, 5/11/1975, ISA-mfa-IsraeliMissionUruguay-000rqd1.

54 ISA-mfa-Political-000kyfd.

55 ISA-mfa-EconomicAffairs-0011264.

56 ISA-mfa-Political-000kyfd.

57 20/10/1976. ISA-mfa-IsraeliMissionUruguay-000rqd1.

## LA AYUDA DE ISRAEL AL GOBIERNO DE URUGUAY BAJO PRESIÓN INTERNACIONAL

La presión internacional sobre el gobierno de Uruguay se intensificó a partir de las denuncias de exiliados sobre la brutal represión<sup>58</sup>. La campaña de Amnistía Internacional contra la tortura tenía en su foco a Uruguay. Los secuestros y asesinatos en Buenos Aires en mayo de 1976 de dos parlamentarios opositores, Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, y el secuestro y desaparición de decenas de uruguayos en la capital argentina, conmocionaron a la opinión pública en numerosos países. Mientras tanto, la mayoría demócrata en el congreso de los EEUU había incorporado a los derechos humanos como un criterio para controlar la política exterior. En mayo de 1976 el congresista Ed Koch presentó una moción que proponía denegar apoyo financiero-militar de EEUU al gobierno uruguayo debido a sus flagrantes violaciones de los derechos humanos<sup>59</sup>. El testimonio de Wilson Ferreira Aldunate, el dirigente de la oposición uruguaya de centroderecha, ante la subcomisión del Congreso y sus conferencias de prensa fueron un golpe muy duro a la reputación del régimen. Ferreira Aldunate también denunció la complicidad de la embajada de los EEUU en Montevideo. El gobierno uruguayo inició una campaña tratando de mellar la credibilidad de Ferreira Aldunate. En el marco de una conferencia de prensa Ferreira Aldunate mencionó que diversos testimonios indicaban que en la represión había expresiones de antisemitismo y que fenómenos antisemitas que se manifestaban en Argentina podían repetirse en Uruguay. La prensa uruguaya alineada con la dictadura deformó sus palabras informando que Ferreira Aldunate habría denunciado persecución contra judíos en el Uruguay. Reclamando la “representación de la colectividad judía” el CCI declaró “que al margen de la rotación de hombres y partidos en el poder, así como los cambios en la forma de gobierno o de su estructura, ha gozado siempre de la libertad característica de la convivencia uruguaya”<sup>60</sup>. Los dirigentes comunitarios prometieron al gobierno que harían saber a organizaciones judías de todo el mundo que “tal aserto es malicioso”<sup>61</sup>. El embajador de Israel Aharón Ofri calificó los dichos de Ferreira Aldunate como “evidentes mentiras”<sup>62</sup>. Ofri cumplía con el compromiso de Israel hacia el gobierno uruguayo. El embajador y el CCI

---

58 Sobre la función de Michelini en las campañas internacionales por los derechos humanos véase Vania Markarián, *Left in transformation. Uruguayan exiles and the Latin American human rights networks, 1967-1984* (New York and London: Routledge, 2005), pp.76-81.

59 Sarah Snyder, *op.cit.*, 2020.

60 Citado en *La Mañana* y *El País*, 21 de junio de 1976. El CCI ocultaba el hecho que la Asociación Jaime Zhitlovsky, sector judío de izquierda no-sionista, sufría acosos y tenía miembros detenidos o requeridos. Álvaro Rico, *op. cit.*, 2009, tomo 3, sección 5, apartado 1.

61 *El País*, 20 de junio de 1976.

62 “Embajador Ofri: Desmentido a Wilson Ferreira. No hay persecuciones en Uruguay a creyentes judíos”, *El País*, 20 de junio de 1976.

ya habían cumplido esa función ante organizaciones judías estadounidenses<sup>63</sup>. Israel cuidaba las espaldas de la dictadura uruguaya.

El creciente aislamiento de la dictadura uruguaya, más allá del cono sur, la alentaba a estrechar relaciones con Israel. En su intransigente lucha antiterrorista Israel demostraba no reconocer fronteras ni límites de legalidad internacional. A comienzos de julio de 1976 comandos israelíes realizaron una audaz operación de rescate de pasajeros de un avión de Air France secuestrado en Entebbe, capital de Uganda. A pesar de violar el derecho internacional y poner en grave riesgo numerosas vidas, la operación comando israelí obtuvo en occidente más alabanzas que críticas. Los militares uruguayos veían en ella la continuación de una larga serie de operaciones israelíes extraterritoriales<sup>64</sup>. En esos tiempos comandos uruguayos involucrados en la operación Condor planeaban y realizaban secuestros, interrogatorios y asesinatos en el exterior contra objetivos “subversivos”. Más que un aliado, Israel era considerado como un pionero contrainsurgente del cual había que aprender. Al afrontar críticas occidentales militares del cono sur argumentaban que sus acciones eran tan justificadas como las israelíes contra los palestinos<sup>65</sup>. Los militares uruguayos envidiaban no solo la capacidad operativa: Israel rechazaba presiones externas, obtenía cobertura favorable en la prensa occidental y mantenía el apoyo estadounidense.

## ¿CÓMO LIDIAR CON LOS EFECTOS DE LA REPRESIÓN A JUDÍOS DE IZQUIERDA?

Si bien el gobierno de Israel estaba muy cómodo con las dictaduras latinoamericanas y se mostraba gustoso de vender armas, tecnología y adiestramiento a sus fuerzas de seguridad, también tenía otros compromisos que eran afectados por las campañas represivas. Como estado del pueblo judío, Israel pretendía velar por la seguridad y el bienestar de todos los judíos del mundo, heredando un precepto judío de solidaridad étnico-religiosa anterior al sionismo. El concepto de “*pidión shvuim*”, de origen medieval, considerado como precepto imperativo, implicaba

63 El editor de *Semanario Hebreo* José Jerosolimski declaró que no había antisemitismo en Uruguay. David Landau, “No Anti-semitism in Uruguay”, *JTA*, 5 de marzo de 1976. Tras una gira por el cono sur, los dirigentes de Hebrew Immigrant Aid Society reportaron que la inmensa mayoría de los judíos apoyaba a los regímenes militares. En Uruguay conversaron con el CCI y con el embajador de Israel, pero no con familiares de presos, desaparecidos o exiliados. “HIAS officials report on Jewish situation in South America”, *JTA*, 22 de abril de 1976.

64 Un parte militar uruguayo rebosaba admiración al Mossad: “actúa contra 10 movimientos de liberación distintos que actúan dentro y fuera de sus fronteras, [...] tiene que actuar dentro y fuera de ellas, a veces sin la más mínima colaboración de gobiernos o fuerzas antiguerrilleras donde actúa. En Noruega, Suiza y Francia agentes israelíes fueron detenidos o estorbados cuando estaban a punto de coronar una acción antiguerrillera”. Esteban Cristi General de División, “El terrorismo internacional”, 23 de noviembre de 1976. *Sitios de Memoria Uruguay* [Enlace].

65 Harry Shlaudeman, ARA Monthly Report “The ‘Third World War’ and South America”, 3/8/1976.

que los judíos, como tales, debían procurar liberar a judíos prisioneros y socorrer a judíos en peligro de vida. Además, una de las ideas constitutivas del sionismo como nacionalismo judío moderno, era que Israel debía actuar como refugio seguro para todos los judíos del mundo garantizando, mediante la “ley del retorno”, el derecho a emigrar y adquirir la ciudadanía israelí sin otro requisito que ser de origen judío.

Ante el creciente número de secuestros y asesinatos de izquierdistas en Argentina, a fines de 1975 funcionarios de la Agencia Judía y diplomáticos israelíes discutían cómo actuar ante las solicitudes de familiares o de izquierdistas amenazados que invocaban su derecho a emigrar a Israel. El dilema era claro. Por un lado, en muchos casos se trataba de militantes de organizaciones revolucionarias pertenecientes al “campo enemigo”. Por el otro, asistir a judíos perseguidos era parte de la razón de ser del estado judío. La huida de Argentina hacia Israel se realizaba mayormente vía Uruguay. Los representantes de Israel sabían que existía coordinación entre las fuerzas de seguridad de los dos países. Les preocupaba evitar que las “evacuaciones” de judíos argentinos por territorio uruguayo afectaran las relaciones con la dictadura uruguaya. Hubo que crear un protocolo y un mecanismo de evacuación de emergencia<sup>66</sup>. Se estableció una división de labores. Los funcionarios de la Agencia Judía en Argentina se ocupaban del contacto con los perseguidos y la logística, el Mossad monitoreaba y la embajada en Montevideo emitía documentos de viaje israelíes o el visado<sup>67</sup>. El protocolo excluía la evacuación de militantes con conocida participación en acciones armadas.

El conocimiento israelí de la existencia del Plan Condor queda evidenciado en el telegrama enviado por Ofri dos días después del golpe de estado en Argentina: “Es razonable suponer que izquierdistas que en su momento se escaparon de Uruguay a la Argentina intenten huir y esconderse aquí. Izquierdistas judíos entre ellos algunos conocidos a las autoridades acá podrían dirigirse y solicitar alí (emigrar) a Israel. Reclamo discusión con la Agencia Judía y la configuración de un protocolo”<sup>68</sup>. El embajador entendía que tras el golpe militar en la Argentina se iniciaría una persecución contra exiliados uruguayos en ese país y quería anticiparse a las probables complicaciones ante solicitudes de auxilio de exiliados

---

66 Dominitz, “Olim en tránsito — arreglo de protocolo”, 31/12/1975. ISA-mfa-IsraeliMissionUruguay-000rqd0.

67 En la historiografía hay diversas interpretaciones: Efraim Zadoff, “Israel y la violación de los derechos humanos en Argentina”, en *Informe de Comisión Israeli por los Desaparecidos en Argentina*, 2002; Leonardo Senkman, “Israel y el rescate de las víctimas de la represión: una evaluación preliminar”, en Leonardo Senkman; Mario Sznajder, *El legado del autoritarismo* (Buenos Aires: 1995), pp.283-324 ; Mario Sznajder; Luis Roniger, “From Argentina to Israel: Escape, Evacuation and Exile”, *Journal of Latin American Studies* 37 (2), May 2005, pp. 351-377; Gerardo Leibner, “La colaboración de Israel con la última dictadura militar argentina: nuevas fuentes y reinterpretación”, *Historia y Política* 2025.

68 Ofri, 26/3/1976, ISA-mfa-IsraeliMissionARG-000rlqa.

uruguayos. Era necesario un protocolo específico para exiliados uruguayos en Argentina que no podían ser evacuados vía Uruguay<sup>69</sup>.

Los patrones represivos en Uruguay eran comparativamente menos letales que en Argentina. Mayoritariamente, los militantes detenidos pasaban por varias semanas o meses de interrogatorios bajo torturas, incomunicados y desaparecidos. Luego su detención era formalizada y “reaparecían” ante un juzgado militar que iniciaba un proceso que concluía en condena y sentencia de prisión. Los diplomáticos israelíes sabían que la detención implicaba torturas y que podían ser detenidos no solo dirigentes o militantes, sino “todo quien haya tenido algo que ver con la izquierda”<sup>70</sup>. La estrecha alianza política entre Israel y la dictadura uruguaya explica porque en ningún momento fue considerada por parte de Israel la posibilidad de otorgar asilo o de ayudar a la evacuación de perseguidos uruguayos en Uruguay. En contraste, las embajadas de México y Venezuela otorgaron asilo político a perseguidos y luego gestionaron su salida del país<sup>71</sup>. Algunas embajadas europeas otorgaron visas para perseguidos bajo protección de Naciones Unidas.

Durante los primeros años de la dictadura uruguaya la embajada de Israel no tuvo iniciativas respecto a presos de origen judío. Solo cuando la ayuda era requerida por familiares, en algunos casos residentes en Israel, la embajada realizaba gestiones, siempre ateniéndose a las reglas restrictivas de la justicia militar uruguaya. El primer caso de liberación de un preso mediante su expulsión a Israel fue a mediados de 1976. El preso había cumplido los dos años de prisión a los que fue condenado, pero las autoridades retenían por tiempo indefinido en cuarteles a quienes consideraban tupamaros. El resumen del embajador Ofri sobre la intervención israelí en ese caso es muy elocuente<sup>72</sup>. Era un detenido por “delitos de seguridad” que había transportado en su vehículo propaganda izquierdista y fue condenado a dos años de prisión. A su favor, el embajador mencionaba que en el pasado estuvo en Israel recibiendo instrucción sionista y que en Montevideo tuvo actividad en un marco juvenil comunitario judío. Al carecer de ciudadanía, por ser nacido en Polonia durante el holocausto y llegado como refugiado a Uruguay sin haberse legalizado como ciudadano, su abogado vislumbró la posibilidad de obtener su excarcelación mediante la expulsión del país si se obtenía una declaración de disponibilidad de acogerlo por parte de otro país. Siendo judío estaba comprendido por la “ley del retorno”. El cónsul de Israel entrevistó a la madre del preso y entregó la declaración que Israel estaba dispuesta a recibirlo. El abogado obtuvo

---

69 La familia del autor de este texto fue uno de los pocos casos de aplicación de ese protocolo.

70 “[...] Los preocupados, y créeme que tienen porque preocuparse, son los ciudadanos [...] que en el pasado tuvieron algo que ver, aunque sea mínimamente con izquierdismo”. Ofri, 9/1/1976. ISA-mfa-Israeli-MissionUruguay-000rqd0.

71 Rico, *op. cit.*, 2009, tomo 2, sección 4 apartado 1. Silvia Dutrénit, *La embajada indoblegable. Asilo mexicano en Montevideo durante la dictadura* (Montevideo, Fin de Siglo, 2025).

72 ISA-mfa-IsraeliMissionUruguay-000rqd0.

una orden de expulsión del país como apátrida. El responsable de seguridad de la embajada lo entrevistó en el cuartel, confirmando las condiciones penosas en que se encontraba. El preso firmó la solicitud de emigrar a Israel. Algo inquietaba al embajador. El preso estaba casado con una mujer no judía que viajaría con él a Israel, lo que producía a Ofri “dispuesto a liberarse de este tipo de elementos”. Finalizaba con una expresión religiosa que solucionaba su dilema: “aunque un judío haya pecado — es judío”. Más allá del racismo y su desprecio hacia izquierdistas, el embajador exponía claramente la ambigüedad israelí al asistir a izquierdistas judíos. Sobre la alianza con el régimen no había remordimientos.

## LA DESAPARICIÓN DE BLEIER

La actitud de las autoridades de Israel respecto a la desaparición del dirigente comunista Eduardo Bleier indica claramente como se priorizó la alianza con la dictadura por sobre el precepto judío de “rescate de prisioneros” y por sobre consideraciones humanitarias de ciudadanos israelíes (la hija del detenido desaparecido residía en Israel).

Bleier fue detenido a fines de octubre de 1975, durante los primeros días de una gran redada contra el núcleo central de militantes del PCU. Cientos de secuestrados fueron torturados incomunicados. Durante la primera mitad de 1976 la mayoría fueron remitidos a la justicia militar. Bleier y otros cinco detenidos no “reaparecieron”<sup>73</sup>.

En enero de 1976 el recién constituido Comité Israelí de Solidaridad con los Detenidos Políticos en Uruguay (CISDPU) se manifestó ante la embajada de Uruguay en Jerusalén. Irene Bleier entregó en esa oportunidad una carta al embajador uruguayo, Alejandro Rovira, reclamando la liberación de su padre y el resto de los detenidos políticos<sup>74</sup>. Un par de semanas después una publicación mencionó que Bleier y otros prisioneros fueron internados en el hospital militar<sup>75</sup>. Irene Bleier envió una nueva carta al embajador reclamando información oficial sobre el estado de salud de su padre<sup>76</sup>. Dos semanas después, 14 diputados israelíes enviaron un telegrama a Bordaberry requiriendo por Eduardo Bleier<sup>77</sup>. El análisis de la lista de firmantes tranquilizaba al embajador: fuera de comunistas e izquierdistas el resto eran personajes marginales. Referentes de las principales corrientes de la política israelí no firmaron.

---

73 Sus restos fueron descubiertos en un cuartel en 2019.

74 6/1/1976, No.12/976. AA-MRREE, Embajada en Israel, II.

75 Alvaro Marino, “Seregni encarcelado. Carta del Uruguay”, 17/1/1976. PCU. *Boletín del Partido Comunista del Uruguay*, enero-febrero 1976.

76 4/2/1976, No.143/976. AA-MRREE, Embajada en Israel, II.

77 16/2/1976, No.195/976. AA-MRREE, Embajada en Israel, II.

Sin novedades de su padre Irene Bleier se dirigió a diversas autoridades en Israel. De la oficina del primer ministro le respondieron que los materiales enviados serían puestos en conocimiento de Yitzhak Rabin<sup>78</sup>. Irene Bleier fue atendida varias veces en el ministerio de Exterior y le prometieron averiguar a través de la embajada en Montevideo. Mientras que Irene Bleier tiene dos breves respuestas formales a sus cartas<sup>79</sup>, en las carpetas de archivo disponibles no hay rastros de las gestiones. A diferencia de otros casos, pareciera que los documentos referidos a Bleier desaparecieron de las carpetas.

Es reveladora la respuesta que Irene Bleier recibió de la *Histadrut*, la central de trabajadores, dominada por el partido laborista, entonces partido de gobierno en Israel: “te informamos que planteamos el tema ante el secretario general de los sindicatos de Uruguay, señor Ariel del Gaudio, durante su visita aquí, la semana pasada. El prometió intentar averiguar...”. La respuesta refleja las afinidades geopolíticas de la *Histadrut*<sup>80</sup>. En vez de usar su peso internacional, la *Histadrut* se dirigió al dirigente de la CTU, una pequeña organización anticomunista que colaboraba con la dictadura. Quien alentaba la persecución a comunistas no iba a realizar una gestión por un comunista desaparecido.

El CISDPU publicó un folleto de 16 páginas en hebreo sobre las violaciones a los derechos humanos en Uruguay, incluyendo un apartado sobre Eduardo Bleier<sup>81</sup>. Rovira estaba seguro de que la campaña era orquestada por el Partido Comunista “... cumpliendo instrucciones de Moscú”. A las autoridades de seguridad israelíes Rovira pidió información sobre los activistas del CISDPU<sup>82</sup>. La demora en recibir respuesta le llevó a quejarse que en los círculos dirigentes en Israel existía una tendencia a dejarse llevar por campañas del terrorismo internacional contra Chile o Uruguay<sup>83</sup>. Finalmente un funcionario del ministerio de Exterior le informó que la casilla de correo del CISDPU pertenecía al Partido Comunista<sup>84</sup>. Sin dejar rastro escrito, las autoridades israelíes compartieron con el embajador uruguayo información sobre actividades políticas de sus ciudadanos. Era mucho menos que lo que Rovira quería. Poco después la embajada de Uruguay obtuvo la grabación de un evento del CISDPU, probablemente realizada por un organismo de seguridad israelí<sup>85</sup>.

---

78 Oficina Primer Ministro, 14/4/1976. Archivo Bleier - Lewenhoff.

79 Abraham Milo, Ministerio de Exterior, 4/7/1976; Shlomo Nahmias, ministerio de Exterior, 7/3/1977.

80 Ver Efraim Davidi, “Exilio sul-americano en Israel (1973-1978)”, *Tensões Mundiais* 5 (9), 2009, nota 30, p. 214.

81 15/4/1976, No.462/976. AA-MRREE, Embajada en Israel, II.

82 16/4/1976, No.463/976. AA-MRREE, Embajada en Israel, II.

83 11/5/1976, No.568/976. AA-MRREE, Embajada en Israel, II.

84 1/6/1976, No.602/976. AA-MRREE, Embajada en Israel, II.

85 Grabación remitida al SID. 5/7/1976, No.702/976. AA-MRREE, Embajada en Israel, II.

Irene Bleier no recibió noticias sobre su padre. Ante la preocupante publicación de una solicitud de captura de Eduardo Bleier, incluido en una lista de comunistas requeridos que se encontraban en el exterior<sup>86</sup>, inició un acampado de protesta frente a la embajada de Uruguay en Jerusalén<sup>87</sup>. Rovira recibió autorización para responder oficialmente a las solicitudes de Irene Bleier en un escueto telegrama: “Con referencia sus cartas dirigidas autoridades uruguayas comunicole (sic) dichas autoridades informaron no tener detenido Eduardo Bleier”<sup>88</sup>.

En Israel Rovira encontró un cómplice más. El semanario en castellano *Aurora* le hizo un reportaje con Rovira sobre el caso Bleier<sup>89</sup>. Dirigido por Arie Avidor, *Aurora* tenía una línea editorial que justificaba las dictaduras en América Latina. Era leído por hispano parlantes en Israel y por suscriptores latinoamericanos. Avidor había puesto sus páginas a disposición del embajador uruguayo<sup>90</sup>. En el reportaje Rovira insistía con la mentira oficial según la cual Bleier estaba requerido por las autoridades uruguayas, que desconocían su paradero. Su declaración final es significativa: “conociendo la eficiencia y sagacidad de los servicios diplomáticos y de seguridad israelíes, sus autoridades centrales deben poseer, seguramente, una muy buena información de lo que realmente ocurrió y ocurre en Uruguay. Estoy absolutamente convencido de que esta información no ha de diferir, por cierto, de cuanto acabo de expresarle”. Rovira advertía a sus aliados israelíes no contradecir la versión uruguaya. Las autoridades israelíes mantuvieron un silencio cómplice. Aún hoy los archivos de Israel guardan silencio respecto a Bleier.

La embajada de Israel en Montevideo respondía fríamente ante solicitudes de parientes de presos políticos de origen judío. A veces no tenía más remedio que esforzarse debido a las presiones que generaban en Israel. En febrero de 1978 el embajador Ofri expresaba sus dudas respecto a la instrucción recibida de gestionar la liberación del empresario León Stolowicz mediante la opción de expulsión a Israel. Desde el punto de vista legal se había cumplido el plazo que permitía ejercerla. Su mujer en Montevideo y sus parientes en Israel solicitaban la necesaria carta de la embajada que Israel estaba dispuesta a recibirlo. Ofri solicitaba reconsiderar<sup>91</sup>: “Fue detenido por ser uno de los organizadores del sistema financiero del Partido Comunista [...] es conocido por su hostilidad a las aspiraciones sionistas [...] temo que nos estemos creando problemas evitables. Nuevamente, las autoridades de seguridad de Uruguay probablemente expresarán su sorpresa por la generosidad

---

86 Oficio 734/976 Montevideo, 15/6/1976. Archivo de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente [Enlace].

87 *Maariv* 15/7/1976 y 20.7.1976; *Davar* 22/7/1976; *Haolam Haze*, 28/7/1976.

88 Telegrama de embajador del Uruguay a Irene Bleier. 28/7/1976.

89 “El caso Bleier. Crónica de un misterio”, *Aurora*, 29 de julio de 1976.

90 21.6.1976, No. 635/976. AA-MRREE-Uruguay, Embajada en Israel, II.

91 ISA-mfa-CSAmericaCaribbean-0010zwcw, 354.

de Israel hacia elementos subversivos". Sus superiores le ordenaron proceder con la gestión. En abril de 1978 Stolowicz fue expulsado a Israel, donde fue acogido en un kibbutz por sus parientes. Agentes de seguridad israelíes le interrogaron. Sin sustento legal, le prohibieron encontrarse con Irene Bleier, advirtiéndole que estaría vigilado<sup>92</sup>. Stolowicz tuvo un encuentro furtivo con Irene Bleier en el cual le dijo que reconoció a su padre en el centro de torturas y que él creía que Eduardo estaba muerto<sup>93</sup>. Vulnerable e intimidado, Stolowicz solicitó ayuda a su hija exiliada en México. Ella le consiguió documentos de asilo mexicanos y el abandonó Israel. Las fuerzas de seguridad israelíes lograron evitar que se publique ante los medios de Israel un impactante testimonio en primera persona sobre Bleier detenido y torturado, que hubiera incluido referencias al antisemitismo manifiesto en el centro de detención. Un testimonio así hubiera obligado al gobierno de Israel a cuestionar la mentirosa versión oficial uruguaya, poniendo el peligro la alianza entre ambos gobiernos.

### **TAPANDO EL ANTISEMITISMO EN LA DICTADURA URUGUAYA<sup>94</sup>**

Mientras los gobiernos de Israel podían ignorar fácilmente las violaciones a los derechos humanos perpetradas por sus aliados en el Cono Sur, les era más difícil ignorar expresiones antisemitas. Sin embargo, la alianza con el gobierno uruguayo requería desmentir o al menos relativizar esos fenómenos. Ya vimos como en julio de 1976 el embajador de Israel y el Comité Central Israelita del Uruguay pretendieron desmentir una versión deformada de la denuncia realizada por Wilson Ferreira Aldunate<sup>95</sup>. En una carta al rabino Morton Rosenthal, funcionario de la Liga Antidifamación de Bnei Brith en Estados Unidos responsable del monitoreo de América Latina, Juan Raúl Ferreira (hijo de Wilson), explicaba los elementos detrás de la denuncia. Prisioneros políticos judíos fueron tratados con saña adicional al ser considerados por sus torturadores como "dobles enemigos" (comunistas y judíos)<sup>96</sup>. Ferreira señalaba el enojo de familiares de presos judíos ante la actitud de la embajada de Israel. Rosenthal transmitió las denuncias al embajador de EEUU en Montevideo.

Cuando médicos de la Mutualista Israelita del Uruguay (MIDU) fueron arrestados, el embajador de EEUU consultó al embajador de Israel acerca de los rumores que detenidos judíos recibían castigos adicionales. Ofri respondió que

---

92 Comunicación de Beatriz Stolowitz, 25/12/2021.

93 Entrevista a Irene Bleier, 1/2022.

94 Sobre antisemitismo en la represión véase Debbie Sharnak, *Of Light and Struggle. Social Justice, Human Rights, and Accountability in Uruguay* (Filadelfia: University of Pennsylvania Press, 2023), pp.77-78.

95 Mientras negaba públicamente antisemitismo en Uruguay, en informes internos Ofri calificaba a oficiales uruguayos como "nazis" o "antisemitas". Ofri, 1/11/1978, ISA-mfa-CSAmericaCaribbean-0010zcy.

96 "Sara Youtchak recuerda su testimonio del horror y el heroísmo", *Estudios* 80, 1981.

“si la denuncia era cierta, el dudaba que represente una política generalizada”<sup>97</sup>. Ofri se conformaba con la palabra que recibió del jefe de policía que el arresto de los médicos no tenía nada que ver con antisemitismo<sup>98</sup> y explicó que MIDU era “de extrema izquierda [...] de ser intervenida, él no lo consideraría como un acto de antisemitismo”<sup>99</sup>. Una vez más, la diplomacia israelí ayudaba a la dictadura uruguaya a sortear críticas de Estados Unidos.

Los diplomáticos de Israel también desvirtuaban la gravedad de atentados antisemitas que sucedían impunemente en una de las dictaduras más vigilantes del continente. Sin la complicidad de fuerzas de seguridad no hubieran sido posibles. Durante la primera visita del rabino Rosenthal a Uruguay, los representantes del CCI declararon “aquí aparentemente no hay antisemitismo”<sup>100</sup>, a pesar de repetidas amenazas de bombas contra escuelas judías<sup>101</sup>. Ofri, presente en la entrevista, se mantuvo en silencio. Cuando un grupo de empresarios judíos fueron detenidos acusados de corrupción, el silencio público del embajador de Israel contradecía su informe: “Oí de fuentes muy confiables acerca de expresiones alarmantes contra los judíos y sus acciones contra el país”<sup>102</sup>. El silencio cómplice de Israel se mantuvo cuando el profesor Robert Goldman dio testimonio ante la comisión de derechos humanos en Ginebra que el coronel Federico Silva Ledesma, jefe del Supremo Tribunal Militar, durante una conversación con la delegación internacional de juristas admitió el uso de la tortura y realizó comentarios antisemitas<sup>103</sup>. Algunos meses más tarde, tras varios atentados contra sinagogas e instituciones judías en Montevideo<sup>104</sup>, la embajada de EEUU reportaba que los diplomáticos israelíes y los dirigentes judíos uruguayos “reaccionaron con calma”<sup>105</sup>. La Liga antidifamación fue convencida de no denunciar los incidentes<sup>106</sup>. Cuando una bomba explotó al lado de una sinagoga causando daños materiales, el CCI ya no podía mantenerse en silencio. Su comunicado de prensa repudió “formas salvajes de antisemitismo” pero expresó fe que las autoridades aprehenderían a los perpetradores<sup>107</sup>.

---

97 AMEMBASSY MONTEVIDEO, 29/4/1977. NARA, AAD.

98 SECSTATE WASHDC, “Jewish arrests”, 27/5/1977. NARA, AAD.

99 AMEMBASSY MONTEVIDEO, 8/6/1977. NARA, AAD.

100 AMEMBASSY MONTEVIDEO, 4/11/1977. NARA, AAD.

101 Uruguay, “Bomb threats Received in Jewish Community”, 11/9/1976. WikiLeaks, Public Library of US Diplomacy.

102 “Judíos arrestados por delitos económicos”, 30/11/1977, ISA-mfa-IsraeliMissionUruguay-000rqd1.

103 USMISSION GENEVA, 22/2/1978; AMEMBASSY MONTEVIDEO, 20/12/1977. NARA, AAD.

104 “Pedreas Contra Locales Israelitas”, *El Día*, 8 de abril de 1978.

105 AMEMBASSY MONTEVIDEO, 8/4/1978. NARA, AAD.

106 SECSTATE WASHDC, 15/4/1978. NARA, AAD.

107 “Irrupciones antisemitas en Uruguay”, *Maariv*, 27 de octubre de 1978.

El apoyo de Israel a la narrativa oficial uruguaya convenció al embajador de Estados Unidos<sup>108</sup>. Ningún sospechoso fue detenido. La literatura antisemita se vendía libremente en Montevideo y las actividades de grupos nazis eran toleradas<sup>109</sup>.

Mientras tanto, tras presiones de la administración Carter, los diplomáticos extranjeros acreditados en Uruguay fueron invitados a visitar las dos principales prisiones políticas. En las barracas del penal de Libertad, los encargados de Estados Unidos e Israel recibieron la denuncia de un preso, el militante comunista Isaac Apelbaum, quien a pesar de la intimidatoria presencia de un jerarca del penal se refirió a maltratos antisemitas por parte del oficial encargado. Los diplomáticos hicieron una denuncia formal<sup>110</sup>. Ahora tenían un irrefutable testimonio en primera persona.

Mientras tanto, el reputado militar antisemita Alberto Ballestrino fue ascendido de coronel a general y era director de un importante colegio militar. En el acto de graduación de 1979, Ballestrino pronunció un discurso que finalizó con una estrofa de “una vieja canción de guerra alemana”<sup>111</sup>. Ya era innegable la presencia de al menos un general nazi en la Junta de Comandantes en Jefe, el verdadero poder político en Uruguay. Ante preguntas de Jerusalén, Shlomo Cohen, encargado de la embajada en Montevideo confirmó la reputación de Ballestrino y mencionó “una conjetura que él está detrás de las actividades antisemitas en Uruguay”. De todas maneras, el comandante en jefe del ejército, teniente general Queirolo, le aseguró que las palabras de Ballestrino no representaban la política oficial del ejército<sup>112</sup>.

En abril de 1980 Netaniel Matalon, el nuevo embajador de Israel, rompió siete años de encubrimiento israelí del antisemitismo en el régimen uruguayo. En una entrevista<sup>113</sup> reveló que cuando solicitó a un jerarca militar impedir la circulación de literatura nazi se le respondió “que no era necesario [...] consulté que harían si apareciera literatura izquierdista o marxista y me dijeron que la prohibirían”. Las palabras de Matalon causaron una primera crisis desde la instauración de la alianza política en 1972<sup>114</sup>. Las declaraciones fueron iniciativa personal de Matalon<sup>115</sup>. El embajador uruguayo en Israel Bautista Etcheverry Boggio transmitió al ministro de exterior de Israel un mensaje de protesta del canciller uruguayo. Las expresiones del embajador de Israel servían a la propaganda de los opositores

---

108 AMEMBASSY MONTEVIDEO, 27/10/1978. NARA, AAD.

109 “Rumores sobre un campamento de entrenamiento paramilitar nazi en Uruguay”, *JTA*, 3 de octubre de 1979 y 12 de octubre de 1979. También Sharnak, *op.cit.*, 2023, p. 78.

110 AMEMBASSY MONTEVIDEO, 7/9/1979. NARA, AAD. “Informe sobre visita representantes diplomáticos extranjeros al EMR 1”, 12/9/1979. Archivo del Terror, Rollo 437r.

111 “Ballestrino: En las sombras, el enemigo acecha”, *La Mañana*, 7 de diciembre de 1979.

112 15/2/1980, ISA-mfa-CSAmericaCaribbean-00112xg.

113 Luis Hierro, “La Paz y la Guerra según un Diplomático y Político Israelí”, *Noticias*, 16 de abril de 1980.

114 “Tensiones en las relaciones con Uruguay”, *Maariv*, 23 de abril de 1980.

115 “Reportaje”, 23/4/1980. ISA-mfa-CSAmericaCaribbean-00112xo.

del gobierno uruguayo<sup>116</sup>. En un intento por preservar el pacto del silencio, el ministerio prohibió a Matalon realizar declaraciones inconsultas<sup>117</sup>.

En mayo el rabino Rosenthal visitó nuevamente Uruguay<sup>118</sup>. Días después, una granada lacrimógena fue arrojada en un cine que exhibía una película sobre la captura de Adolf Eichmann<sup>119</sup>. El CCI denunció lo que consideraba “un atentado nazi”. El gobierno respondió virulentamente rechazando la calificación<sup>120</sup>. La especulación de la prensa internacional acerca de la presencia del criminal de guerra nazi Josef Mengele como asesor en el penal de Libertad incomodó a los diplomáticos israelíes y al gobierno uruguayo. Tratando de desmentir las denuncias de impunidad hacia la violencia antisemita, la policía uruguaya anunció la detención de una célula antisemita de tres personas que habría arrojado piedras a sinagogas y realizado pintadas en muros<sup>121</sup>. Ese grupúsculo poco sofisticado no estaba detrás de los principales atentados anteriores. De todas maneras, se había roto el pacto del silencio sobre la existencia de grupos antisemitas y nazis cobijados desde organismos de seguridad uruguayos.

## EPÍLOGO

Durante 1979-1980, la alianza entre los gobiernos de Uruguay e Israel se desestabilizó. El gobierno uruguayo atendía a presiones árabes debido a sus dificultades para obtener petróleo tras la ruptura de relaciones con Venezuela y las tensiones con México. Cediendo a presiones Uruguay se abstuvo e incluso votó algunas mociones críticas a Israel en Naciones Unidas. El discurso oficial del Uruguay asumió el derecho palestino a la autodeterminación, aunque en privado los gobernantes uruguayos expresaran a sus pares israelíes su oposición a un estado palestino. Tras la anexión unilateral de Jerusalén oriental (julio de 1980), Uruguay junto al resto de los países que tenían sus embajadas en la ciudad en discordia las retiraron a Tel Aviv. Sin embargo, la dictadura uruguaya fue fiel al compromiso asumido ante Israel de rechazar a la OLP. Chile y Argentina permitieron la apertura de oficinas de la Liga Árabe, en las que funcionarios de la OLP se instalaban como diplomáticos. El régimen uruguayo no lo permitió.

A fines de 1980 la inteligencia militar uruguaya se quejó ante un representante del Mossad por el envío por correo de propaganda antidictatorial del CSDPU

---

116 2/5/1980, No.190. AA-MRREE-Uruguay, Emb. en Israel.

117 “Mensaje de canciller a canciller”, 16/5/1980. ISA-mfa-CSAmericaCaribbean-00112xo.

118 Matalon, 20/5/1980, ISA-mfa-CSAmericaCaribbean-00112xh.

119 “Tear Gas Disrupts Film on Eichmann’s Capture”, *JTA*, 13 de junio de 1980.

120 “Frente a un nuevo atentado nazi”, 4/6/1980; *DINARP*, 6/6/1980. ISA-mfa-CSAmericaCaribbean-00112xh.

121 “Desbarataron grupo antisemita”, *El País*, 26 de febrero de 1981.

desde Israel a instituciones en Uruguay<sup>122</sup>. La embajada de Uruguay en Israel también se quejaba por la publicación de artículos y caricaturas contra la dictadura en Israel<sup>123</sup>. Las actividades y las publicaciones eran perfectamente legales<sup>124</sup>. Sin embargo, hay indicios de que los servicios de seguridad de Israel compartieron con sus colegas uruguayos información sobre opositores residentes en Israel<sup>125</sup>.

Las dramáticas denuncias sobre las atrocidades cometidas en Argentina afectaron a la opinión pública en Israel, donde residían cientos de familiares de desaparecidos. Presionados por la conmoción en Israel y por las intervenciones de organizaciones judías estadounidenses, los diplomáticos israelíes en Uruguay aumentaron sus esfuerzos por obtener la liberación de presos de origen judío.

Sin embargo, la alianza política se sostuvo en torno a dos cuestiones centrales: Uruguay se negaba a reconocer a la OLP e Israel mantenía su complicidad con la dictadura. La compra de pertrechos militares israelíes aumentó muy levemente. Los intereses económicos mutuos de desarrollaron moderadamente: un ligero incremento en el comercio mutuo y la apertura de sucursales de bancos israelíes en Uruguay. Lo material seguía siendo accesorio a una profunda identificación geopolítica.

En 1981-1984 la alianza se recompuso. Uruguay apoyó con entusiasmo la paz entre Egipto e Israel. El acuerdo excluía a la URSS y a la OLP. Para observar su implementación se formó una Fuerza Multinacional conducida por Estados Unidos. Israel aprobó y alentó la participación de Uruguay. Además de una fuente de ingresos el ejército uruguayo recibía legitimidad internacional. Ambos gobiernos apoyaron la política agresiva de Reagan en Centroamérica. En 1982 Uruguay aprobó la invasión del Líbano por parte de Israel. Las relaciones bilaterales incluyeron visitas recíprocas de cancilleres.

Sin legitimidad interna y económicamente fracasada la dictadura uruguaya languidecía. Entendiendo que la transición se aproximaba, la diplomacia israelí cortejaba en 1983 a políticos opositores de derecha. Eso sí, Israel siguió cultivando relaciones con los organismos represivos uruguayo porque “aunque sucedan cambios políticos el servicio aquí es un cuerpo permanente”<sup>126</sup>. Efectivamente, el fin de la dictadura no modificó la orientación geopolítica del Uruguay coincidente con la Israel y los organismos de seguridad siguieron durante varios años siendo una especie de foco de poder en las sombras, garantes, entre otras cosas, de esa misma orientación.

---

122 “Volantes contra el régimen”, 12/1980, ISA-mfa-CSAmericaCaribbean-00112xh.

123 “Caricatura insultante a nuestras Fuerzas Armadas, publicada en *Semana*”, 4/1/1981. 7/1981. AA-MRREE, Embajada en Israel.

124 Infructuosamente un funcionario del ministerio de Exterior solicitó al director de *Semana* moderar las críticas a Uruguay. Carmi, 26/1/1981. ISA-mfa-CSAmericaCaribbean-00112xo.

125 “Actividades de uruguayos en el exterior...”, Álvaro Rico, *op.cit.*, 2009, tomo 2, sección 4, p. 578.

126 Matalon, 16-17/12/1982, 0010rz6.

## BIBLIOGRAFÍA

- ADROVER, Fernando, "Uruguay's stance on the Palestinian problem at the United Nations and the creation of the State of Israel", *Latin American Perspectives*, Issue 226, 46 (3), 2019, pp. 26-41. <https://doi.org/10.1177/0094582X19831440>
- BARROMI, Joel y FELDMAN, Carlos, "Latin American Voting on Israeli Issues in the U.N. General Assembly, 1947-1968", *Jewish Social Studies* 36 (2), 1974, pp. 142-165.
- DAVIDI, Efraim, "Exílio sul-americano en Israel (1973-1978)", *Tensões Mundiais* 5 (9), 2009.
- DOBRY, Hernán, *Operación Israel: El rearme argentino durante la dictadura, 1976-1983* (Buenos Aires: Lumiere, 2011).
- ESCUDE, Carlos, "Israel, Latin America and the United States: A Peripheral-Realist Perspective", *Documentos de Trabajo*, n° 413, 2009. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1529311>
- DUTRÉNIT, Silvia, *La embajada indoblegable. Asilo mexicano en Montevideo durante la dictadura* (Montevideo: Fin de Siglo, 2025).
- GUIDA, Alessandro, "All'ombra degli Stati Uniti: le relazioni tra Cile ed Israele fra armi e diplomazia (1973-80)", *Processi Storici e Politiche di Pace* 27-28, 2020, pp. 113-143.
- HARVEY PARADA, Hugo, *Las relaciones entre Chile e Israel, 1973-1990. La conexión oculta* (Santiago de Chile: USACH y RiL, 2011).
- JAMAIL, Milton; GUTIERREZ, Margo, *It's No Secret: Israel's Military Involvement in Central America* (Belmont, MA: Association of Arab American University Graduates and Maple Leaf Press, 1986).
- LEIBNER, Gerardo, "La colaboración de Israel con la última dictadura militar argentina: nuevas fuentes y reinterpretación", *Historia y Política*, 2025. <https://doi.org/10.18042/hp.2025.AL.10>
- MARKARIÁN, Vania, *Left in transformation. Uruguayan exiles and the Latin American human rights networks, 1967-1984* (New York and London: Routledge, 2005).
- MCSHERRY, J. Patrice, *Predatory States: Operation Condor and Covert War in Latin America* (Rowman & Littlefield Publishers, 2005).
- MCSHERRY, J. Patrice, "Death Squads as Parallel Forces: Uruguay, Operation Condor, and the United States", *Journal of Third World Studies* 24 (1), 2007, pp. 13-52.
- POLAKOW-SURANSKY, Sasha, *The Unspoken Alliance: Israel's Secret Relationship with Apartheid South Africa* (New York: Pantheon Books, 2010).
- RICO, Álvaro (coord.), *Investigación histórica sobre la dictadura y el terrorismo de Estado en el Uruguay (1973-1985)* (Montevideo: Universidad de la República, 2009), Tomo 2.
- RUIZ, Marisa, *La piedra en el zapato: amnistía y la dictadura uruguaya* (Montevideo: Universidad de la República, 2006).
- SENKMAN, Leonardo, "Israel y el rescate de las víctimas de la represión: una evaluación preliminar", en SENKMAN, Leonardo y SZNAJDER, Mario (eds), *El legado del autoritarismo* (Buenos Aires: 1995), pp. 283-324.
- SHARNAK, Debbie, *Of Light and Struggle. Social Justice, Human Rights, and Accountability in Uruguay* (Filadelfia: University of Pennsylvania Press, 2023).

- SNYDER, Sarah, “Ending Our Support for the Dictators’: Ed Koch, Uruguay, and Human Rights”, *Cold War History* 21 (1), 2020. <https://doi.org/10.1080/14682745.2019.1705790>
- SZNAJDER, Mario y RONIGER, Luis, “From Argentina to Israel: Escape, Evacuation and Exile”, *Journal of Latin American Studies* 37 (2), May 2005, pp. 351-377. <https://doi.org/10.1017/S0022216X05009041>
- ZADOFF, Efraim, “Israel y la violación de los derechos humanos en Argentina”, en *Informe de Comisión Israelí por los Desaparecidos en Argentina*, 2002.

# La prensa chilena y el terrorismo italiano durante el régimen cívico-militar (1973-1981)

VALERIO GIANNATTASIO 

Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

## Resumen

Es bien sabido cómo desde los Sesenta en Italia los acontecimientos políticos chilenos se interpretaron para extraer supuestas lecciones. En Chile ocurrió lo mismo, sin embargo, tras el golpe de Estado las interpretaciones cambiaron y se intentó extraer nuevos significados para la afirmación interna del régimen cívico-militar. El presente trabajo quiere reconstruir la mirada de los periódicos chilenos sobre el desarrollo del terrorismo en Italia y su crisis política entre 1973 y 1981.

Entre el ascenso de Pinochet y el ocaso en Italia del grupo más conocido de la extrema izquierda, las *Brigate Rosse*, la prensa habló de los acontecimientos italianos, de los atentados, de la naturaleza de los grupos terroristas y de la crisis político-social del país. Los diarios aprovecharon para perseguir paralelos con Italia y avalar la cruzada del régimen y su proyecto refundacional. La prensa intentó, además, consolidar el imaginario sobre la subversión y aportar pruebas a la tesis de la intervención militar como salvación. Asimismo, el terrorismo y las dificultades políticas de Italia, en fin, brindaron la oportunidad de atacar a las democracias liberales y su decadencia, como ocurrió de manera evidente durante el secuestro de Aldo Moro.

## Palabras llaves:

Chile; Italia; Terrorismo; Régimen cívico-militar; Prensa

## Abstract

It is well known how, since the 1960s in Italy, Chilean political events were interpreted in order to draw supposed lessons. The same thing happened in Chile, but after the *golpe*, interpretations changed and attempts were made to draw new meanings for the internal affirmation of the civil-military regime. This paper aims to reconstruct the view of Chilean newspapers on the development of terrorism in Italy and its political crisis from 1973 to 1981.

Between Pinochet's rise to power and the decline in Italy of the best-known extreme left-wing group, the *Brigate Rosse*, the press reported on Italian events, the attacks, the nature of the terrorist groups, and the country's political and social crisis. The newspapers took advantage of this to draw parallels with Italy and endorse the regime's crusade and its project of refounding the country. The press also attempted to consolidate the image of subversion and provide evidence for the thesis of military intervention as salvation. Likewise, terrorism and Italy's political difficulties provided an opportunity to attack liberal democracies and their decline, as was evident during the kidnapping of Aldo Moro.

## Keywords:

Chile; Italy; Terrorism; Civil-military regime; Press

## ITALIA Y CHILE: LOS VÍNCULOS

Un nuevo hecho de violencia y sangre se ha registrado en el historial del terrorismo, la enfermedad más grave que padece el mundo de hoy. [...] Tan dramático desenlace [...] nos lleva lamentablemente a la crítica de algunas democracias tradicionales bajo las cuales brotan y desarrollan estos grupos de tan bajos sentimientos cuyo afán es de implantar el terrorismo marxista que no tiene ni dios ni ley<sup>1</sup>.

Con estas palabras, Augusto Pinochet Ugarte comentó la noticia proveniente de Italia sobre el hallazgo del cuerpo de Aldo Moro, el líder de la *Democrazia Cristiana* (DC) asesinado el 9 de mayo de 1978, tras ser secuestrado el 16 de marzo y encarcelado durante 55 días por las Brigadas Rojas, el grupo armado más conocido y numeroso de la extrema izquierda italiana<sup>2</sup>.

En ese momento, Italia, su inestabilidad y el fenómeno terrorista, estuvieron en el centro de la atención de los medios de comunicación chilenos y de la junta. Esto ocurrió bajo una interpretación diferente con respecto al pasado, orientada a utilizar los acontecimientos externos para validar las decisiones tomadas, o más bien impuestas, a nivel nacional. No era la primera vez que esto sucedía, pero la gravedad y la fragilidad de los procesos políticos italianos, así como las necesidades del régimen suramericano, brindaron a este la oportunidad de reinterpretar los hechos de una manera que afirmara, más que en las precedentes ocasiones, su cruzada en el ámbito más amplio de un proceso de “reeducación” de la población<sup>3</sup>.

Chile e Italia, una vez más, parecían tener una conexión especial, como había sucedido desde la década de 1960, cuando ambos países habían estado tan conectados que se habló de un juego de espejos y, en ocasiones, de destinos cruzados. Cabe decir que, desde la perspectiva italiana, el interés por la nación andina formaba parte de un fenómeno más amplio de atención hacia Latinoamérica, debido

---

1 Gabriel González Segovia, “El terrorismo es la enfermedad más grave del mundo de hoy”, *La Tercera*, 10 de mayo de 1978. Para el presente trabajo, la investigación se llevó a cabo en la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Por lo tanto, quiero agradecer la fundamental ayuda de David Vásquez Vargas, del Departamento de Estudios, Extensión y Publicaciones.

2 Entre muchos, destacamos: Agostino Giovagnoli, *Il caso Moro. Una tragedia repubblicana* (Bologna: Il Mulino, 2018); Miguel Gotor, *Il memoriale della repubblica. Gli scritti di Aldo Moro dalla prigionia e l'anatomia del potere italiano* (Torino: Einaudi, 2020); Riccardo Ferrigato, *Non doveva morire. Come Paolo VI cercò di salvare Aldo Moro* (Roma: Edizioni San Paolo, 2018); Sergio Flamigni, *Il covo di Stato e la prigionia fantasma. Il delitto Moro in via Gradoli e in Via Montalcini* (Milano: Kaos, 2016). Sobre las BR, entre muchos señalamos: Muzio Clementi, *Storia delle Brigate rosse* (Roma: Odradek, 2007); Alessandro Orsini, *Anatomia delle Brigate rosse. Le radici ideologiche del terrorismo rivoluzionario* (Soveria Mannelli: Rubettino, 2009); Mario Moretti, *Brigate Rosse, entrevista de Carla Mosca y Rossana Rossanda* (Milano: Mondadori, 2017); Giovanni Fasanella e Alberto Franceschini, *Che cosa sono le BR* (Milano: Rizzoli, 2004).

3 Un análisis más amplio en términos temporales sobre el terrorismo italiano en la prensa chilena se llevó a cabo en un trabajo precedente, Valerio Giannattasio, “L'Italia e il fenomeno terrorista nella stampa cilena (1969-1981)”, *Processi Storici e Politiche di Pace, Numero Speciale Cile e Italia, 1973-2023* (2023), pp. 47-64.

a las transformaciones económicas y sociales y al efervescencia política y cultural, que llevó a considerar el subcontinente como “laboratorio” especial<sup>4</sup>.

Sin embargo, ese vínculo ese vínculo se sustentó en la identificación de ciertos aspectos del espectro político de ambos países considerados comparables, y se articuló principalmente a través de relaciones político-partidarias. En este sentido, como ha evidenciado la historiografía, resultaron clave los lazos entre el Partido Demócrata Cristiano de Chile (PDC) y la DC, antes y luego de la victoria de Eduardo Frei Montalva en 1964, cuando evolucionaron también a nivel institucional<sup>5</sup>. Dicha relación tuvo impacto sobre las izquierdas, llamadas a reflexionar sobre el reformismo y los posibles diálogos con los demócratacristianos<sup>6</sup>. Tales procesos propiciaron la proliferación de paralelismos entre ambos países, fenómeno que se debió, en particular, a la influencia ejercida sobre los acontecimientos italianos. De hecho, el suceso de la Unidad Popular y de Salvador Allende generó enormes debates en Italia<sup>7</sup>, donde la “vía chilena al socialismo” se volvió un elemento central de discusión, y especialmente desde la izquierda, se miró a sus desarrollos para extraer posibles “lecciones”<sup>8</sup>.

Tras el golpe de Estado en Italia hubo una conmovedora reacción que llevó a importantes formas de solidaridad y, al mismo tiempo, a reflexionar de manera más profunda sobre Unidad Popular, las ambigüedades del PDC y la relación con las fuerzas armadas. A través del prisma chileno, se intentó encontrar respuestas a la crisis que el país y el sistema internacional estaban enfrentando. Entonces,

4 Cfr. Luigi Guarnieri Calò Carducci y Maria Rosaria Stabili, “Il mito politico dell’America Latina negli anni Sessanta e Settanta”, en Giorgio Del Zama y Agostino Giovagnoli (eds.), *Il mondo visto dall’Italia* (Milano: Guerrini e Associati, 2004), pp. 217-227. Gran influencia, además, tuvieron la música, especialmente la *bossa nova*, y la literatura; véase: Ruy Castro, *Chega de saudade. Storia e storie della nova* (Tissi [SS]: Angelica, 2005); Stefano Tedeschi, *All’inseguimento dell’ultima utopia. La letteratura ispano-americana in Italia e la creazione del mito dell’America Latina* (Roma: Nuova Cultura, 2006); Julio Cortázar et alii, *Las cartas del boom* (Madrid: Alfaguara, 2023).

5 Cfr. Raffaele Nocera, *Acuerdos y desacuerdos. La DC italiana y el PDC chileno: 1962-1973* (Santiago de Chile: FCE, 2015) pp.112-132; Alessandro Santoni, “Religión, política y Democracia Cristiana: Chile e Italia en perspectiva comparada”, *Historia y Política* 29, 2013, pp. 197-201. Sobre el internacionalismo demócratacristiano, Raffaele Nocera, *Il sogno infranto. DC, l’Internazionale democristiana e l’America Latina (1960-1980)* (Roma: Carocci, 2017).

6 Los comunistas italianos y chilenos reflexionaron sobre una posible política de alianzas, al menos con la izquierda del mundo católico (Alessandro Santoni, *Il PCI ei giorni del Cile. Alle origini di un mito politico* (Roma: Carocci, 2008), pp. 66-80).

7 Cfr. Raffaele Nocera y Claudio Rolle (eds.), *Settantatré: Cile e Italia, destini incrociati* (Napoli: Think Thanks, 2011).

8 El primero en hablar de “lecciones” fue Maurizio Ferrara, en el diario comunista *L’Unità* (“La lezione del Cile”, 8 de septiembre de 1970). Las comparaciones, a menudo, no tuvieron en cuenta las peculiaridades del proceso chileno. Cfr. Maria Rosaria Stabili, *Il Cile. Dalla repubblica liberale al dopo-Pinochet. 1861-1990* (Firenze: Giunti, 1991), pp. 143-150; Alessandro Guida, *La lezione del Cile. Da Unidad popular al golpe del 1973 nella stampa italiana di sinistra* (Napoli: Università “L’Orientale” press, 2015); Raffaele Nocera, *op. cit.*, 2015, pp. 166-179; Alessandro Santoni, *op. cit.*, 2008, pp. 87-117; Alessandro Guida, “La via cilena al socialismo nella stampa italiana di sinistra (1970-1973)”, *Nuova Storia Contemporanea* 18 (4), 2014, pp. 99-120; Andrea Mulas, “Lelio Basso e il Cile dell’Unidad Popular”, *Parolechiave* 33 (2), 2023, pp. 153-162.

el secretario del *Partito Comunista Italiano* (PCI) Enrico Berlinguer, explicitó las tesis del “compromiso histórico”, es decir una alianza de todas las fuerzas democráticas, incluida la DC, para defender el sistema de las amenazas internas y externas<sup>9</sup>. La *Democrazia Cristiana*, por un lado, tuvo que balancear su solidaridad hacia los amigos chilenos con la condena del golpe y las dificultades en las relaciones bilaterales tras la decisión de no reconocer la junta militar<sup>10</sup>. Por el otro, tuvo que evaluar las tesis propuestas por el PCI e intentar un dialogo complicado por las tensiones en el gobierno, la radicalización del enfrentamiento social, la crisis económica, y la rigidez de la Guerra Fría<sup>11</sup>.

No cabe duda que, a partir del golpe, Chile representó un paradigma de lo que significaron los regímenes cívico-militares en el Cono Sur, y de cuáles eran los riesgos para sistemas en profunda crisis. Durante los años setenta, en Italia, una posible deriva reaccionaria no resultó una hipótesis lejana, sea por el ascenso de la violencia política, sea por los casos cercanos, como el de Grecia<sup>12</sup>, sea por los vínculos entre derechas internacionales<sup>13</sup>.

## LA PRENSA Y LOS AÑOS PRE-GOLPE

No obstante, las conexiones entre ambos países, la historiografía y el periodismo, las han abordado principalmente desde el punto de vista italiano. En cambio, no se ha prestado la misma atención a la perspectiva chilena sobre lo que sucedía en la península, ni se ha intentado comprender si los acontecimientos italianos tuvieron algún impacto en el debate de la nación sudamericana. Sin embargo, cabe preguntarse si, como la llamada lección chilena en Italia, algo similar ocurrió

9 Enrico Berlinguer, “Imperialismo e coesistenza alla luce dei fatti cileni”, *Rinascita* 38, 28 de septiembre de 1973, pp. 3-4; “Via democratica e violenza reazionaria”, *Rinascita* 39, 5 de octubre de 1973, pp. 3-4; “Alleanze sociali e schieramenti politici”, *Rinascita* 40, 12 de octubre de 1973, pp. 3-5. Sobre el tema: Andrea Mulas, *Allende e Berlinguer. Il Cile dell'Unità Popolare e il compromesso storico* (San Cesario di Lecce: Manni, 2005); Alessandro Santoni, “Berlinguer il compromesso storico e il caso cileno”, *Contemporanea* 3, 2007, pp. 419-439; Valentine Lomellini, “Bisbigliando al “nemico”? il Pci alla svolta del 1973, tra nuove strategie verso Washington e tradizionale anti-americanismo”, *Ricerche di Storia Politica* 1, 2013, pp. 25-44.

10 Cfr. Luigi Giorgi, *La DC e la politica italiana nei giorni del golpe cileno* (Bologna: Zikkaron, 2018); Raffaele Nocera, “Il governo italiano e la DC di fronte al golpe cileno”, *Nuova Storia Contemporanea*, 2, 2008, pp. 87-110; Tomaso De Vergottini, *Cile: diario di un diplomatico (1973-1975)* (Milano: Koinè nuove edizioni, 2000).

11 Cfr. Leopoldo Nuti, *Gli Stati Uniti e l'apertura a sinistra. Importanza e limiti della presenza americana in Italia* (Bari: Laterza, 1999); Italo Garzia, Luciano Monzali; Federico Imperato (eds.), *Aldo Moro, l'Italia repubblicana e i popoli del Mediterraneo* (Nardò: BESA, 2013).

12 Cfr. Cinzia Venturoli, “Ankara, Atene, domani Roma viene. I rapporti del regime dei colonnelli con l'estrema destra italiana”, en Mirco Dondi; Domenico Guzzo (eds.), *La Strategia della tensione tra Piazza Fontana e l'Italicus: fenomenologia, rappresentazioni, memoria* (Milano: Biblion, 2022), pp. 61-78.

13 Cfr. Vito Ruggiero, *Il sogno anticomunista. Neofascisti italiani in America Latina (1977-1982)* (Roma: RomaTre press, 2023).

en el país andino. En este sentido, la prensa brinda una perspectiva particularmente interesante, ya que permite comprender cómo se percibía la península y la imagen que se proyectaba respecto a sus procesos políticos. Entre finales de los Sesenta y el periodo dictatorial hubo continuidades y discontinuidades, con algunos elementos constantes en la mirada de la prensa, como la inestabilidad política y algunos clichés respecto a una propensión al desorden y a una especie de “excepción italiana” en la manera de solucionar los problemas.

En el intento de extraer perspectivas útiles para Chile, significativo fue el interés mostrado por la prensa hacia el fenómeno terrorista y sus desarrollos. Un interés, que se acentuó durante la década de 1970, debido principalmente al aumento de las acciones de los distintos grupos extremistas y su impacto en el sistema italiano<sup>14</sup>. Durante la década, ese fenómeno se fue interpretando de forma cada vez más instrumental a nivel interno, hasta adquirir un carácter peculiar después del golpe y de la estabilización del régimen cívico-militar luego de 1975. En este sentido, el análisis del terrorismo se convirtió paulatinamente en el efecto más evidente de una crisis sistémica más profunda, no solo italiana sino de las democracias liberales, y al mismo tiempo un prisma para interpretar los procesos sociopolíticos locales. Este tipo de consideraciones, permitieron dibujar elementos para apoyar las políticas autoritarias, en un trabajo de afirmación, autoafirmación y construcción de un nuevo imaginario para el uso y consumo de quienes debieron ser los nuevos chilenos.

Ya desde finales de los años 1960, en una coyuntura especialmente delicada para ambos países, los medios de información habían concedido algo de espacio a la delicada fase política que estaba experimentando Italia. En Chile la situación se tornaba siempre más compleja para la presidencia Frei, debido a los resultados contradictorios del proyecto reformista, al aumento del conflicto social y a la radicalización que involucraba a todo el espectro político<sup>15</sup>. Esto hizo que la prensa, y no solo, miraran a la evolución de los acontecimientos en Italia para disipar temores o evaluar las posibles consecuencias de lo que enfrentaba Chile. La atención estuvo centrada en la inestabilidad política, en los problemas internos a los partidos y en el estallido de la espiral de violencia.

---

14 El terrorismo italiano se destacó por el número de víctimas y de ataques, su duración y sus conexiones internacionales. Véase: Giovanni Mario Ceci, *Il Terrorismo italiano. Storia di un dibattito* (Roma: Carocci, 2013) y *La CIA e il terrorismo italiano. Dalla strage di piazza Fontana agli anni Ottanta (1969-1986)* (Roma: Carocci, 2019); Giorgio Galli, *Piombo rosso. La storia completa della lotta armata in Italia dal 1970 a oggi* (Milano: Baldini e Castoldi, 2013).

15 Cfr. Sofia Correa *et al.* (eds), *Historia del Siglo XX chileno* (Santiago de Chile: Sudamericana), 2001, pp. 246-256; Maria Rosaria Stabili, *op. cit.*, 1991, pp. 120-127; Alan Angell, *Chile de Alessandri a Pinochet: en busca de la utopía*, (Santiago de Chile: Editorial Andres Bello, 1993), pp. 54-55; Rafael Sagredo Baeza, *Historia mínima de Chile* (México: El Colegio de México, 2014), pp. 242-244; Tomas Moulian, *Fracturas. De Pedro Aguirre Cerda a Salvador Allende (1938-1973)* (Santiago de Chile: LOM, 2006), pp. 232-234. En esos años nacieron el Partido Nacional, el Movimiento de Acción Partido Unitario Popular y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria.

Antes del golpe, en la nación andina, fueron dos los momentos más altos de la atención sobre el fenómeno terrorista en la península. El primero fue en 1969 en ocasión de los atentados del 12 de diciembre en Roma y, sobre todo, en Milán, donde una bomba en la Piazza Fontana causó 17 muertos y 90 heridos, dando lugar a lo que se conocería como la “estrategia de la tensión”<sup>16</sup>. El segundo, durante el gobierno de Allende, cuando aumentaron los temores ante la creciente polarización en varios segmentos de la sociedad. En este sentido, se señalaron los debates en torno al fallido golpe de Estado organizado por Junio Valerio Borghese<sup>17</sup> en diciembre de 1970 y, sobre todo, las duras controversias respecto a la misteriosa muerte del editor Giangiacomo Feltrinelli (14 de marzo de 1972)<sup>18</sup>. Durante estos años aumentaron los paralelismos con Chile y las posturas de los diarios reflejaron la extrema e irremediable polarización política<sup>19</sup>.

## LA DICTADURA Y EL AVANCE DEL TERRORISMO EN ITALIA

Tras el golpe de Estado del 11 de septiembre, la nueva realidad política influyó considerablemente en la interpretación de los acontecimientos nacionales e internacionales por parte de la prensa. La atención a los asuntos italianos se mantuvo constante, centrada principalmente en la complejidad del panorama político, aunque con elementos nuevos. La fragilidad de dicho sistema, su crisis socioeconómica, institucional y cultural, comenzaron a considerarse dentro de la crítica más amplia a la debilidad y al deterioro de la democracia liberal y a su incapacidad para responder eficazmente a la subversión internacional. Así, en el trasfondo, emergió un mensaje de revancha y una reafirmación de lo acertada que estaban las decisiones y la conducta de los militares.

El terrorismo —de derecha, y, aún más, el de izquierda— se percibió como el resultado de una crisis sistémica y de valores, y, además, un factor de su aceleración. La proliferación de acciones y grupos extremistas a mediados de la década de 1970 parecieron confirmar esta impresión. Sin embargo, los medios continuaron a denunciar los riesgos para las instituciones que llegaban del

---

16 Esta definición se refiere a los intentos de socavar la democracia a través de atentados y asesinatos perpetrados por grupos subversivos con la complicidad de aparatos estatales durante más de una década. Véase: Mirco Dondi, *L'eco del boom. Storia della strategia della tensione* (Roma-Bari: Laterza, 2015); Aldo Giannuli, *La strategia della tensione* (Milano: Ponte alle Grazie, 2018). Sobre el atentado de Piazza Fontana, véase Mimmo Franzinelli, *La sottile linea nera. Neofascismo e servizi segreti da Piazza Fontana a Piazza della Loggia a Brescia* (Milano: Rizzoli, 2008); Enrico Deaglio, *La bomba. Cinquant'anni di Piazza Fontana* (Milano: Feltrinelli, 2019).

17 Cfr. Nicola Tonietto, “Un colpo di stato mancato? Il golpe Borghese e l'eversione nera in Italia”, *Diacronie* 3 (27), 2016; Fulvio Mazza, *Golpe Borghese. Quarto grado di giudizio. La leadership di Gelli, il golpista Andreotti*. *I depistaggi della “Dottrina Maletti* (Cosenza: Pellegrino Editore, 2021).

18 Véase: Egidio Ceccato, *Feltrinelli. Un omicidio politico* (Roma: Castelvecchi, 2018); Aldo Grandi, *Gli ultimi giorni di Giangiacomo Feltrinelli* (Milano: Chiarelettere, 2022).

19 Para un análisis de la prensa chilena se remite a mi trabajo Giannattasio, *op. cit.*, 2023, pp. 47-53.

extremismo de derecha, si bien consideraban mayores aquellos provenientes del lado marxista, en razón también de la fuerza del PCI. Esta actitud mostraba cómo la prensa chilena, en una fase de consolidación del poder cívico-militar, no quiso representar el proceso chileno como una respuesta derechista, sino como un camino que la democracia ‘había tenido’ que tomar después de los “desastrosos” años anteriores<sup>20</sup>.

Las opiniones de los principales periódicos, incluyendo los conservadores, comenzaron, por lo tanto, a ser mordaces y, en ocasiones, despectivas respecto a la península. En este sentido, por ejemplo, el surgimiento de grupos, como los *Nuclei Armati Proletari* (NAP)<sup>21</sup>, sobre quienes no se conocían muchos detalles, permitió denunciar supuestas relaciones ambiguas con el PCI<sup>22</sup>. Sobre todo, la prensa retomó críticas ya surgidas en el pasado hacia los gobiernos de centroizquierda<sup>23</sup>, entonces liderado por Aldo Moro, acusándolos de incapacidad en la gestión del orden. El país fue descrito como sumido a la anarquía, a merced de la violencia neofascista que querría dar un golpe como en 1922, y de la de extrema izquierda, culpable de generar un desorden del cual se habría beneficiado el PCI<sup>24</sup>. En esencia, se utilizaban interpretaciones y distorsiones de la situación italiana para establecer paralelismos con las turbulencias del Chile de la Unidad Popular, superadas, en fin, gracias a la intervención militar.

En ese entonces, la reacción del Estado italiano, las detenciones de diversos terroristas, en particular de las *Brigate Rosse*, y sus nuevas estrategias, recibieron poca cobertura en la prensa<sup>25</sup>. Además, faltaron análisis complejos y hubo cierta confusión entre extremismo, guerrilla urbana y grupos de la lucha armada<sup>26</sup>. En 1976, el interés se centró más en las elecciones de junio, una encrucijada crucial

20 Sobre la reeducación del país: Verónica Valdivia Ortiz De Zárate, “‘¡Estamos en guerra, señores!’ El régimen militar de Pinochet y el “pueblo”, 1973-1980”, *Historia* 43 (1), 2010, pp. 163-201; Alessandro Guida, *A la conquista de mentes y corazones. Propaganda, guerra psicológica y política cultural en Chile (1973-1975)* (Santiago de Chile: Ariadna, 2025).

21 Sobre los NAP: Valerio Lucarelli, *Vorrei che il futuro fosse oggi. Nuclei armati proletari, ribellione, rivolta e lotta armata* (Napoli: L’ancora del Mediterraneo, 2010).

22 “Organización terrorista fantasma surge en Italia”, *La Segunda*, 13 de junio de 1975.

23 Coalición entre la DC, el Partido Republicano, el Partido Socialista Democrático Italiano y el Partido Socialista Italiano que se inauguró con el gobierno de Moro en 1963.

24 Cfr. “Italia en el caos”, *Las Últimas Noticias*, 2 de mayo de 1975. Incluso en esa prensa, cobró fuerza una teoría, compartida por círculos de derecha en Italia, que veía, tras el respeto formal del PCI por la democracia, un papel para la URSS. El objetivo final, de hecho, habría sido alcanzar el poder de una forma u otra, ya sea mediante elecciones o, tras la muerte de Tito en Yugoslavia, con la intervención militar soviética (véase “La gran crisis italiana”, *El Mercurio*, 29 de enero de 1976; “Piano, piano hacia el poder”, *Qué Pasa*, 12 de mayo de 1976).

25 En esencia, se prefirió dar noticias de agencias en lugar de profundizar casos como la detención del ideólogo y fundador de las BR, Renato Curcio, en enero de 1976 (ver “Capturan al extremista más buscado de Italia”, *La Tercera*, 20 de enero de 1976).

26 Cfr.: “Ola de terror en Italia”, *La Segunda*, 2 de marzo de 1976 y “Violencia izquierdista en el centro de Roma”, *El Mercurio*, 9 de abril de 1976.

entre “marxismo y democracia”, o sea entre “libertad y dictadura”<sup>27</sup>. El avance electoral del PCI<sup>28</sup> y el aumento del malestar social confirmaron la tesis de la fragilidad de la democracia en Italia, y a esto, se sumó la difusión de teorías conspirativas en torno al mismo PCI, reforzadas por la denuncia del aumento de los ataques, a finales de 1976, de las BR, bajo la dirección de Mario Moretti<sup>29</sup>.

1977 fue un año de movilizaciones masivas de trabajadores y estudiantes, y fue a la fuerza de ese movimiento que los medios chilenos miraron para examinar la complejidad de la izquierda italiana. Según algunos la postura progubernamental del PCI había generado descontentos y un distanciamiento entre la dirigencia y la juventud, lo que empujaba a las nuevas generaciones hacia la lucha armada<sup>30</sup>. A confirmación de esta tesis llegaron las protestas universitarias de Roma y Bolonia, donde el asesinato a manos de la policía de Francesco Lo Russo, activista de *Lotta Continua*, desencadenó una guerra de guerrillas urbana y enfrentamientos entre estudiantes de derecha e izquierda<sup>31</sup>. *El Mercurio* destacó que existía un “clima de subversión en Italia” y una “maquinaria subversiva tan vasta que algunos observadores han pensado en la gestación de una guerra civil”, impulsada sobre todo por la infiltración entre los estudiantes de elementos de extrema izquierda<sup>32</sup>. Además, según el mismo diario, tras las conspiraciones terroristas se vislumbraba la acción de servicios secretos extranjeros, una teoría fácilmente explotada en el contexto chileno para exaltar la retórica antisubversiva y la cruzada del régimen<sup>33</sup>.

Italia, entonces, era el ejemplo de la crisis de las democracias europeas y de los Estados incapaces de responder a las amenazas de la subversión. Incluso, los informes sobre las condenas impuestas a grupos armados o el encarcelamiento de militantes se convirtieron en un punto de partida para destacar las dificultades

27 Angélica Arndt, “Italia elige mañana: Marxismo o Democracia”, *La Tercera*, 19 de junio de 1976 “Italia entre la libertad y la dictadura”, *El Mercurio*, 25 de mayo de 1976. En aquellos días hubo numerosas referencias explícitas a Chile, a la UP y a la intervención salvadora de los militares, así como feroces críticas a la DC italiana y chilena, ahora abiertamente opuesta (y reprimida) por el régimen, véase: José M. Navasal, “La encrucijada italiana”, *Qué Pasa*, 16 de junio de 1976; Marcos Chamudes, “Italia, ¿De las brasas a las ¿Llamas?”, *La Segunda*, 16 de junio de 1976. Los diplomáticos chilenos en Italia realizaron análisis similares realizaron, examinando el contexto político sin detenerse en las protestas sociales y sindicales (véase Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores [AMRE], Embajada de Chile [EmbChile] en Italia 1976, EmbChile a Ministerio de Asuntos Exteriores, “Informe fuerza La política italiana y su posición respecto de Chile”, 09/09/1976)

28 El PCI, con el 34,4% de los votos, logró su mayor resultado electoral, aumentando en más de 7 puntos su resultado de 1972 [Enlace].

29 “Continúan atentados terroristas en Italia”, *El Mercurio*, 19 de diciembre de 1976.

30 David Willey, “El dilema del PC italiano”, *El Mercurio*, 14 de abril de 1977; Roger X. Lanteri, “Italia a la deriva”, *Panorama (El Cronista)*, 17 de abril de 1977. Estas consideraciones no exculparon al PCI, cuya presunta ambigüedad hacia los movimientos extremistas fue constantemente subrayada.

31 “Cierran Universidades para evitar actos de violencia”, *La Segunda*, 14 de marzo de 1977. Sobre estos episodios, véase Giorgio Galli, *op. cit.*, 2013, p. 96.

32 “Un clima de subversión en Italia”, *El Mercurio*, 11 de abril de 1977.

33 “Terceras potencias implicadas en la violencia en Italia”, *El Mercurio*, 27 de marzo de 77.

del poder judicial y de las fuerzas policiales<sup>34</sup>. El diagnóstico de la prensa chilena, mirando a las ofensivas de la extrema derecha y de las BR<sup>35</sup>, era incuestionable: “en aquel país la legislación ha perdido vigencia [...] las Fuerzas Armadas han sido privadas de los jefes que pudieran velar por el interés nacional, la policía es impotente para dominar el caos [...] el gobierno debe mirar batirse como un espectador”<sup>36</sup>.

Los extremistas, según los medios, intentaban promover soluciones fuera del marco democrático, aprovechando el descontento económico y social y la debilidad de las instituciones y recurriendo a métodos de la delincuencia común<sup>37</sup>. Para *Qué Pasa*, quien se hizo eco de tesis ya surgidas en otros lugares, detrás de las acciones terroristas, de derecha y de izquierda, estaban actores como Checoslovaquia, Israel y Estados Unidos. La situación resultaba todavía más grave debido al desinterés de los gobernantes hacia los jóvenes, diferentemente de lo que ocurría en Chile, y solo las instituciones privadas, como la Iglesia y la familia, podían salvar a Italia<sup>38</sup>.

## 1978: UN AÑO CRUCIAL

En esa fase delicada, tanto por la consolidación interna del régimen, como por la profundización del experimento económico y social que requería una revitalización de las relaciones internacionales de Chile, los frentes conflictivos se habían puesto especialmente bajo observación. El objetivo era evaluar las posibles conexiones internacionales entre los diversos grupos armados y analizar las respuestas de los gobiernos europeos, principalmente para destacar sus ineficiencias en los medios nacionales y confirmar su acción interna<sup>39</sup>. Sin embargo, con respecto a

34 “Cárcel para extremistas”, *El Mercurio*, 17 de febrero de 1977; Ernest Sakler, “Ladrón dirigía guerrilla marxista urbana en Italia”, *El Cronista*, 3 de julio de 1977.

35 “Triple ‘A’ italiana anunció su fundación” y “Aparecen Escuadrones de la muerte en Italia”, *El Mercurio*, 5 de junio de 1977, 21 de junio de 1977.

36 “Violencia en Italia”, *El Mercurio*, 25 de junio de 1977. Además, el periódico aprovechó la situación para volver a señalar con el dedo las acciones de la DC, especialmente la formación de centroizquierda.

37 Cfr. Enrique Bernstein, “Italia y su crisis”, *Ercilla*, 27 de julio de 1977.

38 Liz Forgan, “Diagnóstico al Rojo”, *Qué Pasa*, 15 de septiembre de 1977, pp. 64-65.

39 Los casos de Alemania y España se siguieron con especial interés por los vínculos económicos y por el proceso de transición democrática español. En cuanto al caso alemán, por ejemplo, durante 1977 la Embajada en Bonn informó sobre el terrorismo y las acciones del grupo Baader-Meinhof, enfatizando constantemente los limitados recursos legales e investigativos para combatirlo; según los chilenos, seguían siendo insuficientes incluso después de los incrementos previstos para 1977 (AMRE, Embajada de Chile [EmbChile] en la RFA 1977, Of. Res. R. file, EmbChile al Ministerio de Relaciones Exteriores, “Informe junio”, 11/08/1977; “Nueva acción terrorista en la RFA”, 29/08/1977; “Atentado contra el presidente de los empresarios Schleyer”, 09/09/1977; “Informe septiembre”, 10/11/1977). En el caso de España, sin embargo, la atención se centró en ETA, subrayando cómo, durante 1978, se habían producido intervenciones para favorecer la acción penal contra sus miembros (Cf. AMRE, Abogacía en España, 1978, expediente Sec. Res. Ord. 2, Abogacía al Ministerio de Asuntos Exteriores, “Legislación antiterrorista”, 25/08/1978; “Acciones terroristas”, 30/08/1978). El caso alemán, además, se había mencionado durante una reunión de la junta militar en agosto de 1975, junto con los de Francia e Inglaterra (por el IRA); en

Italia, prácticamente no hubo consideraciones, mientras la atención siguió en la situación de las relaciones bilaterales, con vistas a su normalización, y a la situación socioeconómica y a lo que podría suponer el diálogo PCI-DC. Este, se estaba volviendo más estructurado que en el pasado, especialmente después del gran resultado electoral de los comunistas en 1976 y luego de la ruptura con Moscú durante el XXV Congreso del PCUS<sup>40</sup>.

Sin embargo, 1978 marcó un punto de inflexión para ambos países. Pinochet, eliminada la disidencia interna al ejército, anunció la construcción de una nueva democracia “autoritaria, protegida, tecnológicamente avanzada, integradora y participativa”, es decir la voluntad de institucionalizar un modelo, aunque no estuviera claro de qué se trataba. En enero de 1978 se convocó un referéndum para confirmar la legitimidad del gobierno para liderar dicho proceso, y, mientras tanto, se completó la redacción de la nueva carta fundamental. Al mismo tiempo, el terrorismo en Italia alcanzó un nuevo nivel, con repercusiones para la prensa chilena, que aprovechó la oportunidad para reinterpretar más que nunca los acontecimientos en clave nacional.

Poco antes del ataque de Via Fani del 16 de marzo, las *Brigate Rosse* habían vuelto a los titulares en el país sudamericano. En esos días, el proceso de Turín, que enjuiciaba al liderazgo del grupo izquierdista, finalmente comenzaba, y las dificultades de ese procedimiento brindaron la oportunidad de revisar las ineficiencias del sistema judicial italiano y la debilidad generalizadas de las democracias liberales<sup>41</sup>. Sin embargo, fue incomparable la resonancia causada por el secuestro de Aldo Moro, sus días de prisión y luego el trágico final. Después de todo, ese evento trascendió el contexto italiano, proporcionando una idea clara de la dimensión global adquirida por el fenómeno terrorista<sup>42</sup>.

---

general, esos casos servían a reflexionar sobre cómo actuar a nivel interno, es decir, si volver a la justicia civil con respecto al terrorismo o si continuar, como se hacía entonces, encomendando los procedimientos a la justicia militar (Actas de la honorable junta de gobierno, ACTA 226-A, 18/08/1975, págs. 8-9, 17-19, disponible en la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile).

40 Cfr. AMRE, EmbChile en Italia 1976, EmbChile a Ministerio de Relaciones Exteriores, “Informe fuerzas políticas Italia y su posición con respecto a Chile”, 09/09/1976; EmbChile en Italia 1977, EmbChile a Ministerio de Relaciones Exteriores, “Nuevo artículo favorable de ‘il Borghese’ y algunas consideraciones en torno a la coyuntura política italiana y el futuro de las relaciones con Chile”, 13/01/1977. Durante el congreso del 27 de febrero de 1976 en Moscú y posteriormente con motivo del 60.º aniversario de la Revolución Rusa, Berlinguer planteó la defensa de la democracia y se distanció del modelo soviético [Enlace].

41 En el juicio de Turín estaban acusados 46 presuntos terroristas, incluyendo a los líderes históricos de las BR, Renato Curcio y Enrico Franceschini. El proceso comenzó el 17 de mayo de 1976, pero la oposición de las Brigadas Rojas a la justicia burguesa impidió continuar; en los meses siguientes los brigadistas asesinaron al presidente del Colegio de Abogados de Turín e impidieron la constitución del jurado hasta marzo de 1978. Véase “Brigadas Rojas asesinaron a un suboficial de policía”, *La Tercera*, 11 de marzo de 1978; “Dificultades para juzgar terroristas”, “Renuncias entorpecen juicio antiterrorista”, *El Mercurio*, 7 y 12 de marzo de 1978. Sobre el proceso, Emilio Raffaele Papa, *Il processo alle Brigate Rosse (Torino, 17 maggio 1976-23 giugno 1978)* (Milano: Franco Angeli, 2017).

42 Giovanni Mario Ceci, *op. cit.*, 2013, pp. 46-47.

En Chile, a partir del propio Pinochet, hubo una amplia condena a lo ocurrido<sup>43</sup>, además la ocasión fue inmediatamente aprovechada para desarrollar, más que antes, el paralelo inverso entre Chile e Italia, entre lo que había pasado durante el trienio de la UP, la intervención militar y los riesgos que ahora corría Italia. El exministro del Gobierno de Frei, Juan de Dios Carmona, por ejemplo, afirmó que “Chile vivió un proceso de esa naturaleza cuando ocurrió lo de Edmundo Pérez Jukovic y se puede decir que Chile entero se levantó contra procedimientos de esa naturaleza y no acepta secuestros y atentados de esa índole”<sup>44</sup>.

Algunos de los diarios más leídos retomaron análisis previos y los ampliaron. Para *El Mercurio*, había un profundo malestar político debido a la inestabilidad que afectaba a todos los niveles, desde la economía hasta la industria, pasando por la juventud y las universidades<sup>45</sup>. Sobre todo, el Estado era débil, y poco eficaz en los ámbitos judicial y policial porque debía respetar las garantías constitucionales: “la ley [era] lenta y la guerrilla rápida” y, por tanto, era necesario adaptar la legislación y profundizar la colaboración a nivel europeo dada la dimensión continental asumida por el terrorismo<sup>46</sup>.

Italia proporcionó, asimismo, un pretexto para hablar en contra de las democracias liberales, como lo hizo el dictador, declarando que “dentro de las democracias formales no se disponen de medios eficaces y firmes para contrarrestar este tipo de acciones”<sup>47</sup>. Para la prensa, en la península “el cáncer que corroe la sociedad parece estar ya demasiado arraigado”, y el terrorismo había podido difundirse gracias al “al amparo de legislaciones complacientes que permiten la proliferación del virus más destructivo que conoce la sociedad contemporánea”<sup>48</sup>.

43 “Presidente condena el secuestro”, “Repudio al terrorismo”, *Las Últimas Noticias*, 17 de marzo de 1978; “Secuestrado Aldo Moro”, *El Mercurio*, 17 de marzo de 1978; “Secuestrado Aldo Moro, Jefe de la Democrazia Cristiana italiana”, *El Cronista*, 17 de marzo de 1978.

44 “Reacciones en Chile”, *La Segunda*, 16 de marzo de 1978. Carmona se refería al asesinato del exministro Pérez Zujovic el 8 de junio de 1971 a manos del grupo de izquierda Vanguardia Organizada del Pueblo. El homicidio desencadenó una fuerte reacción del PDC, que acusó al gobierno de Allende por no haber contenido a la extrema izquierda. Ese momento marcó el inicio de un proceso de endurecimiento entre los demócratacristianos que resultaría decisivo antes y después del golpe (Luis Corvalán Márquez, *Los partidos políticos y el golpe del 11 de septiembre* (Santiago de Chile: Universidad Bolivariana, 2004), pp. 75-110). También en Italia el caso Pérez Juovic suscitó polémicas porque el entonces secretario de la DC, Arnaldo Forlani, lo había comparado a su vez con el crimen de Giacomo Matteotti (matado por los fascistas en 1924), provocando la reacción de las izquierdas, y de figuras de gran talla moral como Lelio Basso y Giorgio La Pira (véase Alessandro Santoni, *op. cit.*, 2008, pp. 127-128).

45 “Terrorismo italiano marca un profundo mal político”, *El Mercurio*, 19 de marzo de 1978

46 “El desafío terrorista”, *El Mercurio*, 22 de marzo de 1978. Sobre las dificultades judiciales, véase también un artículo de David Walley que establece un paralelismo entre el juicio de Turín y el secuestro de Moro, “¿Podría el Estado italiano enjuiciar a las “Brigadas Rojas”?”, *El Mercurio*, 19 de marzo de 1978.

47 “Presidente condena el secuestro”, *Las Últimas Noticias*, 17 de marzo de 1978.

48 “Las Brigadas Rojas”, *Las Últimas Noticias*, 17 de marzo de 1978.

De ello se desprendería que la respuesta autoritaria de Chile debía considerarse la única posible para contrarrestar un fenómeno de tamaño global. Además, subrayar las debilidades de los sistemas italiano y europeos, permitía al país sudamericano responder a las humillaciones y la marginación que había sufrido a nivel internacional.

Sin embargo, el debate sobre las democracias occidentales iba más en profundidad de cuestiones institucionales. Algunos hablaron de “democracias permisivas” incapaces de defenderse ante “la proliferación de los síntomas de descomposición”. El quid de la cuestión residía en el estilo de vida y la tolerancia de esas sociedades, tras los cuales se escondía la corrupción moral del sistema, que era, entonces, cómplice de sus enemigos. El diagnóstico era claro: “la infiltración, el halago, las amenazas y la venalidad esterilizan toda posibilidad de que las democracias occidentales puedan siquiera estructurar mecanismos de reacción ante tan clara y letal ofensiva, a la vez que las grandes masas de ciudadanas, enervadas por el consumismo, el materialismo egoísta y la pornografía, parecen desinteresarse de las trágicas consecuencias”. En ese contexto, se había dado la propagación del terrorismo, cuyo objetivo era la caída global de la democracia y el establecimiento de la “dictadura totalitaria” comunista<sup>49</sup>.

Según la prensa, en Italia se estaba desarrollando una de las estrategias clásicas marxistas-leninistas: el país venía empujado hacia la inestabilidad generalizada, especialmente mediante la violencia, para presentar a los comunistas como pacificadores<sup>50</sup>. Moro representaba el símbolo de gobiernos reformistas y tolerantes que eran blanco de ataques precisamente porque al terrorismo le resultaba más fácil degradarlos y lanzar sus países en los brazos del marxismo<sup>51</sup>. Así, el secuestro del estadista italiano permitió criticar la experiencia freista, considerada por algunos el inicio de la deriva social y política de Chile. Dichas reflexiones evocaban también los ataques sufridos por Allende en su momento por parte de la derecha golpista, pero, en este caso, servían para acusar a los comunistas italianos e invocar intervenciones como la de las Fuerzas Armadas chilenas.

Durante los casi dos meses que Moro estuvo recluido en la “cárcel del pueblo”, la prensa chilena mantuvo la atención pública en un nivel alto. Los periódicos y las revistas relataron las hipótesis de investigación, las difíciles medidas policiales, los comunicados de las Brigadas Rojas y las cartas del estadista demócratacristiano. Además, se habló de la postura del gobierno y de la mayoría de las fuerzas políticas, que coincidían (con matices) en la imposibilidad de negociar

---

49 “Tolerancia ante el crimen”, *El Cronista*, 20 de marzo de 1978.

50 “Italia en crisis”, *El Cronista*, 18 de marzo de 1978.

51 Juan de Dios Carmona, “Una vez más”, *Ercilla*, 22 de marzo de 1978, p. 18.

con los terroristas (“línea de firmeza”), así como de aquellos que exigían cualquier medio para salvar al rehén<sup>52</sup>.

Más allá de la instrumentalización interna, hubo escasos intentos de profundizar las razones subyacentes del secuestro, por qué se había elegido a Moro y cuáles eran los objetivos reales de los terroristas, ya que la operación no había sumido al país en el caos ni impulsado la revolución, sino que había unido a las fuerzas políticas parlamentarias en contra de la lucha armada<sup>53</sup>. En cambio, mientras las discusiones continuaron centrándose en las teorías ya surgidas tras el ataque de Via Fani<sup>54</sup>, algunos intentaron ampliar la perspectiva cerca del auge del terrorismo y de la violencia en el viejo continente. Se identificaron, por eso, múltiples conexiones y circulaciones entre Europa y América Latina, entrelazando las experiencias de 1968 en París con las guerrillas de los tupamaros uruguayos, los miristas chilenos y los montoneros argentinos y los aportes que estos habían dado a la lucha armada europea. Este razonamiento brindaba la oportunidad de justificar y motivar el ascenso de los regímenes militares en Chile y en el subcontinente, y, también, de afirmar que esas experiencias autoritarias podían y debían ser un ejemplo para los países del Viejo Continente, limitados por el sistema parlamentario y los partidos políticos<sup>55</sup>.

El 9 de mayo la noticia del dramático final dio la vuelta al mundo. En Chile, el tono del debate se mantuvo casi inalterado y, por eso, miembros destacados del régimen aprovecharon para reiterar públicamente sus análisis y reafirmar la importancia de la cruzada que libraban. El almirante José Toribio Merino condenó enérgicamente ese “barbarismo propio del marxismo internacional”, y el comandante de la Fuerza Aérea, Gustavo Leigh, habló de una “nueva lección”, en primer lugar, para Occidente, “porque el terrorismo de origen rojo o mejor dicho de origen soviético, en particular, nos afecta de forma permanente”, golpeando

---

52 Ver por ejemplo: “Brigadas Rojas someten Moro a torturas psicológicas”, *El Cronista*, 1 de abril de 1978; “¡Aldo Moro escribió a su esposa!”, *Las Últimas Noticias*, 2 de abril de 1978; “Paulo VI pidió que liberaran a Moro”, *La Tercera*, 3 de abril de 1978; “Italia: detenidos presuntos secuestradores de Aldo Moro”, *La Tercera*, 7 de abril de 1978; “Parece una novela el secuestro de A. Moro”, *La Segunda*, 8 de abril de 1978; “La DC italiana se niega a tratar liberación de Moro”, *La Tercera*, 14 de abril de 1978; “Socialistas proponen efectivo ablandamiento”, *El Cronista*, 28 de abril de 1978. Camilo Lardinois realizó un análisis minucioso sobre la “línea de firmeza”, destacando cómo, en todo caso, se habrían determinado consecuencias permanentes para el país y la DC (“El ‘fantasma’ de Aldo Moro”, *Las Últimas Noticias*, 05 de abril de 1978).

53 Cfr. Abraham Santibáñez, “Paradojas del extremismo”, *Hoy*, 22 de marzo de 1978.

54 Esto ocurrió con motivo del falso comunicado de las BR del 18 de abril, que anunció la muerte de Moro. En esa ocasión, quien publicó la noticia habló de Italia como el ejemplo más extremo de un contexto europeo en el que proliferaban los grupos guerrilleros. Véase: “El neoanarquismo europeo”, *El Mercurio*, 19 de abril de 1978; “Asesinaron a Aldo Moro”, *El Cronista*, 19 de abril de 1978; María Paz del Río, “Aldo Moro: hacia el desenlace”, *Hoy*, 19 de abril de 1978. [Enlace].

55 “Desafío al Estado democrático”, *El Mercurio*, 26 de abril de 1978. *El Cronista* reportó opiniones similares desde Argentina sobre la hipótesis de la circulación guerrillera internacional y la necesidad de aprender de los regímenes sudamericanos, especialmente en términos de la reducción de derechos y represión (“Aporte montonero al caos en Italia”, 24 de abril de 1978).

a aquellas democracias occidentales que carecían de métodos para defenderse. Al mismo tiempo, dijo, la “desintegración del esquema democrático italiano es una lección para quienes, como gobernantes, queremos lo mejor para nuestros pueblos, especialmente paz y tranquilidad para así poder desarrollarnos como país”<sup>56</sup>. También Pinochet, “visiblemente afectado”, culpó a aquellas democracias que brindaron “ingenua colaboración”, y que “no adopta[ro]n ninguna medida por dura que sea para dar autoridad a los gobiernos y permitir que la ciudadanía viva en democracia”; y añadió, “el hombre necesita la seguridad que debe brindar el Estado para gozar de una efectiva libertad”<sup>57</sup>.

La mayoría de la prensa, si bien reconoció que las instituciones no habían sucumbido al chantaje de los terroristas, expresó duros juicios sobre el sistema judicial italiano, las investigaciones y las fuerzas de seguridad, cuya ineficacia era especular a la de las Brigadas Rojas<sup>58</sup>. Por lo tanto, la responsabilidad recaía sobre la DC, que había gobernado el país desde la posguerra y era culpable de haberlo llevado casi a la anarquía. Según esa prensa, el partido había perdido autoridad a lo largo de los años, y, sobre todo, abandonando su ética; esto había llevado a Italia hacia una “honda descomposición de los valores espirituales”, permitiendo la infiltración de ideas materialistas y socialistas en las clases dirigentes<sup>59</sup>. La referencia era evidentemente a la centroizquierda y a la actual colaboración parlamentaria entre DC y PCI, pero, también en analogía con Chile se hacía hincapié en la tesis que veía en el gobierno del PDC el comienzo del “desastre”, luego encarnado por la UP.

Sintiéndose aludidos, algunos dirigentes demócratacristianos chilenos intervinieron a su vez. Por un lado, Frei subrayó el “terrible, trágico y doloroso deber” que había cumplido el partido italiano para defender al Estado y recordó la calidad

56 “Democracias Tradicionales Facilitan el Terrorismo — Presidente Pinochet al conocer asesinato de Moro”, *El Cronista*, 10 de mayo de 1978. Leigh, entre los protagonistas de la represión, afirmó que la muerte de Moro causaba consternación “entre quienes respetamos los derechos del ser humano por sobre todas las cosas”, en clara respuesta a la presión internacional a la que Chile se veía sometido. Otro miembro de la junta, el comandante de Carabineros, César Mendoza, reiteró estos conceptos y cuestionó la inacción de las organizaciones internacionales de derechos humanos (ibid.), omitiendo lo que muchos habían expresado durante el secuestro, empezando por el secretario general de la ONU, Kurt Waldheim. Cerca de la noticia hablaron, además, el canciller Hernán Cubillos Sallato (“Hondo pesar causó la noticia en los círculos diplomáticos”, *La Tercera*, 10 de mayo de 1978), la ministra de justicia, Mónica Madariaga, y la esposa de Pinochet, Lucía Hiriart Rodríguez, quien también opinó sobre los derechos humanos (“Autores son los mismos que hablan de derechos humanos” e “Son asesinos que se escudan en los principios políticos”, *La Tercera*, 10 de mayo de 1978.).

57 Catarina Larraguibel, “El presidente condenó el asesinato de A. Moro”, *La Segunda*, 9 de mayo de 1978.

58 “Impotencia policial en Italia”, “Andreotti se mantuvo inflexible hasta el fin”, *El Mercurio*, 10 de mayo de 1978; “Desoladora eficiencia de las “Brigadas Rojas”, *El Mercurio*, 11 de mayo de 1978; “Italianos apoyaron la postura antiterrorista del gobierno”, *Las Últimas Noticias*, 17 de mayo de 1978.

59 “El fin de Aldo Moro”, *El Mercurio*, 05 de octubre de 1978. Véase, también, “El sacrificio de Moro”, *La Segunda*, 05 de septiembre de 1978 y el artículo de *El Cronista* que manipuló algunas consideraciones del sociólogo Franco Ferrarotti sobre el poder demócratacristiano (Antonio Rojas G., “Si la DC sigue en el poder Italia no tendrá salvación”, 10 de mayo de 1978).

humana de Moro; lo mismo que hizo Andrés Zaldívar, quien, además recordó el interés constante que, el mismo Moro, había mostrado por Chile<sup>60</sup>. Quien, en cambio, respondió a esa interpretación de la “lección” italiana fue Tomás Reyes Vicuña. En su opinión, la ineficacia de la democracia no podía justificar a los “gobiernos arbitrarios, duros, que utilizan el terror como arma para aniquilar la otra violencia”. Y respecto a la comparación que se hizo entre la tranquilidad de Chile, lograda mediante la mano dura contra el extremismo, y el caos de Italia, explícitamente dijo: “es otro extremismo el que está en acción [que] se expresa en base a la eliminación de personas aún constituido en autoridad”, y que no puede generar una convivencia pacífica para el futuro<sup>61</sup>.

Mientras el PDC seguía defendiendo a Moro y negando lecciones o interpretaciones internas de los acontecimientos italianos, la derecha insistía en lo contrario. El estadista italiano, de hecho, fue considerado responsable de su destino por haber propuesto la apertura hacia la izquierda y el diálogo con el marxismo<sup>62</sup>. Este razonamiento se sustentaba en la creencia de que el PCI, así como otros partidos comunistas, estuviesen próximos al terrorismo internacional; como se escribió en *El Mercurio*, Berlinguer y Luis Corvalán compartían la misma “ética” leninista que el BR Francescini, y todos aspiraban a la dictadura del proletariado<sup>63</sup>. La diferencia residía en los métodos, violentos los de los terroristas y oficialmente democráticos los de los partidos comunistas, que, pero, no renunciaban a las conexiones con los grupos armados. Esa prensa distorsionó la realidad para uso interno, desconociendo los caminos institucionales de los partidos italianos y chilenos y afirmando que ellos seguían subsidiando a grupos terroristas para desestabilizar sus respectivos países, como lo atestiguaba, en Chile, el fracasado (e inventado) Plan Z<sup>64</sup>.

Según tales opiniones, Moro había ofrecido “al extremismo la posibilidad de crecer y fortalecerse”, y los partidos marxistas, una vez derrocado el Estado, finalmente habrían obtenido el resultado deseado<sup>65</sup>. En este sentido, incluso el apoyo a la “línea de firmeza” del PCI resultaba funcional para la conquista del poder<sup>66</sup>. Una vez más, a través del prisma italiano, las críticas se dirigían sobre todo al PDC.

60 “La DC italiana cumplió un terrible y doloroso deber”, *La Tercera*, 10 de mayo de 1978.

61 Emilio Bákit, “Hilo directo — Tomás Reyes”, *La Segunda*, 05/10/1978. Además, en esa entrevista, Reyes defendió la apertura a la izquierda y la aceptación de los valores democráticos por parte de los marxistas italianos.

62 “La muerte de Aldo Moro”, *El Mercurio*, 18 de mayo de 1978, carta al diario de Sergio Miranda Carrington, exministro del Gobierno de Carlos Ibáñez del Campo y uno de los líderes de los nacionalistas.

63 “El humanismo terrorista”, *El Mercurio*, 13 de mayo de 1978.

64 Luí Cordero B., “Ahora en Italia”, *La Tercera*, 12 de mayo de 1978.

65 Pablo Rodríguez Grez, “Aldo Moro: dolorosa lección”, *La Tercera*, 15 de mayo de 1978. El autor fue una destacada figura de la extrema derecha chilena, fundador del grupo Patria y Libertad y, en los años 1990, abogado de Pinochet.

66 Fernando Durán, “Italia: los escombros de una Democracia”, *El Mercurio*, 5 de mayo de 1978.

Para Rodríguez Grez la correspondencia con Chile era evidente, ya que, durante la presidencia de Frei, el MIR y otros grupos extremistas habían proliferado, y la indulgencia del gobierno había permitido al avance marxista. “Felizmente, Chile consiguió salvar su destino gracias a la acción oportuna de sus Fuerzas Armadas y el despertar consciente de su ciudadanía”, sin embargo, los acontecimientos italianos representaban una advertencia y una prueba de lo que sucedería si se restableciera la democracia liberal en el país<sup>67</sup>.

## CAMINO A UN NUEVO CONTEXTO

El secuestro y asesinato de Moro significó el punto álgido del interés de la prensa chilena por el terrorismo italiano, y un momento en el que el supuesto juego de espejos entre ambos países emergió repetidamente. Aquellos acontecimientos brindaron la oportunidad de reflexionar más que antes sobre las deficiencias de las democracias y reafirmar la validez del camino emprendido por Chile. Sin embargo, la fase sucesiva también resultó relevante para los desarrollos internos de ambos Estados y para el terrorismo italiano. Respecto a este último, la estrategia de las *Brigate Rosse* del “ataque al corazón del Estado” continuó con vigor, hasta terminar a mediados de 1981. Mientras tanto, Italia vivió un nuevo capítulo de la estrategia de desestabilización el 2 de agosto de 1980, con el atentado en la estación de trenes de Bolonia. Además, nuevos y decisivos acontecimientos políticos agravaron la crisis social y económica posterior al segundo shock petrolero. La llamada “solidaridad nacional” entre la DC y el PCI estaba terminando, y esto significó una difícil transición hacia una reorganización sistémica. En 1981, fue nombrado jefe de gobierno el republicano Giovanni Spadolini: por primera vez desde la posguerra un representante no democristiano obtuvo ese cargo<sup>68</sup>.

En Chile la dictadura estaba en pleno proceso de estabilización. A nivel internacional, el país iba recuperando su capacidad de maniobra y salía del estatus de paria en el que había caído tras el golpe. Las medidas económicas liberales comenzaron a dar efectos, si bien frágiles, que resultaron importantes en vista del referéndum sobre la nueva constitución. Este fue objeto de acalorados debates internacionales, en parte debido al activismo de los partidos de oposición que operaban principalmente en el extranjero, incluido el PDC. No obstante, el controvertido plebiscito del 11 de septiembre de 1980 confirmó el texto constitucional que aseguró la continuidad del régimen en el poder durante mucho tiempo más<sup>69</sup>.

---

67 Pablo Rodríguez Grez, “Aldo Moro: dolorosa lección”, *La Tercera*, 15 de mayo de 1978

68 Véase Pietro Craveri, *L'arte del non governo. L'inesorabile declino della Repubblica italiana* (Venezia: Marsilio, 2016), pp. 281-390; Agostino Giovagnoli, *La Repubblica degli italiani. 1946-2016* (Bari-Roma: Laterza, 2016), pp. 120-126.

69 Cfr. Maria Rosaria Stabili, *op. cit.*, 1991, pp. 187-195; Sofia Correa *et al.*, *op. cit.*, 2001, pp. 290-299; Rafael Sagredo Baeza, *op. cit.*, 2014, pp. 258-262; Leslie Bethell (ed.), *Historia de América Latina XV* (Barcelona:

Por lo tanto, la prensa chilena, a principios de 1980, siguió centrándose en el complejo pasaje político que experimentaba Italia, y si bien persistían las críticas a la DC, se percibió positivamente la nueva línea del partido, que rechazaba la posibilidad de un acuerdo con el PCI. Sin embargo, respecto al terrorismo, se intensificaron las críticas sobre la incapacidad de las autoridades y la inconsistencia de las medidas legislativas; en particular, las evaluaciones más duras eran cerca del poder judicial. Según la prensa, la situación parecía decididamente fuera de control: los ataques y enfrentamientos continuaban sin cesar, y las *Brigate Rosse*, a quienes se daba la mayoría de la atención, seguía apuntando alto, como en el caso del asesinato de Vittorio Bachelet, vicepresidente del *Consiglio superiore della Magistratura*<sup>70</sup>.

Con el paso de la década, el principal diario de Santiago, *El Mercurio*, intentó recordar el largo período en que “la marea terrorista inundó Italia”. Lo que conmocionó al periódico fue la enorme cantidad de muertos y heridos durante diez años de violencia, en que el punto álgido se alcanzó con el asesinato de Moro. Además, este proceso no parecía disminuir, ya que en pocos meses de 1980 se habían producido 21 asesinatos. Era el resultado de la acción de muchos grupos, de derechas como los *Nuclei Armati Rivoluzionari* (NAR), pero predominantemente de izquierdas como *Prima Linea* y, sobre todo, las *Brigate Rosse*; todos ellos contaban, según fuentes italianas, con más de 100.000 militantes y más de 1.000 personas viviendo en la clandestinidad. A la luz de los números, el diario apoyaba la tesis de la financiación extranjera, respaldando las declaraciones del primer miembro “arrepentido” de las BR, Fabrizio Peci, quien había mencionado unos vínculos con la Organización para la Liberación de Palestina. En cuanto a la responsabilidad, también se atacó al poder judicial, considerado temeroso y, a veces, cómplice de los mismos extremistas<sup>71</sup>.

Argumentos similares se exploraron después del dramático ataque en la estación de trenes de Bolonia el 2 de agosto, que llevo otra vez el terrorismo en el primer plano<sup>72</sup>. Las sospechas recayeron inmediatamente en los neofascistas del NAR, pero, para periódicos como *Qué Pasa*, fue otra oportunidad para profundizar en una larga historia. En este sentido, se subrayó una desconexión entre la población

---

Crítica, 2002), pp. 300-306; Juan Luis Ossa Santa Cruz, “1980: Constitución”, en Alessandro Guida, Raffaele Nocera, Claudio Rolle (comps.), *De la utopía al estallido. Los últimos cincuenta años en la historia de Chile* (Santiago de Chile: FCE, 2022), pp. 80-93. Sobre el papel del PDC, véase Raffaele Nocera, Alessandro Santoni y Olga Ulianova, *Un protagonismo reconocido. La democracia cristiana chilena y sus vínculos internacionales (1973-1990)* (Santiago de Chile: Ariadna, 2021), pp. 133-144; Raffaele Nocera, *Il sogno infranto. DC, l'Internazionale Democristiana e l'America Latina (1960-1980)* (Roma: Carocci, 2017), pp. 131-141.

70 “No, pero...”, *Ercilla*, 27 de febrero de 1980, p. 57. Sobre la DC cfr. “Italia — La nueva generación”, *Hoy*, 15 de abril de 1980.

71 “Italia: Terrorismo 1980”, *El Mercurio*, 23 de abril de 1980.

72 El atentado provocó 85 muertos y más de 200 heridos. Cfr., entre otros, “Explosión habría sido causada por terroristas; “Detenidos otros seis presuntos terroristas”, *El Mercurio*, 4 y 30 de agosto de 1980.

y las instituciones, en primer lugar, con el poder judicial, y luego con el sistema político, que no había tomado las contramedidas adecuadas al no considerar, por ejemplo, declarar un estado de guerra interna, a diferencia de lo que Chile hizo después del golpe. El foco de los análisis, sin embargo, fue principalmente el PCI. Para aquel periódico, la autocrítica del partido por haber subestimado los efectos del 68 y tolerado las primeras manifestaciones violentas, era solo la confirmación de las conexiones existentes con los extremistas<sup>73</sup>. Más allá de una reconocida responsabilidad de la DC, para esa prensa, ávida de confirmación en la cruzada de Pinochet, la mayor amenaza eran los comunistas, dispuestos a aprovechar cualquier oportunidad para presentarse como una fuerza de gobierno fiable, como lo había hecho Berlinguer en ocasión del atentado de Bolonia<sup>74</sup>.

La enésima crisis de gobierno permitió volver a hablar de la conexión entre inestabilidad política y la propagación de la violencia<sup>75</sup>. Sobre todo, fue una oportunidad para renovar los ataques contra la experiencia de centroizquierda en Italia, como ocurrió particularmente en *Qué Pasa*, una revista a la vanguardia de la lucha contra la “campana internacional anti-chilena” y en los ataques contra de las democracias occidentales<sup>76</sup>. Desde su perspectiva, la centroizquierda era la responsable de la reducción de la fuerza policial, la devastación del sistema educativo y la desviación ética del poder judicial. En veinte años de gobierno, “todas las autoridades han sido desacreditadas” y se había extendido la degeneración de la juventud y las instituciones. Italia, por lo tanto, estaba destinada al declive por no haber logrado crear una “nación unida y vigorosa, ni tener un sistema de Gobierno eficiente y estable”; lo contrario de lo que evidentemente hizo Chile<sup>77</sup>.

A principios de 1981, a pesar de los arrestos y las deserciones dentro del bando extremista, parecía lejana la solución al fenómeno terrorista. La atención se centró constantemente en las *Brigate Rosse*, quienes en diciembre de 1980 habían secuestrado al juez Giovanni d’Urso<sup>78</sup>. Esta fue otra oportunidad para que la prensa chilena expresara su total desacuerdo con cualquier negociación con los

---

73 “No más bombas, no más tiroteos, no más muertos”, *Qué Pasa*, 21 de agosto de 1980, pp. 62-63; “Multitudinaria repulsa italiana al terrorismo”, *El Mercurio*, 30 de agosto de 1980.

74 “Italia inquieta”, *El Mercurio*, 2 de septiembre de 1980.

75 “Otra Crisis en Italia”, *El Mercurio*, 4 de octubre de 1980. Arnaldo Forlani sustituyó Francesco Cossiga como primer ministro en octubre de 1980 [Enlace].

76 Cfr. Alessandro Santoni; Luciano Saez Fuentealba, “Chile vs. el mundo. La revista *Qué Pasa* y la “campana anti-chilena”, *Revista Divergencia* 11 (7), 2018, pp. 127-146.

77 Juan Irrázaval, “Gobernar en Italia”, *Qué Pasa*, 4 de diciembre de 1980, pp. 74-75.

78 Véase “Terror en Italia”, *El Mercurio*, 01 de abril de 1981. El juez, secuestrado el 12 de diciembre, era responsable de la gestión penitenciaria en el Ministerio de Justicia. Por esa razón las demandas de las BR fueran principalmente la mejora de las condiciones penitenciarias y el cierre de las cárceles “especiales”. Además, pidieron la publicación de los interrogatorios realizados y los comunicados escritos por el juez; en ese los medios de información se dividieron: algunos periódicos consintieron (*L’Avanti!* y *L’Espresso*, por ejemplo), mientras que la televisión pública se negó. Este fue un éxito político para las *Brigate Rosse*, pero, no condujo a su ascenso definitivo (Giorgio Galli, *op. cit.*, 2013, pp. 170-174).

brigadistas y atacara la fragilidad del Estado y la debilidad de los medios de comunicación. Una vez más, para fortalecer las tesis internas, la única opción sería seguir el camino de Chile y recurrir a “una lucha integral, que necesita en primer lugar una conciencia nacional [...]; fuerzas de seguridad especializadas, preparadas física e intelectualmente; [...] una institucionalidad jurídica que permita la aplicación de penas severas y oportunas”<sup>79</sup>.

La mayoría de la prensa, si bien informó sobre las acciones violentas, no se dio cuenta de los cambios de estrategia político-judicial y de aquellos de los mismos grupos armados. Por lo tanto, hubo cierta sorpresa cuando el líder de las BR, Mario Moretti, fue detenido en abril de 1981. Entonces, las revistas más independientes intentaron profundizar en esos procesos, en lugar de renovar los paralelismos ya explotados. *Ercilla* aprovechó la oportunidad para reconstruir la historia del grupo extremista y describir la figura de Moretti, “el jefe militar”, un “diplomático del terror”, que gestionaba los “contactos con otras organizaciones violentas”. La revista, diferentemente del pasado, destacó las leyes especiales introducidas en Italia, las operaciones policiales, el establecimiento de grupos especiales contra del terrorismo, los protocolos internacionales firmados con gobiernos de otros países y el rechazo generalizado de la población. Eso le permitía preguntarse si realmente se estuviese ante el fin del “partido armado”<sup>80</sup>.

Para los principales órganos de la prensa chilena, de todas maneras, los meses siguientes no parecieron indicar el fin del fenómeno<sup>81</sup>. De hecho, para los diarios más comprometidos con la reorientación de la opinión pública nacional, a pesar de todo, “el problema más explosivo” seguía siendo el terrorismo<sup>82</sup>. No obstante, lograron salir análisis capaces de ir más allá de la retórica y las comparaciones fáciles. En la publicación demócratacristiana *Hoy*, Ascanio Cavallo percibió la complejidad de esa transición, centrándose una vez más en las Brigadas Rojas. En su opinión, a pesar de varios atentados recientes, la línea política del grupo parecía estar retrocediendo, volviéndose más limitada. Las BR habían sufrido arrestos de alto perfil y, pese al sostén financiero internacional, no habían logrado el apoyo popular; además, estaban claramente divididas internamente y cada vez más aisladas. Según Cavallo, se trataba de un momento crucial. En la nefasta nueva “campana de otoño” el objetivo era boicotear el nuevo diálogo

---

79 “Petición terrorista”, *El Mercurio*, 15 de enero de 1981.

80 “Terrorismo italiano. ¿El principio del fin?”, *Ercilla*, 15 de abril de 1981.

81 Siguieron publicando noticias de atentados y enfrentamientos, junto con las nuevas medidas del gobierno. Cfr. “Gobierno protegerá a terrorista delatores”, *El Mercurio*, 5 de agosto de 1981; *La Tercera*, 31 de julio de 1981; “Brigadas Rojas roban más de 700 mil dólares desde un vehículo blindado”, *La Tercera*, 31 de julio de 1981; “Brigadas rojas mataron al industrial secuestrado”, *La Nación*, 7 de julio de 1981; “No habrá Negociación con “Brigadas Rojas”, *El Mercurio*, 14 de julio de 81; “Medidas contra el terrorismo adopta el gobierno italiano”, *La Nación*, 6 de agosto de 1981; “Vuelve la violencia a Roma”, *El Mercurio*, 7 de diciembre de 1981.

82 V.M., “Italia: no solo terrorismo”, *Qué Pasa*, 17 de diciembre de 1981, pp. 46-47.

DC-PSI, tal como lo habían hecho con la unidad nacional. Entonces, el grupo se jugaba todo: si hubiera tenido éxito, el caos habría regresado, pero si hubiera fracasado, “se puede asumir que la BR demorarán mucho en recobrar su impulso”, como efectivamente ocurrió en los meses siguientes cuando terminó la fase más dura de la experiencia italiana<sup>83</sup>.

## CONSIDERACIONES FINALES

A menudo, especialmente en la izquierda, se ha hablado de la lección chilena por los vínculos que se construyeron entre Italia y Chile y por los paralelos que se crearon a partir de finales de los años cincuenta. Para Italia, Chile no dejó de representar un argumento de comparación incluso con el inicio de la dictadura militar. En el país sudamericano, la trágica temporada del terrorismo, inaugurada por los atentados en Piazza Fontana, fue un tema constante no solo por su relevancia, sino también por el interés en extraer de ella elementos de reflexión. La visión que refleja la prensa chilena representa un primer paso para intentar comprender qué nivel de análisis y profundización hubo respecto de ese fenómeno y qué “lecciones italianas” se intentaron extraer. En este sentido, es obvio que el sistema italiano y la inestabilidad fueron claves cruciales para el entendimiento, mientras que los análisis sobre las causas y la dinámica interna del terrorismo italiano estuvieron casi completamente ausentes. De todas formas, el prisma italiano fue disfrutado a menudo para leer la realidad chilena.

Después del golpe, la interpretación instrumental que ya había surgido se hizo más evidente. Esto ocurrió en particular después de 1975, cuando la junta necesitó encontrar “ideas” en los acontecimientos internacionales para fortalecerse internamente y legitimar aún más su acción encaminada a restaurar un sistema fuertemente dañado por las experiencias pasadas y el parlamentarismo, así como por las acciones de los partidos políticos y de las supuestas guerrillas marxistas. El caso italiano y el terrorismo se ajustaban perfectamente a esa visión, ya que aportaban numerosos elementos en apoyo del análisis, no nuevo, sobre el pasado reciente de Chile y en favor de la tesis contrarrevolucionaria. Al mismo tiempo el paralelo permitió hablar de la deriva patológica de algunas democracias europeas, como quedó claramente de manifiesto durante y luego del secuestro de Moro, también permitiéndole mostrar el modelo chileno como ejemplar. Se trataba de lecturas que, por más que fuesen “forzadas” en el contexto dictatorial, se encontraban presentes en el profundo del conservadurismo, y no solo, chileno.

---

83 Ascanio Cavallo, “Brigadas Rojas. La moda de la sangre”, *Hoy*, 26 de agosto a 1 de septiembre de 1981, pp. 58-60. En esos meses, las BR asesinaron al industrial Giuseppe Talierico y Giuseppe Peci, hermano de Fabrizio. En cuanto a sus divisiones internas, también Moretti las confirmó posteriormente (op. cit., 2017 pp. 221-223); véase también Giorgio Galli, op. cit. 2013, pp.174-209 y *Affari di Stato. L'Italia sottoterranea 1943-1990: storia politica, parti, corruzione, misterios, escándalos* (Milano: Kaos, 1991), pp. 183-198.

Más allá de eso, la visión de la prensa nos permite empezar a profundizar el tema de la manipulación de la opinión pública y de la afirmación, no solo retórica, de un nuevo País en que el uso de los medios de comunicación era (y es) central. De hecho, entre líneas podemos ver mensajes claramente dirigidos al contexto interno, a la población y a la oposición. A los primeros en el sentido pedagógico de “reeducación” y a los segundos en el sentido de desalentar su resistencia. Entonces, lo que parece discernible en estas lecturas italianas son las obsesiones de la junta con el marxismo y luego con la DC, pero también con la construcción de un nuevo Chile, tanto en la retórica y la moral como en las instituciones. Finalmente, a través del juego de espejos con Italia hecho por la prensa, emerge la percepción que el régimen tuvo de sí mismo y de lo que estaba haciendo, es decir, la certeza de construir un sistema “verdaderamente” democrático, eficiente y no expuesto a los riesgos y debilidades del liberalismo.

## BIBLIOGRAFÍA

- BETHELL, Leslie (ed.), *Historia de América Latina*, tomo XV (Barcelona: Crítica, 2002).
- CASTRO, Ruy, *Chega de saudade. Storia e storie della nova* (Tissi (SS): Angelica, 2005).
- CECCATO, Egidio, *Feltrinelli. Un omicidio político* (Roma: Castelvecchi, 2018).
- CECI, Giovanni Mario, *Il Terrorismo italiano. Storia di un dibattito* (Roma: Carocci, 2013).
- CECI, Giovanni Mario, *La CIA e il terrorismo italiano. Dalla strage di piazza Fontana agli anni Ottanta (1969-1986)* (Roma: Carocci, 2019).
- CLEMENTI, Muzio, *Storia delle Brigate Rosse* (Roma: Odradek, 2007).
- CORREA, Sofia et al. (eds), *Historia del Siglo XX chileno* (Santiago de Chile: Sudamericana, 2001).
- CORTÁZAR, Julio et al., *Las cartas del boom* (Madrid: Alfaguara, 2023).
- CORVALÁN MARQUÉZ, Luis, *Los partidos políticos y el golpe del 11 de septiembre* (Santiago de Chile: Universidad Bolivariana, 2004).
- CRAVERI, Pietro, *L'arte del non governo. L'inesorabile declino della Repubblica italiana*, (Venezia: Marsilio, 2016).
- DE VERGOTTINI, Tomaso, *Cile: diario di un diplomatico (1973-1975)* (Milano: Koinè nuove edizioni, 2000).
- DEAGLIO, Enrico, *La bomba. Cinquant'anni di Piazza Fontana* (Milano: Feltrinelli, 2019).
- DONDI, Mirco, *L'eco del boom. Storia della strategia della tensione* (Roma-Bari: Laterza, 2015).
- FASANELLA, Giovanni; Franceschini, Alberto, *Che cosa sono le BR* (Milano: Rizzoli, 2004).
- FERRIGATO, Riccardo, *Non doveva morire. Come Paolo VI cercò di salvare Aldo Moro* (Roma: Edizioni San Paolo, 2018).
- FLAMIGNI, Sergio, *Il covo di Stato e la prigione fantasma. Il delitto Moro in via Gradoli e in Via Montalcini* (Milano: Kaos, 2016).
- FRANZINELLI, Mimmo, *La sottile linea nera. Neofascismo e servizi segreti da Piazza Fontana a Piazza della Loggia a Brescia* (Milano: Rizzoli, 2008).
- GALLI, Giorgio, *Affari di Stato. L'Italia sottoterranea 1943-1990: storia politica, parti, corruzione, misterios, escándalos* (Milano: Kaos, 1991).


- GALLI, Giorgio, *Piombo rosso. La storia completa della lotta armata in Italia dal 1970 a oggi* (Milano: Baldini e Castoldi, 2013).
- GARZIA, Italo; MONZALI, Luciano; IMPERATO, Federico (eds.), *Aldo Moro, l'Italia repubblicana e i popoli del Mediterraneo* (Nardò: BESA, 2013).
- GIANNATTASIO, Valerio, "L'Italia e il fenomeno terrorista nella stampa cilena (1969-1981)", *Processi Storici e Politiche di Pace, Numero Speciale Cile e Italia, 1973-2023*, 2023, pp. 47-64.
- GIANNULI, Aldo, *La strategia della tensione* (Milano: Ponte alle Grazie, 2018).
- GIORGI, Luigi, *La DC e la politica italiana nei giorni del golpe cileno* (Bologna: Zikkaron, 2018).
- GIOVAGNOLI, Agostino, *La Repubblica degli italiani. 1946-2016* (Roma-Bari: Laterza, 2016).
- GIOVAGNOLI, Agostino, *Il caso Moro. Una tragedia repubblicana* (Bologna: Il Mulino, 2018).
- GOTOR, Miguel, *Il memoriale della repubblica. Gli scritti di Aldo Moro dalla prigionia e l'anatomia del potere italiano* (Torino: Einaudi, 2020).
- GRANDI, Aldo, *Gli ultimi giorni di Giangiacomo Feltrinelli* (Milano: Chiarelettere, 2022).
- GUARNIERI, Calò, CARDUCCI, Luigi; STABILI, Maria Rosaria, "Il mito politico dell'America Latina negli anni Sessanta e Settanta", in DEL ZAMA, Giorgio y GIOVAGNOLI, Agostino (eds.), *Il mondo visto dall'Italia* (Milano: Guerrini e Associati, 2004), pp. 217-227.
- GUIDA, Alessandro, "La via cilena al socialismo nella stampa italiana di sinistra (1970-1973)", *Nuova Storia Contemporanea* 18 (4), 2014, pp. 99-120.
- GUIDA, Alessandro, *La lezione del Cile. Da Unidad popular al golpe del 1973 nella stampa italiana di sinistra* (Napoli: Università "L'Orientale" press, 2015).
- GUIDA, Alessandro, *A la conquista de mentes y corazones. Propaganda, guerra psicológica y política cultural en Chile (1973-1975)* (Santiago de Chile: Ariadna, 2025).  
<https://doi.org/10.26448/ae9789566276647.144>
- LOMELLINI, Valentine, "Bisbigliando al "nemico"? il Pci alla svolta del 1973, tra nuove strategie verso Washington e tradizionale anti-americanismo", *Ricerche di Storia Politica* 1, 2013, pp. 25-44.
- LUCARELLI, Valerio, *Vorrei che il futuro fosse oggi. Nuclei armati proletari, ribellione, rivolta e lotta armata* (Napoli: L'ancora del Mediterraneo, 2010).
- MAZZA, Fulvio, *Golpe Borghese. Quarto grado di giudizio. La leadership di Gelli, il golpista Andreotti. I depistaggi della "Dottrina Maletti"* (Cosenza: Pellegrino Editore, 2021).
- MORETTI, Mario, *Brigate Rosse*, intervista de Carla Mosca y Rossana Rossanda (Milano: Mondadori, 2017).
- MULAS, Andrea, *Allende e Berlinguer. Il Cile dell'Unidad Popular e il compromesso storico* (San Cesareo di Lecce: Manni, 2005).
- MULAS, Andrea, "Lelio Basso e il Cile dell'Unidad Popular", *Parolechiave* 33 (2), 2023, pp. 153-62.
- NOCERA, Raffaele; Rolle, Claudio (eds.), *Settantatré: Cile e Italia, destini incrociati* (Napoli: Think Thanks, 2011).
- NOCERA, Raffaele, "Il governo italiano e la DC di fronte al golpe cileno", *Nuova Storia Contemporanea* 2, 2008, pp. 87-110;
- NOCERA, Raffaele, *Acuerdos y desacuerdos. La DC italiana y el PDC chileno: 1962-1973* (Santiago de Chile: FCE, 2015).
- NOCERA, Raffaele, *Il sogno infranto. DC, l'Internazionale democristiana e l'America Latina (1960-1980)* (Roma: Carocci, 2017).

- NOCERA, Raffaele; SANTONI, Alessandro; ULIANOVA, Olga, *Un protagonismo reconocido. La democracia cristiana chilena y sus vínculos internacionales (1973-1990)* (Santiago de Chile: Ariadna, 2021). <https://doi.org/10.26448/ae9789566095170.3>
- NUTI, Leopoldo, *Gli Stati Uniti e l'apertura a sinistra. Importanza e limiti della presenza americana in Italia* (Bari: Laterza, 1999).
- ORSINI, Alessandro, *Anatomia delle Brigate rosse. Le radici ideologiche del terrorismo rivoluzionario* (Soveria Mannelli: Rubettino, 2009).
- OSSA SANTA CRUZ, Juan Luis, "1980: Constitución", en GUIDA, Alessandro, NOCERA, Raffaele y ROLLE, Claudio (comps.), *De la utopía al estallido. Los últimos cincuenta años en la historia de Chile* (Santiago de Chile: FCE, 2022), pp. 80-93.
- PAPA, Emilio Raffaele, *Il processo alle Brigate Rosse (Torino, 17 maggio 1976-23 giugno 1978)* (Milano: Franco Angeli, 2017).
- RUGGIERO, Vito, *Il sogno anticomunista. Neofascisti italiani in America Latina (1977-1982)* (Roma: RomaTre press, 2023).
- SAGREDO BAEZA, Rafael, *Historia mínima de Chile* (México: El Colegio de México, 2014).
- SANTONI, Alessandro, "Berlinguer il compromesso storico e il caso cileno", *Contemporanea* 3, 2007, pp. 419-439.
- SANTONI, Alessandro, *Il PCI ei giorni del Cile. Alle origini di un mito político* (Roma: Carocci, 2008).
- SANTONI, Alessandro, "Religión, política y Democracia Cristiana: Chile e Italia en perspectiva comparada", *Historia y Política* 29, 2013, pp. 193-218.
- SANTONI, Alessandro y SAEZ FUENTEALBA, Luciano, "Chile vs. el mundo. La revista *Qué Pasa* y la "campana anti-chilena", *Revista Divergencia* 11, 7, 2018, pp. 127-146.
- STABILI, Maria Rosaria, *Il Cile. Dalla repubblica liberale al dopo-Pinochet. 1861-1990* (Firenze: Giunti, 1991).
- TEDESCHI, Stefano, *All'inseguimento dell'ultima utopia. La letteratura ispanoamericana in Italia e la creazione del mito dell'America Latina* (Roma: Nuova Cultura, 2006).
- TONIETTO, Nicola, "Un colpo di stato mancato? Il golpe Borghese e l'eversione nera in Italia", *Diacronie* 3, 27, 2016.
- VALDIVIA ORTIZ De ZÁRATE, Verónica, "¡Estamos en guerra, señores! El régimen militar de Pinochet y el "pueblo", 1973-1980", *Historia* 43 (1), 2010, pp. 163-201.  
<http://dx.doi.org/10.4067/S0717-71942010000100005>
- VENTUROLI, Cinzia "Ankara, Atene, domani Roma viene". I rapporti del regime dei colonnelli con l'estrema destra italiana", en DONDI, Mirco y GUZZO, Domenico (eds.), *La Strategia della tensione tra Piazza Fontana e l'Italicus: fenomenologia, rappresentazioni, memoria* (Milano: Biblion, 2022), pp. 61-78.

### Fuentes Primarias

- Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.
- Fondos: Embajada de Chile en la República Federal Alemana, 1976-1978; Embajada de Chile en España, 1975-1978; Embajada de Chile en Italia, 1975-1978.
- Actas de la honorable junta de gobierno, ACTA 226-A, 18/08/1975.
- Prensa consultada (1973-1981): *El Cronista*, *El Mercurio*, *Ercilla*, *Hoy*, *La Nación*, *L'Unità*, *Rinascita*, *Qué Pasa*, *La Segunda*, *La Tercera*, *Las Últimas Noticias*.

# La revista *Estrategia* y una sensibilidad tercermundista entre los militares argentinos en las décadas del sesenta y setenta

GERMÁN ALBURQUERQUE   
Universidad de Valparaíso

## Resumen

Se analiza la revista argentina *Estrategia* entre los años 1969 y 1976, reconociéndola como órgano de expresión de una determinada corriente militar. No fue una revista institucional de las fuerzas armadas, no obstante, su director, Juan Enrique Guglielmelli, así como parte del consejo de redacción y de los autores que en ella publicaron, fueron militares en retiro o en servicio activo, varios de ellos con figuración pública. Se pretende demostrar que este grupo de militares representaron no solo la tendencia peruanista, de la que otros autores han hablado, dentro del ejército argentino, sino que además articularon una sensibilidad tercermundista, fruto de la influencia recibida de actores, procesos y países del Tercer Mundo. De esa manera se pondera la fuerza del proceso de descolonización en el desarrollo político de América Latina en la segunda mitad del siglo XX, en paralelo a la Guerra Fría.

## Palabras clave:

Revista *Estrategia*; Militares; Tercermundismo; Descolonización; Argentina

## Abstract

The Argentine journal *Estrategia* is analyzed between 1969 and 1976, recognizing it as the mouthpiece of a particular military movement. It was not an institutional magazine of the armed forces; however, its editor, Juan Enrique Guglielmelli, as well as part of the editorial board and the authors who published in it, were retired or active-duty military personnel, several of whom were public figures. The aim is to demonstrate that this group of military personnel not only represented the Peruvianist tendency within the Argentine army, which other authors have discussed, but also articulated a Third World sensibility, the result of the influence received from actors, processes, and countries of the Third World. In this way, the strength of the decolonization process in the political development of Latin America in the second half of the 20th century, in parallel with the Cold War, is weighed.

## Keywords:

Journal *Estrategia*; Military; Third Worldism; Decolonization; Argentina

## INTRODUCCIÓN<sup>1</sup>

El objetivo de este escrito es analizar la revista argentina *Estrategia*, publicación asociada a un grupo de militares argentinos, tanto activos como en retiro, que formaron parte de una corriente nacionalista al interior del Ejército de su país. La revisión de esta revista se enmarca en una investigación mayor que se pregunta por las influencias que los militares latinoamericanos recibieron desde el exterior en tiempos de Guerra Fría, y que se enfoca en los casos de Perú, Ecuador, Colombia y Argentina. Este último llamó la atención por la heterogeneidad de sus instituciones armadas, por su hábito deliberativo y su dilatada experiencia política, todo lo cual hacía sospechar una amplia receptividad a estímulos exógenos. El interés específico recaía en las influencias provenientes del resto del Tercer Mundo, entendiendo que aquellas oriundas de Estados Unidos y Francia estaban bien documentadas. Con esos propósitos consultamos la revista *Estrategia* entre los años 1969 y 1976, registrando la huella de referentes asiáticos, africanos y latinoamericanos en el horizonte intelectual del conjunto de militares ya aludido.

## LA HISTORIA Y LAS CIENCIAS SOCIALES FRENTE A LAS DICTADURAS

El militarismo, los golpes de estado y las dictaduras militares de la segunda mitad del siglo XX en América Latina han sido vinculados, casi invariablemente, a la Guerra Fría, y no sin razón. Aunque el fenómeno de la intervención de los militares en la política latinoamericana acompaña desde sus inicios a las repúblicas liberadas de los imperios europeos, los gobiernos militares nunca se comprendieron como el resultado de una realidad externa del modo que se hizo en el periodo señalado, incluso a riesgo de soslayar la evolución diacrónica de los ejércitos. Autores como Rouquié, Loveman y Nunn<sup>2</sup>, entre otros, alertaron sobre la tendencia de explicar el anticomunismo, por ejemplo, de los militares atendiendo solo a la sensibilidad de Guerra Fría que primó en esos años y no a los orígenes más remotos de un sentimiento, el anticomunismo, que parecía ser parte de la identidad común de los uniformados de la región.

Las dictaduras militares de esta época debían explicarse de la forma más profunda y amplia posible porque se supo desde temprano que su naturaleza era distinta a la de las antiguas dictaduras personalistas y patrimonialistas que se habían desplegado por la región —que de hecho tardarían en desaparecer—, y

---

1 Este texto es resultado del Proyecto FONDECYT N°1231053 de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) del gobierno de Chile.

2 Alain Rouquié, *El Estado militar en América Latina* (Buenos Aires: Emece, 1984); Brian Loveman, *For la Patria: Politics and the Armed Forces in Latin America* (Wilmington: SR Books, 1999); Frederick Nunn, "New Thoughts on Military Intervention in Latin American Politics: The Chilean Case, 1973", *Journal of Latin American Studies* 7 (2), 1975, pp. 271-304.

que en consecuencia exigían de parte de las ciencias sociales un esfuerzo investigativo, reflexivo e interpretativo adicional. El hito fundacional de estas nuevas dictaduras, como se pudo reconocer años después, fue el golpe de 1964 en Brasil y el establecimiento de un gobierno que impulsó el copamiento del Estado por parte de las instituciones castrenses con metas a largo plazo que, según su proyección, acabarían por transformar la sociedad nacional en su conjunto. Hacia los años setenta, ya en conocimiento del desarrollo de la dictadura brasileña, de la Argentina de Onganía y, desde 1973, de los golpes de Estado en Chile y Uruguay, los científicos sociales articularon teorías, hipótesis y conceptos para entender una situación que impactaría tan radical y dolorosamente a los pueblos de esos países. Es comprensible que el análisis se concentrara en los sucesos del Cono Sur en virtud de la espectacularidad de su evolución, del impacto de su represión y del alcance del terrorismo de Estado, si bien ello significó cierto descuido de otros fenómenos, paralelos pero muy distintos, como fueron los gobiernos militares de izquierda que surgieron en la región durante este periodo<sup>3</sup>.

Un conjunto de indagaciones hizo uso de conceptualizaciones tales como fascismo, Estado burocrático-autoritario, Doctrina de Seguridad Nacional o nuevo(s) autoritarismo(s)<sup>4</sup>. Se iba develando la trama que había derivado en el terror, así como el poder en las sombras que la había orquestado: Estados Unidos. Los conceptos que se estaban acuñando remitían a referentes, por lo general, externos y/o contemporáneos. En el caso de fascismo, se aludía a un fenómeno propiamente europeo y de una data considerable (era el menos contemporáneo), que se aplicaba a las dictaduras del Cono Sur en base al rol de la burguesía en el origen de los regímenes autoritarios y de la violencia en la imposición de un nuevo orden económico<sup>5</sup>. La idea fue cuestionada porque “nuestros” fascismos, a diferencia de los europeos, no se proyectaban hacia la fase del imperialismo por las limitaciones de sus respectivos recursos, en otras palabras, por su escaso poder. Entonces surgió la figura del fascismo dependiente, que adaptaba el fascismo a la realidad de los países sudamericanos, los que no pretendían lanzarse al imperialismo y que en cambio seguían obedeciendo a la lógica de la

---

3 Nos referimos a los gobiernos de Juan Velasco Alvarado en Perú, Omar Torrijos en Panamá, Juan José Torres y Alfredo Ovando en Bolivia y Guillermo Rodríguez Lara en Ecuador. Ver Germán Alburquerque, “Militares de izquierda y Seguridad Nacional en Perú: las ideas de Edgardo Mercado Jarrín (1968-1975)”, *Divergencia* 21, 2023, pp. 25-42; Germán Alburquerque, “El gobierno militar de Omar Torrijos y la Doctrina de Seguridad Nacional. Panamá, 1960-1989”, *Autoctonía* VII (2), 2023, pp. 1189-1221; Germán Alburquerque, “Militares de izquierda y Doctrina de Seguridad Nacional en Ecuador: el gobierno de Guillermo Rodríguez Lara, 1972-1976”, *Historia*, 396, 11 (2), 2021, pp. 3-32. También Alain Rouquié y Stephen Suffern, “Los militares en la política latinoamericana desde 1930”, en Leslie Bethell (ed.), *Historia de América Latina*, vol. 12 (Barcelona: Crítica, 1997), pp. 281-341.

4 Ver Germán Alburquerque y Diego Gutiérrez, “Tipologías, explicaciones y conceptos: Definiendo las dictaduras militares sudamericanas de la segunda mitad del siglo XX” en Claudia Montero y Pablo Aravena (eds.), *A 50 años, reflexiones desde la historiografía y la memoria* (Valparaíso: Inubicalistas, 2023), pp. 17-73.

5 Agustín Cueva, “La cuestión del fascismo”, *Revista Mexicana de Sociología* 39 (2), 1977, pp. 469-480.

dependencia<sup>6</sup>. Esa sujeción a los movimientos del capital internacional estaba en la raíz de la explicación de Guillermo O'Donnell y de su concepto Estado burocrático-autoritario<sup>7</sup>. Analizando el desarrollo político de los gobiernos militares de Brasil y Argentina, el politólogo argentino identificaba que los ejércitos de esos países transformaron el Estado para adecuarlo a la inserción de sus economías en el proceso de acumulación de capital global, ejerciendo una represión sistemática que ahogaba cualquier tipo de oposición o resistencia al modelo impuesto desde arriba, mediante instituciones especializadas en esa tarea. Desde el segundo lustro de los setenta las explicaciones giraron en torno a la recién descubierta Doctrina de Seguridad Nacional, comprendida como un cuerpo de ideas transmitido por Estados Unidos a los oficiales latinoamericanos a escala masiva<sup>8</sup>. Los gobiernos militares de América del Sur, en consonancia con los dictados de Washington —se afirmaba— habían hecho propia la lucha contra el comunismo y la consecuente eliminación del enemigo interno. Uno de los primeros estudiosos del fenómeno fue Joseph Comblin, quien de todos modos introdujo la precepción de que no todos los ejércitos habían tomado la misma orientación, el peruano, de hecho, se planteaba como alternativa al tipo-ideal brasileño.

Hasta aquí observamos que los conceptos y explicaciones propuestos para entender las nuevas experiencias autoritarias se anclaban en referentes foráneos y ligados a la contemporaneidad occidental. Por esos años el sociólogo Manuel Antonio Garretón inició la teorización sobre el nuevo autoritarismo con una visión que aspiraba a ser más compleja y a combinar argumentos más heterogéneos<sup>9</sup>. Lo más trascendente, para nuestro trabajo, fue el reconocimiento que hizo de las diferencias que surgían entre los gobiernos militares del periodo, conectando sus tendencias con los ejes que forjaban el orden mundial. Así, mientras unos gobiernos decidían su conducta inspirados por el eje este-oeste, otros lo hacían por el eje norte-sur. El gobierno de Juan Velasco Alvarado, en Perú, según este esquema, adhería a la lucha tercermundista contra el norte desarrollado y rico, lo que se traducía en políticas redistributivas y de recuperación de las riquezas nacionales en manos de empresas extranjeras. Garretón también ponía en la palestra las fuentes ideológicas de donde los militares extraían sus ideas y que

---

6 Theotônio Dos Santos, "Socialismo y fascismo en América Latina hoy", *Revista Mexicana de Sociología* 39 (1), 1977, pp. 173-190.

7 Guillermo O'Donnell, "Las tensiones en el Estado burocrático-autoritario y la cuestión de la democracia", en David Collier (ed.), *El nuevo autoritarismo en América Latina* (México: Fondo de Cultura Económica, 1985), pp. 289-321.

8 José Comblin, "La doctrina de Seguridad Nacional", en *Dos ensayos sobre Seguridad Nacional* (Santiago de Chile: Arzobispado de Santiago, 1979), pp. 9-207; Jorge Tapia Valdés, *El terrorismo de Estado: La Doctrina de la Seguridad Nacional en el Cono Sur* (México: Nueva Imagen, 1980).

9 Manuel Antonio Garretón, "De la seguridad nacional a la nueva institucionalidad: Notas sobre la trayectoria ideológica del nuevo Estado autoritario", *Revista Mexicana de Sociología* 40 (4), 1978, pp. 1259-1282.

no se restringían a la seguridad nacional de raíz norteamericana, añadiendo los respectivos nacionalismos, el pensamiento social católico y ciertos postulados tecnocráticos.

Al indagar en las influencias se abría todo un universo para los estudiosos del militarismo latinoamericano, pero, además, a partir de la diversidad de las experiencias quedaba en evidencia la insuficiencia de las primeras conceptualizaciones, aquellas centradas en el fascismo, en el proceso de acumulación de capital o en la DSN<sup>10</sup>. Pronto se descubrió que la influencia estadounidense en Brasil y Argentina no fue tan profunda como se pensaba, y que había sido la influencia francesa y su teoría de la guerra revolucionaria la que había forjado a generaciones de oficiales que luego pondrían en práctica tales recetas en la brutal ejecución de sus mandatos. Los franceses habían elaborado su doctrina como reacción a las luchas liberacionistas de sus colonias en Indochina y en Argelia, vale decir, en el Tercer Mundo. Era pues el proceso de descolonización y el eje norte-sur el que se hacía presente, en forma negativa, por oposición y en calidad de amenaza, en los cuarteles. Pero si las dictaduras de derecha fueron influenciadas por la lucha contra la descolonización se podría colegir que las dictaduras de izquierda se inspiraron en la descolonización. Por cierto, los medios que Vietnam, Argelia o Egipto poseían para ejercer influencia eran ínfimos en comparación con los medios de Francia y aún más con los de Estados Unidos. De todos modos, no era un despropósito imaginar que los países del Tercer Mundo, sus luchas y la fuerza del proceso de descolonización influenciaron a las fuerzas armadas de la región, al menos a aquellas de orientación progresista. Había que investigarlo.

## GUERRA FRÍA Y DESCOLONIZACIÓN

Considerar la descolonización significaba matizar la potencia de la Guerra Fría como clave explicativa del acontecer político latinoamericano. Como hemos expuesto en otro trabajo, se convirtió en un lugar común endosar al conflicto bipolar la tutela de muchos fenómenos, de partida los asociados a los golpes de Estado<sup>11</sup>. Era lógico. Develar, por ejemplo, la responsabilidad de Estados Unidos en el derrocamiento de Salvador Allende en Chile causaba impacto y aportaba un factor fundamental a la comprensión del fallido intento de revolución popular por vía institucional que este encarnó. Y esa injerencia se debía a la política exterior que Washington formuló para disputar con la Unión Soviética la hegemonía global. La historiografía se ocupó de extender esta clave explicativa a otros países

---

10 Laura Sala, "La Doctrina de Seguridad Nacional en América Latina: Un repaso por los estudios clásicos y sus críticos", *Revista Electrónica de Estudios Latinoamericanos* 20 (8), 2022, pp. 1-24.

11 Germán Alburquerque, "Lineamientos para estudiar las influencias externas en las fuerzas armadas latinoamericanas desde una perspectiva tercermundista. Años cincuenta a setenta", *Sur y Tiempo* 10 2024, pp. 30-50.

y otras coyunturas, configurando lo que concibo como una etapa de descubrimiento. Pronto se abriría una nueva etapa en que se otorgó protagonismo a los propios países del continente, cuyos procesos y fenómenos no solo reaccionaron a la contienda bipolar o la reflejaron, sino que la afectaron, influyendo en su curso y deviniendo, luego, sujetos de su historia. Una visión que profundizó y amplió esta perspectiva la podemos reconocer en la obra de Harmer, quien vislumbró una Guerra Fría sistémica en América Latina, con sus propias reglas, su propia lógica y sus propios protagonistas<sup>12</sup>. En una tercera etapa la investigación ha girado sobre el modo en que la Guerra Fría se infiltró en la vida cotidiana social y cultural del continente<sup>13</sup>.

Nos parece que se ha esbozado una cuarta etapa en esta evolución, la cual, recogiendo los avances anteriores, integra el proceso de descolonización y el surgimiento del Tercer Mundo y el tercermundismo al acontecer latinoamericano ya condicionado por la Guerra Fría. Se declara que para una comprensión más completa y profunda de todo esto se requiere ampliar la mirada y conectarse con lo que estaba ocurriendo en Asia, África y el propio Caribe, cuya descolonización corría por una temporalidad distinta a la de las excolonias hispanoamericanas. El impulso revolucionario en esos espacios debía complementar, por ejemplo, el análisis de las revoluciones cubana y nicaragüense. En otras palabras, el eje norte-sur se tornaba imprescindible para entender cómo América Latina se había insertado en el eje este-oeste<sup>14</sup>.

A un nivel más general, la historiografía y las ciencias sociales occidentales habían atravesado una progresión similar desde que se recomendó descentrar el examen de la Guerra Fría y atender la agencia de las regiones periféricas. Nació así la Guerra Fría global, exitosa fórmula acuñada por Odd Arne Westad que subrayaba el modo en que los países de segunda línea no solo habían albergado los escenarios efectivos del conflicto, sino que habían devenido en actores necesarios para cualquier explicación profunda<sup>15</sup>. El paso siguiente fue volver la mirada

---

12 Tanya Harmer, *El gobierno de Allende y la Guerra Fría interamericana* (Santiago de Chile: Universidad Diego Portales, 2013).

13 Aldo Marchesi, "Escribiendo la Guerra Fría Latinoamericana: entre el Sur 'local' y el Norte 'global'", *Estudios Históricos* 30 (60), 2017, pp. 187-202; Gilbert M. Joseph, "Border crossings and the remaking of Latin American Cold War Studies", *Cold War History* 19 (1), 2019, pp. 141-170; Marcelo Casals, "Which borders have not yet been crossed? A supplement to Gilbert Joseph's historiographical balance of the Latin American Cold War", *Cold War History* 20 (3), 2020, pp. 367-372; Julieta Rostica y Laura Sala, "La guerra fría en América Latina y los estudios transnacionales. Introducción", *Secuencia* 111, 2021, pp. 1-7; Alejandro Schneider y Matías Oberlin Molina, "Introducción. Pensar la Guerra Fría en América Latina", en Alejandro Schneider (comp.), *América Latina: bajo la sombra de la Guerra Fría* (Buenos Aires: Teseo-Clacso, 2021), pp. 9-22.

14 Laura Sala, "Las ideas externas en las doctrinas militares latinoamericanas de la Guerra Fría", *Secuencia* 111 (2021), pp. 1-34; Hal Brands, *Latin America's Cold War* (Cambridge: Harvard University Press, 2010).

15 Odd Arne Westad, *The Global Cold War: Third World Interventions and the Making of Our Times* (Cambridge: Cambridge University Press, 2015).

hacia la descolonización, el proceso por el cual las antiguas colonias asiáticas, africanas y caribeñas alcanzaron la independencia y que, en la segunda mitad del siglo XX, en paralelo a la Guerra Fría, llegó a su clímax. Los especialistas en los últimos años han abogado por brindar mayor atención al Tercer Mundo y a la descolonización<sup>16</sup>, la cual, por otra parte, poseía una historia mucho más larga que la Guerra Fría (si aceptamos que esta se inició hacia 1947). Sin embargo, tanto esta historiografía como la latinoamericana en general han estudiado la descolonización en función de la Guerra Fría, conservando una relación de subordinación: lo que interesa realmente es la Guerra Fría, y en tributo a ese interés cabe incluir la descolonización.

Pero si la descolonización es más antigua, si moviliza de forma directa a un conjunto mayor de naciones, si su huella en los continentes periféricos parece ser más profunda que la Guerra Fría ¿debemos continuar reproduciendo la jerarquía de la que hablamos? Por otro lado, en América Latina el impacto de la Guerra Fría fue patente e intenso, amplio y hondo, como resultado de la sombra casi omnipresente de Estados Unidos, que la consideraba su área de influencia automática, su aliado más seguro. No pretendemos desconocer ese impacto, mas es oportuno preguntarse por el alcance temporal de la intervención estadounidense, porque es bien sabido que desde la doctrina Monroe Washington viene interviniendo en América Latina, con unas fases, por cierto, más intensas que otras —la fase de la Guerra Fría, sin duda, fue de las más intensas—, pero con una continuidad consistente. Si la tensa relación entre Estados Unidos y Latinoamérica excede el periodo de la bipolaridad tenemos que el impacto de esta se desdibuja, por cuanto no respondería a su única lógica sino a un patrón más poderoso que podríamos calificar de neocolonial. No es este el lugar para agotar tal discusión, que exigiría una investigación aparte que, de hecho, no hemos realizado. Lo que queremos subrayar es que el impacto de la Guerra Fría en América Latina también tiene límites y exige utilizar un lente más amplio para observarlo<sup>17</sup>. No está de más apuntar que la presencia soviética en América Latina durante la Guerra Fría, si bien insoslayable, fue contenida y acotada (sobre todo si se la compara con la estadounidense)<sup>18</sup>.

---

16 Robert McMahon (ed.), *The Cold War in the Third World* (Oxford: Oxford University Press, 2013); Jeremy Suri, "The Cold War, Decolonization, and Global Social Awakenings: Historical Intersections", *Cold War History* 6 (3), 2006, pp. 353-363; Jason Parker, "Decolonization, the Cold War, and the post-Columbian era", en Robert McMahon (ed.), *The Cold War in the Third World* (Oxford: Oxford University Press, 2013), pp. 125-131; Cary Fraser, "Decolonization and the Cold War", en Richard H. Immerman y Petra Goedde (eds.), *The Oxford Handbook of the Cold War* (Oxford: Oxford University Press, 2013), pp. 476-496.

17 En términos similares se ha expresado Pettinà, recomendando evitar la sobredimensión del influjo de Estados Unidos y la Guerra Fría en América Latina. Vanni Pettinà, *Historia mínima de la Guerra Fría en América Latina* (Ciudad de México: El Colegio de México, 2018).

18 Profundiza y complementa esta idea general: Mercedes Osuna Vergara, "Que vienen los rusos: the Limits of Soviet Foreign Policy in Cuba, Chile and Nicaragua", *The Webster Review of International History* 3 (1), 2023, pp. 63-76.

Por nuestra parte queremos explorar la noción de que la descolonización tuvo, durante la segunda mitad del siglo XX, una influencia importante en América Latina, no a la altura de la Guerra Fría, pero tampoco muy lejos. Asumimos que no se ha escrutado lo suficiente el impacto de la descolonización en el campo político y cultural latinoamericano, en parte porque la preponderancia de la Guerra Fría lo ha sofocado<sup>19</sup>. El estudio de los militares del periodo, de las influencias que recibieron, de las revistas donde las influencias se plasmaron, puede aportar luces al desafío.

## LOS MILITARES ARGENTINOS Y SUS REVISTAS

Los militares argentinos constituyen un objeto de estudio complejo en virtud de su protagonismo político, sus divisiones intestinas, su heterogeneidad, su larga historia, etc. Las influencias que han recibido desde el exterior explican, en parte, la diversidad como también los conflictos internos, distinguiéndose varias etapas. A la primigenia influencia francesa, clave en la organización del ejército en el siglo XIX, le sucedió la influencia alemana. Luego vuelve a estrechar el lazo con la milicia francesa, para acusar finalmente la influencia estadounidense desde los años sesenta. Al momento de explicar la última dictadura, la iniciada en 1976 la historiografía ha tenido en cuenta la larga evolución de las instituciones armadas, como en el caso de Alain Rouquié y Federico Finchelstein<sup>20</sup>, pero en mayor medida se han rastreado las influencias de la doctrina francesa de la guerra revolucionaria y de la seguridad nacional estadounidense<sup>21</sup>.

Por nuestra parte, interesa perfilar la corriente militar nacionalista mencionada más arriba, representativa, además, de una sensibilidad tercermundista. Esta corriente, denominada “peruanista” por Guillermo Caviaasca, autor de la indagación más completa de su trayectoria, por una breve temporada se hizo hegemónica en el ejército, con la comandancia de Jorge Raúl Carcagno en 1973<sup>22</sup>. Haciendo

19 En esa dirección se orienta Thomas C. Field Jr., Stella Krepp y Vanni Pettinà (eds.), *Latin America and the global cold war* (Chapel Hill: The University of North Carolina Press Books, 2020).

20 Alain Rouquié, *El Estado militar en América Latina* (Buenos Aires: Emece, 1984); Federico Finchelstein, *La Argentina fascista: Los orígenes ideológicos de la dictadura* (Buenos Aires: Sudamericana, 2008).

21 Entre otros: María Cecilia Míguez, “¿Anticomunistas, antiestatistas, antiperonistas? La ‘nacionalización’ de la doctrina de seguridad nacional en la Argentina y la legitimación del golpe de Estado de 1966”, *Revista SAAP. Publicación de Ciencia Política de la Sociedad Argentina de Análisis Político* 7, 2013, pp. 65-95; Olga Echeverría, “Las Doctrinas de la Seguridad Nacional Latinoamericanas: Osiris Villegas y sus teorías en tiempos de desperonización y Guerra Fría. Argentina, 1956-1985”, *Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe* 31 (1), 2020, pp. 39-58; Carlos Guerrero, “El impacto ideológico de la Escuela Francesa sobre el Ejército argentino”, *Persona y Sociedad* 25 (2), 2011, pp. 55-72; Esteban Pontoriero, *La represión militar en la Argentina: 1955-1976* (Buenos Aires: UNLP-UNM-UNGS, 2022); María Florencia Osuna y Esteban Pontoriero, “El impacto de la Doctrina ‘de la Seguridad Nacional’ en la Argentina durante la Guerra Fría (1955-1983)”, *Izquierdas* 49, 2020, pp. 352-364.

22 Guillermo Caviaasca, *La Hipótesis Carcagno. Guerrilla y Fuerzas Armadas en la transición democrática de 1973* (Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, 2015), Tesis de doctorado [inédita].

una síntesis de lo que los especialistas han propuesto acerca de las divisiones al interior de esta institución, sostenemos que, tras el enfrentamiento entre “azules” y “colorados” (1962-1963), se delinearon tres grandes corrientes: la liberal, caracterizada como antiperonista, capitalista y autoritaria; la autoritaria-corporativista, relacionada con el anticomunismo, la derecha y el conservadurismo católico; y la nacionalista, asociada con el desarrollismo y la industrialización, con trazas populistas<sup>23</sup>. Esta última fue adquiriendo consistencia al incorporar una vocación antimperialista y filoperonista, para aparecer hacia finales de los sesenta como un cuerpo sólido que, recogiendo la estela del velasquismo, adoptó su definitivo perfil peruanista. Uno de sus animadores fue Juan Enrique Guglielmelli, personaje central de este escrito.

Antes de brindar un panorama de las revistas militares argentinas, me permito aludir a una publicación chilena, el *Memorial del Ejército de Chile*, que tuvimos oportunidad de revisar antes de abocarnos al caso argentino<sup>24</sup>. En el *Memorial*, durante el periodo 1960-1973, se pudo comprobar la presencia de las ideas de la seguridad nacional inculcadas por Estados Unidos, pero también la aparición de artículos que veían con interés sucesos propios del Tercer Mundo y modelos en los cuales los militares chilenos podían inspirarse. Paradigmático resultaba, en ese sentido, un artículo del mayor Claudio López referido a los nuevos roles que en el Tercer Mundo interpretaban los ejércitos nacionales, roles que superaban las esferas convencionales hasta entonces transitadas<sup>25</sup>. Como mostró Verónica Valdivia<sup>26</sup>, esta corriente tercermundista tenía una identidad definida y compartía con otros sectores de las fuerzas armadas postulados nacionalistas y desarrollistas enunciados a partir del ibañismo (por el general Carlos Ibáñez del Campo) de los años veinte.

Si una revista militar chilena había ventilado tales ideas ¿por qué no habría de suceder lo mismo en otros países de la región y, por lo pronto, en Argentina, más aún considerando las posturas díscolas de Carcagno en la Décima Conferencia

23 Guillermo Caviasca, *op. cit.*, 2015; María Cecilia Míguez, *op.cit.*, 2013, pp. 65-95; Rosendo Fraga, *Ejército: del escarnio al poder (1973-1976)* (Buenos Aires: Planeta, 1988); Daniel Mazzei, “Lucha facciosa, autonomía e influencias externas en las Fuerzas Armadas argentinas en la segunda mitad del siglo XX”, *Páginas* 9 (19), 2017, pp. 34-52.

24 Germán Alburquerque, Francisca Ossandón y Daniela Quiroga, “Presencia de la Doctrina de Seguridad Nacional en la revista *Memorial del Ejército de Chile*, 1960-1973”, *Autoctonía. Revista de Ciencias Sociales e Historia* 5 (2), 2021, pp. 382-404.

25 En esta misma dirección resulta también de interés Cristián Garay Vera, “Epistemometría de las lecturas militares chilenas 1947-1997. El estado de las Ciencias Militares desde la Posguerra”, *Boletín de la Academia Chilena de la Historia* 116, 2007, pp. 33-63. Para una visión más global: Alejandro San Francisco y Ángel Soto, *Un siglo de pensamiento militar en Chile. El Memorial del Ejército 1906-2006* (Santiago de Chile: Centro de Estudios Bicentenario, 2006). Cabe mencionar la obra de Froilán Ramos, *Guerra Fría Global: El pensamiento militar chileno y venezolano, 1960-1970* (Santiago de Chile: Centro de Estudios Bicentenario, 2022), que exhibe de forma muy completa la recepción que en Venezuela y Chile se hizo de las prescripciones estadounidenses contra la guerra no convencional.

26 Verónica Valdivia, *El golpe después del golpe. Leigh vs. Pinochet. Chile 1960-1980* (Santiago de Chile: Lom, 2003).

de Ejércitos Americanos?<sup>27</sup>. Con esos supuestos comenzamos la investigación en las revistas argentinas más representativas de las décadas del cincuenta en adelante, la *Revista Militar* (o *Revista del Círculo Militar*) y la *Revista de la Escuela Superior de Guerra*.

El objetivo era detectar la influencia positiva de referentes del Tercer Mundo —países, procesos, personajes, ideologías— en militares argentinos o en la propia revista: en los militares, si escribieron sobre tales temas con cierto entusiasmo o alguna admiración; en la revista, si publicó textos originales procedentes de Asia, África u otros países latinoamericanos y caribeños con el ánimo de divulgarlos favorablemente. Un objetivo alternativo era encontrar huellas de una influencia negativa, vale decir la exposición de referentes del Tercer Mundo con el afán de denunciarlos o presentarlos como una amenaza ante la cual precaverse. Aunque nuestra motivación de fondo era medir el impacto de los sucesos del Tercer Mundo entre las fuerzas armadas para compararlo con el de la Guerra Fría, el rechazo hacia los países comunistas como China o Vietnam sería una reacción fundada en la visión occidentalista irradiada por Estados Unidos y no contaría, por lo tanto, como respuesta directa a acontecimientos asiáticos. En consecuencia, ese tipo de reacción, por rechazo, resultaría de interés, pero en un nivel inferior, desde luego, a la reacción por admiración.

De lo anterior se derivaba la tarea de comparar el número de intervenciones (artículos, cartas, editoriales, etc.) de autores extranjeros o de instituciones extranjeras según el país de origen, así como las intervenciones de militares locales que expresasen adhesión o admiración hacia referentes del Tercer Mundo o hacia referentes occidentales. Se presentó una tercera posibilidad, la influencia de otros países latinoamericanos, que podía ubicarse ya dentro de la visión occidental, ya dentro de la tercermundista, según el caso.

Tanto la *Revista de la Escuela Superior de Guerra* como la *Revista Militar* arrojaron resultados decepcionantes para mi perspectiva dado que la preponderancia de autores franceses en la primera y estadounidenses en la segunda era abrumadora. Ambas publicaciones evidenciaron un compromiso estrecho con la doctrina francesa de la guerra revolucionaria y con la seguridad nacional de raíz estadounidense, respectivamente. En la primera se observó una contundente preocupación por China y Vietnam, pero siempre desde un punto de vista occidental. De la corriente nacionalista-peruanista no había rastro.

Así las cosas, parecía la última esperanza investigar una publicación dirigida por el general argentino en retiro, Juan Enrique Guglielmelli, la revista *Estrategia*.

---

27 María Cecilia Míguez, “La tercera presidencia peronista y la Guerra Fría. Argentina, Perú y Brasil en la X Conferencia de los Ejércitos Americanos de 1973”, *Revista Pilquen* 20 (1), 2017, pp. 17-35.

## JUAN ENRIQUE GUGLIALMELLI Y LA REVISTA *ESTRATEGIA*

El problema era que no se trataba de una revista militar, no dependía de ninguna institución castrense. El vínculo era el general Guglialmelli, ya en retiro por esos años. Pero no era lo único. El consejo de reacción lo conformaban tres militares en retiro, un militar en servicio activo y ocho civiles, sin contar a Guglialmelli como director (había un director asociado, civil). Revisamos la revista entre los años 1969, cuando aparece, y 1976 (los números 1 al 24 y del 27 al 44), fecha tope porque allí se inició una nueva fase histórica, la del “Proceso de Reorganización Nacional”. Un examen no exhaustivo de los índices de 33 ediciones arrojó la siguiente distribución de autores de artículos, discursos o documentos, valiéndonos de los datos que ofrecía la propia revista: 194 autores civiles y 109 militares. Estos se dividieron en tres: argentinos en retiro, 51; argentinos activos, 22; extranjeros (activos o en retiro), 36<sup>28</sup>. La revista versaba sobre política nacional e internacional, estrategia militar, relaciones internacionales, geopolítica, gobierno, entre otros, vale decir que estaba dirigida a una elite política y académica, lo que englobaba por supuesto a los militares argentinos, parte integrante de la clase dirigente nacional desde larga data<sup>29</sup>. Por todo lo anterior afirmamos que, pese a no ser una revista institucional, *Estrategia* puede considerarse una publicación asociada informalmente al cuerpo militar argentino y con mayor precisión a una línea en su interior, compuesta, a esas alturas, en especial por militares en retiro que se verían representados, hacia 1973, por la comandancia en jefe del general Jorge Carcagno. Caviasca y otros autores afirman que *Estrategia* fue decisiva en la consolidación de la corriente peruanista y en la cristalización de su amalgama ideológica, que debe a Guglialmelli lo medular de su formulación<sup>30</sup>. El general había abrazado el desarrollismo en tiempos de Frondizi, uniendo luego la perspectiva de la seguridad nacional para articular un binomio en el que perseveraría, el de Seguridad Nacional y Desarrollo; había recogido también elementos de la Doctrina Social de la Iglesia y de la teoría de la dependencia, acercándose al peronismo de izquierda y rematando con su admiración al velasquismo. Y atravesando cada una

---

28 Los autores se cuentan cada vez que publicaron algún texto. Por ejemplo, si Guglialmelli escribió diez contribuciones, se contaron, para el recuento final, como diez autores.

29 Varios autores coinciden en que la revista estaba dirigida, aunque no exclusivamente, al mundo militar. Guillermo Caviasca, *op. cit.*, 2015; Cristián A. Di Renzo, “Geopolítica, desarrollo económico y política exterior: Juan Enrique Guglialmelli y su proyecto de nación en la Revista *Estrategia*, 1969-1983”, *Folia histórica* 38, 2020, pp. 51-72.

30 Guillermo Caviasca, *op. cit.*, 2015, pp.221-222; María Cecilia Míguez, *op. cit.*, 2017, p. 25; Juan Enrique Guglialmelli, *Pensar con estrategia. Juan Enrique Guglialmelli en la Revista Estrategia*. Presentación de Ana Jaramillo (Buenos Aires: UNLa, 2007). También un testimonio personal: Horacio Ballester, *Memorias de un coronel democrático. Medio siglo de historia política argentina en la óptica de un militar* (Buenos Aires: Ediciones de la Flor, 1996, p. 180).

de esas vertientes con un nacionalismo soberanista constante, alimentado por un creciente antimperialismo<sup>31</sup>.

*Estrategia* publicó su primer número en 1969 presentándose como órgano de expresión del Instituto Argentino de Estudios Estratégicos y de las Relaciones Internacionales, INSAR. Sus áreas directas de interés serían el Cono Sur y el hemisferio occidental, adhiriendo desde el inicio a una seguridad nacional reinterpretada: “También en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo se actualizaron teorías, doctrinas y conceptos vinculados con la seguridad nacional. El desarrollo apareció no solo en interdependencia con aquella, sino como la esencia misma de esa seguridad”<sup>32</sup>. Esta visión desarrollista coincidía con la mayoría de los discursos nacional-securitistas, pero, aquí, cobraba un protagonismo singular. Uno de los rasgos distintivos de la revista fue reconocer, en consonancia con la corriente nacionalista-peruanista, la importancia de las condiciones sociales de vida de la población para la seguridad nacional.

A través de los escritos de Juan Enrique Guglielmelli se transparentó lo que la revista quería comunicar a las fuerzas armadas de su país, o incluso la conducta que pretendía que estas asumieran en la política nacional. Sin ambages, proclamaban el carácter revolucionario de la misión castrense con un claro acento nacionalista. En el artículo “Fuerzas Armadas y subversión interior”<sup>33</sup>, junto con explicar las razones históricas de porqué en el Tercer Mundo la institución armada tiene una ligazón con la nación tan profunda, expresaba que “frente a sus propias necesidades, cada país debe tener su propia alternativa. En nuestro caso, la respuesta debe ser nuestra propia revolución”<sup>34</sup>. ¿Cómo sería esta revolución? El autor ejemplificaba con una realidad “un poco alejada de nuestro medio”: Perú. Allí era evidente la necesidad de una revolución: “A la que proclamó y perdió en la sierra Luis de la Puente Uceda, las fuerzas armadas opusieron la de Juan Velasco Alvarado”<sup>35</sup>. Años después el general ampliaría los referentes foráneos. Afirmando que en América Latina se respiraba una “segunda revolución nacional”<sup>36</sup> (la primera, la de las Independencias), dirigida a un desarrollo integral autónomo, aludía a que en Perú, Panamá y Ecuador las fuerzas armadas operaban como “vanguardia de los cambios revolucionarios”, mientras que, en Brasil, un caso atípico, se limitaban al desarrollo “en particular del factor económico”<sup>37</sup>.

---

31 Guillermo Caviasca, *op. cit.*, 2015); Cristián A. Di Renzo, *op. cit.*, 2020, pp. 51-72; Raúl Larra, *La batalla del General Guglielmelli* (Buenos Aires: Distal, 1995).

32 *Estrategia*, n°1, mayo-junio de 1969, pp. 6-7.

33 *Estrategia*, n°2, julio-agosto de 1969.

34 *Ibidem*, p. 13.

35 *Ibidem*, p. 13.

36 J. E. Guglielmelli, “Las FF. AA. en América Latina (FF. AA. y Revolución Nacional)”, *Estrategia*, n°17, julio-agosto de 1972, p. 11.

37 *Ibidem*, p. 14.

Destacar a Perú no era casual ni menor. En repetidas oportunidades se brindó espacio en la revista a la revolución que estaban llevando allí a cabo los oficiales peruanos, una experiencia alternativa a la representada por la dictadura militar argentina de 1966. Se publicaron discursos de Velasco, reportajes a la situación política y artículos de otros militares peruanos. Afloraba entonces la línea peruanista al interior de las fuerzas armadas argentinas, la misma que no había dejado muchas huellas visibles, de partida, en las dos prominentes revistas militares que reseñamos más arriba. Pero dar espacio no significa necesariamente apoyar, de hecho, se publicó también un discurso de Augusto Pinochet, el dictador chileno, al cumplirse un mes del golpe de Estado. Creemos, sin embargo, que la inclusión de escritos de los militares peruanos fue una maniobra sistemática para hablar a través de ellos, de difundir las ideas de Guglielmelli y sus afines de modo indirecto, y por supuesto de proyectar hacia Argentina lo que estaba ocurriendo en Perú. No fueron, además, escritos corrientes, superficiales, sino relevantes elaboraciones políticas, como los artículos firmados por el general Edgardo Mercado Jarrín, el principal teórico de la seguridad nacional en su país, y quien, desde su condición de canciller, justificó la integración de Perú al Tercer Mundo.

Para Mercado Jarrín su país y los vecinos debían aliarse con los países subdesarrollados de Asia y África por cuanto compartían el mismo conjunto de problemas derivados de la dependencia y del injusto orden económico internacional: “Los pueblos del Tercer Mundo están unidos en el hambre, la miseria, el sufrimiento, la explotación colonialista, la humillación”, y deben aspirar a formar “un mismo frente en defensa de sus intereses que les permita hablar a una sola voz”<sup>38</sup>. De esa lectura emergía la noción de que los centros de poder económico encarnaban las más agudas amenazas para la seguridad nacional de Perú y de los pueblos subdesarrollados, empalmando con el concepto de seguridad integral, también sustentado por los oficiales peruanos y por Mercado Jarrín en primer lugar, y que a la vez reforzaba la imprescindibilidad del desarrollo para la seguridad nacional que Guglielmelli y la revista *Estrategia* declaraban. En el número 21 se reeditaba “La seguridad integral en el proceso revolucionario peruano”, texto que consagraba la superación del concepto de seguridad nacional para afianzar en su reemplazo el de seguridad integral, que implicaba el mejoramiento del estándar de vida de la población como antídoto contra el despunte de la subversión<sup>39</sup>. Otra publicación destacada del mismo general peruano fue su histórico discurso en la Décima Conferencia de Ejércitos Americanos<sup>40</sup>, aquella en la que coincidió

---

38 Edgardo Mercado Jarrín, “El Tercer Mundo”, *Estrategia*, n°18, septiembre-octubre de 1972, p. 46. El llamado a la unidad y la solidaridad de los países en desarrollo se reforzaba en el artículo “Hacia el establecimiento de una política general colectiva del Tercer Mundo”, *Estrategia*, n°33, marzo-abril de 1975.

39 Edgardo Mercado Jarrín, “La seguridad integral en el proceso revolucionario peruano”, *Estrategia*, n°21, marzo-abril de 1973.

40 Edgardo Mercado Jarrín, “Reflexiones sobre la seguridad y el desarrollo en América Latina”, *Estrategia*, n°24, septiembre-octubre de 1973.

con Jorge Carcagno para oponerse a la docilidad de los cuarteles latinoamericanos frente a Washington, desafiar al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y clamar por revisar los objetivos, hasta entonces ajenos, que los ejércitos perseguían.

El interés demostrado por Perú fue consistente con el mostrado por los otros gobiernos militares de izquierda de la región, vale decir, los de Bolivia, Ecuador y Panamá, si bien la presencia de estos fue, en comparación, bastante menor, lo que es explicable. El de Velasco Alvarado no solo fue el primero en términos cronológicos, sino también el más conocido a nivel internacional y el que elaboró una producción teórica más coherente y original. Es de todas maneras sorprendente la cobertura de *Estrategia* al caso boliviano, en consideración de la brevedad de los gobiernos de Alfredo Ovando y Juan José Torres, inferior a dos años entre ambos.

En el artículo de Enrique Gussoni, “Bolivia encaminada hacia el desarrollo y la autodeterminación”<sup>41</sup> —cuyo título ya indicaba una visión positiva—, Ovando declaraba, respecto a la alianza militar con Estados Unidos, que “una Fuerza Interamericana vulnera la soberanía de los países del continente”<sup>42</sup>. En la conclusión el autor señalaba: “si en el futuro las meras formulaciones ideológicas no oscurecen el fondo de lo que se debe atacar, es muy probable que en esta emergencia no se deslice una nueva frustración del ansia liberadora que anida en el espíritu de todos los latinoamericanos”<sup>43</sup>. Meses más tarde la revista abordaba la asunción del general Juan José Torres, ponderando que la derrota que este propinó al ala conservadora del ejército se debió a que “el pueblo —campesinos, mineros, estudiantes, intelectuales— se lanzó a las calles y caminos en actitud de pelea... [Así] lo imposible se hizo repentinamente realidad”<sup>44</sup>. *Estrategia* depositaba esperanza en Torres, a quien se le veía premunido de “sus alianzas populares, su trayectoria revolucionaria no desmentida y su doctrina ampliamente comprensiva del papel del Ejército”<sup>45</sup>. En el número siguiente se publicaba un discurso de Torres en el cual podía leerse: “La verdadera izquierda tiene que ser una izquierda nacional. Como izquierda nacional fueron los Soviets o las hordas campesinas de Mao Tse Tung... Si la izquierda no es nacional, es una izquierda cipaya o traidora”<sup>46</sup>.

---

41 *Estrategia*, n°4, noviembre-diciembre de 1969.

42 *Ibidem*, p. 21.

43 *Ibidem*, p. 24.

44 Enrique Alonso, “Fuerzas armadas y revolución nacional en Bolivia y Perú”, *Estrategia*, n°9, septiembre de 1970-febrero de 1971, p. 16.

45 *Ibidem*, p. 16.

46 “Discurso del General Juan José Torres”, *Estrategia*, n°10, marzo-abril de 1971, p. 90. Sobre Ecuador, la revista publicó “Filosofía y plan de gobierno de Ecuador”, un extracto del discurso del presidente Guillermo Rodríguez Lara, *Estrategia*, n°15, marzo-abril de 1972. Acerca de Panamá se incluyó el texto

Resulta relevante cómo *Estrategia* se relacionó con otros países de la región, en particular con Chile y Brasil, vecinos que se constituyeron en referentes políticos del periodo. Se siguió de cerca el proceso chileno iniciado en 1970 con la Unidad Popular y Salvador Allende, que además de su modelo de revolución socialista de por sí atractivo, llamaba la atención por la posición del ejército frente al mismo. Claramente la revista simpatizaba con la corriente constitucionalista y nacionalista al interior de las fuerzas armadas chilenas, cristalizada en la “Doctrina Schneider”, bautizada así por el comandante en jefe de las fuerzas armadas, René Schneider, quien sería asesinado. Sobre esta se publicó, primero, “La doctrina Schneider-Prats y el gobierno de la Unidad Popular”, artículo de Pablo Piacentini<sup>47</sup>, y luego “La doctrina Schneider”, firmado por Carlos Prats, quien sucediera a Schneider en el cargo<sup>48</sup>. Esta posición, crítica para la política chilena del momento, guardaba similitudes con el proyecto de revolución nacional de Guglielmelli. *Estrategia* también pareció compartir la mirada tercermundista expresada en la revista *Memorial del Ejército de Chile*. Aquel señero artículo del militar chileno Claudio López titulado “Las fuerzas armadas en el Tercer Mundo” fue reproducido parcialmente al año siguiente en *Estrategia*, aunque bajo el título “América Latina y sus fuerzas armadas”<sup>49</sup>. En línea con la concepción de un ejército ocupado en tareas que excedían su ámbito natural, se reprodujo también el artículo firmado por el coronel aviador en retiro chileno René González Rojas, “Contribución de las fuerzas armadas al desarrollo económico”<sup>50</sup>, cuya publicación original en el *Memorial* databa de 1966.

Brasil ocupó un lugar protagónico en *Estrategia*, para bien o para mal. Se observa en primer lugar un interés mucho más intenso que el que mostraban las revistas militares argentinas tradicionales. Se respetaba la escuela geopolítica allí imperante, perspectiva intelectual que Guglielmelli y su grupo también cultivaban y que se relacionaba directamente con el tema de la seguridad nacional. En coherencia, se divulgaban visiones que desde ese campo enaltecieran la ligazón de la seguridad con el desarrollo, uno de los *leit motiv* de la revista, o bien que auspiciaran políticas de integración entre Brasil y Argentina. En la quinta entrega apareció “Objetivos, políticas y estrategias del tercer gobierno de la revolución”, de Emilio Garrastazu Medici, presidente brasileño en ejercicio, que llevaba como epígrafe: “Porque sé que la seguridad de una comunidad o de un pueblo no funciona en la desigualdad entre los hombres, en el florecimiento de los privilegios, en la injusticia social, en

---

“La cuestión del Canal”, de Omar Torrijos (*Estrategia*, n°21, marzo-abril de 1973). Como se puede observar, *Estrategia* dio voz a Velasco Alvarado, Ovando, Torres, Rodríguez Lara y Torrijos.

47 *Estrategia*, n°17, julio-agosto de 1972.

48 *Estrategia*, n°24, septiembre-octubre de 1973.

49 *Estrategia*, n°11, mayo-junio de 1971.

50 *Estrategia*, n°2, julio-agosto de 1969.

la separación entre las clases, entre las razas y entre las generaciones, mi primer y último objetivo es el desarrollo nacional”<sup>51</sup>. Palabras que podrían enorgullecer no solo a Guglielmelli, sino incluso a un Velasco Alvarado o Torres.

El tono dominante, sin embargo, sería más oscuro, y es que desde *Estrategia* miraron con recelo y alarma los planteamientos brasileños que apuntaban a la constitución de ese país en potencia y que, de paso, perjudicaban los intereses argentinos. Recusaban una “clara vocación imperial” unida a la “apoyatura política y económica de Estados Unidos, en cuanto Brasil le sirve de reaseguro a sus intereses capitalistas. (Imperialismo de USA — Subimperialismo Brasileiro)”<sup>52</sup>. El propio Guglielmelli escribiría el artículo “Golbery do Couto e Silva, el “destino manifiesto” brasileño y el Atlántico Sur”<sup>53</sup> para criticar al mayor teórico de la seguridad nacional brasileña, señalando que su análisis era “francamente tendencioso” pues trataba de “presentar al Brasil como el único núcleo central de la América del Sur, área esta sobre la cual debe ejercer un “destino manifiesto” que no choca con los intereses norteamericanos. Antes bien, los complementa”<sup>54</sup>. Carlos Mastrorilli se expresaría en términos semejantes en “Una actualización de la doctrina Golbery: Brasil geopolítica y destino del General Carlos Meira Mattos”<sup>55</sup>, alegando que las concepciones geopolíticas de Everardo Backheuser, Golbery o Meira Mattos “suponen hegemonías concertadas y la internalización de patrones de desarrollo ajenos a las culturas profundas de América”<sup>56</sup>. Es notable cómo la silueta de Estados Unidos se filtraba en los ataques a la geopolítica brasileña.

*Estrategia* dedicó gran atención a los acontecimientos y procesos de los continentes de Asia y África, pero a diferencia del desdén y algún grado de temor con que la *Revista de la Escuela Superior de Guerra* los miró, con un enfoque positivo, incluso entusiasta, sobre todo porque se entendía que allí las fuerzas armadas habían demostrado que su misión podía generar un impacto mucho mayor y en todo nivel. Para transmitir esa idea se recurrió incluso a autores del Primer Mundo. En el segundo número se imprimió “El papel extramilitar del ejército en el tercer mundo”<sup>57</sup>, título desde ya sugerente que correspondía a un libro editado en Francia como resultado de un coloquio en la Universidad de Dijon en 1965. *Estrategia* ofrecía una síntesis del volumen elaborada por el teniente coronel argentino en retiro Alberto Garasino y el ya mencionado doctor Enrique Gussoni, quienes se servían también

---

51 *Estrategia*, n°5, enero-febrero de 1970, p. 58.

52 Florencio Díaz Loza, “Geopolítica del Brasil”, *Estrategia*, n°29, julio-agosto de 1974, p. 38.

53 *Estrategia*, n°39, marzo-abril de 1976.

54 *Ibidem*, p. 15.

55 *Estrategia*, n°39, marzo-abril de 1976.

56 *Ibidem*, p. 47.

57 *Estrategia*, n°2, julio-agosto de 1969.

de una reseña extraída de una revista francesa. La tesis del libro era ya bien conocida y había sido difundida por la academia estadounidense<sup>58</sup>. Sostenía que “en virtud de la carencia de gobierno organizado, en las sociedades de tipo arcaico, la ocasión de intervenir se presenta continuamente a sus ejércitos”, dejando a un lado su función original de defensa nacional y encargándose de “funciones de toda índole, de orden económico o político”<sup>59</sup>.

Refrendando tal perspectiva se erigió un inesperado referente: Argelia. Entendía Guglielmelli que experiencias como las de ese país o Perú resultaban instructivas para aquellas fuerzas armadas llamadas a conducir luchas revolucionarias integrales. En la excolonia gala, de hecho, “pese a las posibilidades militares francesas la solución política exigía la independencia del Estado”<sup>60</sup>. Sin viabilizar los cambios estructurales reclamados por la sociedad, las fuerzas armadas devenían “un instrumento de la opresión, una herramienta al servicio de los grupos privilegiados”<sup>61</sup>. En un artículo posterior se retornaba a Argelia como fuente de admiración en virtud de la “utilización sabia y prudente de su libertad, conquistada con el esfuerzo y patriotismo de todos sus hijos”<sup>62</sup>. Más específicamente se valoraba su diplomacia “dinámica, inteligente, imaginativa, únicamente limitada a la defensa y elevación de la soberanía nacional”<sup>63</sup>.

Sin duda, el mayor referente tercermundista encumbrado por *Estrategia* fue Vietnam. Ya en el número 6 se incluía un examen crítico del senador estadounidense J. W. Fulbright<sup>64</sup> y el artículo de Lisandro Vélez “Agravación del conflicto en el sudeste de Asia”<sup>65</sup>, que en tono moderado invitaba a aceptar la realidad histórica de los pueblos asiáticos que, habiendo luchado siglos contra la opresión colonial, tenían derecho a su autodeterminación nacional sin importar la forma política que adoptaran<sup>66</sup>.

El número ocho estaba dedicado al “Sudeste de Asia”. En la nota de presentación, firmada por la Dirección (encabezada por Guglielmelli, claro está), se emitía una suerte de declaración de principios que guiaría no solo esa entrega sino todas las que vendrían: “Vietnam ha puesto en evidencia la necesidad de

58 Edward Shils et al., *Los militares y los países en desarrollo: América Latina, Medio Oriente, Indonesia, Birmania, Tailandia, Israel, África del Sur* (Buenos Aires: Pleamar, 1967).

59 “El papel extramilitar del ejército en el tercer mundo”, *Estrategia*, n°2, julio-agosto de 1969, p. 126.

60 J. E. Guglielmelli, “Fuerzas Armadas para la Liberación Nacional”, *Estrategia*, n°23, julio-agosto de 1973, p. 24.

61 *Ibidem*, p. 24.

62 M. A. A. Pereyra, “Hidrocarburos, geopolítica y Fuerzas Armadas en la realización argelina”, *Estrategia*, n°22, mayo-junio de 1973, p. 75.

63 *Ibidem*, p. 82.

64 “Vietnam: el fondo de la cuestión”, *Estrategia*, n°6, marzo-abril de 1970.

65 *Estrategia*, n°6, marzo-abril de 1970.

66 *Ibidem*, p. 24.

diferenciar lúcidamente las guerras de liberación nacional de la subversión comunista fomentada desde Moscú o Pekín. La increíble tenacidad de los guerrilleros del Vietcong y del ejército norvietnamita...ha demostrado las ilimitadas posibilidades de un pueblo decidido a luchar por su subsistencia nacional"<sup>67</sup>. Entre los cinco textos que componían el dossier (incluyendo uno de Richard Nixon) destacaba con luces propias la transcripción del capítulo 2 de un folleto escrito por el jefe de estado mayor del Ejército Popular de Vietnam, General Văn Tiến Dũng, titulado "La inevitable derrota militar de Estados Unidos"<sup>68</sup>. Subrayaba el militar la superioridad moral de la lucha nacionalista, que resultaba clave para profetizar el final del conflicto, porque se trataba de una "guerra del pueblo... modalidad de combate fundamental para derrotar a los agresores...fuerza latente de la guerra justa de autodefensa", transformada "en poder y en supremacía militares, con vistas a vencer a los imperialistas norteamericanos no importa en qué circunstancia"<sup>69</sup>. La revista, que también daba tribuna a Nixon o a Brézhnev, se convertía en vehículo de las posiciones beligerantes de Vietnam del Norte, marcando una contundente pista acerca de dónde se ubicaban sus simpatías.

La admiración que se insinuaba hacia el país asiático se dirigía también hacia una de sus personalidades más reconocidas, Vo Nguyen Giap, a la sazón ministro de defensa. El coronel argentino en retiro, Luis César Perlinger, antiguo rival de Perón, en "Vietnam — De Clausewitz a Giap"<sup>70</sup>, exaltaba el genio militar del vietnamita, artífice de la defensa nacional contra lo que consideraba "un genocidio que en los últimos tiempos solo conoce paralelo en la persecución de los judíos en Alemania Nazi, o en el exterminio de los biafranos en Nigeria"<sup>71</sup>. Contraviniendo a Clausewitz, el mayor teórico de la guerra, "Giap triunfó en la derrota [y] pudo lograr el objetivo político sin destruir el poder militar del adversario, hasta casi sería más correcto decir que lo consiguió aún a costa de la destrucción de su propio poder militar"<sup>72</sup>. Esto porque, según Perlinger, "en las guerras de liberación puede llegarse a conquistar el objetivo político aun habiendo sido derrotado militarmente"<sup>73</sup>. Concluía que "desde Alejandro, Aníbal, Julio César, Federico o Napoleón hasta Manstein o Patton, o Mao o Giap, la victoria ha sonreído siempre al que ha lanzado todo a la lucha"<sup>74</sup>. Se aprecia que la lucha vietnamita era glorificada en *Estrategia* como una lucha

---

67 J. E. Gugliamelli, "Nuestro tema central: el sudeste de Asia", *Estrategia*, n°8, julio-agosto de 1970, p. 28.

68 *Estrategia*, n°8, julio-agosto de 1970.

69 *Ibidem*, p. 85.

70 *Estrategia*, n°17, julio-agosto de 1972.

71 *Ibidem*, p. 31.

72 *Ibidem*, p. 43.

73 *Ibidem*, p. 43.

74 *Ibidem*, p. 44.

nacionalista y antimperialista, mientras que, en las revistas militares institucionales, si bien podía llegar a valorarse tácticamente las operaciones chinas o vietnamitas, estas asomaban signadas por el comunismo, al servicio de la Unión Soviética, y como amenazas para la civilización occidental, a la cual Argentina pertenecía.

Con ello completamos el perfil que queríamos trazar de la revista *Estrategia*, poseedora de una sensibilidad (intereses, preocupaciones, entusiasmos, simpatías y antipatías) muy diferente a la exhibida por la *Revista Militar* o la *Revista de la Escuela Superior de Guerra*, y representativa de toda una corriente militar —nacionalista, revolucionaria, popular, peruanista y tercermundista— más o menos oculta o al menos mucho menos expuesta que las líneas predominantes al interior de las fuerzas armadas argentinas<sup>75</sup>. Trasuntó una profunda preocupación por las dinámicas del Tercer Mundo, interpretando que este se integraba por África, Asia y América Latina (lo que no era tan obvio como parece). Dicha preocupación se confundía con interés, simpatía y admiración, todo bajo el entendido de que el mensaje se dirigía, finalmente, a la clase política argentina en general y a la oficialidad en particular, porque lo que se esperaba era el compromiso de los institutos armados con la revolución nacional. Lejos de aspirar a modelos y doctrinas occidentales sobre los asuntos castrenses, *Estrategia* buscaba inspiración entre sus pares, ya fuese del continente, como Perú y Bolivia, ya de Asia y África, como Vietnam y Argelia, así como tomaba distancia de Brasil por considerarlo un instrumento de Estados Unidos con una misión subimperialista. No renegaban Guglielmelli y la revista de la seguridad nacional, siempre que estuviera supeditada al desarrollo integral de los pueblos y en ningún caso a los objetivos de una superpotencia.

## CONCLUSIONES

Aunque no fue una revista orgánica de las fuerzas armadas argentinas, *Estrategia* agrupó en su seno a un conjunto de militares en retiro y otros en servicio activo que publicaron con frecuencia y comunicaron con consistencia ideas que estaban dirigidas, intuimos, sobre todo a sus compañeros o excompañeros de armas. Contrario a la extendida noción de que la Guerra Fría determinó el comportamiento y el pensamiento de las fuerzas armadas latinoamericanas, los referentes que provocaron a los redactores de esta revista se ubicaban, en una importante medida, en el Tercer Mundo. Y dentro de este, fue predominante el estímulo de una liberación nacional plenamente inserta en la descolonización, como fue la de Vietnam.

---

75 Dentro de las influencias tercermundistas, una que habría calado hondo en diversos espacios militares del continente sería la del naserismo, concepto que aludía al líder egipcio Gamal Abdel Nasser. En Argentina no hemos encontrado mayores indicios de esta influencia, a excepción de lo planteado por García Lupo, quien identifica hacia 1962 un grupo de “veinticinco coroneles nasseristas” que alcanzaría un paulatino predominio que, con todo, no prosperaría. Rogelio García Lupo, *La rebelión de los Generales* (Buenos Aires: Jamcana, 1962), pp. 185-190.

## BIBLIOGRAFÍA

- ALBURQUERQUE, Germán y GUTIÉRREZ, Diego, "Tipologías, explicaciones y conceptos: Definiendo las dictaduras militares sudamericanas de la segunda mitad del siglo XX", en MONTERO, Claudia y ARAVENA, Pablo (eds.), *A 50 años, reflexiones desde la historiografía y la memoria* (Valparaíso: Inubicalistas, 2023), pp. 17-73.
- ALBURQUERQUE, Germán, "El gobierno militar de Omar Torrijos y la Doctrina de Seguridad Nacional. Panamá, 1960-1989", *Autoctonía VII* (2), 2023, pp. 1189-1221.  
<http://dx.doi.org/10.23854/autoc.v7i2.306>
- ALBURQUERQUE, Germán, "Lineamientos para estudiar las influencias externas en las fuerzas armadas latinoamericanas desde una perspectiva tercermundista. Años cincuenta a setenta", *Sur y Tiempo* 10, 2024, pp. 30-50.  
<https://doi.org/10.22370/syt.2024.10.4422>
- ALBURQUERQUE, Germán, "Militares de izquierda y Doctrina de Seguridad Nacional en Ecuador: el gobierno de Guillermo Rodríguez Lara, 1972-1976", *Historia* 396, 11(2), 2021, pp. 3-32.
- ALBURQUERQUE, Germán, "Militares de izquierda y Seguridad Nacional en Perú: las ideas de Edgardo Mercado Jarrín (1968-1975)", *Divergencia* 21, 2023, pp. 25-42.
- ALBURQUERQUE, Germán, OSSANDÓN, Francisca y QUIROGA, Daniela, "Presencia de la Doctrina de Seguridad Nacional en la revista *Memorial del Ejército de Chile*, 1960-1973", *Autoctonía. Revista de Ciencias Sociales e Historia* 5 (2), 2021, pp. 382-404.
- BALLESTER, Horacio, *Memorias de un coronel democrático. Medio siglo de historia política argentina en la óptica de un militar* (Buenos Aires: Ediciones de la Flor, 1996).
- BRANDS, Hal, *Latin America's Cold War* (Cambridge: Harvard University Press, 2010).
- CASALS, Marcelo, "Which borders have not yet been crossed? A supplement to Gilbert Joseph's historiographical balance of the Latin American Cold War", *Cold War History* 20 (3), 2020, pp. 367-372.  
<https://doi.org/10.1080/14682745.2020.1762311>
- CAVIASCA, Guillermo, *La Hipótesis Carcagno. Guerrilla y Fuerzas Armadas en la transición democrática de 1973* (Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, 2015), Tesis de doctorado [inérita].
- COMBLIN, José, "La doctrina de Seguridad Nacional", en *Dos ensayos sobre Seguridad Nacional* (Santiago de Chile: Arzobispado de Santiago, 1979), pp. 9-207.
- CUEVA, Agustín, "La cuestión del fascismo", *Revista Mexicana de Sociología* 39 (2), 1977, pp. 469-480.
- DI RENZO, Cristián A., "Geopolítica, desarrollo económico y política exterior: Juan Enrique Guglielmelli y su proyecto de nación en la Revista *Estrategia*, 1969-1983", *Folia histórica* 38, 2020, pp. 51-72. <https://doi.org/10.30972/fhn.0384463>
- DOS SANTOS, Theotônio, "Socialismo y fascismo en América Latina hoy", *Revista Mexicana de Sociología* 39 (1), 1977, pp. 173-190.
- ECHEVERRÍA, Olga, "Las Doctrinas de la Seguridad Nacional Latinoamericanas: Osiris Villegas y sus teorías en tiempos de desperonización y Guerra Fría. Argentina,

- 1956-1985", *Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe* 31 (1), 2020, pp. 39-58. <https://doi.org/10.61490/eial.v31i1.1648>
- FIELD JR., Thomas C.; KREPP, Stella; PETTINÀ, Vanni (eds.), *Latin America and the Global Cold War* (Chapel Hill: The University of North Carolina Press Books, 2020).
- FINCHELSTEIN, Federico, *La Argentina fascista: Los orígenes ideológicos de la dictadura* (Buenos Aires: Sudamericana, 2008).
- FRAGA, Rosendo, *Ejército: del escarnio al poder (1973-1976)* (Buenos Aires: Planeta, 1988).
- FRASER, Cary, "Decolonization and the Cold War", en IMMERMANN, Richard H y GOEDDE, Petra (eds.), *The Oxford Handbook of the Cold War* (Oxford: Oxford University Press, 2013), pp. 476-496.
- GARAY VERA, Cristián, "Epistemometría de las lecturas militares chilenas 1947-1997. El estado de las Ciencias Militares desde la Posguerra", *Boletín de la Academia Chilena de la Historia* 116, 2007, pp. 33-63.
- GARCÍA LUPO, Rogelio, *La rebelión de los Generales* (Buenos Aires: Jamcana, 1962).
- GARRETÓN, Manuel Antonio, "De la seguridad nacional a la nueva institucionalidad: Notas sobre la trayectoria ideológica del nuevo Estado autoritario", *Revista Mexicana de Sociología* 40 (4), 1978, pp. 1259-1282.
- GUERRERO, Carlos, "El impacto ideológico de la Escuela Francesa sobre el Ejército argentino", *Persona y Sociedad* 25 (2), 2011, pp. 55-72.
- GUGLIAMELLI, Juan Enrique, *Pensar con estrategia. Juan Enrique Gugliamelli en la Revista Estrategia*. (Buenos Aires: UNLa, 2007).
- HARMER, Tanya, *El gobierno de Allende y la Guerra Fría interamericana* (Santiago de Chile: Universidad Diego Portales, 2013).
- JOSEPH, Gilbert M., "Border crossings and the remaking of Latin American Cold War Studies", *Cold War History* 19: (1), 2019, pp. 141-170. <https://doi.org/10.1080/14682745.2019.1557824>
- LARRA, Raúl, *La batalla del General Gugliamelli* (Buenos Aires: Distal, 1995).
- LOVEMAN, Brian, *For la Patria: Politics and the Armed Forces in Latin America* (Wilmington: SR Books, 1999).
- MARCHESI, Aldo, "Escribiendo la Guerra Fría Latinoamericana: entre el Sur 'local' y el Norte 'global'", *Estudios Históricos* 30 (60), 2017, pp. 187-202. <https://doi.org/10.1590/S2178-14942017000100010>
- MAZZEI, Daniel, "Lucha facciosa, autonomía e influencias externas en las Fuerzas Armadas argentinas en la segunda mitad del siglo XX", *Páginas* 9 (19), 2017, pp. 34-52.
- MCMAHON, Robert (ed.), *The Cold War in the Third World* (Oxford: Oxford University Press, 2013).
- MÍGUEZ, María Cecilia, "¿Anticomunistas, antiestatistas, antiperonistas? La 'nacionalización' de la doctrina de seguridad nacional en la Argentina y la legitimación del golpe de Estado de 1966", *Revista SAAP. Publicación de Ciencia Política de la Sociedad Argentina de Análisis Político* 7, 2013, pp. 65-95.
- MÍGUEZ, María Cecilia, "La tercera presidencia peronista y la Guerra Fría. Argentina, Perú y Brasil en la X Conferencia de los Ejércitos Americanos de 1973", *Revista Pilquen* 20 (1), 2017, pp. 17-35.

- NUNN, Frederick, "New Thoughts on Military Intervention in Latin American Politics: The Chilean Case, 1973", *Journal of Latin American Studies* 7 (2), 1975, pp. 271-304.
- O'DONNELL, Guillermo, "Las tensiones en el Estado burocrático-autoritario y la cuestión de la democracia", en David Collier (ed.), *El nuevo autoritarismo en América Latina* (México: Fondo de Cultura Económica, 1985), pp. 289-321.
- OSUNA, María Florencia; PONTORIERO, Esteban, "El impacto de la Doctrina 'de la Seguridad Nacional' en la Argentina durante la Guerra Fría (1955-1983)", *Izquierdas* 49, 2020, pp. 352-364. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-50492020000100221>
- OSUNA VERGARA, Mercedes, "Que vienen los rusos: the Limits of Soviet Foreign Policy in Cuba, Chile and Nicaragua", *The Webster Review of International History* 3 (1), 2023, pp. 63-76.
- PARKER, Jason, "Decolonization, the Cold War, and the post-Columbian era", en MCMAHON, Robert (ed.), *The Cold War in the Third World* (Oxford: Oxford University Press, 2013), pp. 125-131.
- PETTINÀ, Vanni, *Historia mínima de la Guerra Fría en América Latina* (Ciudad de México: El Colegio de México, 2018).
- PONTORIERO, Esteban, *La represión militar en la Argentina: 1955-1976* (Buenos Aires: UNLP-UNM-UNGS, 2022).
- RAMOS RODRÍGUEZ, Froilán, *Guerra Fría Global: El pensamiento militar chileno y venezolano, 1960-1970* (Santiago de Chile: Centro de Estudios Bicentenario, 2022).
- ROSTICA, Julieta; Sala, Laura, "La guerra fría en América Latina y los estudios transnacionales. Introducción", *Secuencia* 111, 2021, pp. 1-7. <https://doi.org/10.18234/secuencia.v0i111.2029>
- ROUQUIÉ, Alain; Suffern, Stephen "Los militares en la política latinoamericana desde 1930", en Leslie Bethell (ed.), *Historia de América Latina*, vol. 12 (Barcelona: Crítica, 1997), pp. 281-341.
- ROUQUIÉ, Alain, *El Estado militar en América Latina* (Buenos Aires: Emece, 1984).
- SALA, Laura, "La Doctrina de Seguridad Nacional en América Latina: Un repaso por los estudios clásicos y sus críticos", *Revista Electrónica de Estudios Latinoamericanos* 20 (8), 2022, pp. 1-24.
- SALA, Laura, "Las ideas externas en las doctrinas militares latinoamericanas de la Guerra Fría", *Secuencia* 111, 2021, pp. 1-34. <https://doi.org/10.18234/secuencia.v0i111.1946>
- SAN FRANCISCO, Alejandro; SOTO, Ángel, *Un siglo de pensamiento militar en Chile. El Memorial del Ejército 1906-2006* (Santiago de Chile: Centro de Estudios Bicentenario, 2006).
- SCHNEIDER, Alejandro; OBERLIN MOLINA, Matías, "Introducción. Pensar la Guerra Fría en América Latina", en SCHNEIDER, Alejandro (comp.), *América Latina: bajo la sombra de la Guerra Fría* (Buenos Aires: Teseo-Clacso, 2021), pp. 9-22.
- SHILS, Edward *et al.*, *Los militares y los países en desarrollo: América Latina, Medio Oriente, Indonesia, Birmania, Tailandia, Israel, África del Sur* (Buenos Aires: Pleamar, 1967).
- SURI, Jeremy, "The Cold War, Decolonization, and Global Social Awakenings: Historical Intersections", *Cold War History* 6 (3), 2006, pp. 353-363. <https://doi.org/10.1080/14682740600795519>

TAPIA VALDÉS, Jorge, *El terrorismo de Estado: La Doctrina de la Seguridad Nacional en el Cono Sur* (México: Nueva Imagen, 1980).

VALDIVIA, Verónica, *El golpe después del golpe. Leigh vs. Pinochet. Chile 1960-1980* (Santiago de Chile: Lom, 2003).

WESTAD, Odd Arne, *The Global Cold War: Third World Interventions and the Making of Our Times* (Cambridge: Cambridge University Press, 2015).

# Diplomacia, propaganda y recepción de periodistas extranjeros. La faz productiva de la última dictadura argentina (1976-1983)

LAURA SCHENQUER 

Universidad Nacional del Litoral

## Resumen

Este artículo examina las estrategias comunicacionales desplegadas por la Dirección General de Prensa y Difusión (DGPYD) de la Cancillería argentina durante la última dictadura militar (1976-1983), en particular el programa de invitación a periodistas extranjeros. La investigación se apoya en documentación recientemente desclasificada, junto con legajos militares de los directores de la DGPYD, para analizar el modo en que se articularon propaganda, inteligencia y diplomacia en respuesta a las denuncias internacionales por violaciones a los derechos humanos. A través del estudio de trayectorias profesionales y vínculos con agencias represivas, se muestra cómo la DGPYD se constituyó en un enclave estratégico para producir y difundir una imagen positiva de la Argentina en el exterior. El artículo se detiene en el caso del periodista belga Jacques Schoonjans, cuya visita organizada por la Cancillería derivó en la publicación de notas propagandísticas presentadas como testimonios de un periodista “independiente”. El análisis permite comprender cómo estas operaciones de prensa funcionaron como parte de un dispositivo estatal destinado a gestionar la crisis de legitimidad internacional y a extender la “acción psicológica” al ámbito diplomático.

## Palabras clave:

Dictadura militar argentina; Diplomacia; Propaganda; Prensa; Derechos Humanos

## Summary

This article examines the communication strategies developed by the General Directorate of Press and Dissemination (DGPYD) of the Argentine Foreign Ministry during the last military dictatorship (1976-1983), focusing on the program that invited foreign journalists. Based on recently declassified documents and military personnel files of the DGPYD directors, the study analyzes how propaganda, intelligence, and diplomacy were intertwined to respond to international denunciations of human rights violations. By reconstructing professional trajectories and links with repressive agencies, the paper shows how the DGPYD operated as a strategic hub for shaping and projecting a positive image of Argentina abroad. The article focuses on the case of Belgian journalist Jacques Schoonjans, whose visit organized by the Foreign Ministry led to the publication of propaganda pieces presented as the testimonies of an “independent” journalist. This analysis sheds light on how press operations worked as part of a broader state apparatus aimed at managing the dictatorship’s international legitimacy crisis and extending “psychological action” into the diplomatic sphere.

## Keywords:

Argentine military dictatorship; Diplomacy; Propaganda; Press; Human Rights

## INTRODUCCIÓN<sup>1</sup>

Entre 1976 y 1983, Argentina atravesó una dictadura militar que combinó represión ilegal, reorganización institucional y un esfuerzo sistemático por controlar la información. La Junta Militar que tomó el poder en marzo de 1976 diseñó un esquema de gobierno tripartito —Ejército, Armada y Fuerza Aérea— que se repartió ministerios estratégicos. En ese reparto, la Armada, conducida por el almirante Emilio Massera, se aseguró el control del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Desde allí, se pusieron en marcha políticas de depuración del personal diplomático y de incorporación de oficiales vinculados a la represión clandestina de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los centros más emblemáticos del terrorismo de Estado.

En ese marco se creó, mediante decreto secreto, la Dirección General de Prensa y Difusión (DGPYD). Lejos de limitarse a funciones de prensa, este organismo operó como un nodo de articulación entre propaganda, inteligencia y diplomacia. Su objetivo central era contrarrestar la “campana antiargentina”, denominación con la que el régimen deslegitimaba las denuncias internacionales por violaciones a los derechos humanos. Para ello, la DGPYD recopiló información sobre lo que en el exterior se publicaba sobre Argentina y, especialmente, diseñó un plan de invitación a periodistas extranjeros cuyo fin era conquistar a la opinión pública internacional con notas favorables a la dictadura y presentadas como opiniones “independientes”.

Este artículo se centra en el análisis de esa estructura, a partir de documentación recientemente desclasificada y de los legajos militares de quienes dirigieron la DGPYD. Interesa, en particular, examinar cómo se construyó burocráticamente el programa de recepción de periodistas y cómo se articularon en él actores militares, diplomáticos y civiles. El caso del periodista belga Jacques Schoonjans, invitado en 1977, permite observar en detalle la dinámica de estas operaciones y su inscripción en un circuito más amplio que unió a la Cancillería, la ESMA y el Centro Piloto de París. La indagación abre así varias preguntas: ¿qué es posible interpretar de los documentos administrativos y los legajos militares sobre la relación entre comunicación, diplomacia y represión en la Argentina de esos años? Y, finalmente, ¿qué revela el estudio de la DGPYD sobre su maquinaria propagandística?

---

1 Una versión anterior de este trabajo fue publicada en el libro de E. Margiolakis *et al.* (comps.) *Comunicación y cultura en dictadura y transición. Prácticas y conceptualizaciones* (Edit. Tren en Movimiento, 2025).

## DEL DEPARTAMENTO DE PRENSA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRENSA Y DIFUSIÓN

En junio de 1977, el entonces presidente de facto Jorge Rafael Videla firmó el Decreto “S” N° 1871, mediante el cual se creó en el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), la Dirección General de Prensa y Difusión (DGP y D). En apariencia, la medida podía considerarse secundaria ya que, dentro de una estructura ministerial de gran envergadura, implicaba apenas la reorganización de un área específica dedicada a la prensa. Sin embargo, en retrospectiva, marcó el inicio de una nueva orientación en la política comunicacional externa ideada desde este sector del régimen. La sustitución del antiguo Departamento de Prensa por la DGP y D supuso una jerarquización del área: pasó a depender directamente del canciller y, a su vez, se la dotó de una sección instalada en el exterior, el Centro Piloto de París. La misión asignada era contrarrestar la “campana antiargentina” a partir de la organización de un “sistema de difusión destinado a restituir y mantener una imagen real y positiva de nuestro país en el exterior” considerado por la Junta Militar un imperativo gubernamental de carácter inmediato<sup>2</sup>. Estas tareas marcaron la fusión de prensa con propaganda e inteligencia<sup>3</sup>.

Es necesario comprender la centralidad del establecimiento de la DGP y D situándola en el contexto político e histórico de consolidación del régimen cívico-militar argentino (1976-1983), autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”. Tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas instauraron una dictadura que contó con amplios apoyos civiles y que se caracterizó por crear un nuevo orden “legal” por encima de la Constitución Nacional. La Junta Militar, integrada por los tres comandantes en jefe del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, se constituyó en el máximo órgano gubernamental y se erigió como poder constituyente capaz de instaurar un orden jurídico fundacional<sup>4</sup>. El esquema institucional se organizó sobre la base de un “reparto tripartito del poder”: cada área del Estado fue distribuida entre las ramas de las Fuerzas Armadas,

---

2 Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 1871, firmado en junio y publicado un mes más tarde (20 de julio de 1977). *Archivos en Uso*.

3 Para un análisis detallado de lo que la dictadura denunciaba como “campana antiargentina”, así como también la creación de la DGP y D y el Centro Piloto encargados de planificar operaciones de infiltración, persecución de exiliados y de trasladar detenidas en la ESMA a la Cancillería en Buenos Aires y al Centro Piloto en París, véase: Moira Cristiá y Laura Schenquer, “La ‘acción psicológica’ en el ámbito internacional. Los planes de comunicación de la dictadura argentina en el extranjero (1976-1978)”, en Laura Schenquer (comp.), *Terror y Consenso. Políticas culturales y comunicacionales de la última dictadura* (La Plata: Edulp, 2022), pp. 80-107; y Facundo Fernández Barrio y Rodrigo González Tizón, “De la ESMA a Francia: hacia una reconstrucción histórica del Centro Piloto de París”, *Folia Histórica del Nordeste* 38, 2020, 99-134.

4 De acuerdo con Victoria Crespo, se trató de una “ficción legal real”. Es decir, aunque se instauró “un orden jurídico ficticio, una legalidad farsante (y trágica), no por ello dejó de ser real”. Victoria Crespo, “Legalidad y Dictadura” en Clara E. Lida *et al.* (comps.), *Argentina, 1976. Estudios en torno al golpe de Estado* (Buenos Aires: El Colegio de México/Fondo de Cultura Económica, 2008), pp. 165-186.

aunque con una clara preponderancia del Ejército. A nivel ministerial, este principio se materializó en la asignación de dos carteras para cada fuerza, mientras que otras dos quedaron bajo la dirección de civiles (los Ministerios de Economía y Educación)<sup>5</sup>. A la Armada le correspondió, entre otros destinos, la conducción del MRE (1976-1978) y del Ministerio de Bienestar Social (1976-1982)<sup>6</sup>. Este diseño institucional tenía como propósito que las tres armas compartieran las responsabilidades de gobierno. Sin embargo, pronto quedó en evidencia que el esquema generaba tensiones y enfrentamientos. Estos conflictos no respondían únicamente a divergencias coyunturales, sino a tensiones ideológicas estructurales y a proyectos de liderazgos enfrentados, lo que obstaculizaba la articulación entre las fuerzas y la conducción del Estado.

Una de las primeras medidas implementadas por la Armada en Cancillería fue una depuración profunda del personal diplomático. Mediante la creación de una “Comisión de Estudios de Antecedentes”, bajo las órdenes del almirante Emilio Massera, comandante de la Armada y miembro de la Junta Militar, se dispusieron cesantías y reincorporaciones selectivas de funcionarios afines a los nuevos lineamientos. Este proceso, que alteró la composición del servicio exterior, implicó el ingreso de oficiales de la Armada designados por la cercanía con el almirante, como el vicealmirante Oscar Montes designado canciller entre mayo de 1977 y octubre de 1978. La infiltración de marinos provenientes de grupos de inteligencia y operativos clandestinos de represión, particularmente aquellos nucleados en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los mayores centros clandestinos de detención y tortura en el país que funcionó en aquellos años, estableció un vínculo directo entre Cancillería y este circuito represivo<sup>7</sup>.

---

5 Véase: Gabriela Águila, *Historia de la última dictadura militar. Argentina, 1976-1983* (Buenos Aires: Siglo XXI, 2023), pp. 127-129; Paula Canelo, *El proceso en su laberinto. La interna militar de Videla a Bignone* (Buenos Aires: Prometeo, 2008), p. 79.

6 Sobre la conducción de la Armada en el MRE ver: Rodrigo Lloret, *Política internacional y derechos humanos: El frente externo de la última dictadura y el rol de la diplomacia argentina ante las denuncias que se realizaban en el exterior contra la Junta Militar (1976-1983)* (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 2019), Tesis de doctorado, pp. 18-20; y ver para el caso de Bienestar Social: Florencia Osuna, “El Ministerio de Bienestar Social entre el onganato y la última dictadura (1966-1983). Análisis de la estrategia de intervención social del Estado en la historia argentina reciente”, *Estudios Sociales del Estado* 3 (6), 2017, pp. 41-65.

7 Los represores de la Armada, imputados por delitos de lesa humanidad, que en esos años ocuparon cargos en Cancillería, y varios de ellos en la DGP y D, fueron: el vicealmirante Oscar Montes fue en el año 2011 condenado a prisión perpetua (causa 1270, ESMA II); el capitán de navío Roberto Pérez Froio, cumplió prisión preventiva hasta el 2013 (año en que murió antes de contar con una sentencia firme); Eugenio B. Vilardo, Hugo Damario y Juan Carlos Rolón fueron condenados a prisión perpetua en 2017 (causa ESMA Unificada). Además, Francis Whamond y Jorge Perrén fueron detenidos en 2001, pero murieron sin haber sido juzgados (el primero a fines de 2002 y el segundo de 2007); y tanto Gualter Allara como Alejandro Spinelli aparecen identificados en el expediente de la causa 14.217/03 (causa ESMA) pero no llegaron a ser juzgados. Sobre la relación ente la ESMA y Cancillería ver: C. Feld, “El lugar sin límites: el centro clandestino fuera de la ESMA”, en M. Franco y Claudia Feld (dirs.), *ESMA. Represión y poder en el centro clandestino de detención más emblemático de la última dictadura argentina* (Buenos Aires: FCE, 2022), pp.143-166; y Facundo Fernández Barrio y Rodrigo González Tizón, *op. cit.*, 2020, pp. 99-134.

Como se demostró posteriormente, su presencia formaba parte de un plan que utilizó las relaciones internacionales para extender la lucha “antisubversiva” al exterior, siendo la DGPyD y su Centro Piloto de París instrumentos clave para tareas de inteligencia y seguimiento de personas consideradas terroristas<sup>8</sup>.

Tanto para este sector a cargo de la política exterior como para el resto del gobierno de la última dictadura, mantener una imagen positiva en el exterior era una prioridad estratégica. Inicialmente, durante los primeros meses del régimen, esta preocupación respondía a una lógica preventiva: se buscaba evitar posibles condenas internacionales. Desde la presidencia de la nación, a cargo del teniente general Jorge R. Videla, se ideó un plan económico de corte liberal (basado en la apertura económica y en una profunda reestructuración laboral) cuyo objetivo central era garantizar la atracción de inversiones extranjeras y evitar el aislamiento financiero. Un factor clave en ese cálculo era el antecedente de Chile, que, desde el golpe de Estado de 1973, recibía crecientes condenas internacionales por violaciones a los derechos humanos. La amenaza de que la Argentina fuera objeto de señalamientos semejantes se volvió inminente con la llegada de Jimmy Carter a la presidencia de Estados Unidos en 1977, cuya política exterior incorporó el respeto a los derechos humanos como criterio para la concesión de créditos internacionales<sup>9</sup>.

Fue en un contexto de prevención, aún exento de condenas concretas, que la dictadura contrató en 1976 a la agencia de relaciones públicas Burson-Marsteller, la cual elaboró un “Programa de comunicaciones internacionales para la Argentina”. Posteriormente, en junio de 1977, en un escenario internacional nuevo donde el riesgo de condenas comenzaba a materializarse en foros como el Parlamento Europeo y el Congreso de Estados Unidos, se creó en Cancillería la DGPyD. Su misión era “coordinar” acciones que mejoraran la imagen del país en el extranjero. Para entonces, si bien aún no existían condenas firmes o masivas, el escenario internacional había comenzado a cambiar, forzando al régimen a abandonar la mera prevención y pasar a una fase de gestión activa de una crisis de imagen en ciernes<sup>10</sup>.

---

8 Véase: Laura Sala, “‘La lucha contrasubversiva’ en la política de difusión al exterior de la dictadura argentina, 1979-1981”, *Confluenze: Rivista di Studi Iberoamericani* 16 (1), 2024 pp. 433-459; Moira Cristiá y Laura Schenquer, *op. cit.*, 2022, pp. 8-15.

9 Sobre la política exterior de Estados Unidos y la cuestión de los derechos humanos como cláusula de limitación al otorgamiento de créditos para países como Argentina, ver: María T. Piñero, *Las denuncias internacionales como estrategia de lucha ante el terrorismo de Estado* (Universidad Nacional de Lanús, 2023), Tesis de doctorado; y Alejandro Avenburg, “Una dictadura fragmentada: conflictos intra-militares y las relaciones entre la Argentina y los Estados Unidos durante la presidencia de Videla”, *POSTData* 20 (2), 2016, pp. 441-472.

10 Vid. Laura Schenquer, “Entre memos, telegramas y notas diplomáticas: Cancillería y su circuito informativo en respuesta a las denuncias externas por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura argentina”, *Revista Sudamérica* 21, 2024, pp. 24-52.

## SABERES DE ESTADO: COMUNICACIÓN, INTELIGENCIA Y REPRESIÓN

La creación de la DGPyD en junio de 1977 no puede entenderse únicamente como una respuesta a la presión internacional. Su arquitectura y funcionamiento estuvieron profundamente moldeados por dos lógicas concurrentes: la doctrina castrense de “acción psicológica” y la creciente incorporación de técnicas modernas de comunicación estatal y medición de la opinión pública. Analizar estos procesos convergentes es esencial para comprender la naturaleza de estas agencias y a los actores que la dirigieron.

De acuerdo con Julia Risler, la denominada estrategia de “acción psicológica”, indisolublemente ligada a la Doctrina de Seguridad Nacional, fue aprendida por las Fuerzas Armadas como parte de su formación en materia de seguridad contrainsurgente en el contexto de la Guerra Fría<sup>11</sup>. Esta estrategia, ampliamente utilizada durante la última dictadura, además de ser un instrumento de legitimación de la “lucha antisubversiva”, sirvió para planificar la gestión del control de la vida cotidiana de la población. A través de continuas mediciones, por medio de técnicas como el análisis de medios de comunicación y la realización de encuestas y sondeos de opinión, se buscaba medir y recolectar información sobre el “ánimo” o la “moral” pública y, en consecuencia, elaborar campañas de inteligencia, propaganda y comunicación para fomentar la adhesión social a las decisiones y acciones de gobierno adoptadas, tal como fue realizado ante la posible guerra con Chile por el territorio del Beagle<sup>12</sup>.

Paralelamente, y más allá del ámbito castrense, los saberes de Estado a nivel de las indagaciones en materia de gobernanza y administración de políticas públicas se estaban transformando. En las décadas de 1960 y 1970, y bajo la influencia de indagaciones académicas en el área de Ciencia Política en Estados Unidos, se expandieron los enfoques conductistas que privilegiaban las investigaciones empíricas y cuantitativas. El “survey research” desarrollado por Paul F. Lazarsfeld (1901-1976), en particular, ejerció una influencia profunda en quienes estaban a cargo de gobernar y más allá del ámbito académico. La aparente “objetividad” y “apoliticidad” que este enfoque confería —al basarse en datos cuantitativos de sondeos y encuestas de opinión y de análisis de contenidos de medios—, lo convirtió en una herramienta demandada, según Michael Pollak, primero por

---

11 Julia Risler, *La acción psicológica. Dictadura, inteligencia y gobierno de las emociones 1955-1981* (Buenos Aires: Tinta Limón, 2018), pp. 12-32.

12 Véase: Julia Risler y Laura Schenquer, “Guerra, diplomacia y producción de consenso: el plan de acción psicológica del Ejército argentino en el marco del conflicto con Chile por el Canal de Beagle (1981-1982)”, *Revista Universitaria de Historia Militar* 8, 2019. En las décadas de 1960 y 1970 la Investigación Operativa (IO) alcanzó un notable desarrollo en el ámbito de las Fuerzas Armadas Argentinas. Un ejemplo de ello fue la creación de la Escuela Superior de Investigación Operativa (ESIO) dependiente del Ministerio de Defensa y dirigida por el capitán de navío Nicolini (Héctor Monteverde, “60 years of SADIO”, *Sadio EJS* 20 (2), 2021 pp. 2-22; y comunicación personal con Héctor Monteverde docente de dicha escuela, 30 de septiembre de 2025).

los centros de estudios de mercado y luego, fue adaptada para la formulación de estrategias políticas<sup>13</sup>. Este tipo de estudios permitió a los gobiernos acumular datos sobre la opinión de la gente, un recurso fundamental para el ejercicio del poder y la dominación.

Resulta particularmente relevante que este interés por medir la opinión pública existiera durante la última dictadura<sup>14</sup>. ¿Por qué un gobierno autoritario, cuyas decisiones se imponían por la fuerza, invertía recursos en escudriñar la opinión de la población? La respuesta reside en las lógicas antes descriptas que permitieron reconocer las racionalidades con las que el poder dictatorial destinó recursos, empleó agencias estatales —como la Secretaría de Informaciones Públicas (SIP) y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE)—, e incluso consultoras privadas como Burson-Marsteller, para ajustar los mensajes y las acciones de propaganda destinadas al gobierno de la población en un contexto profundamente represivo y autoritario.

Asimismo, al analizar la formación y la trayectoria de los directores de la DGPyD es posible reconocer que sus saberes se imbricaban con las estrategias de “acción psicológica” y de gobernanza en boga en 1970. Sus perfiles llevan a reconocer que sus designaciones pueden atribuirse tanto a la cercanía con autoridades clave como a la formación y *expertise* relativa a su designación en cargos previos, dentro de las Fuerzas Armadas, en que las tareas asignadas se asemejaban a las desarrolladas posteriormente en la DGPyD. Entre 1977 y 1981, la dirección de la DGPyD estuvo en manos de un oficial de la Armada y, posteriormente, de la Fuerza Aérea. El capitán de fragata Roberto Pérez Froio fue el primer director, ejerciendo el cargo desde septiembre de 1977 hasta diciembre de 1978. Su gestión coincidió con el control de la Cancillería por parte de la Armada. Un cambio político-militar significativo se produjo en noviembre de 1978, cuando la Fuerza Aérea asumió el control del ministerio con el nombramiento del comodoro Carlos Washington Pastor como canciller<sup>15</sup>. Bajo la gestión de Pastor, la dirección de la DGPyD pasó a oficiales de su fuerza, la Aeronáutica: primero, del comodoro (RE)

---

13 Michael Pollak, “Paul. F. Lazarsfeld, fundador de una multinacional científica”, *Materiales de Sociología Crítica* (Madrid: Las Ediciones de La Piqueta, 1986), p. 46.

14 Para un análisis de los usos de sondeos y encuestas de opinión por parte de las dictaduras en Argentina, véase: Laura Schenquer y Julia Risler, “Opinion polls and surveys in the BANADE archives: a productive use of governmental technologies by the last military dictatorship in Argentina (1976-1983)”, *Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies* 44 (2), 2019, pp. 225-242; Daniel Lvovich, “¿Cerca de la revolución? Datos cuantitativos e interpretaciones de las encuestas sobre las distintas modalidades de apoyo a la violencia revolucionaria en Argentina, 1970-1973”, *Izquierdas* 49, 2019, pp. 952-967; y Emilio Crenzel, “Una encuesta de opinión pública en Tucumán bajo la dictadura. Una aproximación indicial”, *Telar* 7-8, 2010, pp. 92-109.

15 No se trató únicamente de un traspaso del control del Ministerio entre sectores de las Fuerzas Armadas. La salida del almirante Massera del gobierno —para iniciar el desarrollo de un “proyecto político” propio— implicó, a su vez, que el presidente Videla extendiera su influencia sobre áreas que hasta entonces no le respondían. En ese marco, designó como canciller a Pastor, quien además de ser su conuñado, se alineaba con su estrategia de poder. María Seoane y Vicente Muleiro, *El dictador. La historia secreta y pública de Jorge Rafael Videla* (Buenos Aires: Sudamericana, 2001), p. 147.

Luis Antonio Nicotra (diciembre de 1978 a junio de 1979) y luego, del comodoro Julio César Boitier (junio de 1979 a marzo de 1981)<sup>16</sup>.

Los legajos de estos tres directores constituyen una fuente importante de información para esta investigación<sup>17</sup>. Como Germán Soprano señaló, se trata de “instrumentos administrativos castrenses” que aportan detalles clave para el estudio de trayectorias de militares y procesos institucionales<sup>18</sup>. Se encuentran estructurados a partir de una “foja de servicios”, que registra datos objetivos como cargos, ascensos, licencias, etc., y una “foja de concepto”, en la cual los superiores consignan valoraciones cualitativas. Esas últimas resultan especialmente significativas para comprender las condiciones de producción y reproducción de la institución castrense: identificar lo normado y lo sancionado en el registro continuo y rutinario de la actividad, así como destacar singularidades relevantes para entender el rol desempeñado por los directores de la DGP y D<sup>19</sup>.

Por su carácter de instrumentos de registro administrativo castrense, no sorprende que la información sobre el paso de estos oficiales por Cancillería resulte limitada, al corresponder a un destino externo a la institución militar, aunque desarrollado en el marco de la dictadura, cuando dicho ministerio se encontraba bajo el control de las Fuerzas Armadas. Las menciones breves que aparecen en los legajos —como las del capitán Pérez Froio: “marzo 76 - noviembre 78. DIAP [Dirección de Personal de la Armada]. BNR 93/76. Director General Prensa y Difusión. Min. Rel. Ext y Culto” (p. 96)— contrastan con los datos más precisos que pueden obtenerse en otras fuentes, como la documentación que fue desclasificada de la propia Cancillería<sup>20</sup> y los testimonios judiciales de sobrevivientes del centro clandestino de la ESMA que declararon en el marco de la Megacausa ESMA<sup>21</sup>.

16 Tras la gestión del canciller Pastor, la DGP y D quedó bajo la conducción de civiles. Por ello, esta indagación se centra únicamente en los tres directores militares mencionados.

17 El acceso a los legajos de estos tres oficiales de las Fuerzas Armadas fue posible mediante un pedido de Acceso a la Información Pública, que fue respondido por el Ministerio de Defensa de la Nación en junio de 2023. La documentación se encuentra alojada en los archivos de las FFAA; el acceso fue otorgado mediante una entrega de una copia digital, que se conserva. Cabe señalar que esta entrega de documentación histórica en poder del Estado se vio restringida a partir de la aprobación del Decreto N° 780/24, que impuso límites y cercenó los derechos de acceso a la información previamente adquiridos por la ciudadanía.

18 Germán Soprano, “El Legajo Personal y el estudio de los procesos de modernización, burocratización y profesionalización en el Ejército Argentino a principios del siglo XX”, *Revista Electrónica de Fuentes y Archivos (REFA)* 2 (13), 2022, pp. 51-76.

19 De suma utilidad para realizar este análisis fue el trabajo de: Laura Lettieri y Vanina Agostini, “La ESMA. Una mirada desde los documentos del Archivo General de la Armada”, *Hilos Documentales* 1 (1), 2018.

20 Ver la documentación relevada por la “Comisión de Relevamiento para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Cancillería” en el Archivo Histórico de Cancillería [<https://desclasificacion.cancilleria.gob.ar/documentacion>].

21 Estos testimonios permitieron identificar a oficiales de la Armada del circuito de represivo de la ESMA que eran funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, entre ellos, el capitán Pérez Froio (María T. Piñero, “Memoria Histórica en Cancillería. Relevamiento e investigación”, Ponencia en el Seminario Internacional Políticas de la Memoria, Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Buenos Aires, 2019).

En cambio, los legajos aportan información sustantiva sobre quiénes fueron los tres directores: las instituciones en las que se formaron; la experiencia profesional acumulada en cargos previos a su paso por Cancillería; y los reconocimientos de sus superiores que permiten reflexionar sobre los criterios de selección y desempeño en la DGP y D.

## EL PERFIL DE LOS DIRECTORES DE LA DGP Y D

Los legajos del capitán Pérez Froio (1932-2013) y de los comodores Nicotra (1925-1980) y Boitier (1929-2022) contienen una gran variedad de información. El análisis se centrará en aquellos aspectos formativos y profesionales más directamente vinculados con las funciones que luego desempeñaron en la DGP y D —sin desestimar que en sus designaciones hayan podido influenciar, también, las afinidades con redes y autoridades con capacidad electiva para ocupar los mismos—. En ese marco, resulta pertinente destacar la trayectoria de Pérez Froio, quien provenía de Tucumán (una provincia del norte argentino) y tuvo su primer contacto con la Armada al trasladarse a los 17 años para ingresar a la Escuela Naval Militar (Río Santiago, Buenos Aires), formando parte de la Promoción N° 81 (1949-1954). Luego, ya como teniente de Fragata de la Infantería Marina (TFIM), se especializó en comunicación y diplomacia. Fue nombrado Agregado Naval de la Embajada Argentina en Estados Unidos y Canadá, mientras que recibió entrenamiento de los Marines de Estados Unidos<sup>22</sup>.

Por su parte, el comodoro Nicotra (1925-1980) nació en Buenos Aires, e ingresó a la Escuela de Aviación Militar (1945-1950) ubicada en Córdoba, una de las principales ciudades del centro del país. Tras egresar siguió la carrera militar especializándose en investigación cuantitativa<sup>23</sup>, que lo llevó a dirigir en la Aeronáutica y en el Estado Mayor Conjunto, primero, áreas vinculadas a la administración financiera y gestión del personal<sup>24</sup> y luego, de prensa y de comunicación que dependían de la JII (Jefatura II de Inteligencia)<sup>25</sup>. En el desarrollo

---

22 Cursó “comunicación” (años 1960 y 1961) (p. 94); “diplomacia” en la Universidad del Salvador becado por la Armada (1965 y 1966) (p. 5); y fue nombrado Agregado Naval de la Embajada argentina de Estados Unidos y Canadá (1975) mientras que realizaba el curso de “guerra anfibia” en la Escuela de Infantería de Marines (1974 y 1975) (p. 6).

23 Como lo muestra su legajo, que, entre otros, se nombra su paso por el “Curso Especial de Métodos Estadísticos” organizado por la Dirección General de Estadística de la Aeronáutica (p. 96).

24 Se destaca que: en 1956 en el Cdo. Aéreo I fue jefe Div. Finanzas (p. 81); entre 1961 y 1965 en el IV Brigada Aérea (El Plumerillo, Mendoza): jefe Dpto Economía (pp. 82-125); entre 1966 y 1968 en el Cdo. de Personal en el Estado Mayor Conjunto (EMC) cargo: jefe de Div. de Procesamiento de Datos; entre 1968 y 1970 en el ECEM (Escuela de Comando y Estado Mayor de la Aeronáutica) Casino de Oficiales fue jefe de área, asesor y jefe de Depto de Evaluación de Personal (pp. 139-153).

25 En 1957 tuvo a su cargo la División de Información, Relac. Públ. y Difusión (p. 81); en 1976 lo designaron jefe de Prensa del Dpto. de Relaciones de la Aeronáutica y en 1977 fue asesor de la Div. Prensa en Jefatura II del Estado Mayor General (pp. 139 y 228-230).

de estas tareas, se lo registró como especialista en la confección de encuestas y acciones de difusión orientadas a mejorar la imagen de las Fuerzas Armadas<sup>26</sup>.

Finalmente, el comodoro Boitier (1929-2022), nacido en Villa María, provincia de Córdoba, ingresó tres años después que Nicotra a la Escuela de Aviación (1948-1950), y con posterioridad, ya siendo vicecomodoro realizó fuera del ámbito castrense cursos de especialización en “relaciones públicas”<sup>27</sup>. Con anterioridad a su nombramiento en 1979 al frente de la DGPYD fue primero jefe de inteligencia de un destacamento (1963-1967)<sup>28</sup> y luego, en evidente continuidad con dicho rol, asumió como jefe de prensa del Estado Mayor General de la Aeronáutica (1968-1973)<sup>29</sup>. Al igual que Nicotra, fue calificado por sus superiores como un profundo conocedor de la utilización de los medios de comunicación, atribuyéndosele haber logrado instalar una opinión favorable de la Aeronáutica en la sociedad<sup>30</sup>.

En conjunto, las trayectorias de los tres directores permiten identificar elementos comunes que delinear un perfil de militares profesionales orientados al manejo de la información y al vínculo con los medios de comunicación. Sus especializaciones —ya sea en el terreno de la diplomacia, la investigación cuantitativa (potencialmente de utilidad para el análisis de opinión pública y la realización de operaciones de “acción psicológica”) o las relaciones públicas—, pueden comprenderse como competencias clave para las funciones propias de un departamento de prensa en un Ministerio de Relaciones Exteriores: difusión institucional, planeamiento de campañas y diseño de mensajes para medios locales e internacionales. Sin embargo, lo que resulta particularmente significativo es el nexo de los tres con el circuito de inteligencia: implícito en el legajo de Pérez Froio<sup>31</sup> y explícito en los de Nicotra y Boitier, quienes desempeñaron funciones

---

26 Por ejemplo, sus superiores evaluaron positivamente su labor “guiando a los profesores sobre la mejor forma de confeccionar los cuestionarios de preguntas” (p. 150) y que “posee excelentes condiciones para mantener relaciones en el ámbito de las comunicaciones y difusión. Su preocupación ha sido constante para incrementar favorablemente la imagen de la fuerza en el medio civil y oficial” (p. 209).

27 Se registró su participación en el “Curso de Relaciones Públicas” dictado en 1971 en el Instituto para el Desarrollo de Ejecutivos (IDEA) por un tal Roberto Taylor (p. 139). Pese a las indagaciones realizadas, no fue posible establecer con certeza de quién se trataba. Cabe la hipótesis de que fuera el estadounidense Robert Taylor, pionero en el desarrollo de la Ciencia de la Información (Radamés Linares Columbié, “Epistemología y ciencia de la información: repensando un diálogo inconcluso”, *Acimed* 21 (2), 2010, pp. 140-160).

28 Desde 1963 hasta 1967 fue jefe de la Sección Inteligencia del Destacam. Aéreo Militar de Mar del Plata (pp. 83-116) y como parte de las tareas desarrolladas llegó a ser presidente del Casino de Oficiales en ese mismo período (pp. 91, 94 y 97).

29 Entre 1968 y 1973 asumió como jefe de la División de Prensa del Dpto. de Relaciones Públicas del Estado Mayor General de la Aeronáutica (pp. 124 y 129-146).

30 “Conoce profundamente el uso planificado de los medios de comunicación masiva. Ha logrado el objetivo de caracterizar a Fuerza Aérea ante la opinión pública como un factor importante de la vida de la comunidad” (p. 137) “profundo conocimiento sobre medios de comunicación y su influencia en el campo social argentino” (p. 135); “desempeño muy bueno a pesar de los inconvenientes que presupone ejercer la jefatura de Prensa, en la que debe extremar su habilidad para satisfacer las exigencias del cargo (p. 146).

31 Aunque ampliamente documentado su vínculo con inteligencia como parte del grupo de tareas de la ESMA. Véase: Facundo Fernández Barrio, “Formas excepcionales de la violencia en el cautiverio

específicas en secciones y departamentos de inteligencia de las Fuerzas Armadas, tal como fue destacado, antes de asumir como directores de prensa en Cancillería. De allí se desprende que la DGPyD no fue simplemente una oficina dedicada a la redacción de boletines de prensa, sino que desde su origen se concibió como un enclave estratégico destinado a operar sobre la imagen del país en el exterior. En ese marco, se entiende también la presencia en esta dirección de otros oficiales de inteligencia vinculados a la ESMA<sup>32</sup> y la realización de operaciones como la que se desarrollará a continuación.

## **EL PROGRAMA DE INVITACIÓN A PERIODISTAS EXTRANJEROS DE LA DGPyD**

En marzo de 2022, el periodista Enrique Vázquez, junto con un equipo de Télam Digital, publicó la investigación “Archivos secretos: la mentira planificada” en formato de notas y podcast<sup>33</sup>. El trabajo se basó en documentación inédita de la Cancillería argentina, en particular de la DGPyD. Según explicó Vázquez en la presentación, el material al que accedieron consistía en “ocho carpetas de aspecto exterior rutinario, de oficina”, que en realidad contenían información sensible sobre la complicidad de la prensa internacional. Allí se registraba cómo distintos periodistas de medios extranjeros eran invitados a la Argentina por la dictadura y, posteriormente, devolvían la atención con notas favorables en sus respectivos periódicos y revistas, publicadas en distintos idiomas<sup>34</sup>.

Vázquez señaló que, en 1977, cuando la Cancillería estaba bajo control de la Armada y, por lo tanto, del almirante Emilio Massera, se puso en marcha una campaña publicitaria, un plan de propaganda y contrainformación. Para llevarlo adelante se creó la DGPyD dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el objetivo de neutralizar los cuestionamientos internacionales que denunciaban de manera creciente la sistemática violación de los derechos humanos en la Argentina. Esta estrategia se inscribía en el intento de la dictadura por contrarrestar, en el plano internacional, lo que la Junta Militar definía como una “campaña antiargentina”.

Mientras Vázquez y su equipo se concentraron en el contenido de las notas publicadas, en la estrategia comunicacional desplegada y en la identificación de los periodistas que participaron de la operación, este trabajo se propone continuar

---

clandestino: el trabajo forzado de prisioneras de la ESMA en la Cancillería argentina”, *Revista Conflicto Social* 13 (24), 2020, pp. 298-324; M. T. Piñero, “Memoria Histórica en Cancillería”; Facundo Fernández Barrio y Rodrigo González Tizón, *op. cit.*, 2020, 99-134.

32 Véase nota al pie número 6.

33 [Enlace].

34 [Enlace].

la indagación de la DGPyD, atendiendo al circuito de intercambio entre dicha dirección en Buenos Aires y las representaciones diplomáticas en el exterior, así como al modo en que se efectivizaba la selección de periodistas invitados. El objetivo es analizar las burocracias involucradas en el programa, es decir, a los funcionarios y diplomáticos que lo hicieron posible y a los procedimientos mediante los cuales se determinaba no solo quiénes serían los seleccionados, sino también cómo llegaban a serlo en el marco de una maquinaria productiva de discursos y acciones<sup>35</sup>.

En ese sentido, cabe señalar la plena sintonía de este programa de invitación de periodistas extranjeros, con el primer documento redactado por el director de la DGPyD, el capitán Pérez Froio, quien en agosto de 1977 indicó a partir de la “Directiva N.º 1 de Difusión al Exterior” la misión de esta dirección:

Teniendo en cuenta las experiencias negativas en algunos países resultantes de las acciones de agencias extranjeras contratadas, las visitas de grupos de periodistas extranjeros programados y la imposibilidad de penetración directa en los medios de comunicación masiva en el exterior, particularmente EE.UU. y Europa, las misiones diplomáticas destinadas en el exterior deberán ejecutar las acciones de acuerdo a los siguientes lineamientos:

Obtener la mayor cantidad de contactos con argentinos o personas ubicadas en los medios de comunicación masiva, grandes empresas, medios políticos, religiosos, culturales, científicos y otros, para lograr su participación en las tareas relacionadas con la misión impuesta<sup>36</sup>.

Es posible interpretar que, en este documento, redactado poco tiempo después de la creación de la DGPyD, residía la razón de ser del programa de invitación a periodistas extranjeros. Ante las dificultades para proyectar una imagen favorable de la Argentina en el exterior, la DGPyD instruía a las embajadas para que activaran sus redes de contacto, en particular con representantes de medios de comunicación en los países donde se encontraban estas delegaciones oficiales.

El circuito se iniciaba con los embajadores, quienes cumplían el cometido asignado por la Directiva N.º 1. Los representantes de las misiones diplomáticas se dirigían a la DGPyD enviando nombres y referencias de corresponsales, así como información sobre los medios en los que trabajaban. En sus informes quedaba en evidencia que la selección respondía a distintos criterios. Por un lado, los diplomáticos proponían perfiles de periodistas que consideraban adecuados para la misión propagandística encomendada, destacando especialmente a quienes ya habían expresado públicamente posturas favorables hacia la dictadura argentina

---

35 Agradezco especialmente a Stella Segado, quien me puso en contacto con Gustavo Cirelli (Télam), quien me permitió acceder y fotografiar las ocho carpetas de la DGPyD.

36 “Directiva N.º 1 de Difusión al Exterior”, 15 de agosto de 1977, *Itálica agregada*. Para un análisis de esta directiva véase: Moira Cristiá y Laura Schenquer, *op. cit.*, 2022, pp. 80-107.

o hacia otros regímenes de la región<sup>37</sup>. Por otro lado, también se registraron casos de iniciativas individuales: periodistas que viajaban a la Argentina por diversos compromisos —conferencias, presentaciones de libros, etc.— y solicitaban apoyo a las embajadas<sup>38</sup>. Finalmente, algunos fueron seleccionados por la importancia de los medios de comunicación en los que trabajaban: no solo se ponderaba el alcance o tiraje de estos medios, sino también la capacidad de conquistar lectores con intereses diversos, incluyendo el turismo, la gastronomía y el deporte, para difundir notas que favorecieran a la dictadura argentina<sup>39</sup>.

Tras esta primera selección realizada por las embajadas, la DGPYD asumía la decisión final. En última instancia, era la encargada de evaluar a quiénes elegir para participar del programa de propaganda, además de asignar fondos de la Cancillería para cubrir viajes y estadías de las y los periodistas invitados. El propósito era que las y los periodistas pudieran observar, *in situ*, los supuestos “logros” del régimen y establecer contacto con funcionarios y ciudadanos. La DGPYD también tenía bajo su control la etapa posterior: asegurar que, una vez de regreso en sus países de origen, las y los invitados publicaran artículos favorables sobre la Argentina. Todas las notas publicadas como resultado de estas visitas omitieron su carácter oficial: no mencionaban el plan ni a la DGPYD, sino que se presentaban como viajes individuales realizados por iniciativa propia de los periodistas.

Para examinar a los miembros de la DGPYD que hicieron posible el programa y los procedimientos implementados tras la selección, se analizará la primera de las ocho carpetas que contiene las gestiones en torno a la visita del periodista Jacques Schoonjans de Bélgica. Si bien probablemente no correspondió a la primera visita organizada en el marco de este plan, sí refleja una etapa embrionaria del mismo, evidenciada en el modo en que interactuaban los distintos actores y agencias involucradas.

El contacto con el periodista belga Jacques Schoonjans se inició en septiembre de 1977, cuando la Cancillería estaba bajo el mando de la Armada, encabezada por el vicealmirante Montes, hombre cercano al almirante Emilio Massera. Para entonces, la DGPYD llevaba apenas unos meses de funcionamiento desde su

---

37 De las ocho carpetas que documentan las visitas, cinco corresponden a esta característica específica. Ordenadas cronológicamente, se refieren a las carpetas de las visitas de: la N° 1) de Jacques Schoonjans, *Le Nouvel Euro-pe Magazine* de Bélgica; la N° 2) de Enrique Fairlie Fuentes, *El Heraldo* de México; la N° 6) de periodistas y políticos belgas, Maurice Schmieder (*La Dernière Heure*, Bélgica), Bernard Mercier (miembro del Min. del Interior), Ward Hulsemans (*Gazet Van Antwerpen*, Bélgica), Luc Beyer (parlamentario europeo) y Jacques Offergeld (*La Nouvel Europe Magazine*, Bélgica); la N° 7) de Mira Avrech, *Yediot Aharonot* de Israel; y la N° 8) de Louis Pauwels, *Le Figaro* de Francia.

38 De las ocho carpetas, cuatro contienen selecciones de este tipo: la N° 1) de Jacques Schoonjans; la N° 3) de Irène Jarry, *Le Figaro* de Francia; la N° 5) de Fernando Vizcaino Casas, *El Imparcial* de España; y la N° 8) de Louis Pauwels.

39 De las ocho carpetas, siete son consideras de este tipo: la N° 1) de Jacques Schoonjans; N° 2) de Enrique Fairlie Fuentes; la N° 3) de Irène Jarry; la N° 4) de Gene Mueller, *The Washington Star* de Estados Unidos; la N° 5) de Fernando Vizcaino Casas; la N° 6) de periodistas y políticos belgas; y la N° 7) de Mira Avrech.

creación, bajo la dirección del capitán Pérez Froio. Este caso puede inscribirse dentro de la categoría de seleccionados que se presentaban por iniciativa propia y que solicitaban auspicio a las embajadas.

Fue el embajador argentino en Bélgica, Carlos C. Delía Larocca, quien informó a Cancillería que “el periodista libre belga, señor Jacques Schoonjans, emprenderá un viaje a Chile, Argentina, Uruguay y Brasil”<sup>40</sup>. Delía Larocca decidió respaldar plenamente la propuesta, señalando que el periodista era “propia tropa”, ya que contaba con un historial de posiciones favorables a las dictaduras de la región<sup>41</sup>. El apoyo de los embajadores resultaba fundamental, pues constituían el primer engranaje del programa de invitación de periodistas. Eran ellos quienes revisaban los antecedentes, evaluaban el perfil ideológico y remitían a la DGPYD la información sobre los candidatos, abriendo así la posibilidad de su eventual incorporación en el circuito de propaganda oficial.

La DGPYD dispuso la realización del viaje e informó a la Secretaría de Información Pública (SIP). El 27 de octubre de 1977, Pérez Froio comunicó oficialmente la visita a través de una nota enviada a esta secretaría que dependía de la Presidencia de la Nación, a cargo del teniente general Jorge R. Videla, y era la encargada de centralizar y controlar la información que publicaban los medios de comunicación en Argentina<sup>42</sup>.

La visita de Schoonjans tuvo lugar entre el 22 y el 29 de noviembre de 1977 e incluyó distintos contactos y recorridos, entre los que se encontraban programadas reuniones con el ministro de Economía y con el ministro de Planeamiento<sup>43</sup>. Además de estos encuentros, el periodista solicitó a los organizadores del programa que se le entregara información y material fotográfico con el objetivo de “reunir todos los elementos que permitirán hacer conocer la realidad latinoamericana en momentos en los que este continente se encuentra expuesto a una campaña de difamación orquestada por el marxismo internacional”<sup>44</sup>.

La DGPYD y la SIP aprovecharon la ocasión para intervenir directamente en la producción del material. En lugar de entregarle información en bruto, pusieron a disposición de Schoonjans un artículo ya redactado y listo para su difusión. Lo llamativo es que el texto estaba escrito en primera persona, simulando la voz del propio periodista. Bajo el título “La verdad sobre Argentina”, comenzaba afirmando: “Cuando llegué a la Argentina sabía que encontraría un país en guerra

---

40 Letra N.º 288, 26 de septiembre de 1977. Documento que forma parte de carpeta “Schoonjans” confeccionada por la DGPYD.

41 Había publicado notas periodísticas a favor de la dictadura en Chile y de Uruguay (Nota de Delía Larocca, 27 de octubre de 1977. Carpeta Schoonjans).

42 Expediente N.º. 18006/1977, Ministerio de RREE a Presidencia de la Nación - SIP, 31 de octubre de 1977. Carpeta Schoonjans.

43 Memorándum, 21 de noviembre de 1977. Carpeta Schoonjans.

44 Memorándum, 21 de noviembre de 1977. Carpeta Schoonjans.

(...) Pero no fue así. No escuché detonaciones, ni vi ruinas e incendios, ni siquiera noté una presencia militar en la vida diaria de Buenos Aires<sup>45</sup>.

Se trataba de un documento inequívocamente propagandístico. No buscaba polemizar con quienes denunciaban las violaciones a los derechos humanos en Argentina, sino desplegar una estrategia distinta: la del testigo que afirma haber visto con sus propios ojos y regresa para contar la “verdad” en primera persona. Schoonjans cumplió ese rol a la perfección. Tras su visita en noviembre de 1977, esperó algunos meses y recién en marzo de 1978 publicó el artículo en “Argentine: la loi et l’ordre”, *Le Nouvel Europe Magazine*, N° 94, contribuyendo así a reforzar la imagen positiva que el régimen buscaba proyectar hacia el exterior.

Su contenido era prácticamente idéntico al artículo entregado por las agencias de la dictadura al periodista. En palabras de Schoonjans: “Se han efectuado algunos cambios, pero pienso que la idea no ha sido modificada<sup>46</sup>. Se trataba, por lo tanto, de un texto que transmitía el discurso argumental de la dictadura, pero presentado como obra de un periodista ajeno e imparcial, cuya experiencia le permitía dar cuenta del “orden alcanzado” en Argentina. Al mismo tiempo, el artículo buscaba generar un impacto a los lectores europeos, estableciendo conexiones con los asesinatos producidos por el terrorismo europeo:

...los venturosos habitantes de la tranquila y progresista Europa no conocían la guerra revolucionaria que ha devastado a varios países de América Latina (...) Pero Hans Martin Schleyer acaba de ser asesinado, mientras que violencias y secuestros de toda clase alcanzan a los países más democráticos del mundo<sup>47</sup>.

Esta nota periodística, publicada en *Le Nouvel Europe Magazine* y distribuida en varios países —Bélgica, Francia, Suiza, Alemania, Gran Bretaña, entre otros—, formó parte de la intensa campaña de propaganda derivada del programa de recepción de periodistas extranjeros de la DGPYD. En los demás casos de periodistas incluidos en este programa, al menos según lo registrado en las ocho carpetas analizadas, la remisión de los artículos a la DGPYD era el acto que daba por cerrada la documentación de la visita. En el caso de Schoonjans, en cambio, la publicación del artículo dio inicio a un nuevo operativo.

Tras haber sido evaluado como “similar al artículo que fuera entregado al periodista Jacques Schoonjans<sup>48</sup>”, el material fue traducido y enviado a los medios de comunicación argentinos. No solo se supervisó que los reprodujeran, sino que

45 “La verdad sobre Argentina” Carpeta Schoonjans.

46 Carta de Schoonjans, 2 de marzo de 1978. Carpeta Schoonjans.

47 “Argentine: la loi et l’ordre”, *Le Nouvel Europe Magazine*, N° 94, marzo de 1978. Traducción. Carpeta Schoonjans. Cabe aclarar que Hans Martin Schleyer, exoficial nazi y dirigente empresarial alemán, fue secuestrado y asesinado en 1977 por la Fracción del Ejército Rojo (RAF).

48 Memorandum N.° 1642, 18 de abril de 1978. Carpeta Schoonjans.

se les indicó que debían transmitir la idea de “cómo nos ven desde el exterior”. Así los lectores argentinos de periódicos de reconocida tirada nacional leyeron que: “El periodista [Schoonjans] vino a nuestro país creyendo encontrar un frente bélico. Pero no oyó detonaciones, ni vio ruinas ni incendios. No encontró rastros visibles de guerra ni calles patrulladas por tropas armadas”<sup>49</sup>. Así, en los medios locales se observa la sustitución estratégica del testigo: el relato, originalmente en primera persona en los medios europeos, se transforma en tercera persona singular, presentando al extranjero como un observador imparcial. De este modo, se transmite un relato que legitima y difunde, de manera subliminal la propaganda de la dictadura argentina.

Finalmente, la operación concluyó con una comunicación enviada desde Buenos Aires al Centro Piloto de París, en la que la DGPyD daba cuenta del resultado favorable de la visita y dejaba sentada la idea de mantenerlo en agenda: “Informase de la visita del periodista belga Jacques Schoonjans. Sugiérese contactar dicho periodista”<sup>50</sup>.

## CONCLUSIONES

El análisis de la DGPyD permitió reconocer cómo la dictadura militar argentina institucionalizó un dispositivo de propaganda en el corazón mismo de la Cancillería. Creada mediante decreto secreto, dirigida e integrada por oficiales de la Armada ligados a la represión clandestina, y luego por oficiales de la Aeronáutica, la DGPyD articuló saberes de inteligencia, comunicación y diplomacia en un esfuerzo por idear estrategias para mejorar la imagen de la última dictadura. La reconstrucción de los orígenes de esta dependencia, y el estudio de sus directores, así como la indagación del programa de invitación de periodistas extranjeros, permitió conocer los detalles de confluencia entre actores militares, diplomáticos y civiles activos en esta área en la que convergió la burocracia administrativa y el enmascaramiento de las prácticas represivas.

El estudio de los legajos de los directores de la DGPyD, a la luz de la misión explicitada en la Directiva N° 1 de Difusión al Exterior y del programa de invitación a periodistas extranjeros, muestra una construcción y aplicación de saberes en estrecha sintonía. El análisis de esta documentación evidencia que no se trataba de acciones aisladas, sino de una política sistemática, organizada desde la DGPyD, que formaba parte de un circuito mayor. Este circuito vinculaba al Centro Piloto de París, involucraba a funcionarios de la Cancillería —en particular a los embajadores— y a periodistas de distintas partes del mundo, seleccionados bajo criterios que aquí fue posible examinar.

---

49 “Cómo nos ven”, *La Razón*, abril de 1978. Carpeta Schoonjans.

50 Cable Secreto de la DGPyD, 19 de junio de 1978. Carpeta Schoonjans.

El caso de Jacques Schoonjans, en 1977, ilustra las dinámicas de la maquinaria propagandística: un periodista invitado, itinerarios diseñados desde la Cancillería, artículos listos para ser publicados y luego reutilizados en la prensa local como prueba de legitimidad y reconocimiento en el exterior de la dictadura argentina. La operación, también, dejaba en evidencia la estrategia de la maquinaria propagandística: la necesidad de maquillar su carácter oficial con la publicación de notas periodísticas que aparentaban ser “independientes” o sin conexión con la oficialidad. En definitiva, el estudio de la DGPyD permite concretamente reconocer el funcionamiento de redes diplomáticas y periodísticas que mientras era desplegado el terrorismo de Estado, buscaron dar una imagen favorable para evitar que la dictadura fuera sancionada internacionalmente.

## BIBLIOGRAFÍA

- ÁGUILA, Gabriela, *Historia de la última dictadura militar. Argentina, 1976-1983* (Buenos Aires: Siglo XXI, 2023).
- AVENBURG, Alejandro, “Una dictadura fragmentada: conflictos intra-militares y las relaciones entre la Argentina y los Estados Unidos durante la presidencia de Videla”, *POST-Data* 20 (2), 2016, pp. 441-472.
- CANELO, Paula, *El proceso en su laberinto. La interna militar de Videla a Bignone* (Buenos Aires: Prometeo, 2008).
- CRENZEL, Emilio, “Una encuesta de opinión pública en Tucumán bajo la dictadura. Una aproximación indicial”, *Telar* 7-8, 2010, pp. 92-109.
- CRESPO, Victoria, “Legalidad y Dictadura” en LIDA Clara E., et al. (comps.), *Argentina, 1976. Estudios en torno al golpe de Estado* (Buenos Aires: El Colegio de México/Fondo de Cultura Económica, 2008), pp. 165-186.
- CRISTIÁ, Moira y SCHENQUER, Laura, “La ‘acción psicológica’ en el ámbito internacional. Los planes de comunicación de la dictadura argentina en el extranjero (1976-1978)”, en SCHENQUER, Laura (comp.), *Terror y Consenso. Políticas culturales y comunicacionales de la última dictadura* (La Plata: Edulp, 2022), pp. 80-107.
- FELD, Claudia, “El lugar sin límites: el centro clandestino fuera de la ESMA”, en FRANCO, M. y FELD, Claudia (dirs.), *ESMA. Represión y poder en el centro clandestino de detención más emblemático de la última dictadura argentina* (Buenos Aires: FCE, 2022), pp. 143-166.
- FERNÁNDEZ BARRIO, Facundo, “Formas excepcionales de la violencia en el cautiverio clandestino: el trabajo forzado de prisioneras de la ESMA en la Cancillería argentina”, *Revista Conflicto Social* 13 (24), 2020, pp. 298-324.
- FERNÁNDEZ BARRIO, Facundo y GONZÁLEZ TIZÓN, Rodrigo, “De la ESMA a Francia: hacia una reconstrucción histórica del Centro Piloto de París”, *Folia Histórica del Nordeste* 38, 2020, pp. 99-134. <https://doi.org/10.30972/fhn.0384465>
- LETTIERI, Laura y AGOSTINI, Vanina, “La ESMA. Una mirada desde los documentos del Archivo General de la Armada”, *Hilos Documentales* 1 (1), 2018.

- LINARES COLUMBIÉ, Radamés, “Epistemología y ciencia de la información: repensando un diálogo inconcluso”, *Acimed* 21 (2), 2010, pp. 140-160.
- LVOVICH, Daniel, “¿Cerca de la revolución? Datos cuantitativos e interpretaciones de las encuestas sobre las distintas modalidades de apoyo a la violencia revolucionaria en Argentina, 1970-1973”, *Izquierdas* 49, 2019, pp. 952-967.
- LLORET, Rodrigo, *Política internacional y derechos humanos: El frente externo de la última dictadura y el rol de la diplomacia argentina ante las denuncias que se realizaban en el exterior contra la Junta Militar (1976-1983)* (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 2019, Tesis de doctorado.
- MONTEVERDE, Héctor, “60 years of SADIO”, *Sadio EJS* 20 (2), 2021, pp. 2-22.
- OSUNA, Florencia, “El Ministerio de Bienestar Social entre el onganato y la última dictadura (1966-1983). Análisis de la estrategia de intervención social del Estado en la historia argentina reciente”, *Estudios Sociales del Estado* 3 (6), 2017, pp. 41-65.  
<https://doi.org/10.35305/ese.v3i6.123>
- PIÑERO, María Teresa, “Memoria Histórica en Cancillería. Relevamiento e investigación”, Ponencia en el Seminario Internacional Políticas de la Memoria, Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Buenos Aires, 2019.
- PIÑERO, María Teresa, *Las denuncias internacionales como estrategia de lucha ante el terrorismo de Estado* (Universidad Nacional de Lanús, 2023), Tesis de doctorado.
- POLLAK, Michael, “Paul. F. Lazarsfeld, fundador de una multinacional científica”, *Materiales de Sociología Crítica* (Madrid: Las Ediciones de La Piqueta, 1986).
- RISLER, Julia, *La acción psicológica. Dictadura, inteligencia y gobierno de las emociones 1955-1981* (Buenos Aires: Tinta Limón, 2018).
- RISLER, Julia y SCHENQUER, Laura, “Guerra, diplomacia y producción de consenso: el plan de acción psicológica del Ejército argentino en el marco del conflicto con Chile por el Canal de Beagle (1981-1982)”, *Revista Universitaria de Historia Militar* 8, 2019.
- SALA, Laura, “‘La lucha contrasubversiva’ en la política de difusión al exterior de la dictadura argentina, 1979-1981”, *Confluente: Rivista di Studi Iberoamericani* 16 (1), 2024, pp. 433-459.
- SCHENQUER, Laura y RISLER, Julia “Opinion polls and surveys in the BANADE archives: a productive use of governmental technologies by the last military dictatorship in Argentina (1976-1983)”, *Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies* 44 (2), 2019, pp. 225-242. <https://doi.org/10.1080/08263663.2019.1602937>
- SCHENQUER, Laura, “Entre memos, telegramas y notas diplomáticas: Cancillería y su circuito informativo en respuesta a las denuncias externas por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura argentina”, *Revista Sudamérica* 21, 2024, pp. 24-52.
- SEOANE, María y MULEIRO, Vicente, *El dictador. La historia secreta y pública de Jorge Rafael Videla* (Buenos Aires: Sudamericana, 2001).
- SOPRANO, Germán, “El Legajo Personal y el estudio de los procesos de modernización, burocratización y profesionalización en el Ejército Argentino a principios del siglo XX”, *Revista Electrónica de Fuentes y Archivos (REFA)* 2 (13), 2022, pp. 51-76.

# La intervención como táctica política: dirigentes sindicales y FF.AA. durante la dictadura militar argentina (1976-1983)

MARIANA STOLER 

Universidad Autónoma de Madrid / Universidad Carlos III de Madrid

## Resumen:

La última dictadura militar argentina buscó la refundación de la sociedad. Con ese objetivo, la represión sistemática se articuló con una serie de medidas políticas, incluida la intervención militar a los sindicatos. Este artículo se propone aportar al conocimiento de estas intervenciones desde el estudio de caso de la seccional La Matanza de la Unión Obrera Metalúrgica y responder al interrogante de si fueron o no un intento de destrucción del sindicalismo. Usando fuentes hemerográficas y sindicales, se analizará la política laboral de la dictadura considerando los conflictos internos del régimen y del sindicalismo. Por último, este artículo propone un diálogo con otros estudios sobre las consecuencias del control militar sobre los sindicatos y de las políticas específicas que tomó la dictadura hacia los trabajadores.

## Palabras clave:

Dictadura; Intervención militar; Sindicatos

## Abstract:

The last Argentine military dictatorship sought to re-found society. To this end, systematic repression was coupled with a series of political measures, including military intervention in labor unions. This article aims to contribute to the understanding of these interventions through a case study—the Unión Obrera Metalúrgica union's La Matanza branch—, addressing the question of whether they were an attempt to destroy the labor movement. Using newspaper and union sources, the article will analyze the dictatorship's labor policies, considering the internal conflicts within the regime and the labor movement. Finally, this article proposes a dialogue with other studies on the consequences of military control over unions and the specific policies the dictatorship implemented toward workers.

## Keywords:

Dictatorship; Military Intervention; Unions

## INTRODUCCIÓN

Una de las primeras medidas que tomó la dictadura militar argentina (1976-1983) tras el golpe de Estado del 24 de marzo fue la intervención de la Confederación General del Trabajo (CGT) y de los principales sindicatos del país, junto con la toma de sus sedes centrales y el arresto de distintos dirigentes sindicales. Estas medidas demuestran la importancia que las Fuerzas Armadas daban a los sindicatos en su objetivo refundacional del sistema político y social argentino<sup>1</sup>.

El accionar de la dictadura frente al movimiento obrero se desarrolló en dos niveles que funcionaron de manera simultánea y articulada: por un lado, una reforma normativa de las prácticas y acciones sindicales en la que se incluyen las intervenciones, y, por el otro, la acción represiva legal y clandestina sobre activistas y dirigentes. Sin embargo, durante muchos años, los estudios sobre el movimiento obrero en este período tendieron a visibilizar la política represiva como la única hacia el sector, estableciendo una especie de consenso que situaría al sindicalismo solo como víctima de la dictadura. Este posicionamiento tiene dos consecuencias según afirma Luciana Zorzoli: impediría la realización de investigaciones sistemáticas sobre las dirigencias sindicales y su rol en el período lo que, a su vez, generalizaría las causas y las consecuencias de las intervenciones militares sin distinción alguna. En este sentido, la política de intervenciones a sindicatos fue considerada por la historiografía clásica como una muestra de la intención del régimen de desarticular y destruir el sindicalismo sin contemplar las diferentes formas en que se produjeron (si fueron civiles o militares), los distintos momentos, sobre qué nivel de la organización y/o en qué región<sup>2</sup>.

En los últimos años, no obstante, se ha venido produciendo un giro en los estudios sobre la clase obrera durante la dictadura argentina, en el que puede observarse que, si bien la represión ocupó un lugar central en el período, la vida política no fue suspendida, sino que, por el contrario, existió y fue bastante compleja. El presente trabajo se inserta en esta línea y busca aportar al conocimiento de las intervenciones sindicales mediante el estudio de caso de la Unión Obrera Metálgica (UOM en adelante)<sup>3</sup>.

---

1 *Crónica*, 25 y 27 de marzo de 1976. Marcos Novaro y Vicente Palermo, *La dictadura militar 1976/1983* (Buenos Aires: Paidós, 2006) y Paula Canelo, *El proceso en su laberinto* (Buenos Aires: Prometeo libros, 2008).

2 Luciana Zorzoli, "Las intervenciones a organizaciones sindicales durante la última dictadura militar argentina: un estudio cuantitativo", *Desarrollo Económico* 57 (223), 2018, p. 493. Para una muestra de la historiografía clásica ver Álvaro Abós, *Las organizaciones sindicales y el poder militar (1976-1983)* (Buenos Aires: Centro Editor de América Latina, 1984) y Alberto Fernández, *Las prácticas sociales del sindicalismo (1976-1982)* (Buenos Aires: Centro Editor de América Latina, 1985).

3 Ejemplos de los nuevos estudios son: Luciana Zorzoli y Juan Pedro Massano (eds.), *Clase obrera y dictadura militar en Argentina (1976-1983)* (Raleigh: Editorial a ContraCorriente, 2021); Emilio Crenzel y Camillo Robertini (comps.), *Historia y memoria de la represión contra los trabajadores en Argentina* (New York: Peter Lang, 2022); Gabriela Águila, *Historia de la última dictadura militar* (Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2023), entre otros.

Este es el sindicato que agrupa a los trabajadores metalúrgicos argentinos. Su estructura altamente centralizada garantiza un funcionamiento vertical y la existencia de seccionales totalmente dependientes de la dirección nacional le asegura una presencia en todo el país<sup>4</sup>. Por pertenecer a una industria muy importante en la economía, por la gran cantidad de afiliados y por la especificidad de la negociación colectiva en Argentina, los líderes de la UOM pudieron llevar adelante una estrategia de uso político de la huelga y la movilización convirtiendo a este sindicato en un actor político nacional importantísimo desde 1958 —con la sanción de la ley que regulaba el funcionamiento de las organizaciones sindicales— en adelante<sup>5</sup>. Esta organización fue una de las primeras en ser intervenidas tras el golpe del 24 de marzo, sufriendo la incautación de sus sedes centrales y el encarcelamiento de su secretario general Lorenzo Miguel<sup>6</sup>.

Como puede observarse, este trabajo no pretende dar cuenta del abanico completo de las intervenciones sindicales durante la dictadura ya que se abocará al análisis de un único caso específico. Sin embargo, por tratarse de una de las organizaciones sindicales más importantes del país en ese momento, el estudio resulta pertinente. La vía de entrada serán fuentes hemerográficas y sindicales, especialmente el libro de actas de la seccional La Matanza de la UOM, la cuarta en importancia dentro del sindicato debido a su número de afiliados, lo que le

---

4 La legislación argentina estipula que solo un sindicato por industria ostente el monopolio de la representación de los trabajadores en esa área. La organización sindical, entonces, está basada en la representación unificada de los trabajadores en sindicatos divididos según la actividad que forman asociaciones, uniones o federaciones a nivel nacional, por rama industrial, y que se integran, por encima de ellas, en una confederación única, la CGT, componiendo así un sindicalismo altamente centralizado y de funcionamiento verticalista.

5 Juan Carlos Torre, “El lugar de la UOM en la trayectoria del sindicalismo”, en Juan Carlos Torre, *Ensayos sobre movimiento obrero y peronismo* (Buenos Aires: Siglo Veintiuno editores, 2012), pp. 235-46.

6 No hay aún trabajos dedicados específicamente a las relaciones internas de la UOM durante la intervención militar. Santiago Senén González en *Diez años de sindicalismo argentino, de Perón al Proceso* (Buenos Aires: Ediciones Corregidor, 1984) provee información importante sobre la fractura interna que atravesaba el sindicato, pero no profundiza el análisis en torno al impacto que en ella tuvo la intervención. Por su parte, Daniel Dicósomo en *Los trabajadores argentinos y la última dictadura* (Tandil: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, 2017) reconstruye el rol de los dirigentes sindicales intermedios durante el período dictatorial en la seccional Tandil de la UOM, en la provincia de Buenos Aires, analizando especialmente la relación entre el secretario general seccional con los trabajadores y las patronales de las fábricas locales. Su investigación se centra en las relaciones entre estos dirigentes seccionales y los trabajadores a los que representan. Recupera, no obstante, del libro de actas de la seccional la fuerte determinación que la intervención militar ejercía sobre los dirigentes de la UOM Tandil al resaltar un cambio en la posición política de Miguel Chiarrullo -secretario general- dentro del sindicato para consolidar sus relaciones con el interventor y con el Ministerio de Trabajo en momentos en que debía renovarse la prórroga de su mandato (p.176). El acceso a las fuentes sindicales resulta clave para analizar las relaciones internas del sindicato durante el período. En el caso de la seccional La Matanza de la UOM, la investigación de Hernán Bernasconi, *Trabajadores metalúrgicos de La Matanza* (Buenos Aires: De la Orilla, 2010), muestra que entre los interventores del gremio metalúrgico y la comisión directiva de la seccional hubo “una relación de colaboración” (p.231). Bernasconi basa esta afirmación en los testimonios orales que recabó y en la lectura de los libros de actas de la UOM-Matanza. Sin embargo, su análisis se detiene en estas conclusiones, ya que su estudio se centra en los efectos de la represión y de las políticas laboral y económica de la dictadura sobre las fábricas y trabajadores metalúrgicos.

otorgaba un importante poder de decisión dentro de la organización. Esta riquísima fuente documental permitirá componer el cuadro de las relaciones entre los dirigentes de la UOM y su interventor<sup>7</sup>.

Con el estudio de este caso se busca aportar al conocimiento de la política laboral del régimen, contemplando sus complejidades y contribuyendo a no generalizar lo que les sucedió a algunos sectores gremiales con el resto (vertical y horizontalmente). Desde esa posición, se intentará comprobar si las intervenciones a sindicatos durante la dictadura fueron únicamente una evidencia de la intención de desarticulación y destrucción del sindicalismo.

## LA POLÍTICA LABORAL DE LA DICTADURA

El objetivo principal de la coalición golpista fue la “refundación irreversible de la sociedad”<sup>8</sup>. Esta necesidad refundacional se imponía, a juicio de las Fuerzas Armadas (FF.AA. en adelante), debido a la caótica situación de vulneración de las relaciones de autoridad durante las presidencias peronistas (1973-1976). Dentro de este diagnóstico, los sindicatos fueron considerados como una de las causas de la indisciplina laboral y un actor extremadamente poderoso frente al Estado y la patronal por lo que se buscó su disciplinamiento<sup>9</sup>.

Para lograr esta refundación, la dictadura articuló sus políticas económica, educativa, represiva y laboral. Dirigentes sindicales y trabajadores fueron objetivos de la represión, sin embargo, no de la misma manera. Corresponde distinguir en este sentido dos modalidades represivas sobre la clase obrera. Mientras que los dirigentes nacionales fueron —en su amplia mayoría— detenidos legalmente, los trabajadores que lideraron el proceso de radicalización política de las décadas de 1960 y 1970, que había fortalecido las organizaciones de base en las fábricas, fueron secuestrados, torturados y muchos de ellos desaparecidos.

Desde la política económica también se buscó refundar la sociedad. La industrialización sustitutiva que había dominado los planes en esta área se creía agotada y distorsionada, en parte, por lo que era considerado el excesivo poder político y económico de los sindicatos en el período anterior al golpe de Estado. Se buscó entonces reestructurar profundamente el patrón de acumulación vigente y reducir los salarios y la participación de los trabajadores en la distribución del ingreso. Las estrategias económicas y represivas tuvieron como principal efecto

---

7 La Matanza se ubica en la zona oeste del conurbano de la ciudad de Buenos Aires, un pujante distrito industrial donde se ubicaron importantes fábricas metalúrgicas.

8 Paula Canelo, *La política secreta de la última dictadura argentina (1976-1983)* (Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Edhasa, 2016), p. 215.

9 Como analiza Gabriela Águila, *op. cit.*, 2023, p. 130, los documentos básicos de la dictadura establecieron en el plano laboral como medidas inmediatas el reordenamiento de la acción sindical, la suspensión de la labor gremial y la prohibición de realizar actividad política por parte de las organizaciones obreras.

el disciplinamiento de la mano de obra y la distribución regresiva del ingreso. Esto permitió a empresarios aumentar la disciplina laboral y la productividad al recuperar el control sobre el proceso laboral<sup>10</sup>.

Más allá del diagnóstico inicial de situación, no existía pleno consenso dentro de las FF.AA. y entre sus apoyos y colaboradores civiles sobre la estructuración de la nueva política laboral y, especialmente, sobre el rol que deberían cumplir los sindicatos en ella<sup>11</sup>.

Dentro de las Fuerzas existía una división entre “duros” y “blandos” que mostraba el grado de inflexibilidad frente al diálogo con los civiles, el rol de los partidos políticos, el momento de la apertura democrática y el ejercicio de la represión. Al sector de los “duros” pertenecía la mayoría de los comandantes de Cuerpo al frente de la represión, y, en el sector de los “blandos”, se encontraban los generales del Ejército Jorge R. Videla y Roberto E. Viola. A estos dos sectores corresponde agregar un tercero, más “político”, representado por algunos sectores civiles de corte más aperturista<sup>12</sup>.

La primera disputa en materia de política laboral fue por el control del Ministerio de Trabajo. Las FF.AA. decidieron designar a un militar al frente de esa cartera, contrariando los deseos del grupo de civiles a cargo del Ministerio de Economía<sup>13</sup>. Esto supuso un límite a la aplicación total de la política económica, diseñada por el entonces ministro Martínez de Hoz y su equipo, que buscaba la eliminación de los sindicatos y los mecanismos legales e institucionales que los ligaban al Estado y alimentaban su poder<sup>14</sup>.

Al frente del Ministerio de Trabajo fue nombrado un miembro del Ejército, el general de brigada Horacio Tomás Liendo, un “dialoguista” cercano al general Viola, quien se oponía a la anulación total de las funciones de la dirigencia sindical al considerarla un freno al avance de las corrientes de izquierda, imprescindible en el disciplinamiento del movimiento obrero en su conjunto. Esta concepción era compartida por la mayoría de los dirigentes sindicales nacionales peronistas tradicionales.

---

10 *Ibidem*, pp. 125 y 130-131.

11 Para más información sobre los conflictos políticos dentro de las Fuerzas Armadas durante todo el período ver Paula Canelo, *El proceso en su laberinto. La interna militar de Videla a Bignone* (Buenos Aires: Prometeo Libros, 2008), y Paula Canelo, *op. cit.*, 2008.

12 Videla y Viola fueron los primeros presidentes de la dictadura (1976-1981 y 1981 respectivamente). Gabriela Águila, *op. cit.*, 2023, pp. 145-146 y Paula Canelo, *op. cit.*, 2008 y *op. cit.* 2016.

13 Marcos Novaro y Vicente Palermo, *op. cit.*, 2006, p. 209.

14 La primera disputa entre la cartera laboral y la de economía se dio en abril de 1976 con motivo de la reforma de la Ley 21.297 de Contratos de Trabajo que no tuvo el alcance deseado por el ministro de Economía para una mejor aplicación de su política económica, aunque se anularan veintisiete artículos. Igualmente, la Ley de Contratos de Trabajo “proyectaba al plano de la ley los códigos disciplinarios implementados en el ámbito privado de las fábricas” (Daniel Dicósimo, *op. cit.*, 2017, p.85).

Partiendo de esta perspectiva, la política laboral del régimen se articuló en dos vías, la normativa y la represiva, funcionando, a su vez, en dos niveles el legal y el clandestino, y atravesando toda la estructura sindical promoviendo una separación vertical que alejó, aún más, a los dirigentes de las bases. Por un lado, las ya mencionadas diferentes modalidades represivas hacia los trabajadores y, por el otro, el intento de cooptación de dirigentes para hacerlos partícipes de la refundación sindical perseguida.

Si bien ningún sector del sindicalismo apoyó el golpe de estado, una vez superado el sacudón por la primera avanzada contra el movimiento, muchos líderes sindicales nacionales y seccionales intentaron reubicarse estratégicamente en el nuevo esquema, buscando convertirse en interlocutores del régimen<sup>15</sup>. En este sentido Arturo Fernández afirma que la tendencia a la burocratización del sindicalismo argentino se profundizó durante la dictadura<sup>16</sup>.

Sin embargo, entre los hombres de armas surgían diferencias en torno al margen de autonomía que deberían tener los dirigentes en la conducción de sus organizaciones. Por una parte, un grupo proponía una fuerte participación estatal en los sindicatos para construir un hipercorporativismo en el que el Estado fuera el que moldeara los intereses y la acción colectiva de los trabajadores. Los sindicatos entonces no tendrían ninguna función representativa ni autonomía en la acción. Se buscaba un sindicalismo débil y dócil frente a la patronal y al Estado. Por otra parte, otro grupo creía imposible el disciplinamiento del movimiento obrero con dirigentes sin funciones de representación autónomas<sup>17</sup>. Así, el Estado debía comprometerse más en su papel de árbitro, elemento fundamental de las relaciones entre patrones y obreros. Se trataba de fomentar el diálogo y la negociación con aquellos líderes sindicales que acordaran de alguna manera con los preceptos del régimen. Esta era la propuesta del ministro de Trabajo Liendo y de la rama politicista dentro del Ejército<sup>18</sup>. Como afirma Águila:

---

15 Gabriela Águila, *op. cit.*, 2023, p.134.

16 Alberto Fernández, *op. cit.*, 1985. Como parte del proceso de burocratización sindical, corresponde marcar la estrategia política perseguida por la dirigencia sindical de, como afirma Nicolás Iñigo Carrera, ir ganando espacios en el proceso de institucionalización lo que, finalmente, coadyuvó a la consolidación de la organización sindical y de su dirigencia como capa burocrática, al respecto ver Nicolás Iñigo Carrera en el debate "Burocracia sindical y sindicato" con Hernán Camarero, Alejandro Belkin y Paula Varela, Instituto de Pensamiento Marxista, Buenos Aires, 2010 [Enlace]. A ello se suma el rol político ejercido por el sindicalismo dentro del movimiento peronista y de la política nacional que llevó a gran parte de la dirigencia sindical a volcar el poder de paralización de la producción y de movilización del que gozaba hacia una estrategia de participación política. Sin embargo, sería impreciso afirmar que la aceptación de algunas premisas del régimen dependió únicamente del nivel ocupado dentro de la organización sindical. La cuestión es más compleja ya que hubo dirigentes que, a la vez, colaboraron y se enfrentaron al régimen y hubo trabajadores de base que acordaron con los preceptos de la dictadura, Camilo Robertini, "Por una historia del obrero común y de la aceptación cultural de la última dictadura cívico militar", en Luciana Zorzoli y Juan Pedro Massano (eds.), *Clase obrera y dictadura militar en Argentina (1976-1983)* (Raleigh: Editorial a ContraCorriente, 2021), pp. 283-308, entre otros.

17 Marcos Novaro y Vicente Palermo, *op. cit.*, 2006, p. 210.

18 Paula Canelo, *op. cit.*, 2008.

esta posición generó controversias y críticas dentro del gobierno militar de parte de aquellos sectores que eran partidarios de disciplinar a los sindicatos y reestructurar profundamente al movimiento obrero, desplazando a la dirigencia sindical peronista. Entre los que sostenían esta postura se encontraban los generales “duros” y los liberales del Ministerio de Economía<sup>19</sup>.

Desde el momento de su designación, Liendo construyó su relación con muchos dirigentes sindicales a partir de la promesa de que la suspensión de la actividad sería temporal y manteniendo abiertas las líneas de diálogo. La incertidumbre que esto generó hizo surgir entre los líderes sindicales un sinfín de especulaciones en torno a cómo se recompondrían los cuadros de conducción de la CGT, si se reformaría la Ley de Asociaciones Profesionales y, por último, cómo sería la comunicación entre la dirigencia sindical y el gobierno. Frente a estas inquietudes, Liendo buscó aprovechar las disputas por espacios de poder en una futura normalización que surgían entre los sindicalistas para impulsar al dirigente que más le conviniera. La intervención militar de los sindicatos se convertía, en este sentido, en una táctica política.

El Ministerio de Trabajo se relacionaba de manera directa únicamente con aquellos líderes sindicales cuyas organizaciones no hubieran sido intervenidas. La amenaza de intervención militar a los sindicatos condicionaba las acciones de los dirigentes: podían perder el control de sus organizaciones y el contacto directo con la cartera laboral, quedando en peor posición frente a una futura normalización de la actividad. Por su parte, en el caso de los sindicatos intervenidos, era el interventor el que se relacionaba con el ministro, por lo que la relación de los dirigentes de la organización intervenida con él se convertía en un factor de poder. En este sentido, corresponde resaltar la importancia de la intervención como un dinamizador de las relaciones de poder dentro de cada sindicato (y entre sindicatos), aunque, como afirma Zorzoli<sup>20</sup>, no causara el mismo efecto en todas las organizaciones.

En el caso de la UOM, la intervención se realizó a nivel nacional únicamente. Esto quiere decir que se desplazó a la dirigencia nacional pero que sus conducciones seccionales (es decir, locales) fueron ratificadas. Se designó un interventor militar, el teniente coronel Horacio De Stefano, y se encarceló a su antiguo líder, Lorenzo Miguel.

Dada la centralización y verticalidad de la organización sindical argentina, la intervención militar pasó a controlar sus acciones y recursos económicos generando una fuerte dependencia de las seccionales con respecto a la central. La dependencia económica se evidencia tanto en el pago de los salarios de los funcionarios sindicales como en cuestiones cotidianas como reparaciones de

---

19 Gabriela Águila, *op. cit.*, 2023, p. 134.

20 Zorzoli, *op. cit.*, 2018.

vehículos o del edificio de la seccional<sup>21</sup>. Este manejo de los recursos por parte de los interventores podía favorecer o perjudicar a las seccionales y sus dirigentes a discreción.

Al ratificar en sus puestos a la mayoría de los secretarios generales de las seccionales y a sus Comisiones Directivas, la intervención militar en la UOM no anuló las disputas internas, sino que se sirvió de ellas al transformarse en un nuevo determinante y factor de poder privilegiando el diálogo con algunas seccionales por sobre otras<sup>22</sup>. Así, en las disputas por el poder interno o por el favor del interventor, las dirigencias de las seccionales buscaron aplicar con celeridad aquello que la política laboral de la dictadura impusiera.

Por ejemplo, el secretario general de la seccional La Matanza (en adelante UOMLM) —opositor a L. Miguel—, Abdala Baluch, se convirtió en una pieza fundamental en el nuevo esquema de poder dentro del sindicato<sup>23</sup>. De Stefano impulsó su figura dentro del sindicato al convertirlo en uno de sus consultores. A fines de mayo de 1976, lo convocó para que, junto con otros secretarios generales seccionales dieran su parecer sobre la situación salarial y las expectativas obreras<sup>24</sup>. Y en otra oportunidad Baluch afirmó que:

[El interventor] planteó la necesidad de nombrar algunos representantes del gremio para que lo representen ante la CGT cuando esta convoque a los gremios no intervenidos, en este aspecto no obstante que él hace la aclaración

---

21 Al respecto ver el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza, años 1963-1968, 1968-1972, 1976-1977 y 1977-1978.

22 Sobre las diferencias internas en el sindicato, el 5 octubre de 1975 *Clarín* afirmaba que Miguel afrontaba una rebelión en el seno de la UOM porque 18 de sus seccionales lo desautorizaron y cuestionaban su pronunciamiento contra su opositor el gobernador bonaerense y antiguo secretario general de la seccional Vicente López de la UOM.

23 Baluch encarnaba al dirigente ideal dentro de los cánones de la política sindical del régimen. De pasado comunista, fue secretario general de la UOM entre 1952 y 1954, Marcos Schiavi, *La resistencia antes de la Resistencia* (Buenos Aires: El Colectivo, 2008), p.85. Tras la huelga de aquel año renunció y retornó a la Comisión Directiva de La Matanza. Allí fue secretario general en 1959 y luego secretario de organización durante ocho años hasta 1970 (CPM-FONDO DIPPBA División Central de Documentación, Registro y Archivo, Mesa B, Factor gremial, Carpeta 78, legajo 2. Matanza 1era). Ese año asumió la conducción de la UOMLM y fue ratificado en su puesto en las elecciones de 1972 y de 1974, aunque en esta última el triunfo fue obtenido luego de intimidar violentamente a la lista opositora *Azul-Naranja* (Hernán Bernasconi, *op. cit.*, 2010; *Política Obrera*, año VIII, número 186, 16 de febrero de 1974; CPM-FONDO DIPPBA División Central de Documentación, Registro y Archivo, Mesa Ds, Carpeta Material Bélico, Legajo 1102, ps 93 y Mariana Stoler, "Clase obrera y dirigentes zonales en la década del 70 en Buenos Aires" (Universidad Autónoma de Madrid, 2020), Tesis de doctorado). Como secretario de organización tuvo una vida muy activa dentro del gremio y del movimiento peronista regional impulsando una fuerte oposición al entonces secretario general de los metalúrgicos, Augusto Vandor. Tras la muerte de este en 1970, Baluch evolucionó hacia una posición de obediencia alejada de los vaivenes políticos nacionales, partidarios e intrasindicales manteniendo, sin embargo, su férrea oposición a Miguel dentro del gremio (Hernán Bernasconi, *op. cit.*, 2010, p. 278). Desde entonces se mostró prescindente frente a los conflictos fabriles de su seccional, buscando derivarlos a la vía institucional desalentando la confrontación directa y hasta dividiendo a las plantillas.

24 Entrada del 29 de mayo de 1976 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza, años 1976-1977.

de que ya tiene previsto lo que ha de hacer al respecto, *quería conocer nuestra opinión*<sup>25</sup>.

A la vez que valoraba el criterio de Baluch, el interventor, con su acercamiento, tomaba cierta distancia de los otros secretarios generales seccionales. Esta actitud dentro del sindicato constituía una respuesta al impulso que otros dirigentes gremiales nacionales estaban dando a la conformación de una comisión de enlace —denominada Comisión de los 10— para poder dialogar con las autoridades laborales, aunque, según aclaraban, no buscaran enfrenar al gobierno<sup>26</sup>. Luis Guerrero, secretario general de la UOM Avellaneda, la segunda en importancia dentro del sindicato metalúrgico, impulsaba esta comisión. Días después, la Intervención militar en la UOM anunciaba en los diarios que se habían encontrado irregularidades en la conducción de la filial Avellaneda y que decidía apartar a Guerrero de su conducción, aunque continuaría manteniendo contacto con él<sup>27</sup>. Esta actitud condicionaba el proceder de Baluch y sus compañeros. Así, desde el Ministerio de Trabajo se delineaba y estimulaba un determinado perfil sindical: profesional, dialoguista, despolitizado y garante de la armonía en las relaciones patronal-trabajador.

Corresponde resaltar, asimismo, el uso que muchos dirigentes sindicales hicieron de las buenas relaciones con el interventor impulsando una estrategia de largo plazo para posicionarse mejor dentro de la UOM y dentro del sindicalismo a nivel nacional. Estrategia que reproducía acciones y actitudes frente a dictaduras anteriores, como con la autodenominada “Revolución Argentina” (1966-1973). Militares “dialoguistas” y la dirigencia sindical de la UOM, entre otras, reprodujeron comportamientos anteriores. En este sentido, la vigilancia estatal no suprimió sus márgenes de agencia. Si bien el peso político de la UOM y su estructura sindical resaltaban la importancia de anular su poder, la propia política laboral del régimen, la existencia de fuertes diferencias internas junto con el encarcelamiento de L. Miguel y el historial de negociación con otras dictaduras, abrieron ciertos márgenes de agencia para los dirigentes que supieran aprovecharlos.

La cercanía al interventor constituyó un factor de poder sindical fundamental. En este sentido, debe entenderse, por una parte, la celeridad con la que la UOMLM intervino en algunos conflictos potenciales o manifiestos que se desarrollaban en los lugares de trabajo<sup>28</sup>. Especialmente en aquellos en los que la patronal no

---

25 Entrada del 9 de octubre de 1976 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza, años 1976-1977. El destacado es nuestro.

26 *La Opinión*, 16 de julio de 1976 y *Clarín*, 17 de julio de 1976.

27 *Clarín*, 13 de agosto de 1976, en el archivo de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza.

28 El accionar de la dirigencia de la UOMLM durante los primeros años de la dictadura osciló según el tipo de conflicto entre la prescindencia y la participación activa. Se observa una estabilización en su accionar a partir de 1977 cuando empezó a intervenir solamente a instancias de la Delegación Regional del Ministerio de Trabajo (Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La

reconocía a la organización sindical en la fábrica ya que podían estimular el surgimiento de líderes o grupos que no le obedecieran. Y, por otra parte, la especial atención que prestaba a los movimientos de los dirigentes sindicales nacionales para conformar una comisión sindical unitaria como se desprende de los recortes de diario que prolijamente conservó en su archivo. Todos los sectores del sindicalismo se encontraban entrelazados en una múltiple determinación. Como sostiene Daniel Dicósimo, “los comportamientos, las decisiones y las relaciones de los dirigentes nacionales de los sindicatos eran observadas atentamente desde los estamentos intermedios. Sus reacciones e iniciativas determinaban conductas y decisiones en sus cuadros intermedios y de base”<sup>29</sup>. En esta misma lógica entraba la Intervención como dirección provisoria de los sindicatos al establecer una pauta de comportamiento esperable.

## EL JUEGO POLÍTICO ALREDEDOR DE LAS INTERVENCIONES SINDICALES

Las acciones y decisiones del ministro Liendo estuvieron fuertemente determinadas por el contexto. Por una parte, los movimientos y declaraciones de los miembros de las FF.AA. y sus apoyos civiles contrarios a la política laboral. Y, por la otra, los movimientos de las dirigencias sindicales y de los trabajadores. Así, si bien puede pensarse que desde un principio la intervención a sindicatos como la UOM respondió a un plan preconcebido del ministro y del sector de las FF.AA. que representaba, las acciones posteriores relacionadas con las intervenciones fueron, en su amplia mayoría, respuesta a situaciones particulares del momento.

Frente al movimiento de diálogo y negociación que impulsaban distintos dirigentes sindicales nacionales, a finales de 1976, la intervención militar en la CGT instó a representantes de los gremios no intervenidos a crear un agrupamiento sindical, la Comisión de los 21. El Ministerio de Trabajo buscaba así interceder en las relaciones de fuerza dentro del movimiento obrero, primero, al elegir con qué dirigentes establecer el contacto directo, y segundo mantener una política relacional diferenciada al no integrar a los gremios intervenidos, entre los que

---

Matanza, años 1976-1977 y 1977-1978). Los conflictos fabriles surgieron en dos planos: el económico y el sindical. Ambos reflejaban el avance patronal sobre las antiguas conquistas de la clase obrera. Frente a los conflictos económicos, la UOMLM se mostró prescindente. Sin embargo, en los reclamos de tipo sindical intervino activamente. Asimismo, es posible diferenciar su accionar según cuál fuera la fábrica que estaba en conflicto. En los casos de las fábricas más grandes buscó constantemente la participación de la Intervención y del Ministerio para deslindar responsabilidades o posibles vinculaciones con el desarrollo y conducción de protestas colectivas. La Seccional convocó “a delegados y se les aclaró que en la medida en que los compañeros delegados trabajen al margen de la organización serán los responsables directos de las consecuencias que puedan originarse” (Entrada del 27 de noviembre de 1976 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza, años 1976-1977. El destacado es nuestro).

29 Daniel Dicósimo, *op. cit.*, 2017, p. 165.

se encontraban los más importantes del país<sup>30</sup>. No se penalizaba la intención de algunos dirigentes sindicales de actuar como interlocutores del régimen, sino que se elegía con quiénes se establecería el diálogo.

La repercusión internacional de la cuestión de los derechos humanos y de la situación laboral, como afirma Zorzoli, era motivo de fuerte preocupación para la dictadura tanto por razones económicas —acceso a préstamos— y de política internacional, como por “el impacto que esos cuestionamientos [internacionales] pudieran tener localmente”<sup>31</sup>. En consecuencia, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), fueron espacios centrales donde la dictadura buscó la legitimación de sus objetivos. Frente al férreo control que existía en el espacio nacional, muchos líderes sindicales observaron la arena internacional como un lugar privilegiado a la hora de relacionarse y negociar con el régimen. La dirigencia sindical no intervenida tenía un rol protagónico en la estrategia gubernamental de instalación internacional, y actuó en consecuencia<sup>32</sup>.

En este sentido, la relación de estos dirigentes con los organismos internacionales resultó crucial en la reestructuración y realineación sindical durante la dictadura. Por ejemplo, la visita de una delegación de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) al país a finales de febrero de 1977, sirvió como confirmación de la necesidad de un único nucleamiento que actuase como representación del sindicalismo nacional<sup>33</sup>. La visita de la delegación de la CIOSL también evidenció las disidencias presentes en el sindicalismo argentino, pudiéndose distinguir, en abril de 1977, tres grandes grupos. Primero, un grupo de dirigentes con influencias de la ortodoxia peronista que promovía la publicación de un documento de contenido crítico hacia el régimen. Segundo, otro grupo que también propugnaba la publicación de un documento, aunque postulando un marco de posibilidades para que el movimiento obrero se integrase dentro del proceso. Tercero, un grupo que se inclinaba por no emitir ninguna clase de pronunciamiento debido a que consideraba que las condiciones no resultaban apropiadas por la falta de coincidencias sobre qué decir<sup>34</sup>. Resumiendo, se perfilaba un grupo que esbozaba una posición autónoma y crítica, otro que buscaba integrarse dentro de las pautas del régimen dictatorial, y un tercero que

---

30 Santiago Senén González, *op. cit.*, 1984, pp. 66 y 81.

31 Luciana Zorzoli, “La OIT y las dictaduras Latinoamericanas”, *Anuario del Instituto de Historia Argentina* 17 (1), 2017, pp. 14-15.

32 Ningún sindicalista que actuara en la arena nacional denunció las desapariciones de compañeros obreros y dirigentes sindicales ante esta organización internacional, *Ibidem*, pp. 15-18.

33 Esta delegación visitó Argentina para informarse de la situación laboral del país y entrevistarse con autoridades y con diferentes dirigentes sindicales, *Clarín*, 2 de marzo de 1977.

34 *La Opinión*, 22 de abril de 1977.

no se definía. A grandes rasgos estas posiciones se mantendrían y profundizarían durante toda la dictadura.

El ministro Liendo ofreció una respuesta política a esta unificación de los dirigentes de organizaciones no intervenidas y a la existencia de un grupo que pretendía hacer públicas diversas críticas al régimen: se buscó fortalecer la relación con aquellos dirigentes de gremios intervenidos que se mostraban alejados de las discusiones y acciones políticas del gremialismo del período anterior al golpe.

El caso de la UOM vuelve a ofrecer algunas pistas. Mientras se producían estos movimientos dentro de la dirigencia de los sindicatos no intervenidos, el interventor del sindicato metalúrgico convocaba a una reunión con la mayoría de los secretarios generales seccionales por un problema de urgencia: la posibilidad de normalización del gremio (una vez más, la vuelta a la normalidad era utilizada como carta fundamental en la relación con los dirigentes sindicales). Informó que el Ministerio de Trabajo le había solicitado que el sindicato nombrara un representante para la reunión anual de la OIT y la necesidad de que fuera designado por los propios representantes de los trabajadores. Inmediatamente dio paso a una votación para evitar posibles negociaciones entre los secretarios generales. El resultado de las elecciones permite ver las relaciones de poder dentro de la UOM después de la intervención militar. Baluch se impuso con 19 votos. Le siguieron Gregorio Minguito, de la seccional Vicente López, y Federico Barrientos, de San Martín, pertenecientes al sector opositor del dirigente nacional encarcelado L. Miguel, con 8 y 4 votos respectivamente. El sector de Miguel no obtuvo votos. Los dirigentes seccionales impulsaban un sector de la UOM ajeno a las rencillas del pasado: “Impedir la ventilación pública de sus diferencias, controlar la exagerada política del gremio y acentuar la acción sobre los temas exclusivamente sindicales son algunas de las definiciones que caracterizan a la línea intermedia de la UOM”<sup>35</sup>. Baluch surgía como referente de los metalúrgicos por su trayectoria, porque desde hacía años se ubicaba en una línea más “profesionalista” y menos política dentro del gremio y por su visible cercanía al interventor<sup>36</sup>. Asimismo, este resultado, reforzaba la política sindical de Liendo en un contexto que empezaba a ser adverso dentro del propio régimen.

Hacia finales de 1976 la fracción de “los duros” dentro del Ejército, debido a su labor en la política represiva, recibió mayores cuotas de poder cuando se le encomendó al general Díaz Bessone la conducción del recién creado Ministerio de Planeamiento encargado de la redacción del plan político de la dictadura. Cabe recordar que “los duros” eran los referentes de la lucha contra “la subversión”, opositores de la fracción “politicista” del Ejército en la que se ubicaba Liendo

---

35 *La Opinión*, 4 de abril de 1977.

36 Baluch había sido designado una vez más para integrar todas las paritarias de las distintas ramas del gremio metalúrgico. Entrada del 19 de marzo de 1977 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza, años 1976-1977.

y rechazaban el acercamiento con las organizaciones sindicales<sup>37</sup>. Frente a esto, las elecciones en la UOM respondían a una estrategia que buscaba demostrar la validez del programa de Liendo y la posibilidad de reconducción y ordenamiento del sindicalismo nacional bajo las premisas de la dictadura. Puede observarse la articulación de distintos niveles políticos del régimen. Asimismo, al cambiar la forma de elegir a los integrantes de la delegación obrera para la asamblea anual de la OIT, incluyendo también a representantes de organizaciones intervenidas, presionaba a los dirigentes de las organizaciones no intervenidas.

En este contexto, dirigentes de gremios no intervenidos decidieron no asistir a la asamblea anual de la OIT<sup>38</sup>. Argumentaban que lo hacían por la demora en la normalización de las organizaciones y por el desconocimiento del rol que les cabría como dirigentes. Sin embargo, es posible que la inminencia de la reforma a la Ley de Asociaciones Profesionales, especialmente el rumor que establecía que se prohibirían las organizaciones de segundo y tercer grado, tuviera algo que ver en esta decisión<sup>39</sup>. Por resolución del ministro la delegación argentina ese año estuvo integrada solamente por el embajador del país ante la OIT. No se creía apropiado que por la parte obrera concurrieran únicamente representantes de los gremios intervenidos<sup>40</sup>.

Tras la asamblea de la OIT, a finales de junio de 1977, Liendo implementó una nueva dinámica relacional con los dirigentes sindicales a partir de comisiones de trabajo creadas por el interventor militar en la CGT que incluirían también a los titulares de seccionales de gremios intervenidos a nivel nacional<sup>41</sup>. Se buscaba oponer a la actividad de los dirigentes de sindicatos no intervenidos, la participación de dirigentes sindicales cercanos e impulsados por el régimen. El interventor en la UOM nombró a Baluch como representante de los metalúrgicos para integrar la comisión que trataría la ley de Asociaciones Profesionales<sup>42</sup>. El ascenso de la figura de Baluch a la palestra de las negociaciones nacionales resulta innegable.

---

37 Paula Canelo, *op. cit.*, 2008.

38 *La Opinión*, 13 de mayo de 1977.

39 Entrada del 30 de abril de 1977 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza, años 1976-1977. El 21 de marzo de 1977 la Junta Militar había tratado en una reunión las pautas de la Ley. Las asociaciones de 2º grado eran las conducciones nacionales de los gremios, mientras que la CGT era una de 3º grado.

40 "... la presencia de una delegación tripartita fue preferida y promovida por todos los medios, ya que la participación de delegados de la patronal y de los trabajadores (...) junto con el gobierno daba la impresión de apertura y pluralismo", Victoria Basualdo, "The ILO and the Argentine Dictatorship (1976-1983)", en Jasmien van Daele (ed.), *ILO Histories Essays on the International Labour Organization and Its Impact on the World during the Twentieth Century* (Bern/New York: Peter Lang, 2010), p. 411.

41 *Clarín*, 20 de junio de 1977.

42 Entrada del 11 de junio de 1977 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza, años 1976-1977.

Más allá de esto, la actividad político-sindical no cesaba frente a la inminencia de la reforma a la Ley de Asociaciones Profesionales. En septiembre de 1977, los dirigentes de sindicatos no intervenidos formaron un nuevo nucleamiento sindical nacional, la Comisión de los 25 Gremios (C25). Su estrategia de presión se asentó en la importancia que tenía para la dictadura la imagen internacional del país y hacia ese terreno volcaron sus actividades<sup>43</sup>.

A finales de 1977, la C25 realizó una misión observadora en el congreso de la AFL-CIO que se convirtió en un acontecimiento fundamental porque, por una parte, implicaba su reconocimiento internacional como la conducción del movimiento sindical argentino y, por la otra, porque al convertirse en un nuevo elemento del poder sindical, la arena internacional también se tornaba en un espacio de disputa intersindical con fuertes repercusiones en el país. Y fue en este congreso donde aparecieron las primeras diferencias explícitas en el sindicalismo no intervenido agrupado en la C25 por “la caracterización doctrinaria que se efectuaría en el texto [de la delegación argentina] del accionar histórico del movimiento obrero argentino”, imponiéndose el sector que defendía el rol político ejercido por el sindicalismo en la segunda mitad del siglo XX<sup>44</sup>.

Frente a esta situación, el ministro de Trabajo Liendo fortaleció y estimuló el surgimiento de un nucleamiento sindical cercano al régimen, con dirigentes que buscaran participar en él. Así, en abril de 1978, surge la Comisión de Gestión y Trabajo (CGyT) integrada por organizaciones sindicales intervenidas. “La CG[y]T constituye una *expresión estrictamente sindical* y el motivo de su creación es porque el movimiento obrero está huérfano de representatividad oficial. Esta organización, ... se distingue de ‘los 25’ donde prima la faz política” (Jorge Triacca, secretario general del gremio del plástico)<sup>45</sup>.

Si bien, como afirma Zorzoli<sup>46</sup>, es incorrecto generalizar los efectos de la intervención en los sindicatos, resulta indudable que la intromisión de un factor de poder dentro de estas organizaciones alteró sus dinámicas internas permitiendo el reacomodamiento de las distintas corrientes que existían en su interior. Lo que, a su vez, fue incentivado por la cartera laboral.

Durante los primeros dos años del régimen, los sindicatos intervenidos no participaban directamente en las gestiones con el ministro, la CGT u otras organizaciones sindicales. Sin embargo, como se ha visto, a finales de 1977 y en

---

43 *La Opinión* señalaba que “las invitaciones a los cónclaves con representaciones del exterior le otorgaron, a determinados dirigentes, un arma del que carecían en los últimos tiempos”, 21 de agosto de 1977.

44 *Clarín*, 19 de diciembre de 1977. Según la revista *SOMOS* el documento “incluía fuertes apreciaciones de tipo partidista, que merecieron objeciones del sector moderado, que impugnaba el propósito de mezclar la política con el sindicalismo”, *SOMOS*, año II, número 66, 23 de diciembre de 1977.

45 *SOMOS*, año II, número 83, 21 de abril de 1978. El destacado es nuestro.

46 Luciana Zorzoli, “Las intervenciones a organizaciones sindicales durante la última dictadura militar argentina: un estudio cuantitativo”, *Desarrollo Económico* 57 (223), 2018, pp. 487-510.

1978 esta situación se fue modificando. En la dinámica intersindical a nivel de la dirigencia nacional, el Ministerio de Trabajo y la CGT constituían los elementos de poder por excelencia ya que el diálogo con ellos certificaba la posición de liderazgo dentro del movimiento obrero. En consecuencia, la promoción de dirigentes de sindicatos intervenidos en la negociación laboral respondía a un intento de modificación de la dinámica de poder en el movimiento sindical. El caso de Baluch, de la UOMLM, quien veía reforzada aún más su posición al ser uno de los dos representantes de organizaciones intervenidas que integró la delegación argentina a la asamblea anual de la OIT de 1978, es elocuente. Un representante del intervenido gremio de la construcción y miembros de la C25 completaron la delegación.

Hacia finales de 1977 y durante 1978 se anunció la victoria de las FF.AA. en la “guerra contra la subversión”. Cumplido uno de los primeros objetivos del régimen se abría una nueva etapa en la que se intentaría dar forma a la refundación social buscada<sup>47</sup>. La apertura del diálogo nacional con dirigentes de los sindicatos intervenidos puede leerse en este contexto. El ministro Liendo mostraba en la práctica a sus camaradas y apoyos civiles la reestructuración del sindicalismo nacional.

La participación cada vez mayor de los gremios intervenidos en las cuestiones que incumbían al sindicalismo en su conjunto alteraba las relaciones de poder entre las distintas tendencias sindicales presentes en la C25. El nacimiento de la CGyT era una fuerte amenaza debido a que las negociaciones por la unidad del movimiento sindical —especialmente entre los miembros de la CGyT y algunos sectores de la C25 opositores a Miguel— fueron incesantes. Esta búsqueda de la unidad llevó, a finales de agosto de 1978, a la formación de la Comisión Nacional del Trabajo (CNT), un nuevo nucleamiento integrado por casi 80 organizaciones sindicales —la totalidad de los miembros de la CGyT junto con grupos disidentes escindidos de la C25—, cuya característica principal era la activa participación de dirigentes de poderosas organizaciones intervenidas como construcción, Luz y Fuerza y la UOM.

Esta clara participación de la UOM en un nucleamiento sindical nacional terminó de impulsar la figura de Baluch dentro de la organización y del sindicalismo en el país. Véase como ejemplo la convocatoria a una reunión de secretarios generales seccionales que, en octubre de 1978, hizo la Intervención militar en la UOM con el fin de tratar diversas cuestiones. Tras concluir la reunión, y luego de que el interventor Di Stefano se hubiese retirado, los secretarios generales realizaron un plenario en donde resolvieron incorporar a la UOM dentro de la CNT, designando a Baluch como su representante en la comisión ejecutiva de dicho

---

47 Gabriela Águila, *op. cit.*, 2023, p. 159.

nucleamiento<sup>48</sup>. Este acontecimiento confirma la importancia de Di Stefano en la proyección de Baluch. Por último, el crecimiento de Baluch en la UOM y la aprobación que la Intervención realizaba de su accionar en La Matanza quedan demostrados en su designación dentro de la comisión de asesoramiento sobre obras sociales. Estas comisiones sindicales eran designadas por las Intervenciones para asesorar de manera oficiosa a los interventores<sup>49</sup>. El Partido Socialista de los Trabajadores sostenía que, en el caso de la UOM, si la comisión de asesoramiento funcionaba ligada a la Intervención esto podía ser el inicio de una política para la normalización de los sindicatos. Así, se evidencia el rol que algunos dirigentes de organizaciones intervenidas jugaban en la política laboral del régimen y la anuencia de muchos de ellos con la Intervención en busca de mayores cuotas de poder<sup>50</sup>.

Todos estos movimientos en la política laboral y en la relación con los dirigentes nacionales se hacían en un contexto de disputas por el poder entre las tres Fuerzas dentro del régimen. El 1º de agosto terminaba el “período de excepcionalidad” por el que el jefe del Ejército, Videla, podía ser a la vez miembro de la Junta Militar y presidente de la nación, algo que estaba prohibido por la legislación dictatorial. A partir de ese momento, se relevaba en pleno la Junta Militar y Viola fue designado nuevo comandante del Ejército<sup>51</sup>. El ascenso de este último, muy cercano a Liendo y con la misma línea política “dialoguista”, pudo haber estimulado al ministro a avanzar con los cambios en las relaciones con sindicalistas. Más allá de esto, en octubre de ese año, se produjo una importante reforma en el gabinete de ministros que favoreció la posición del ministro de Economía, Martínez de Hoz, opositor a la política de Liendo. Si bien la cartera de Trabajo no se vio afectada, los cambios impulsados desde el Ministerio, particularmente la participación explícita de la UOM en la CNT, pudieron haber respondido a estos movimientos.

A principios de 1979, el fortalecimiento de Martínez de Hoz precipitó, finalmente, el cambio de ministro de Trabajo. El teniente coronel Llamíl Reston reemplazó a Liendo, alineando esta cartera, según algunos autores, con la estrategia de Economía<sup>52</sup>. Fueron nombrados nuevos interventores militares en la CGT y en distintos sindicatos, entre ellos el coronel Juan Carlos Tejera al frente de la UOM. Este nuevo interventor impulsó la unidad del sindicato frente a las diferencias que aún persistían entre partidarios y detractores de Miguel adheridos a la C25 o la CNT respectivamente. Con ese fin autorizó un plenario de secretarios generales en la sede nacional del gremio en el que los dirigentes metalúrgicos

---

48 *Clarín*, 23 de octubre de 1978 y *La Nación*, 19 de octubre de 1978.

49 *Clarín*, 19 de junio de 1978.

50 Partido Socialista de los Trabajadores, *Boletín Interno*, septiembre de 1978.

51 Gabriela Águila, *op. cit.*, 2023, p. 159.

52 *Ibidem* y Paula Canelo, *op. cit.*, 2008.

aprobaron un documento donde solicitaban la libertad para los dirigentes detenidos sin proceso nombrando específicamente a Miguel y llamaban a la unidad de los nucleamientos sindicales poniendo como ejemplo ese mismo plenario que fue dirigido por dirigentes de la CNT y de la C25<sup>53</sup>.

La adopción en 1978 de un enfoque monetarista y la drástica apertura del mercado de bienes y capitales tuvo efectos devastadores sobre algunos sectores industriales. La caída en el poder adquisitivo del salario, el empeoramiento de las condiciones de trabajo y la pérdida de derechos de los trabajadores aumentaron la conflictividad obrera en el año 1979<sup>54</sup>. Es posible que la unidad impulsada dentro de la UOM por el interventor militar buscara contener la conflictividad creciente.

Sin embargo, los movimientos de la dirigencia sindical y sus tratativas por la unidad de los grandes nucleamientos nacionales escondían una disputa por el liderazgo del sindicalismo. Tanto en este sindicato como a nivel nacional, la unidad entre ambos nucleamientos supondría un virtual triunfo de la CNT al contar con mayor cantidad de afiliados. La primera huelga general del período, la Jornada de Protesta Nacional (JPN) del 27 de abril de 1979, convocada por la C25 y rechazada por la CNT, se inscribe en esta disputa por el liderazgo del movimiento obrero organizado en un contexto de creciente conflictividad obrera<sup>55</sup>.

Simultáneamente, la figura de Baluch seguía ascendiendo al ser designado, una vez más, miembro de la delegación a la Asamblea anual de la OIT. Sin embargo, todo esto se modificará con su muerte el 8 de julio de 1979. Quien lo sucedería en el cargo de secretario general de la seccional, Julio Juárez —hasta entonces secretario de organización—, no contaba ni con la misma experiencia como dirigente sindical ni con la misma habilidad política por lo que la UOMLM iría, paulatinamente, perdiendo el espacio que había ganado en el sindicalismo nacional y mostrándose cada vez más prescindente frente a lo que sucedía en las fábricas.

La pérdida de espacios de poder ganados por la UOMLM, tanto dentro del gremio metalúrgico como a nivel del sindicalismo nacional, demuestra que el impulso dado por el Ministerio de Trabajo a los sindicatos intervenidos tuvo su correlato en las estrategias desplegadas por ciertos dirigentes sindicales para aprovecharlo. La muerte de Baluch dejaba huérfana a su seccional y despejaba el camino a otros dirigentes de este mismo gremio, tan importante a nivel nacional, en la disputa por el liderazgo del sindicalismo argentino.

El período abierto con la sanción de la nueva Ley de Asociaciones Profesionales que regularía la actividad sindical, a finales de 1979, llevó a los nucleamientos sindicales a ensayar la unidad. Nació la Central Única de los Trabajadores Argentinos (CUTA). Su conducción reflejaba el cambio producido en las relaciones

---

53 *Diario Popular*, 24 de marzo de 1979.

54 Gabriela Águila, *op. cit.* y Mariana Stoler, *op. cit.*, 2020.

55 Mariana Stoler, *op. cit.*, 2021, pp. 309-337.

de fuerza dentro de la dirigencia sindical después de la realización de la JPN y el encarcelamiento de quienes la convocaron. Así, la CNT contaría con mayoría en la dirección de la CUTA. Por su parte, grupos que se distanciaron de la C25 decidieron no integrar la CUTA y formaron un nuevo nucleamiento llamado Comisión de los 20 (C20)<sup>56</sup>. La CUTA tuvo una vida muy corta y la unidad lograda se quebró con la conformación por parte de la C25 de un nuevo nucleamiento que recuperaba las siglas de la intervenida CGT y se mostraba confrontativo con el régimen.

Desde la conformación de la CGyT a instancias del ministro Liendo, las distinciones entre sindicatos intervenidos y no intervenidos dejaron de ser significativas en la disputa nacional intersindical. La principal diferencia que atravesaba a la dirigencia residía en el tipo de sindicalismo que se defendía: por una parte, la reivindicación del rol político que el sindicalismo argentino tuvo durante la segunda mitad del siglo XX y, por otra parte, el intento de distanciarse de él. Como se observa, la política impulsada en su momento por Liendo no desarticuló al sindicalismo, sino que otorgó poder a un grupo adepto al régimen.

Más allá de los cambios en el gabinete de ministros que se sucedieron desde 1979 en adelante, la Intervención continuó siendo un factor de poder determinante de las relaciones al interior de cada organización<sup>57</sup>. En marzo de 1982, frente al aumento en las movilizaciones y reclamos del movimiento obrero, la dictadura anunció que los interventores gremiales serían reemplazados por comisiones transitorias integradas por dirigentes sindicales<sup>58</sup>. Se afirmaba una dinámica en la que las facciones sindicales dentro de un gremio se apoyarían en algún nucleamiento sindical nacional para inclinar a su favor las relaciones de fuerzas dentro de su organización. En esta dinámica los conflictos en los lugares de trabajo fueron ignorados o utilizados como carta de presión<sup>59</sup>. Esta práctica fue profundizada

---

56 *Crónica y Diario Popular*, 11 de septiembre de 1979.

57 En 1980, el general Viola asumió como presidente reemplazando a Videla. De tendencia "politicista", Viola había manifestado considerables resistencias frente a la política económica de Martínez de Hoz, expresadas por medio de su camarada, y primer ministro de Trabajo del régimen, Liendo. Viola era dialoguista y aperturista, buscaba y promovía un acercamiento a las organizaciones de la sociedad civil. Luego de un *putsch*, el 22 de diciembre de 1981, asumió la presidencia de la Nación el comandante del Ejército Leopoldo Fortunato Galtieri cambiando radicalmente la orientación del régimen. Como representante de los "duros", Galtieri encaró el retorno a la ortodoxia económica liberal, el acercamiento estratégico a Estados Unidos y la continuidad en la clausura de los canales de expresión política postergando la sanción del Estatuto de los partidos políticos. Paula Canelo, *op. cit.*, 2008, pp. 163-169 y 177-193.

58 *Clarín*, 20 de marzo de 1982. El decreto 549/82, de marzo de 1982, estableció que el Ministerio de Trabajo "podía designar comisiones transitorias en sustitución de la intervención (...). El ministro tenía entre sus atribuciones nombrar a las personas que se desempeñarían en esas comisiones (...). Esas comisiones tendrían (...) todas las facultades legales y estatutarias de los cuerpos ejecutivos deliberativos (...), siendo la conducción del gremio, aunque estaban sometidas a la voluntad ministerial", Luciana Zorzoli, "La normativa sindical entre la dictadura y el alfonsinismo, propuesta de sistematización, en Alejandro Schneider y Pablo Ghigliani (comps.), *Clase obrera, sindicatos y Estado* (Buenos Aires: Ediciones Imago Mundi, 2015), p. 157.

59 Leandro Molinaro, "El reposicionamiento de la burocracia sindical en el ocaso del 'Proceso'", *Archivos de la historia del movimiento obrero y de la izquierda* 8 (IV), 2016, pp. 33-53.

luego de la derrota argentina en la Guerra de Malvinas, cuando el nuevo presidente de facto, el general Reinaldo Bignone, buscó abrir canales de negociación con las conducciones sindicales<sup>60</sup>.

En el caso de la UOM, el nuevo ministro de Trabajo, Héctor Villaveirán, propuso la formación de una comisión obrera transitoria mientras que la obra social del gremio continuaría siendo dirigida por la Intervención. Los secretarios generales seccionales se negaron unánimemente, por lo que la comisión no se conformó<sup>61</sup>. A partir de ese momento las diferencias dentro de la UOM fueron minimizándose y, en junio de 1983, ambas fracciones volvieron a rechazar la propuesta de la dictadura de nombrar un delegado normalizador y conformaron por partes iguales una comisión transitoria para hacerse cargo de la organización cuyo titular fue Miguel, en libertad desde 1979<sup>62</sup>. La UOMLM, a pesar de su importancia numérica, no integró la comisión<sup>63</sup>. Luego de Malvinas, en un contexto de apertura política, la dictadura buscó integrar al sindicato metalúrgico dentro del proceso de normalización sindical intentando interceder en las disputas de poder internas para garantizarle posiciones dominantes a la facción que mejor le conviniera.

## CONCLUSIONES

La última dictadura militar tuvo entre sus objetivos debilitar el poder con el que contaba el sindicalismo en Argentina. Para ello buscó restituir las relaciones de autoridad en los lugares de trabajo y quitarle a la dirigencia sindical el peso político con el que contaba. Para lograrlo articuló diferentes acciones —represión, sanción de nueva normativa, cambios en la política económica— entre las que la intervención a sindicatos resultó de suma importancia.

Sin embargo, como afirma Zorzoli<sup>64</sup>, sería un error generalizar las causas, metodologías y efectos de las intervenciones sobre todos los sindicatos. En cada organización se cruzaban distintas estrategias que estaban atravesadas por tendencias que venían del período anterior. Las características y prácticas específicas de cada localidad y sindicato determinaron, a su vez, los efectos de la intervención.

---

60 Tras la derrota argentina en la Guerra de Malvinas asumió la presidencia, el 1º de julio de 1982, el general Reinaldo Bignone. Perteneciente a la fracción “politicista” del Ejército, impulsó el acercamiento a dirigentes políticos y sindicales con el objetivo de establecer un pacto para la transición democrática luego del impacto demoledor que supuso la derrota en la guerra para las FF.AA., Paula Canelo, *op. cit.*, 2008, pp. 194-214.

61 Entrada del 26 de noviembre de 1982 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza, años 1979-1985.

62 *Crónica*, 10 de agosto de 1983.

63 *Clarín*, 31 de julio de 1983.

64 Luciana Zorzoli, *op. cit.*, 2018.

La UOM al ser uno de los sindicatos industriales más importantes del país resultaba clave en la política laboral del régimen, particularmente en la estrategia “dialoguista” implementada por el primer ministro de Trabajo, Liendo. La importante actividad política desempeñada por este sindicato desde 1958 en adelante mostraba al ministro la relevancia de un cambio drástico en la conducción del gremio y en las dinámicas internas. En este sentido, es destacable el hecho de que la intervención a la UOM haya sido realizada por medio de un interventor militar y que se ratificaran las conducciones seccionales. Así, en la UOM pesó la existencia de una gran disputa interna en busca de espacios de poder. Esta decisión de mantener a la gran mayoría de las conducciones seccionales evidenciaba dos elementos. Por una parte, que la Intervención no buscó la destrucción del sindicato, sino una articulación diferente que privilegiara la llegada a la conducción de sectores adeptos al régimen y menos politizados. Por otra parte, que la dirigencia sindical no fue una mera víctima de este proceso, sino que jugó activamente a lo que el interventor le proponía. El ejemplo de Baluch en este sentido resulta elocuente.

La intervención cumplió un rol fundamental en la política laboral del régimen en tándem con la promesa constante de una inminente normalización de la actividad. Era, asimismo, una amenaza y elemento de control de los dirigentes sindicales que buscaban algún tipo de oposición a la dictadura. Sin embargo, en el caso de la UOM, su rol principal fue la promoción de dirigentes que siguieran los lineamientos del régimen en una rearticulación de las relaciones dentro y entre sindicatos.

Si bien podría afirmarse que existió una cierta premeditación en la aplicación del plan de Liendo de intervenciones sindicales, corresponde resaltar que muchos de los movimientos y acciones realizadas al respecto fueron respuestas puntuales a desafíos del contexto, es decir, no formaban parte de un plan trazado de antemano. Es en este sentido que pueden pensarse, como demuestra este artículo, la inclusión en el diálogo directo con el ministro de dirigentes de gremios intervenidos, su impulso y promoción apresurada en 1977 y el estímulo a la formación de la CNT en 1978. Estas acciones se corresponden con un uso de la intervención a sindicatos como una táctica política dirigida hacia otros miembros del régimen (los “duros”, el gabinete económico) y hacia el movimiento sindical en su conjunto. La cartera laboral se servía de las tensiones sindicales internas y buscaba utilizarlas a su favor, aunque con resultados disímiles (el crecimiento del sector que conformó la C25 y la realización de la JPN podrían mirarse bajo esta lente).

Este trabajo ha demostrado que, lejos de análisis que sostienen la existencia de una paralización del sindicalismo entre 1976 y 1979 debido a la política represiva y a la desarticulación sufrida por la intervención de los sindicatos<sup>65</sup>, las dirigencias sindicales se mantuvieron activas disputando entre ellas y negociando

---

65 Álvaro Abós, *op. cit.*, 1984.

con las autoridades espacios de poder. Del caso analizado se desprende que la política laboral de la dictadura no buscó desarticular al sindicalismo y destruirlo sino refundarlo. Esta táctica política, resistida por muchos dentro del régimen, encontró eco en los dirigentes sindicales nacionales y seccionales que buscaron ser sus interlocutores, ya fuera para congraciarse o para construir espacios de oposición. Resulta innegable que la actividad política existió desde el mismo día del golpe de Estado y que la dirigencia sindical fue uno de sus protagonistas.

## BIBLIOGRAFÍA

- ABÓS, Álvaro, *Las organizaciones sindicales y el poder militar (1976-1983)* (Buenos Aires: Centro Editor de América Latina, 1984).
- ÁGUILA, Gabriela, *Historia de la última dictadura militar* (Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2023).
- BASUALDO, Victoria, "The ILO and the Argentine Dictatorship (1976-1983)", en VAN DAELE, Jasmien (ed.), *ILO Histories. Essays on the International Labour Organization and Its Impact on the World during the Twentieth Century* (Bern/New York: Peter Lang, 2010), pp. 401-413.
- BERNASCONI, Hernán, *Trabajadores metalúrgicos de La Matanza: breve historia del movimiento obrero argentino* (Buenos Aires: De la Orilla, 2010).
- CANELO, Paula, *El proceso en su laberinto. La interna militar de Videla a Bignone* (Buenos Aires: Prometeo Libros, 2008).
- CANELO, Paula, *La política secreta de la última dictadura argentina (1976-1983)* (Buenos Aires: Edhasa, 2016).
- CRENZEL, Emilio y ROBERTINI, Camillo, *Historia y Memoria de la represión contra los trabajadores en Argentina. Consentimiento, oposición y vida cotidiana (1974-1983)* (New York: Peter Lang, 2022).
- DICÓSIMO, Daniel, *Los trabajadores argentinos y la última dictadura. Oposición, desobediencia y consentimiento* (Tandil: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, 2017).
- FERNÁNDEZ, Alberto, *Las prácticas sociales del sindicalismo (1976-1982)* (Buenos Aires: Centro Editor de América Latina, 1985).
- MOLINARO, Leandro, "El reposicionamiento de la burocracia sindical en el ocaso del 'Proceso' (julio de 1982-diciembre de 1983)", *Archivos de historia del movimiento obrero y la izquierda* 8 (IV), 2016, pp. 33-53.
- NOVARO, Marcos, y PALERMO, Vicente, *La dictadura militar 1976/1983. Del golpe de Estado a la restauración democrática* (Buenos Aires: Paidós, 2006).
- ROBERTINI, Camillo, "Pro una historia del obrero común y de la aceptación cultural de la última dictadura cívico-militar", en ZORZOLI, Luciana y MASSANO, Juan Pedro (eds.), *Clase obrera y dictadura militar en Argentina (1976-1983). Nuevos estudios sobre conflictividad y cambios estructurales* (North Carolina: AContracorriente, 2021), pp. 283-308.

- SCHIAVI, Marcos, *La resistencia antes de la Resistencia. La huelga metalúrgica y las luchas obreras de 1954* (Buenos Aires: El Colectivo, 2008).
- SENÉN GONZÁLEZ, Santiago, *Diez años de sindicalismo argentino, de Perón al Proceso* (Buenos Aires: Ediciones Corregidor, 1984).
- STOLER, Mariana, *Clase obrera y dirigentes zonales en la década del 70 en Buenos Aires: análisis de una relación conflictiva y clave para el mantenimiento de la organización sindical* (Universidad Autónoma de Madrid, 2020), Tesis de doctorado.
- STOLER, Mariana, "Estrategias sindicales en disputa. Un análisis de la Jornada de Protesta Nacional, primera huelga general en dictadura", en ZORZOLI, Luciana y MASSANO, Juan Pedro (eds.), *Clase obrera y dictadura militar en Argentina (1976- 1983). Nuevos estudios sobre conflictividad y cambios estructurales* (North Carolina: AContraCorriente, 2021), pp. 309-337.
- TORRE, Juan Carlos, "El lugar de la UOM en la trayectoria del sindicalismo", en TORRE, Juan Carlos *Ensayos sobre movimiento obrero y peronismo* (Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2012), pp. 235-46.
- ZORZOLI, Luciana, "La normativa sindical entre la dictadura y el alfonsinismo, propuesta de sistematización", en SCHNEIDER, Alejandro y GHIGLIANI, Pablo (comps.), *Clase obrera, sindicatos y Estado. Argentina (1955 -2010)* (Buenos Aires: Ediciones Imago Mundi, 2015), pp. 149-171.
- ZORZOLI, Luciana, "La OIT y las dictaduras latinoamericanas: una aproximación al Caso 842 contra Argentina", *Anuario del Instituto de Historia Argentina* 17 (1), 2017.
- ZORZOLI, Luciana, "Las intervenciones a organizaciones sindicales durante la última dictadura militar argentina: un estudio cuantitativo", *Desarrollo Económico. Revista De Ciencias Sociales* 57 (223), 2018, pp. 487-510.
- ZORZOLI, Luciana, y MASSANO, Juan Pedro (eds.), *Clase obrera y dictadura militar en Argentina (1976-1983). Nuevos estudios sobre conflictividad y cambios estructurales* (North Carolina: AContraCorriente, 2021).

## NÚMEROS ANTERIORES

### 18 | 2025

Pérez Miguel, Liliana y Delibes Mateos, Rocío (eds.)  
*[Re]-construyendo identidades:  
Dinámicas indígenas en los Andes coloniales*  
[Enlace](#)

### 17 | 2024

Entin, Gabriel y Myers, Jorge (eds.)  
*Itinerarios de un metaconcepto:  
La comunidad en el siglo XIX latinoamericano*  
[Enlace](#)

### 16 | 2023

Pettinà, Vanni (ed.)  
*La Guerra Fría latinoamericana y sus historiografías*  
[Enlace](#)

### 15 | 2022

Islas, Ariadna y Reali, María Laura (eds.)  
*Guerras civiles un enfoque para entender  
la política en Iberoamérica (1830-1935)*  
[Enlace](#)

### 14 | 2017

Prutsch, Ursula; Bertonha, João Fábio  
y Szente-Varga, Mónica (eds.)  
*Aventureros, utopistas, emigrantes  
del Imperio Habsburgo a las Américas*  
[Enlace](#)

### 13 | 2016

Pérez Toledo, Sonia y Solano de las Aguas, Sergio P. (eds.)  
*Pensar la historia del trabajo y los trabajadores  
en América. Siglos XVIII y XIX*  
[Enlace](#)

### 12 | 2015

Altez, Rogelio y Chust, Manuel (eds.),  
*Las revoluciones en el largo siglo XIX latinoamericano*  
[Enlace](#)

### 11 | 2014

Armus, Diego y Rinke, Stefan (eds.)  
*Del football al fútbol/futebol historias argentinas,  
brasileras y uruguayas en el siglo XX*  
[Enlace](#)

### 10 | 2013

Lobato, Mirta Zaida y Venturoli, Sofia (eds.)  
*Formas de ciudadanía en América Latina*  
[Enlace](#)

### 09 | 2012

Annino, Antonio y Ternavasio, Marcela (eds.)  
*El laboratorio constitucional iberoamericano 1807/1808-1830*  
[Enlace](#)

### 08 | 2011

Jacinto, Lizette y Scarzanella, Eugenia (eds.)  
*Género y ciencia en América Latina mujeres en la academia  
y en la clínica (siglos XIX-XXI)*  
[Enlace](#)

### 07 | 2010

Buve, Raymond y Fowler-Salamini, Heather (coords.)  
*La Revolución Mexicana en el oriente de México (1906-1940)*  
[Enlace](#)

### 06 | 2009

Frasquet Miguel, Ivana y Sleiman, Andréa (eds.)  
*De las independencias iberoamericanas a los estados  
nacionales (1810-1850) 200 años de historia*  
[Enlace](#)

### 05 | 2008

Giraud, Laura  
*Historia de AHILA Perfil de la Asociación de Historiadores  
Latinoamericanistas Europeos (1969-2008)*  
[Enlace](#)

### 04 | 2007

Priego, Natalia y Lozano, Sonia (coords.)  
*Paradigmas, culturas y saberes. La transmisión  
del conocimiento científico a Latinoamérica*  
[Enlace](#)

### 03 | 2007

Chust, Manuel y Serrano, José Antonio (eds.)  
*Debates sobre las independencias iberoamericanas*  
[Enlace](#)

### 02 | 2007

Stabili, Maria Rosaria (coord.)  
*Entre historias y memorias Los desafíos metodológicos  
del legado reciente de América Latina*  
[Enlace](#)

### 01 | 2005

Büschges, Christian y Langue, Frédérique (coords.)  
*Excluír para ser Procesos identitarios y fronteras sociales  
en la América hispánica (XVII-XVIII)*  
[Enlace](#)

**ahila**  
ediciones